

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Derecho Romano



TESIS DOCTORAL

Las asociaciones profesionales en Derecho Romano

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Lucia Hernández Tejero García

Madrid, 2015

535

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES EN
DERECHO ROMANO

Tesis presentada bajo la dirección
del

DOCTOR: FRANCISCO HERNANDEZ-TEJERO
CATEDRATICO DE DERECHO ROMANO

por

LUCIA HERNANDEZ-TEJERO GARCIA

Para obtener el Título de Doctorado en Derecho

1985



P R O L O G O

P R O L O G O

En el momento de elegir el tema para la redacción de la tesis doctoral y después de larga reflexión, decidí estudiar las asociaciones profesionales en Derecho romano, en base a los siguientes argumentos:

1º.- Es un tema que obliga a conjugar el estudio del Derecho privado con el del Derecho público de Roma; el concepto de persona con la organización administrativa; el desarrollo de actividades privadas con la institucionalización de funciones públicas.

2º.- La historia de las asociaciones profesionales se inicia con los primeros reyes de la Roma legendaria y termina en la época de la monarquía absoluta o Bajo Imperio, acusándose a lo largo de la historia los momentos cumbres de la evolución romana: Época de las XII Tablas; crisis de la República; reformas de Augusto; transformación política de la época de los Severos; Bajo Imperio, etc.

3º.- El estudio de las asociaciones profesionales sirve para resaltar importantes aspectos de la vida social y económica de Roma, que, a su vez, resultan imprescindibles para encuadrar debidamente los cambios que experimentó el régimen asociativo, vigente entre los romanos.

4º.- A través del estudio de las asociaciones profesionales

se puede percibir un fenómeno que, pese a los trabajos de Solazzi, Paul Louis, Marquardt, Wallon y otros, no ha sido siempre suficientemente destacado: El trabajo de los hombres libres en Roma.

52.- El estudio de las asociaciones profesionales no solo ha de hacerse consultando tratados, monografías, y demás fuentes bibliográficas, ni acudiendo únicamente a los textos legislativos, especialmente los Códigos de Justiniano y de Teodosio y a los escritos de los ^{juristas} ~~jesuitas~~, sino utilizando también las fuentes literarias que ofrecen valiosa ayuda.

Baste recordar las obras de Plutarco y Floro, para las primeras épocas. Los escritos de Cicerón para los turbulentos días del período final de la República. Las Epístolas de Plinio en el tiempo de Trajano, así como relatos de Frontino, Tácito, Tito Livio y tantos otros.

Pero son especialmente las fuentes epigráficas las que ayudan a reconstruir la historia de estas asociaciones, si bien su laconismo deja frecuentemente paso a la imprecisión y a la conjetura.

Elegido ya el tema se hizo precisa la elaboración del plan sistemático de la tesis, que es el siguiente:

En un primer capítulo se estudia la variedad terminológica con que en las fuentes se alude a las asociaciones profesionales.

Es tarea difícil la de ir precisando el alcance, ámbito y contenido de los diversos términos utilizados.

Unos, como societas, porque ordinariamente no se aplican a grupos sociales con relevancia jurídica frente a terceros.

Otros, como collegium, porque lo mismo se utilizan para referirse a las asociaciones de artesanos que a organismos políticos.

Otros, como sodalitium, porque su significación cambió profundamente en la historia de Roma, pasando a tener el sentido de colegio sedicioso, sobre todo a fines de la República.

Otros, como ordo por su extraordinaria amplitud y por haberse aplicado en forma muy limitada a las asociaciones profesionales.

Otros, como universitas, por carecer de un verdadero significado técnico.

Otros, como corpus, porque su significación en la época clásica es sumamente imprecisa e induce a graves anticipaciones en materia de personificación jurídica.

Estas ambigüedades, esta fluidez terminológica no es exclusiva del lenguaje jurídico romano. Baste recordar el trabajo de Sartori acerca de la terminología de las asociaciones en Derecho griego, publicado en la revista Iura del año 1958.

Después se estudiará el origen de las asociaciones de arte-

sanos en Roma, considerando no solo los antecedentes que se registran en algunas antiguas civilizaciones orientales, sino, los relatos de la tradición romana y las teorías modernas que sobre ellos se han formulado.

Con un capítulo dedicado a las asociaciones profesionales y al ejército serviano, se inicia un recorrido histórico que termina en el Bajo Imperio y que comprende diecisiete capítulos.

De estos capítulos cabe destacar los dedicados a los Collegia tenuiorum por la trascendencia que alcanzó el Senado-consulta que los autorizó en bloque y las cuestiones que de este régimen excepcional se derivan.

A continuación de la parte general seguirá una segunda parte a la que se le ha dado la denominación de parte especial y en la que se hace una resumida exposición de asociaciones profesionales, tanto de artesanos como de hombres de negocios, tanto de funcionarios subalternos como de militares y también se hace una alusión a determinadas profesiones que ofrecen la característica de que quienes las desempeñan están sujetos a su oficio porque se considera, de algún modo, de pública utilidad.

Se incluye en esta parte una exposición relativa a las asociaciones de publicanos, porque aunque probablemente no existieron colegios de publicanos, si bien el tema ha sido objeto de controversia, lo que resulta indudable es que las societates pu-

blicanorum rompían el principio característico de las societates por su relevancia frente a terceros y alcanzaron positiva influencia en la vida social y económica de Roma hasta mediados del tercer siglo de nuestra Era.

Sin embargo no se ha pretendido hacer un cuadro exhaustivo de todas las profesiones que, a veces sólo presentan leves variantes o matizaciones terminológicas.

Así, por ejemplo, al hablar de los transportistas fluviales se trata de los caudicarii, pero no de los lenuncularii, que se caracterizaban por utilizar rapidísimas embarcaciones que surcaban el Tíber, ni de los lintrararii, que usaban unas barcas de forma especial.

Tampoco ha parecido congruente con el tema de la tesis, pasar a estudiar ciertas consecuencias que en el campo del Derecho privado se desprenden de la actividad de algunas asociaciones. Es el caso, por ejemplo, del régimen jurídico que se aplica a ciertos negocios llevados a cabo por los argentarii o de algunas normas especiales que rigen el comercio marítimo.

Finalmente conviene insistir en que la descripción de asociaciones profesionales y de profesiones obligatorias, que se contiene en esta segunda parte, se ha elaborado con especial y predominante atención a la legislación del Bajo Imperio, sin que se excluyan en determinados casos, como es lógico, referencias a los antecedentes cuándo ofrecen particular interés o facilitan el contraste en el seno de la evolución histórica.

De las asociaciones en España no ha parecido oportuno tratar por haberse publicado muy recientemente la cuidada monografía de Santero Santurino, que avanzando por la senda que abrieran d'Ors Pérez-Peix con su Epigrafía Jurídica de la España Romana, ha realizado un excelente y completo estudio, sirviéndose en buena medida de las fuentes epigráficas.

I N D I C E

PROLOGO	V
CAPITULO I: Variedad terminológica	1
Societas	3
Collegium	5
Sodalitas	9
Sodalicium	16
Corpus	17
Ordo	19
CAPITULO II: Orígenes de las asociaciones profesionales.-	25
Civilizaciones orientales	26
Ambiente social y económico de la Roma ar-	
caica	28
Los relatos tradicionales	31
Teorías modernas	47
CAPITULO III: Las asociaciones de artesanos y el ejérci-	
to serviano	58
CAPITULO IV: Epoca de la República: Generalidades	70
CAPITULO V: Las asociaciones en la Ley de las XII Tablas.	75
CAPITULO VI: Collegia compitalicia y Collegia opificum ..	88

CAPITULO VII: Los colegios profesionales y la organización de las tribus	98
CAPITULO VIII: El Senadoconsulto de las Bacanales	104
CAPITULO IX: El Senadoconsulto del año 64 a. de C.	118
CAPITULO X: Clodio y el Senadoconsulto del año 56 a. de C..	135
CAPITULO XI: LA Ley Licinia	151
CAPITULO XII: La Ley Julia sobre los colegios	158
CAPITULO XIII: Los colegios ilícitos	188
CAPITULO XIV: Collegia Ten iorum	204
CAPITULO XV: Collegia Ten iorum y Comunidades cristianas ...	229
CAPITULO XVI: Organización interna de los colegios	247
CAPITULO XVII: Asociaciones profesionales en Pompeya	256
CAPITULO XVIII: La personificación jurídica de las asocia- ciones	265
CAPITULO XIX: Las asociaciones profesionales en el Bajo Im- perio	306

CAPITULOXX: Parte especial	347
Actividades del abastecimiento	349
Actividades industriales	361
Actividades del Transporte	383
Funcionarios subalternos	390
Militares	394
Argentarii	398
Publicani	400
 CONCLUSIONES	 421
 BIBLIOGRAFIA GENERAL	 428

CAPITULO I

Variedad terminológica: Societas, Collegium,
Sodolitas, Sodalicium, Corpus y Ordo.

VARIEDAD TERMINOLOGICA

Las denominaciones de las asociaciones en Roma han sido muy variadas. Entre las principales deben citarse: Societas, Collegium, sodalitas, sodalitium, corpus y ordo.

Otras denominaciones menos frecuentes fueron: Consortium, corporatio, familia, coetus (1) o thiasus (2).

El término universitas no fue nunca un término preciso y unívoco, unas veces servía para indicar entidades públicas, otras cualquier grupo, lo mismo si tenía carácter corporativo que si era simple suma de individuos.

También podía significar universitas un conjunto de casas (universitas aedium), un conjunto de derechos y de cosas del que es titular un individuo (hereditas) e incluso aparece una vez en un rescripto de Caracalla (3) la expresión universitas indeorum, para referirse a los judíos que vivían en Antioquía.

Según que el conjunto tuviese o no existencia legal, se habló de universitas iuris y universitas facti, si bien esta distinción es más de origen literario que jurídico.

También se distinguió entre universitas rerum y universitas personarum.

SOCIETAS.- Algunas asociaciones profesionales fueron de nominadas societates y ello obliga a establecer diferencias entre societas y conceptos afines.

Para Arnó (4) hay que partir de dos proposiciones:

1º En la doctrina mayoritaria una simple COMMUNIO no constituye una societas; una cosa es la societas y otra la mera COMMUNIO RERUM.

2º Un contrato de sociedad carece de eficacia para convertir el colectivo de los socios en persona jurídica.

Dicho romanista hace hincapié en señalar que no puede confundirse la corporación con la sociedad y crítica duramente la doctrina de Troplong (5) que recogiendo teorías medievales, defendió la posibilidad de la personificación jurídica de la societas.

Sin embargo Arnó reconoce la existencia de una excepción, la que representa las societates publicanorum (6).

¿Es éste el único caso excepcional? Para Burdese la societas produce sólo efectos entre los socios, salvo el caso de la societas publicanorum. Unicamente en el Derecho justiniano se admite una excepción a la regla anterior y es en el caso de que un socio haya ingresado en la caja común, lo que había obtenido en uno de los negocios que son propios de la sociedad (7).

Pero aparte de la societates publicanorum puede citarse el caso de las societates argentariorum.

El especial régimen de las societates publicanorum aparece en varios pasajes de las fuentes extrajurídicas, como Cicerón (8) y Tito Livio (9) y en varios lugares del Digesto que más adelante serán consideradas en particular, al exponer la organización y funcionamiento de éstas sociedades.

De las societates argentariorum y sus peculiaridades nos suministra información un pasaje del Auctor ad Herennium (10) y diversos textos del Digesto (11).

Con respecto a las sociedades de mercadores de esclavos y de armadores, es interesante el estudio de los textos que llevó a cabo F. Serrao en los Studi in onore di E. Volterra (12).

Afirma Serrao, con una versión certera del problema que el ordenamiento romano diferencia los diversos tipos de sociedad en atención al objeto y también a la esfera económica de cada uno de ellos.

En la economía romana, la exigencia de dar relevancia externa al fenómeno societario se acusa con mayor intensidad respecto de sociedades que operan en sectores en los que se ha desarrollado cierta forma de capitalismo compatible con las circunstancias del mundo antiguo: en las finanzas, en el comercio, en el transporte marítimo y en los contratos públicos (13).

El uso del término societas por Gayo (14) comparándolo a Collegium presenta algunas dificultades de interpretación que pueden resolverse, bien considerando que en el indicado pasaje

societas significa asociación (15) o bien, lo que es más probable, que se trata de alguna alteración (16).

COLLEGIUM.- Collegium es el conjunto de collegas, es decir, personas encargadas de una misma función.

Ahora bien, como esa función puede ser de muy diversa naturaleza, político-administrativa, religiosa o económica, resulta que había colegios de carácter político y administrativo (cónsules, pretores, decenviri, legibus scribundis, tribunos de la plebe, ediles, quaestores, etc); colegios de carácter religioso (pontífices, augures, epulones, feciales, vestales, etc) y colegios de artesanos y comerciantes. Aparte, claro está, de aquellos colegios en los que, más bien que una función trascendente que aglutine a sus miembros, lo que les mantiene unidos es la necesidad de una asistencia mutua, como en el caso de los collegia tenuiorum o de los collegia veteranorum. Ty

Además, dentro de los colegios de matiz político-administrativo pueden distinguirse y separarse de los colegios oficiales de magistrados, las asociaciones de subalternos, en los que predomina el carácter de profesionalidad. Tal es el caso de las asociaciones de praecones, viatores, scribae, etc.

Las diferencias que existen entre los colegios de magistrados y los colegios estrictamente profesionales son muy profundas, no sólo por el nombramiento de sus componentes y por las funciones que se les asignan, sino también por el tratamiento jurídico que reciben.

Esta diferencia se advierte, por ejemplo, considerando que la máxima que Marcelo atribuye a Neracio Prisco en un texto del Di gesto (17): "Tres facere collegium" no puede en modo alguno aplicarse a los colegios de magistrados, porque desde muy antiguo existen colegios de ésta clase de número par, como los cónsules.

Mommsen (18) afirmó que quizás el término Collegium no se utilizó cuando los colegas eran dos, reservándolo sólo para el caso de que fuesen tres, lo que no impediría que cada magistrado se considerase colega del otro, a pesar de no existir el collegium.

La apuntada distinción resulta demasiado sutil y, por otra parte, existe un texto que Mommsen no desconoció (19) y que procede de la Historia Natural de Plinio (29) en el que se habla del Collegium Lentulli et Metelli consulum.

Waltzing, teniendo en cuenta la variedad de colegios, quiso formular una definición que fuese lo más amplia y comprensiva posible y afirmó que collegium en sentido lato designa una reunión de personas asociadas por la comunidad de las funciones, del culto o de la profesión (21).

Ciertamente que la comunidad de culto, función o profesión no siempre aparecen aisladas y repartidas por diferentes colegios sino que, con mucha frecuencia, los colegios tienen aspectos religiosos y profesionales, y en este caso un mismo collegium puede ser collegium opificum y collegium cultorum.

Dirken (22) supuso que el término collegium, tomado en sentido absoluto, designaba en la época de Cicerón aquellas comunidades a las que el Estado no había concedido personalidad jurídica. iv

Para Zumpt (23) se llamaba collegium a toda asociación política.

Colin (24) creyó que Collegium en la República era una asociación legal, con relaciones de carácter religioso, que necesitaba autorización.

Para Gierke (25) es un cuerpo que permanece aunque también sus miembros.

Finalmente, en opinión de Coli (26) Collegium era un conjunto de varias personas necesario para una función de utilidad pública.

Los magistrados que más utilizaron el término collegium parecen haber sido los tribunales de la plebe (27). Los

El término collegium se aplicó también a asociaciones de jóvenes, especie de agrupaciones de amigos y camaradas, probablemente de más de diecisiete años.

Estos collegia juvenum tenían un carácter religioso y funerario, y parece que los asociados presentaban algunos puntos de contacto con los jóvenes romanos pertenecientes al orden ecuestre (28).

Estas asociaciones de jóvenes poseían tierras e inmuebles en la ciudad y organizaban juegos, que se denominaban juvenalia.

No parece que la creación de estas asociaciones fuera debida a la iniciativa de los emperadores, sino que surgían espontáneamente por el deseo natural de los jóvenes de reunirse, aunque luego les fuese dada una organización administrativa.

Lo que si sucedía es que algún emperador como Calígula, según Suetonio (29) favoreció los festejos públicos y añadió un día a las Saturnales, denominándole dies juvenalis.

Estas asociaciones de jóvenes no sólo existieron en Italia, sino también en provincias.

También se menciona en las fuentes el Collegium Augustalium, que a veces también se denomina Corpus Augustalem.

Esta asociación que se desarrolló en los Municipios tenía por objeto especial honrar la memoria de Augusto por medio de ceremonias y fiestas públicas.

Su relación con los funcionarios llamados Seviri Augustales no es muy clara y ha dado lugar a vivas polémicas. Estos colegios tenían bienes propios y el título de Augustales era hereditario (30).

A veces aparecen designados los miembros de algunos colegios con nombres extraños como seribibi, furunculi, dormientes, etc. según se lee en diversas fuentes epigráficas.

Estos nombres no pueden ser aceptados en su significación literal y creer que se trata de asociaciones formadas por personas de determinadas inclinaciones.

Una explicación para tan desconcertantes colegios podía ser la de que se trata de denominar como poseídos por un determinado vicio o costumbre reprobable a un grupo de personas que apoyaban a un candidato político, para así ridiculizarlas o desprestigiarlas (32).

Escribir que Cerrinio Vatia, dice Duff (33) estaba apoyado por todos los borrachines, rateros o vagos, sería una excelente propaganda política utilizada por sus enemigos. Pero naturalmente ello no quiere decir que existieran asociaciones de borrachines, rateros o vagos.

Otras veces el término collegium se utiliza para referirse

a unas personas a las que solamente une una misma profesión deshonrosa.

Por ejemplo, en Apuleyo (34) se habla de un colegio de la drones y en Horacio (35) se alude a Collegia Ambubaiarum, es decir, de grupos de determinadas cortesanas.

También podía suceder que los nombres raros de colegios que figuran en algunas inscripciones sirvieran para ocultar la verdadera naturaleza de esas asociaciones.

SODALITAS.- Una teoría que alcanzó durante algún tiempo bastante difusión fue la de que los antiguos romanos no distinguían entre collegia y sodalitates.

Es cierto que no parece demasiado clara, en las fuentes, la relación existente entre éstos dos términos, pero ni puede basarse la equiparación en el derecho comparado (36) ni tampoco en el texto de Gayo, conservado en el libro cuarenta y siete del Digesto y al que hay que hacer constantes referencias en materia de Derecho de asociaciones en Roma (37) porque la manipulación de éste texto no ofrece lugar a dudas, entre otras razones por el uso del "quam" referido al neutro "collegium". Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt: quam Graece..."

Lo que si está clara es la oposición entre collegium y sodalitas en determinados textos (38).

Sodalitas indica una cofradía religiosa establecida para

el culto de un santuario o sacellum, mientras que collegium se empleaba para indicar, a diferencia de societas una asociación que debía durar incluso después de la muerte de los que inicialmente la establecieron.

La separación entre collegia y sodalitates arranca de Savigny (39) el cuál al clasificar las personas jurídicas, reservó el nombre de sodalitates para las sociedades privadas con fines de culto o de distracción.

Mommsen matizó aún más. Para éste historiador, las sodalitates sacrae serían las asociaciones surgidas para sustituir a las antiguas gentes, a las que se habían confiado los sacra publica (40) o que se habían formado para los nuevos cultos introducidos en Roma, como por ejemplo, las sodalitates surgidas como consecuencia de la introducción del culto de Cibeles.

Nota distintiva de las sodalitates sería el ejercicio de un culto público, sin que sus miembros fueran sacerdotes. Colli (41) sometió a aguda crítica la tesis del origen gentilicio de las sodalitates.

Observó el citado romanista el particular enfoque que Mommsen (42) dió a los textos de Tácito.

En el primero de los citados textos (43) Tácito dice que se inició un nuevo culto, creándose un sacerdocio: el colegio de los sacerdotes de Augusto. Esto, continúa diciéndo el his-

toriador latino, se hizo a ejemplo e imitación de lo que en otro tiempo llevó a cabo Tito Tacio, el que para conservar las instituciones religiosas de los sabinos creó el Colegio de los Ticios.

Para la integración del colegio de los sacerdotes de Augusto se sacaron a la suerte, de entre los grandes de Roma, veintiún nombres a los cuales se añadieron Tiberio Druso, Claudio y Germánico.

En el segundo texto (44) Tácito se refiere también al colegio de los sacerdotes de Augusto. Al hablar de un sacrificio ofrecido a los manes de Nerón, el citado historiador dice que las víctimas fueron inmoladas y quemadas y que el fuego fue encendido por los Augustales, sacerdocio que, a ejemplo de lo que Rómulo había hecho para el rey Tacio, el emperador Tiberio había consagrado a la gens Julia.

Hace notar Coli que el argumento de Mommsen era el siguiente: Al pasar a ser públicos los sacra privata de la gens julia y no siendo suficientes los gentiles para cubrir los puestos sacerdotales, fueron elegidos veintiún extraños a la gens. Con lo cuál, en vez de gentiles hubo sodales.

Sin embargo, lo cierto es que siguiendo literalmente el texto de Tácito, el primero de los citados, fueron añadidos Tiberio Druso, Claudio y Germánico, es decir, fueron añadidos los gentiles a los sodales y no viceversa, y parece más lógico, sigue puntualizando Coli, suponer que la nueva sodalitas

se constituyese independientemente de la gens, a imitación de los cargos sacerdotales surgidos en Italia y en las provincias en honor de Augusto de consagrada memoria.

En cuánto a los Lupercios se llegó a pensar que procedían de una gens Quintilia, no identificada y de la gens Fabia, mejor conocida pero que no rendía culto a Fauno (45).

En favor de la derivación gentilicia había otro argumento y era el de la existencia de una especie de parentesco entre los sodales que les impedía acusarse entre sí en una causa pública.

Una nueva interpretación de un texto de Cicerón (46) la circunstancia de que la Ley Acilia repetundarum, que prohibía incluir entre los jueces de una quaestio a uno que sea sodalis del acusador o el reo, se aplicaba igualmente al que no era sodalis, pero pertenecía al mismo collegium que el acusador o el reo, a pesar de lo cuál nadie ha pretendido, basándose en ésta prohibición sostener que los collegia derivaban también de las organizaciones gentilicias, han llevado a quitar credibilidad a una corriente doctrinal basada en una conjetura, no muy firme por otra parte (47) de Mommsen.

Para Marquardt (48) los antiguos no separaban con verdadera nitidez los términos collegium y sodalitas, cuándo éstos dos términos se presentaban opuestos uno a otro, como, por ejemplo, ocurre en algunos textos de Cicerón (49); sodalitas designaba la asociación religiosa establecida especialmente para el

culto de un santuario o sacellum, mientras que collegium era un término de alcance medio más general.

La teoría de Marquardt encierra una gran dosis de exactitud, pero los textos en que se basa para sostener la falta de una nítida separación entre collegium y sodalitas, en el lenguaje de los antiguos romanos, no tienen todos ellos la misma fuerza de persuasión y así mientras resultan convincentes los textos epigráficos en que aparece el término sodales en relación con una profesión determinada (50) resulta poco convincente la referencia al alterado texto del Digesto en el que Gayo parece hablar de los primitivos sodales (51).

Para Waltzing (52) sodalitas designaba en un principio una cofradía religiosa, pero más tarde amplió su significación y en tiempo de la República se aplicaba a asociaciones de carácter más bien político.

De lo que no cabe duda es que en la primitiva Roma se aplicó también a una sodalitas, es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de los veinte feciales (53).

La organización de las primitivas sodalitates la atribuye Macrobio a Rómulo (54).

Mediada la República al irse aminorando el sentimiento religioso, destaca más el elemento material que unía a los sodales, es decir, los banquetes que celebraban en común. Empiezan a hacerse notar las comidas a escote de gente humilde (55) que

aparecen descritas en algunas obras de carácter extrajurídico.

Ejemplos de éstas descripciones se encuentran en las comedias de Plauto (56) y de Terencio (57) y también en Cicerón (58). Los comensales pagaban el gasto efectuado, primero mediante la entrega de viandas y más tarde con aportaciones en dinero.

En el Principado se aplicará el término sodalitates a algunas asociaciones de inmigrantes.

Todo esto ha llevado a relacionar excesivamente el término sodalitas con la práctica de los banquetes (59), llegándose a definir a los sodales como los que se sentaban juntos a comer "Una cederent et essent" (60).

Perdido el carácter religioso de los antiguos banquetes en común, que subraya Ovidio (61): "Mos erat: mensae credere adesse deos", los sodalitates desempeñaron un gran papel político, frecuentemente por medios ilícitos, como por ejemplo mediante la intimidación de los adversarios o la corrupción de los votantes.

Dos ejemplos famosos de ésta situación y de éstas prácticas nos lo suministran Tito Livio y Cicerón.

Tito Livio habla del grupo de jóvenes de Kaeson que hicieron frente a los tribunales (62).

La expresión que en éste texto se utiliza para referirse a quienes protagonizaron los disturbios que se produjeron des-

pués del destierro de Kaeson es la de "Caesonis sodalicium".

Cicerón, cuándo aspiraba al Consulado recibía consejos de su hermano acerca de la táctica política a seguir y entre éstos consejos figuraba como importante advertencia la de que debía valerse del apoyo de cuatro sodalitates para asegurarse el triunfo en las elecciones (63).

Mas no sólo fueron turbias maquinaciones electorales sino también gravísimas conjuras las que se fraguaron en los banquetes de los sodales y el nombre de sodales llegó a ser "nomen criminisum" (64).

En el tiempo del Imperio la distinción entre collegia y sodalitates se torna borrosa.

Finalmente hay que referirse a la relación entre curiae y sodalitates.

Para Bandini la curia estaría con respecto a las sodalitas, en la época primitiva en la relación de continente a contenido.

Desde luego, no crea problemas el admitir que dentro de las curias que tendrían asignado un culto público, existiesen grupos gentilicios, con su culto propio.

Otro tanto pudiera decirse del vicus, circunscripción meramente territorial. Es decir, entre los habitantes de aquellas circunscripciones, aunque le fuese asignada la celebración de ciertos sacrificios a determinados dioses, no existían vínculos como los que ligaban a los sodales.

Distinta es la teoría de Gaudenzi (67) quién piensa que ya en la época monárquica los operarios de una misma dedicación profesional vivían en el mismo vicus, con lo que se unía la convivencia y la vecindad a la camaradería en el trabajo. A su vez, ello daría lugar a que los colegios profesionales, por razón de la circunscripción territorial en que estaban establecidos, estuviesen obligados a celebrar los juegos compitalicios, asignados por Servio Tulio a cada barrio. Juegos de los que se tratará más adelante con mayor detalle.

La base de éste teoría resulta vulnerable, por que es difícil creer que los operarios, si procedían, como parece más verosímil de la población etrusca, que se incrementó enormemente en Roma con la llegada de la nueva dinastía, hubieran tenido tiempo, en el reinado de Servio Tulio, de especializarse y además establecerse por barrios hasta llegar a ocupar cada sector laboral un vicus.

SODALICIUM.- Por sodalicia se entendieron las asociaciones constituidas con un fin político y a veces se aplicó éste término a las asociaciones establecidas con finalidades diversas, pero nunca recibieron el nombre de sodalicia los grupos o colectividades nacidos o creadas para ejercer un culto público.

El término sodalicium jamás se empleó como sinónimo de sodalitas sacra y a fines de la República llegó a significar colegio sedicioso que establecía entre sus miembros una solidaridad de intereses y simpatías políticas.

Los sodalicia presentaban a las elecciones candidatos su yos a los que apoyaban sin ningún reparo (68) llegando hasta la corrupción de funcionarios y la compra de votos y no deteniéndose ni ante el tumulto ni ante el asesinato, por lo que justamente fueron considerados un grave peligro para el estado.

Sin embargo hubo excepciones y así se habló de sodalicium marmorariorum (69) y de sodalicium fabrum tignariorum (70).

Pero éstas excepciones plantean una cuestión no resuelta plenamente y es la de saber si el término sodalicium se empleaa ba para referirse a un determinado colegio profesional, o si, por el contrario, se utilizaba para aludir a personas integradas en un sodalicium, independientemente de su pertenencia a un colegio de carácter estrictamente profesional.

Ahora bien, a veces aparecen confundidas las sodalicia con los collegia, atribuyéndose a unos y otros grupos una intervención semejante en las turbulencias políticas (71).

CORPUS.— Schnorr von Carolsfeld (72) distingue, a parte del significado que tiene éste término en relación con las asociaciones obligatorias del Bajo Imperio, de que más adelante se tratará, dos acepciones: a) grupo sociológico, aunque no sea jurídico y b) forma de una organización sociológica.

Pero lo cierto es que en el lenguaje jurídico romano corpus y collegium están íntimamente relacionados aunque no se confundan.

Decir que el término corpus indica una corporación profesional reconocida por el estado como institución pública y revestida de personalidad jurídica, no es exacto, ya que corpora son llamadas también algunas asociaciones no estrictamente profesionales (73).

Resulta indudable, sin embargo, que a partir del siglo III y coincidiendo con la gran transformación que se opera en el régimen jurídico de las asociaciones profesionales, la palabra corpus es mucho más frecuente que la palabra collegium.

También es verdad que en diversas partes del Imperio e incluso sin salir de Italia, se advierte que hay lugares en los que es muy raro encontrar utilizada la palabra corpus (74).

El término corpus aparece empleado por Pomponio (75) a propósito de uno de los varios criterios de clasificación de las cosas que existen en Derecho romano.

Dice Pomponio que hay tres clases de cosas: una la de las cosas que constituyen una unidad; otra la de las que constan de varias cosas unidas y otra la de las que constan de varias cosas sueltas pero reunidas bajo un sólo nombre, como un rebaño, el pueblo o una legión.

Pomponio está empleando el término corpus, al decir "tria genera sunt corporum" para referirse a las cosas de las tres clases.

Aún reconociendo que Pomponio no quiere decir que el corpus

quod ex distantibus constat" está formado por cosas o individuos a los que solamente les une un nombre común, sino que lo componen individuos entre los que existe un cierto tipo de relación intrínseca, a pesar de que no estén físicamente unidos, no cabe duda que el término corpus excede de la calificación de una individualidad singular, sea material o jurídica.

Prescindiendo del análisis de otros significados de corpus y poniendo este término en relación con collegium, se llega a la conclusión de que en el lenguaje jurídico no se pueden identificar collegium y corpus, sino que corpus es un tipo de collegium, sujeto a un régimen jurídico especial. Sólo esta interpretación permite comprender dos textos del Digesto (76): "idem et in collegiis ceterisque corporibus dicendum erit" y "collegium vel quodcumque tale corpus coierit (77).

Distinto es el caso en que corpus y collegium figuran en una relación, es decir, cuándo ambos términos se pueden contrastar por aparecer ambos en una enumeración, que es lo que sucede en un texto del Digesto (78) probablemente alterado (79).

Para Duff (80) corpus no es un término técnico.

ORDO.— Varias son las acepciones del término ordo: División de los ciudadanos según su rango social con consecuencias jurídicas (senatus, equites, plebs); jerarquía en el ejército; disposición en un desfile o en una batalla; puestos que ocupaban los remeros en las naves y también hilera de asientos en el teatro.

Vemos pues que ésta palabra significa en general orden, rango o fila y se emplea con bastante frecuencia para referirse a las divisiones de los ciudadanos romanos según la posición política que ocupan.

El orden más elevado en el Senado, "ordo amplissimus". En época del Principado ordo se emplea para designar el consejo municipal (81). La expresión ordo equester parece que aludía originariamente a la colocación en los desfiles.

Prescindiendo de acepciones extrajurídicas como fila de remeros o fila de asientos en el teatro (82) y refiriendo éste término a las asociaciones profesionales hay que destacar que no aparece referido a todas ellas, sino a algunas, como, por ejemplo, a los publicanos, a los apparitores y a los piscatores.

Se ha pensado en la posible existencia de un orden general de los colegios pero contra ésta hipótesis se alza una grave dificultad, la de la falta de concordancia entre las listas de las asociaciones profesionales que nos suministran Plutarco y Plinio, que impide una segura determinación del orden de los colegios.

Lo que si puede comprobarse es el empleo del término ordo para indicar en abstracto a cualquier asociación (83).

- (1) De coetus navarchorum se habla en el Código Teodosiano: XIII 5, 32.
- (2) Palabra de origen griego que se aplicó especialmente a las asociaciones dedicadas al culto de Baco.
- (3) C., 1,9,1.
- (4) Il contratto di società, Turín 1938, p. 115 y ss.
- (5) Contrat de société, Bruselas 1843, p. 31.
- (6) Arnó ob. cit. p. 141. Cfr. Arangio-Ruiz, La società in diritto romano, Nápoles 1950, p. 78 y 84; Del Chiaro, Le contrat de société en droit privé romain, Paris 1928 p. 221 y ss.
- (7) Manuale di Diritto privato romano, Turín 1964, p. 554.
- (8) E. Costa, Cicerone giureconsulto, Bologna 1927 p. 191 y ss.
- (9) XXIII, 49,1.
- (10) II,19.
- (11) 2, 14, 25, pr; 2,14,27 pr. y 4,8,34 pr.
- (12) Milán, 1971, V, p. 748 y ss.
- (13) F. Serrao, ob. cit., p. 766-767.
- (14) D. 3,4,1,1.
- (15) Cohn, Zum römisches Vereinsrecht, Berlin 1873, p. 158 y ss.
- (16) Schnorr von Carolsfeld, Geschichte der juristischen Person, Aalen 1969, I, p. 153.
- (17) D., 50, 16, 85.
- (18) Le Droit public romain, Paris 1892, I (trad. franc) p. 37.
- (19) Loc. cit. n. 2 (in fine)
- (20) H. N., VII, 12, 54.
- (21) Dizionario Epigrafico de E. Ruggiero, v. Collegium.
- (22) Civilistische Abhandlungen, II, Berlín 1820, 38.
- (23) Das Criminalrecht der röm. Republik, Berlín 1869, 384.
- (24) Zum römisches Vereinsrecht, Berlín 1873, 45.
- (25) Die Staats und Korporationslehre des Alterth, III, 77.

- (26) Collegia e sodalitates, Bolonia 1913, p. 47.
- (27) Tito Livio IV, 26; Suetonio, Caes, 23.
- (28) C.I.L., IX, 3.215.
- (29) Calígula, XVII.
- (30) Los libertos podían ingresar en éstas asociaciones y quizás ello pudo influir en las turbulencias que éstos colegios protagonizaron. Cfr. D., 48,19,28,3. En este texto de Calistrato se llega a establecer la pena capital para los sediciosos y turbulentos que después de haber sido de tenidos y tratados benévolamente hubieran perserverado en su maldad.
- (31) C.I.L., IV, 585, 576, 575, 246.
- (32) Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles, I, Roma 1968, p. 51.
- (33) Personality in Roman Private Law, Cambridge 1938, p.p. 99-100.
- (34) Metamorfosis, VII, 7.
- (35) Sátiras, I, 2.1.
- (36) F. Sartori en la revista Iura 1958.
- (37) D., 47, 22, 4.
- (38) Brutus, XLV, 166.
- (39) Sistema actual del Derecho romano, (trad. esp.) II.
- (40) De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel, 1843.
- (41) Scritti di diritto romano, Milán 1973, I, p. 10.
- (42) Ob. cit., p. 15-23.
- (43) Anales, I, 54.
- (44) Historias, II, 95.
- (45) Ovidio, Fasti, II, 237.
- (46) De oratore, II, 20.
- (47) Zur Lehre von den röm. Korporationen, en Z.S.S., XXV, 1904, p.p. 45-47.
- (48) Le culte chez les romains, Paris 1889 (trad. frac.) I, p. 165.
- (49) Brutus, XLV, 166 y PRO Sulla, II, 7.

- (50) C.I.L., VI, 9.136.
- (51) D., 47, 22, 4.
- (52) Etude historique sur les Corporations professionnelles, Roma 1968, II, p. 140, n. 2.
- (53) G. Dumézil, La religione romana arcaica, (trad. ital.) Milán 1977, p. 502.
- (54) Sat., I, 16, 32.
- (55) Excepcionalmente no eran de condición humilde. Cfr., Macrobio, Sat., I, 1.
- (56) Curculio, 474.
- (57) Andria, 88.
- (58) De oratore, II, 233.
- (59) Cfr., E. De Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, Paris 1901, p.p. 375-377.
- (60) S. Isidoro, orígenes, x, 245.
- (61) Fasti VI, 3, 5. Cfr. Aristoteles, Política, VII, 1329 b.
- (62) III, 14.
- (63) De petitione cons., XIX.
- (64) Ciceron, Pro Plancio, 29 y 46
- (65) V. Bandini, Appunti sulle corporazioni romane, Milán 1937, p.p. 14-15.
- (66) Los sacerdotes de las sodalitates diferían de los sacerdotes encargados del culto público. N. Turchi, Saggio di Storia delle Religioni, Foligno 1924.
- (67) ~~Qui~~ Collegi degli artigiani in Roma, Archivio Giuridico, p. 529.
- (68) Cic. Brutus, XLV.
- (69) C.I.L. V., 7.044.
- (70) C.I.L. XI, 6.135.
- (71) Dion Casio, XXXVI, 37.
- (72) Geschichte des juristischen Person, Aalen 1969, I, p. 175.
- (73) C.I.L., 3.016.

- (74) Dizionario epigrafico di antichita romane di E. Ruggiero v. Corpus.
- (75) D., 41, 3, 30 pr. Los términos collegium y corpus a veces aparecen referidos a una única entidad y en un solo texto.
- (76) D., 10, 4, 7, 3.
- (77) D., 47, 22, 3, 1.
- (78) D., 2, 4, 10, 4.
- (79) Cfr. Duff, Personality in Roman Private Law, Cambridge 1938, p. 30.
- (80) Ob. cit. p. 34.
- (81) Paulys - Wissowa, R.E., v. ordo.
- (82) Cic., De legibus, III, 3, señala como función de los censores públicos distribuir en tribus a la población y llevar a cabo la división atendiendo a las fortunas, edades y órdenes.
- (83) D., 3, 4, 6, 1.

CAPITULO II

Los orígenes de las asociaciones profesionales

LOS ORIGENES DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES

CIVILIZACIONES ORIENTALES.- En el Antiguo Testamento se conserva un pasaje correspondiente al Libro de los Reyes (1) en el que se dice que Salomón tenía setenta mil hombres dedicados al transporte y ochenta mil que trabajaban la piedra en las montañas, sin contar los jefes que dirigían cada trabajo en particular, jefes que sumaban tres mil trescientos hombres y que eran los que daban las órdenes a los distintos grupos de trabajadores.

Sin embargo, hay que hacer notar que éste texto no tiene gran valor para el estudio de los colegios profesionales en Palestina, ya que se está hablando de la organización laboral en un trabajo concreto y determinado, no de asociaciones permanentes y, además, dada la índole extraordinaria del trabajo de que se trata no se pueden sacar consecuencias de aplicación general. Todo ello aparte de que no se puntualizan especialidades laborales entre los trabajadores, sino que se alude más bien a jerarquías.

De las asociaciones profesionales en Egipto se conservan algunos testimonios contenidos en obras de escritores antiguos.

Herodoto habla de siete asociaciones profesionales. Sacerdotes, guerreros, pastores, criadores de cerdos, traficantes, intérpretes y pilotos, mientras que Diodoro se refiere a cinco: Sacerdotes, guerreros, pastores, agricultores y artesanos (2).

Varias observaciones cabe formular a éstas referencias que,

por otra parte, son divergentes.

En primer lugar la referencia de Diodoro peca de excesiva ambigüedad ya que no matiza las dedicaciones artesanales. En segundo lugar la referencia de Herodoto ofrece una visión más restringida de las asociaciones de ganaderos, que sin duda, no se limitarían al ganado porcino.

En tercer lugar y en base precisamente a la apuntada amplitud que tienen algunas indicaciones, muy bien pudiera ser que no se tratase de verdaderas asociaciones profesionales, sino de grupos o castas sociales de indudable transcendencia pública, pero ajenas a una clasificación artesanal e incluso profesional.

En el Egipto de los Tolomeos existieron corporaciones de artesanos entre las que cabe destacar la de los embalsamadores y la de los encargados de llevar a cabo la disección anatómica (3).

También se tiene noticia de que en la antigua Caldea existían grupos de familias que tenían una común dedicación laboral y estaban gobernados por jefes y regidos por determinadas normas (4).

Acerca del régimen asociativo en Atenas, tenemos el texto de Gayo (5) en el que se alude a una ley de Salón sobre las eterias. Ley en la que se decía que si no se oponen las leyes públicas sea válido lo que convengan entre sí, para sus fines, los de un pueblo o fratria, los socios para un culto, los comensales, los cofrades de sepultura o religión o los que emprenden una cap

tura o negociación.

Ahora bien, mientras que para Martín Saint León (6) el término eteria significa una asociación profesional, para Monti (7) significa una asociación de carácter religioso. Teoría compartida por P. Bonfante (8) y U. Coli (9). También parecen haberse formado éstas asociaciones entre comerciantes para facilitar el intercambio de los productos.

En la India de los tiempos de Buda parecen haber alcanzado auge las asociaciones profesionales, pudiendo citarse, entre otras, las asociaciones de carpinteros, obreros del metal, tintoreros, pescadores, cazadores, decoradores de casas, barberos, marineros, jardineros y cocineros (10).

AMBIENTE SOCIAL Y ECONOMICO DE LA ROMA ARCAICA.- Diver- ^{FM}
sas teorías se han manifestado acerca del origen de los colegios profesionales en Roma, pero antes de analizar éstas teorías y las críticas que a ellas se han dirigido por diversos sectores de la romanística moderna y también antes de iniciar la exposición de los relatos tradicionales, parece lo más adecuado establecer algunas consideraciones acerca del ambiente social y económico de la Roma arcaica.

La economía de la Roma de los primeros tiempos se basaba en la agricultura y el pastoreo.

Entre las producciones de la agricultura destacaban los ce

reales (11) y a la alimentación basada en el consumo de cereales hace referencia una norma contenida en las XII Tablas (12) relativa a la alimentación mínima del condenado por deudas en la fase previa a su posible ejecución.

También existía una modesta producción de hortalizas, como se deduce de la existencia de un Forum olitorium, a la que cabe añadir la existencia de higueras y algo de viñedos.

Respecto del cultivo del olivo no cabe asegurar que fuese conocido por los romanos de los primeros tiempos. En apoyo de ésta hipótesis se ha hecho notar que las palabras relativas a los olivos y al aceite, son de origen griego (13).

De todos modos cabe conjeturar que la actividad a que los romanos se dedicaban preferentemente no era la agrícola, sino el pastoreo.

A ésta conclusión se ha llegado en consideración a la existencia de grandes extensiones de bosques, a que hacen frecuente referencia las obras de historiadores latinos, como por ejemplo Tito Livio cuándo escribe (14): "Nuestros antepasados que sólo eran una multitud de extranjeros y pastores en tiempos en que en éstos parajes sólo se veían bosques y pantanos, constituyeron en pocos días una ciudad nueva". Igualmente atestigua la existencia de grandes bosques, el hecho de que la Toponimia romana contiene clarísimas alusiones a la vegetación. De aquí los nombres de Querquetal (lugar de encinas), Fagutal (lugar de hayas), Viminal (lugar de mimbres) etc.

La ganadería estaba representada especialmente por el ganado vacuno, como se sabe por algunos descubrimientos realizados en tumbas arcaicas del Foro; por caballos, como se desprende de la inclusión de estos animales entre las res mancipi (15); por cabras que eran utilizadas en las ceremonias rituales de los Lupercales (16) y por ovejas, ya que la ~~filatu-~~ ^lra de la lana era una costumbre antiquísima y labor que caracterizó a la honesta y digna dama romana (17).

También parece haber estado bastante extendida la crianza del ganado porcino, ya que abundaban en los bosques romanos los árboles que daban los frutos adecuados para la alimentación de estos animales (18) y también eran utilizados en diversos sacrificios rituales.

En Roma, escaseaban en cambio, los metales. El hierro tardó en ser utilizado y el "asta pura" de que se habla en las fuentes consistía en una punta de madera aguzada (19).

En el orden social puede afirmarse que la Roma primitiva era un país pobre, de escasísimo número de esclavos, como lo revela el pasaje de las XII Tablas relativo a la venta de los hijos de familia para trabajar en el campo durante ciertas temporadas (20) y con una fuente y cerrada organización familiar, motivada a la vez por razones económicas (21) y religiosas. Los escasos esclavos constituían una ayuda imprescindible para la explotación de las tierras y el cultivo de los campos. Esto se prueba por un texto de Valerio Máximo (22) según el cuál Régulo, gene

ral de los ejércitos de Africa, solicitó su repatriación alegando que la muerte de su esclavo y la infidelidad de un criado le impedían atender su pequeña hacienda.

Por otra parte, la sociedad romana primitiva mantenía un notable aislamiento y era reacia al cosmopolitismo, situación apenas quebrada por la presencia de una población etrusca de distinta mentalidad y de un lejano origen.

Sin embargo, esta característica no puede ser llevada al extremo de formular afirmaciones absolutas, porque de hacerlo así quedarían algunos textos de las XII tablas sin posible explicación como el relativo al "status dies cum hoste" causa de excusa para la comparecencia en un proceso (23).

LOS RELATOS TRADICIONALES.- Los grandes historiadores latinos, como Tácito, Tito Livio, o Salustio, no se ocupan de modo directo del origen de los colegios de artesanos en Roma. Son Plutarco, Plinio el antiguo y Floro, lo que nos ofrecen algunos relatos que, aunque en determinados aspectos suministran detalles contradictorios, pueden servir de pista para la investigación de las primeras asociaciones profesionales en Roma.

Plutarco (24) al referirse a las grandes realizaciones de Numa destaca la distribución de la plebe por oficios y plantea ésta distribución como una hábil medida de carácter político. Según éste relato se trató de superar las rivalidades que existían entre los pueblos de Rómulo y de Ticio Tacio.

Así escribe Plutarco: "Entre todas las instituciones debidas a este rey, es especialmente admirable la distribución que llevó a cabo de la población, según las artes a que cada cuál se dedicaba, pues aunque pareciese que la ciudad estaba formada por dos naciones unidas, sin embargo, más bien estaba desunida, ya que no querían ser un sólo cuerpo, si era posible eliminar las disensiones, mientras una nación mirase a la otra como extranjera. De lo que nacían ruinas y contiendas implacables. Por todo ello, considerando Numa que los cuerpos enteros y que se unen entre sí, una vez desmuzados y divididos se unen y se mezclan más ^{ten} fácilmente, al ser más pequeños, resolvió dividir la población en muchas partes, estableciendo diferencias por las cuales la gran masa viniera a dispersarse, fragmentada en otras más pequeñas. Llevó a cabo la división, según las diferentes profesiones: Flautistas, orfebres, carpinteros, tintoreros, zapateros, curtidores, caldereros y alfareros, haciendo con las demás artes un sólo cuerpo. Asignó a cada asociación las reuniones, asambleas y sacras funciones adecuadas y de éste modo evitó que en la ciudad unos se llamasen sabinos y otros romanos".

Plutarco ofrece un brillante e interesante relato y una justificación que en realidad no es social y económica, sino que parece dictada por la preocupación de salvar la naciente ciudad de Roma.

Algunas observaciones cabe hacer al relato de Plutarco.

En primer lugar, es indudable que no toda la población romana de aquél tiempo se dedicaba a alguna de las profesiones que Plutarco enumera y por tanto la masa de los ciudadanos que quedase fuera de los nuevos cuadros y sectores laborales seguiría presentado al gobernante los mismos problemas que con la medida adoptada por el rey Numa se habían querido evitar.

La gran masa de la población romana y precisamente la más influyente y representativa estaba dedicada a la agricultura (25) y no podía ser olvidada.

Es cierto que en el relato de Plutarco se dice, al final de la enumeración de las profesiones, que con las demás hizo un sólo cuerpo.

Esto se puede interpretar de dos maneras:

Para Mommsen, el noveno colegio comprendería a los agricultores y al resto de la población, para Monti los agricultores estarían excluidos (26).

Muchos argumentos pueden hacerse valer en favor de la opinión de Monti.

Si la agricultura hubiese sido incluida en el noveno cole-

gio no habría dejado de ser mencionada expresamente, lo mismo que expresamente se citaban otras profesiones.

Por otra parte, resulta difícil concebir que para Numa la actividad agrícola sólo fuese un oficio más a incluir en una especie de cláusula residual.

Además, en caso de haberse agrupado a todos los agricultores en un sólo colegio, la idea de dividir a la gran masa de la población romana en porciones más pequeñas había quedado prácticamente desvirtuada.

A todo esto, puede añadirse que así como en las fuentes se encuentran referencias a los otros colegios creados por Numa, nada se dice en otros textos del misterioso colegio noveno.

Pero todavía cobra mayor vigor el argumento de Monti si se tiene en cuenta que no sólo los agricultores fueron excluidos de la organización de Numa, sino también los pastores y el pastoreo tuvo incluso mayor importancia que la agricultura en las primeras épocas de Roma.

La referencia a los órfebres ha suscitado también extrañeza pues no parece ser una profesión que alcanzase gran importancia en el ambiente no sólo rústico y sencillo, sino evidentemente pobre de la Roma arcaica. Sin embargo, en éste punto, como en otros muchos de los que se plantean al estudiar los problemas de los orígenes, no puede olvidarse la presencia entre los antiguos romanos de una raza de origen oriental: Los etruscos.

En las XII tablas (27) se contienen unos preceptos que causan cierta perplejidad al ponerlos en relación con el ambiente indicado. Son preceptos en los que se prohíbe que se emplee oro en los enterramientos. Pero la perplejidad desaparece al considerar que se trata de ritos exóticos traídos de oriente por mediación de los etruscos.

Plutarco cuenta que Licurgo (28) ordenó perfectamente todo lo relativo a los entierros, porque trató ante todo de desechar superstición y por ello no prohibió que se sepultasen los muertos dentro de la ciudad y que se pusiesen sus monumentos acerca de los templos, criando y familiarizando así a los jóvenes con éstos espectáculos a fin de que no se turbasen ni se horrorizasen con la muerte, ni se tuviesen por contaminados con tocar un cadáver o pasar por delante de una sepultura. Después mandó, sigue diciendo Plutarco, que nada se enterrase con el muerto y sólo se le envolviese en un paño encarnado con hojas de olivo. Tampoco se permitió escribir otro nombre que el de aquél que moría en la guerra o el de las sacerdotisas. También señaló un tiempo muy limitado para el duelo, sólomente once días. Al duodécimo día, se hacía un sacrificio a Ceres y con esto debía cesar el duelo porque Licurgo no quería ni ocio ni inacción. En todo esto había una incitación a la virtud o una invectiva contra el vicio, concluye diciendo Plutarco.

En éste relato y en las medidas que se atribuyen a Licurgo se aprecia un cierto deseo de evitar cualquier superstición, pero también late en el fondo la preocupación por evitar que los

enterramientos ocasionen gastos y pérdida de tiempo.

A la misma conclusión se llega relacionando la prohibición del empleo de oro en los enterramientos con otras prohibiciones que igualmente figuran en las XII Tablas y cuyo origen oriental se halla fuera de toda posible discusión. Se trata de la intervención de las plañideras que se usaban entre los etruscos y que aparecen en varios bajorrelieves de Perugia y de Florencia (29). Otro tanto puede decirse del uso de la mirra que se usaba junto con la miel y otros productos para ungir el cadáver (30).

No obstante lo cierto es que la medida de que habla Plutarco encaja perfectamente en la personalidad de Numa según los historiadores antiguos. Tito Livio presenta a Numa Pompilio como varón célebre por su justicia y su piedad, muy versado en el conocimiento de la moral divina y humana, que quiso que la ciudad naciente, fundada por la violencia y las armas, lo fuese de nuevo por la justicia, las leyes y la pureza de las costumbres (31).

Rey organizador y prudente, que creó sacerdotes, que fundó el colegio de las Vestales, que dedicó un templo a Jano, construyéndolo al pie del Argileto; templo que fue símbolo de paz y de guerra, porque estando abierto llamaba a los ciudadanos a las armas y cuándo estaba cerrado anunciaba que reinaba la paz con todos los pueblos vecinos.

Rey que dividió el año, según el curso de la luna en doce meses y estableció los días fastos y nefastos.

Rey que parece haber sido un gran organizador de la economía de su pueblo (32).

Dionisio de Halicarnaso (33) divide las leyes de Numa en tres grupos: El primer grupo corresponde a las leyes encaminadas a constituir los varios órdenes del sacerdocio; el segundo grupo, las leyes tendentes a inculcar la frugalidad, la templanza y el amor a la justicia; las disposiciones adoptadas para que la ciudad se ocupase de las obras necesarias.

Plutarco hace una división semejante a la de Dionisio de Halicarnaso y es a propósito del tercer grupo de disposiciones, cuándo trata de la distribución de la ciudad por oficios.

En cambio, Dionisio de Halicarnaso, en relación con el tercer grupo de las disposiciones de Numa, se ocupa del fomento de la agricultura.

Estas diferencias de sistema tienen un especial relieve en el sentido de destacar la importancia de la agricultura en la ciudad recién fundada y es un argumento en contra del noveno colegio de Numa, a que parece referirse Plutarco, en el cual la agricultura figuraría mezclada en las artes no clasificadas previamente.

Pero no solamente la atribución a Numa de la división de la población romana en colegios profesionales es conforme con su personalidad de Rey, prudente, piadoso y organizador, sino que también encaja la naturaleza de los colegios profesionales con la primitiva civilización romana.

Los flautistas eran necesarios en no pocas ceremonias, sacrificios y funerales, si bien su intervención en los ritos matrimoniales no parece haber tenido en la Roma arcaica la importancia que en otros países (34), por la simplicidad de las costumbres romanas.

Los carpinteros se requerían para la construcción de las casas, no así los albañiles, porque en aquel tiempo no se construían las casas de piedra.

Los que trabajaban el metal y los curtidores eran indispensables para la fabricación de armas y pertrechos de defensa.

La ocupación de los alfareros está sobradamente justificada por el empleo que los romanos hacían de toda clase de vasijas y recipientes de barro y en cuanto a los tintoreros y zapateros, su profesión era exigida para atender al equipo personal.

Como ejemplos de la fabricación primitiva de los objetos de metal y de cerámica pueden citarse los vasos sepulcrales encontrados cerca de Alba Longa y los hallazgos del Esquilino (35).

En la Roma primitiva tuvieron que existir personas que ejerciesen los oficios o dedicaciones laborales de panaderos, barberos o cocineros y sin embargo, no figuran en la relación de los colegios de Numa. Este detalle no dice nada, por si sólo, contra la fiabilidad del relato de Plutarco, porque eran profesiones que, en aquél tiempo se ejercían en el ámbito doméstico.

Varron pretende (36) haber obtenido de los archivos de la villa de Ardea el dato de que no había tonsores (peluqueros) antes del año 300 a. de C., en que P. Ticiano Mena los trajo de Sicilia.

El arreglo de los cabellos femeninos corría a cargo de una esclava que recibía el nombre de ornatrix.

Trabajadores del hierro prácticamente no existían entre los antiguos romanos. Porsenna lo había prohibido salvo en la agricultura y el empleo del hierro en la reparación de los ara dos correspondería a quienes trabajaban en la finca (37).

Plinio el Antiguo en su Historia Natural (38) y con ocasión de ocuparse de las minas de cobre y del antiguo uso que de éste metal hacían los romanos, dice que, según una antigua tradición, el tercer colegio establecido por el rey Numa fue el de los fundidores del cobre y de los alfareros dice que ocupaban el séptimo lugar (39).

Los textos de Plinio tienen el valor de asegurar la existencia de una antigua tradición y de un ~~orden~~ orden numérico en los colegios, pero ni coinciden los nombres de los colegios, ni el orden numérico, entre los relatos de Plutarco y Plinio, por lo que parece que estos dos autores utilizaron fuentes diferentes.

Plutarco y Plinio coinciden en atribuir a Numa la fundación de los colegios, pero frente a ésta coincidencia se alza un texto de Floro.

Floro (40) al ocuparse del reinado de Numa Pompilio coincide con la descripción que hace Tito Livio de las cualidades de éste rey (41) pero en cambio no dice que fuese el autor de la creación de los colegios profesionales.

En cambio, al hablar Floro del rey Servio Tulio, del que afirma que ejerció el mando con tanta habilidad que parecía haber obtenido por derecho un reinado que consiguió gracias a la astucia y apoyado por la esposa del rey que le precedió (42), es cuándo declara que Servio Tulio hizo inscribir a la población romana en el censo, la dividió en clases, la repartió en decurias y colegios y gracias a la actividad desbordante de que hizo gala el rey, añade Floro, el Estado recibió una organización tal que todas las categorías de patrimonios, de dignidades, de edades, de oficios y de funciones figuraban en los registros y así la más grande de las ciudades era objeto de tan minucioso cuidado como la casa más pequeña. Abundando en la comparación entre los relatos de Tito Livio y de Floro, se observa que al ocuparse el primero de estos dos historiadores del reinado de Servio Tulio, si bien trata, con mayor extensión aún que Floro, la novedad que supuso el establecimiento del censo romano y las ventajas que reportó, no habla para nada de una clasificación por profesiones, sino que alude a una distribución por categorías de fortunas y de dignidades (43).

Mas aún, Tito Livio marca, en el mismo pasaje, la diferencia entre Servio Tulio y Numa y tampoco en esta ocasión alude para nada a la creación de los colegios profesionales. La diferen-

cia entre los dos reyes la establece en los siguientes términos: Si Numa fue el fundador de las instituciones religiosas, la posteridad atribuye a Servio Tulio la gloria de haber introducido el orden que representa la institución del censo.

Parece seguro que los autores citados se limitaron a recoger una antigua tradición que es posible que figurase en una amplia obra de Varron sobre las antigüedades romanas (44).

Existe una aparente contradicción entre los textos de Floro y Plutarco, anteriormente expuestos. Pues mientras Plutarco atribuye la creación de los colegios a Numa. Floro parece atribuirlos a Servio Tulio (45).

Sin embargo, la contradicción decimos que es sólo aparente, puesto que Floro no dice exactamente que Servio Tulio instituyese los colegios sino que dispuso que se registrasen, lo mismo que las dignidades y las fortunas, en el censo (46).

Otros intentos de conciliación de los textos de Plutarco y Floro se han aventurado, pero más basados en conjeturas que en datos históricos. Así Heinecio (47) pensó que los colegios de artesanos procedían efectivamente del rey Numa mientras que Servio Tulio fue su restaurador o impulsor. La organización establecida por Numa habría durado poco tiempo. Abolida por Tulio Hostilio fue Servio Tulio quien estabilizó la existencia de los colegios de artesanos que se mantuvieron a lo largo de la historia de Roma con variada suerte y conociendo momentos de auge y momentos de crisis.

No menor interés que el texto de Floro tiene un pasaje de Dionisio de Halicarnaso (48) según el cuál, integrando la plebe los más pobres, siempre propicios a la secesión y hallándose los plebeyos divididos en dos partidos, el de los romanos y el de los sabinos, Numa evitó los desórdenes dedicando a los más necesitados a trabajar en el campo.

Este texto rebela, por una parte, la importancia social de los trabajadores del campo en la Roma arcaica y, por otra, desvirtúa la idea de un noveno colegio en la organización de Numa que abarcase la actividad agrícola junto con otras artes.

No obstante estar corroborada la tradición que habla de la existencia de antiquísimos colegios profesionales, por testimonios como el de Suetonio (49) y el de Dion Casio que, hablando de los colegios en el año 64 antes de Cristo, dice que eran antiguos, se ha atacado la antigüedad si no de todos si al menos de algunos de ellos.

Así como por ejemplo, a propósito del collegium aerariorum se ha dicho que no podrá ser de la época de Numa porque en tiempo de éste rey no se conocía la moneda (50).

Este ataque parece estar inspirado en una defectuosa interpretación de un texto de Plinio (51).

Plinio no dice que los aerarii, cuyo colegio constituyó Numa, fuesen fabricantes de moneda. Si tal dijese el anacronismo sería de gran bulto, porque en tiempo de Numa no se conocía el aes signatum.

Lo que hace Plinio es referirse al cobre, metal que actúa inmediatamente detrás del oro y de la plata, y para demostrar su importancia en la industria alude al empleo del cobre en la fabricación de la moneda.

Prueba evidente de que no se está refiriendo a los aerarii como fabricantes de moneda, la constituye la circunstancia de que en el mismo pasaje recuerda que hubo un tiempo en el cuál el pueblo romano usaba como moneda lingotes de cobre.

Después de esa referencia al valor de dicho metal, Plinio dice que el tercer colegio fundado por Numa fue el de los trabajadores del cobre; no habla para nada de monederos: Monetarii, conflatores.

Otro tanto pudiera decirse del colegium figulorum.

Plinio (52) se ocupa de este colegio cuya creación atribuye al rey Numa, lo mismo que Plutarco, pero lo trata no aisladamente y exprofeso, sino con relación a las distintas clases de vasijas, conductos, recipientes y cubiertas que, con arcilla y materiales similares se podrán fabricar y de su uso en diferentes regiones.

Sería por tanto inadecuado relacionar a los figuli con un tipo de obras o de utensilios determinados, de los varios expuestos y pertenecientes a diversas épocas.

Para E. Pais (53), siguiendo la corriente hipercrítica que le caracteriza, es un error atribuir a los primeros siglos de la

monarquía una organización laboral que presupone un desarrollo político y, en parte, industrial, cuyas primeras trazas sólo son realmente visibles en el primer siglo de la República, es decir, después de afirmarse la plebe.

El citado historiador argumenta del siguiente modo: Si todavía en la República los romanos continuaban utilizando vestidos de lana que había sido hilada por los señores de las casas y comían pan elaborado en el hogar doméstico, es verosímil que en la época monárquica cada familia se construyese por sí misma su respectiva vivienda, sin acudir al trabajo de artesanos especializados y algo semejante pudiera decirse de la construcción de los toscos instrumentos de labranza usados por los primitivos romanos.

A estas afirmaciones de E. Pais hay que observar que desde los primeros tiempos de Roma, hubo en la ciudad un cierto número de inmigrantes etruscos y entre ellos pudo haber también obreros especializados. Lo que si parece acertado es explicar la ausencia de panaderos en los primitivos colegios profesionales por la razón aducida, con mayor alcance, por E. Pais.

La posición que adoptó De Sanctis (54) frente al relato tradicional que atribuye la creación de los colegios a Numa, ofrece dos aspectos.

De Sanctis reconoce que la lista de los oficios debe remontarse a una época antigua y defiende ésta creencia basándose en razonamientos ya expuestos, como, por ejemplo, la relativamente

tardía difusión de los instrumentos de hierro, la inexistencia en las primeras épocas del oficio de panaderos, como industria ajena al ámbito doméstico, etc. Pero al mismo tiempo atribuye la aparición de las asociaciones de artesanos a una fuente antigua que piensa que pudiera ser la ley de las XII Tablas, pero negando radicalmente la atribución al rey Numa.

De Sanctis no expone en su tratado de historia (55) ningún argumento para negar que fuese Numa el iniciador de los colegios, si bien estos argumentos pueden desprenderse del juicio que De Sanctis formula sobre la leyenda de los primitivos reyes.

La atribución del origen de los colegios a la ley de las XII Tablas, atribución que De Sanctis solamente formula como una posibilidad y a la que le conduce la necesidad de encontrar una fuente antigua que responda al carácter arcaico que el mismo historiador asigna a la lista de colegios, es muy dudosa ya que en las XII Tablas no se encuentra referencia alguna a la creación de los colegios y evidentemente una medida de ésta importancia, en caso de haber estado contenida en el Código Decenviral, no podría haber sido olvidada por los escritores jurídicos y no jurídicos que lo comentan, o a él se refieren.

Lo que si parece verosímil es que la presencia de etruscos en Roma tuvo mucho que ver con la aparición de colegios de artesanos, ya que frente a los latinos los etruscos representan un mayor nivel de desarrollo artístico.

En la historia del arte etrusco se han advertido dos fases, una arcaica y otra helenística.

La fase arcaica corresponde al siglo VI y comienzos del V a. de C. y son bien conocidos los trabajos de los etruscos en metal y en tierra cocida y notables sus construcciones en madera (56).

Hay un pasaje de Tito Livio (57) en el que se exponen determinados extremos relativos a la construcción del templo de Júpiter Capitolino.

Después de aludir a las cuantiosas riquezas que fueron precisas para realizar la obra, según los relatos de Fabio y de Pisón, Tito Livio dice que Tarquino el Soberbio, dominado por el deseo de terminar el templo, trajo obreros de Etruria y empleó no solamente las rentas del Estado, sino también los brazos del pueblo.

A la vista de éste texto no puede concluirse diciendo que no existían antes de Tarquino obreros en Roma capaces de construir templos, ya que la venida de aquellos operarios etruscos sólo fue impulsada por la necesidad de satisfacer el deseo del rey de ver concluida rápidamente la obra emprendida en honor de la divinidad. Es la única explicación que tiene la alusión de Tito Livio al vehemente deseo de Tarquino de concluir el templo.

En ésta misma dirección apuntan otros pasajes del texto, ya que después de haber dicho que empleó los brazos del pueblo, añade Tito Livio que ese pueblo romano fue empleado en otros trabajos, como la construcción de galerías alrededor del circo o la

apertura de la cloaca "dos obras que apenas ha conseguido igualar la magnificencia de nuestros días".

La oposición pues, no se advierte entre obreros especializados traídos de Etruria y peones procedentes del pueblo romano, sino obreros romanos que fueron reforzados por la venida de otros trabajadores y ésto ha de interpretarse así porque los que hicieron las galerías y la cloaca no eran, según las palabras de Tito Livio, los que vinieron de etruria sino los mismos romanos "que soportaban las cargas de la guerra".

Pero, aunque después de todo lo expuesto, parece muy verosímil que sea del tiempo de Numa la creación de los colegios de artesanos, es preciso, sin embargo, adoptar algunas reservas acerca de la motivación política que se asigna a esta creación.

Bandini (58) hace una observación de gran agudeza, aunque sean discutibles las consecuencias que extrae de ella. Es la observación de que no tenía sentido dividir la plebe en colegios, cuándo las mayores discordias se darían entre las clases más elevadas de romanos y sabinos que serían las que participaban del gobierno. Esto no lleva, ni mucho menos a concluir que los sabinos serían los plebeyos y los romanos los patricios, sino simplemente a conjeturar que los motivos que dieron lugar a la división no fueron los que declara Plutarco. La división se haría en la plebe, formada por etruscos.

TEORIAS MODERNAS.- Para Lange (59) la creación de los cole-

gios de artesanos se debió a la disolución de los vínculos que ligaban a los clientes con las organizaciones gentilicias.

Los colegios se formarían con personas que habían conseguido la independencia y la libertad de acción.

Mommsen (60) atribuyó la creación de los colegios al deseo de los artesanos de conservar, lo más fielmente posible, la tradición de su arte. En definitiva, había sido la misma finalidad que condujo a la creación de los colegios sacerdotales.

Cohn (61) al mismo tiempo que piensa que la naturaleza de los colegios primitivos fue, sobre todo, religiosa, rechaza las teorías que sitúan su aparición en la época monárquica y afirma que proceden del período republicano.

Dirksen (62) afirmó que el Estado romano solamente otorgó su protección a aquellos oficios que atendían de modo directo a las necesidades de la guerra o del culto.

De Robertis (63) se inclina a creer en el origen etrusco de los colegios de artesanos.

La tesis de Lange tropieza con la dificultad de identificar clientela y plebe. Dificultad de gran relieve porque plebeyos parecen haber sido los componentes de los primeros colegios.

A la teoría de Mommsen se le puede formular una doble objeción. Por una parte, el deseo de conservar fielmente la tradi-

ción encaja perfectamente entre las causas que pudieron motivar la creación de los colegios sacerdotales, ya que cualquier desviación en ésta materia podría atraer la cólera de los dioses sobre la ciudad, según las creencias de los primitivos romanos, pero la posible infidelidad a una tradición artesana era de consecuencias mucho menos graves. Por otra parte, dado el escaso desarrollo de las artes en un poblado primitivo de ganaderos y agricultores, no se comprende fácilmente la extremada fidelidad a una actividad artesana, que más que ser conservada, necesitaría ser desarrollada.

En este caso como en otros muchos se descubre la tendencia a asimilar las causas o las finalidades de los primitivos colegios romanos de artesanos, a las que mucho tiempo después habrían de tener los colegios medievales de artesanos.

La doctrina de Cohn encierra una cierta contradicción, por que por un lado asigna a los colegios una naturaleza eminentemente religiosa y, por otro, viene a situar su aparición en un tiempo en que la antigua religiosidad del pueblo romano va aminorándose.

La doctrina de Dirksen exige una difícil valoración. Requiere determinar en qué medida los artesanos servían a las necesidades del culto y de la guerra y, por otra parte el servicio a las necesidades del culto o de la guerra tiene que ser valorado conjuntamente con la prestación personal en las unidades combatientes.

La tesis defendida por De Robertis reconduce al arduo tema del origen racial de la plebe. Pero aunque casi se han agotado todas las hipótesis posibles para descubrir la verdadera causa de la división en plebeyos y patricios, parece que el origen etrusco de la plebe tiene a su favor una serie de datos y circunstancias, como el incremento de la lucha patricio-plebey ya después de la caída de los reyes y consiguiente pérdida del poder etrusco, el alejamiento plebeyo de las organizaciones gentilicias, etc.

Si se admite el origen etrusco de la plebe resulta fácil establecer la relación etruscos-plebeyos-artesanos.

Los artesanos, plebeyos por ser etruscos, habrían sentido la necesidad de agruparse para defenderse de un ambiente que, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, les resultaba francamente hostil.

Pero hay más argumentos en favor del origen etrusco de los colegios de artesanos.

La civilización etrusca tenía la característica de ser eminentemente mercantil e industrial y en éste ambiente es lógico que surgiesen agrupaciones de artesanos y mercaderes y el lenguaje técnico de los artesanos, sus costumbres, su organización y otras singularidades sólo pueden ser explicadas refiriéndolas a la civilización etrusca (64).

Todo ello es perfectamente compatible con el reconocimiento de la veracidad de las afirmaciones de Monti (65) en el sentido

de que a Roma corresponde el gran mérito de haber creado el ambiente adecuado para que pudiese germinar y alcanzar su pleno desarrollo el espíritu asociativo y haberlo transmitido a siglos posteriores.

Pero la gran interrogante que existe acerca de los orígenes de las asociaciones de artesanos y dentro de la cuál se mueven las diferentes posturas doctrinales es la de si surgieron como consecuencia de la iniciativa privada o fueron, por el contrario, el fruto de una decisión del poder legislativo.

La atribución del origen de los colegios a la decisión del legislador parece poco conforme con la incipiente organización política romana.

Se ha dicho que la idea de asociación surge como algo espontáneo y que aparece en toda clase de pueblos, cualquiera que sea el nivel de su desarrollo cultural (66) y Tamassia (67) recuerda como ejemplo de antiquísima manifestación de la tendencia asociativa el "hermanamiento".

Sin embargo es muy dudoso, como señaló Leicht (68) la utilidad de las investigaciones de ésta naturaleza que se remontan a épocas prerromanas.

Prescindiendo de las épocas prerromanas y planteando la cuestión en la Roma primitiva, procede examinar a la vista de los datos históricos y de los relatos tradicionales que han llegado hasta nosotros, si debe atribuirse el origen de los colegios a una intervención estatal o a la iniciativa privada.

Si se acepta la teoría de la iniciativa estatal, surge el problema de fijar cuál fue la causa próxima que determinó la decisión del poder público, ya que la causa podía ser diferente según la asociación de que se tratase: Religiosa, para los tañedores de flauta; militar para los aerarii; social para los tintoreros, etc. Siendo difícil pensar que tan variadas causas dieran lugar a una decisión única.

Si se defiende la tesis de que los colegios nacieron por iniciativa privada aparece una dificultad aún mayor, la de explicar por qué no surgieron en forma gradual y escalonada.

La solución puede ser la de que la iniciativa privada dio vida a los colegios, el poder público dio cauce y forma a ésta iniciativa y luego fue desarrollándose de modo gradual la organización artesanal (69).

Pertenece al terreno de la pura conjetura, relacionar esa iniciativa privada con la supuesta aparición de organizaciones religiosas o sodalitates prebeyas frente a las sodalitates patricias, o la formación de vicinitates como base de los colegios.

También ha sido objeto de no pocas polémicas la determinación de cuál fue la verdadera finalidad de los primitivos colegios.

Se ha ofrecido una amplia gama que va desde los fines económicos y cooperativos a los fines públicos, religiosos y militares, pasando por el deseo de perfeccionar las tradiciones artesanas y desarrollar la tecnología industrial.

Especialmente la atribución a los colegios de la última finalidad de las expuestas, se advierte muy forzada y más propia de tiempos posteriores, como ya hubo ocasión de indicar.

La exclusiva finalidad económica y cooperativa es demasiado simple y sencilla para las épocas remotas, ya que no podrán faltar, en los propósitos de individuos y colectivos, otros componentes, sobre todo los componentes de carácter religioso.

En realidad, más que hablar de una finalidad única de todas las asociaciones debiera de hablarse de finalidades propias de cada asociación en particular, lo que no quiere decir que no coincidieran en una sola asociación diversas finalidades.

Así, los constructores no sólo construían viviendas, sino también lugares de culto, los aerarii no sólo fabricaban armas sino también utensilios de aplicación doméstica, los músicos podían intervenir en las ceremonias de culto y también en las maniobras y marchas militares, etc.

Para admitir el origen etrusco de los colegios tampoco constituye una dificultad la finalidad religiosa, ya que los etruscos no solamente aportaron a Roma arte y organización política, sino también elementos de carácter religioso (70) y la intervención de los flautistas en el culto a Minerva parece tener un origen etrusco.

N O T A S

- (1) Libro de los Reyes, I, III, 15-16.
- (2) Cfr. Pino Branca, La funzione sociale delle Corporazioni nella storia, Padua 1930. App. III.
- (3) Toutain, L'Economie antique, Paris 1927, p. 172.
- (4) G. Barbagallo, L'Oro e il Fuoco, Milán 1927, p. 43.
- (5) D., 47, 22,4
- (6) Historie des Corporations de Mètiers, Paris 1922, p. 2.
- (7) Le Corporazioni nell'evo antico e nell'alto medio evo, Bari 1934, p.5.
- (8) Storia del Diritto romano, II. Milán 1923.
- (9) Collegia e sodalitates, Bolonia 1913, p. 100-104.
- (10) Monti, ob. cit. p. 7 y la bibliografía citada en la n. 1.
- (11) Segré, Note sulla storia dei cereali nell'antichità, Aegyptus, XXX, (1950) p. 161.
- (12) III, 4.
- (13) Cfr. R. Paribeni, Le origini e il periodo regio, Bolonia 1954 (vol. I de la historia de Roma publicada por el Instituto de estudios romanos) p. 112.
- (14) V, 53.
- (15) Gaius, Inst., II, 14a.
- (16) Ovidio, Fasti, I, 353 y Aulio Gelio, V, 12.
- (17) En la llamada Laudatio de Turia (C.I.L. VI, 1527) se lee: "Domestica bona pudicitiae, opsequi, comitatis, facilitatis, lanificiis truis, religionis sine superstitione...".
- (18) Plinio, N.H. XVI, 10.
- (19) F. de Martino, Storia economica di Roma antica, I, p. VII.
- (20) F. Hernández-Tejero. Algunas observaciones sobre la rigidez del Derecho romano arcaico, Madrid 1965.
- (21) Gaius, Inst., III, 154 a.

- (22) IV, 6, 6.
- (23) Düll, Zwolgtafelngesetz, Munich 1953, p. 79.
- (24) Numa, XVII
- (25) Sobre los cambios surgidos en la estructura social de Roma con el desarrollo de la agricultura, Cfr. De Martino, Storia económica di Roma antica, I, p. 4.
- (26) Le Corporazioni nell'evo antico e nell'alto medio evo, Bari 1954, p. 15.
- (27) X, 8.
- (28) Vidas paralelas: Licurgo, XXVII.
- (29) Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, v. Funus.
- (30) Festo, v. Murrata potio.
- (31) I, 18-19.
- (32) Cic., De republica, II, 37.
- (33) V. Bandini, Appunti sull corporazioni romane, Milán 1937, p.p. 33 y ss.
- (34) M. Rage - Brocard, La deductio in domum mariti (Tesis) París 1933 p. 40 n. 3.
- (35) Marquardt, La vie privée des romains, II, Paris 1893 (trad. franc.) p. 7.
- (36) De re rust., II, 11, 10. Cfr. Plinio, N.H., VII, 211.
- (37) Explicar la falta de los herreros en la relación de Plutarco con la suposición de que eran los mismos que trabajaban el cobre, es algo que no se compadece bien con el ambiente social y económico de la Roma primitiva, ya expuesto.
- (38) N. H., XXXIV, 1.
- (39) XXXV, 46.
- (40) Historia romana, I, 2 y I, 7.
- (41) Loc. cit.
- (42) La hábil y ambiciosa Tanaquil.
- (43) I, 42.

- (44) Waltzing, Etude historique sur les Corporations professionnelles, I, Roma, 1968, p. 64.
- (45) Karlowa, Römische Rechtgeschichte, II, Leyptzig 1892, p. 63.
- (46) U. Coli, Scritti di diritto romano, I, Milán 1973, p. 19, n. 12.
- (47) De Collegiis et corporibus opificum, p. 378.
- (48) Antiquitates romanae, II, 62.
- (49) Caesar 42.
- (50) Niebuhr, Römische Geschichte, II, Berlín 1833, p. 211.
- (51) N.H., XXXIV, 1.
- (52) N.H., XXXV, 46.
- (53) Storia di Roma, II, Roma 1926, p. 436.
- (54) Storia dei romani, II, Florencia 1960, p. 451.
- (55) Ob. cit., I, p. 356 y ss.
- (56) M. Pallottino, La civilisation etrusque, Paris 1949, p. 171 y ss.
- (57) I, 55. A pesar de algún pasaje de Dionisio de Halicarnaso no parece que el trabajo estuviese prohibido a los ciudadanos romanos, concretamente a los plebeyos, (II, 28 y IX, 25).
- (58) Appunti sulle Corporazioni romane, Milán 1937, p.p. 30-31.
- (59) Handbuch der römischen Altherthumer, I, p. 221.
- (60) Röm Geschichte, VI edición, I, p. 192.
- (61) Zum römischen Vereinsrecht, Berlin 1873, p. 24.
- (62) Civilistische Abhandlungen in Juristische Personen, II, 7.
- (63) Contributi alla Storia delle Corporazioni a Roma, I, Bari, p. 208.
- (64) Cfr. De Robertis en Annales Bari, 1938, p. 27 y ss.
- (65) Le Corporazioni nell'evo antico e nell'alto medio evo, Bari 1934, p. 3.
- (66) Post, Grundriss der ethnologische Jurisprudenz, Leipzig, 1894, I, p. 444 y ss.
- (67) L'affratellamento, Turín 1886, p.p. 3 y 22.

- (68) Atti del Primo Convegno di study corporativi, I, Roma (Diritto del Lavoro, 1930, p. 66).
- (69) Tito Livio, II, 27; Varron De re rustica II, 11; Festo 446, 30 y Plinio, N.H., XXXV, 17 y XVIII, 28.
- (70) M. Pallottino, La civilisation etrusque, Paris 1949, p. 157.

CAPITULO III

Las asociaciones profesionales y el ejército serviano

LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES Y EL EJERCITO SERVIANO

Al rey Servio Tulio atribuye la tradición una reorganización del servicio militar de gran trascendencia política y conectada con el establecimiento del Censo.

Sin entrar en la crítica del relato tradicional y considerando éste en la medida que pueda tener alguna significación para el estudio de los primitivos colegios de artesanos, puede trazarse a grandes rasgos el esquema de aquella organización militar.

En primer lugar hay que subrayar la distinción entre locupletes y proletarii.

Los locupletes o adsidui (1) servían en el ejército a su costa. La proletarii solamente eran llamados a las armas en casos de extrema necesidad y se les equipaba a cargo del Estado.

Los adsidui eran los hombres pudientes, que tenían por lo menos once mil ases, mientras que de los proletarii no se sabe exactamente si eran los que no tenían ningún dinero o poseían al menos mil quinientos ases (2) los locupletes se dividían en dos categorías, según su edad y su aptitud para el servicio de las armas: los juniores que eran los hombres de diecisiete a cuarenta y seis años cumplidos y los seniores de cuarenta y siete a sesenta años.

Los primeros constituían las tropas de primera línea y los segundos una especie de guardia cívica o de defensa territorial

y sólo eran llamados en caso necesario.

Existían cinco grandes unidades de soldados de infantería, formadas por los locupletes, cada una con un número desigual de centurias. La primera clase estaba integrada por ochenta centurias; veinte formaban la segunda; la tercera y la cuarta clase tenían, cada una, veinte centurias y treinta la quinta.

Aparte de las cinco clases mencionadas había dieciocho centurias de caballería.

Existían también centurias de servicios especiales, en número de cinco: Dos centurias de fabri, una de cornicines, otra de tubicines y una más de accensi velati.

Los fabri eran de dos especialidades: Carpinteros y trabajadores del metal.

Los músicos militares eran los cornicines, que tocaban cuernos y los tubicines o trompeteros. La lectura de tibicines por tubicines, es decir, la inclusión de los flautistas, además de no ser fundada, crea la dificultad de encajar a estos músicos en una organización militar, ya que la flauta era un instrumento más propio de las ceremonias del culto.

Tito Livio (3) refiere que en el consulado de C. Junio Bulco y Q. Emilio Barbala, ocurrió un hecho digno de ser mencionado porque afectaba a la religión.

Disgustados los flautistas porque los últimos censores les

habían prohibido los banquetes sagrados del Templo de Júpiter a los que se les había admitido desde tiempo inmemorial, se retiraron a Tibur, de modo que no quedó ninguno para tocar durante los sacrificios: Este incidente afectó a la sensibilidad religiosa de los senadores, que enviaron delegados a Tibur para intentar conseguir que los flautistas fuesen devueltos a Roma.

Ante estos requerimientos, los tiburtinos prometieron hacer cuánto de ellos dependiese y en consecuencia llamaron a los flautistas para que compareciesen ante el Senado de Tibur y les exhortaron a que regresasen a Roma. Pero viendo que no podían conseguir nada de ellos en éste sentido, acudieron a una estratagema. Un día de fiesta, con el pretexto de proporcionar mayor esplendor a los banquetes, fueron invitados separadamente por los tiburtinos y una vez que los flautistas se embriagaron (4) les colocaron en carros y les trasladaron a Roma.

Nada notaron los flautistas hasta que, a la mañana siguiente les sorprendió la luz del día y despertándose, todavía aturdidos por el vino, se encontraron en los carros y abandonados en el foro.

Acudió el pueblo en tropel y se consiguió que se quedasen en Roma, permitiéndoles que cada año y durante tres días, pudiesen pasear por la ciudad en magnífico cortejo, en medio de cantos y de gran algazara, a la vez que se les reconocía el derecho de tomar parte en los banquetes de Júpiter, cuándo tocasen durante los sacrificios.

De este pintoresco relato cabe destacar, sobre todo, dos cosas.

La primera es la gran importancia que tenían los flautistas en las ceremonias del culto, hacia el año 309 a. de C., que es el año en que parece que tuvo lugar el episodio. Los romanos no dudan en rogar a los de Tibur que les devuelvan a los músicos y a éstos les hacen generosas concesiones. Todo ello, dirá Tito Livio "ocurría entre los preparativos de dos grandes guerras" es un modo bien directo de resaltar la importancia que Roma concedió a la actitud de los flautistas.

La segunda cosa que merece ponerse de relieve es la solidaridad que existía entre los flautistas, ya que si no se hubiera tratado de una decisión unánime no hubiera tenido eficacia la presión que se quería ejercer sobre las autoridades romanas y esto únicamente puede explicarse admitiendo la existencia de una adecuada organización profesional y, entre los colegiados, la existencia de un fuerte espíritu corporativo (5).

Acerca de los servicios de los accensi velati existen muchas dudas. Según algunos autores eran unidades de reserva (6). Sin embargo, se sabe que durante el imperio había una centuria accensorum velatorum, que se ocupaba de la construcción de carreteras en Italia, con cargo al Erario Público, por lo que puede pensarse que la misión de los antiguos accensi velati había sido la de cuidar las carreteras que debían ser utilizadas en las operaciones militares.

Esta hipótesis ofrece la ventaja de cubrir una importante actividad laboral relacionada con la guerra, que no cubrían las restantes centurias de artesanos.

Se ha polemizado bastante acerca de si éstas centurias tenían algo que ver con los colegios atribuidos a Numa; si se trataba de esos colegios militarizados, si era personal extraído de esos colegios o totalmente ajeno a ellos (7).

También se ha dudado si todos los colegios de artesanos fueron incluidos en el ejército serviano o si solamente figuraban en él los indicados.

En el relato de lo sucedido durante la guerra contra los galos siendo cónsul L. Emilio Mamercino puede encontrarse la clave para resolver tal duda.

Se dice (8) que a Mamercino, a quién le correspondió la guerra le incumbió la tarea de reclutar un ejército sin conceder exención alguna, por lo que "fueron alistados los artesanos" (9) gente muy poco a propósito para el servicio de las armas".

Resulta pues, que no todos los artesanos figuraban en la organización normal del ejército, sino solamente los que tenían determinadas profesiones que eran útiles para la guerra. Otra prueba más que conduce a rechazar la calificación de los accensi velati como meros acompañantes o porteadores.

También parece probable que no se identificasen las centurias de artesanos con los colegios del mismo tipo; en las centurias no armadas figurarían sólo parte de los artesanos colegiados

y correspondientes al mismo sector laboral. Aparte de la edad otros criterios de capacidad física darían lugar a la selección.

Ante todo, hay que tener en cuenta un pasaje de Plutarco (10) en el cuál se dice que Mario se dedicó a reclutar soldados de entre una multitud indigente y esclava, con desprecio de las leyes y costumbres, pues los generales antiguos no daban entrada a estas personas en el ejército, sino que considerando como un honor el ejercicio de las armas, sólo las ponían en manos beneméritas, teniendo como fianza la hacienda de cada uno.

Si ésto era así, si la defensa de Roma sólo se confiaba a los que tenían bienes, a los que tenían algo que perder ¿cómo se explica y como se justifica la presencia en los cuadros de la organización militar de las centurias de obreros?

La única contestación posible es la de que la costumbre de reclutar sólo personas adineradas, a que se refiere Plutarco, se aplicaría únicamente a las unidades combatientes pero ésta solución lleva aparejada una importante consecuencia y es la de que no pudo ser la misión de los accensi velati cubrir bajas, pues en éste caso se habrían convertido inmediatamente en unidades combatientes.

Otra cuestión es la de determinar las clases a que estaban agregadas las centurias de artesanos.

Cicerón (11) dice que los fabri tignarii estaban agregados a la primera clase; Tito Livio (12) asigna, en cambio, a la pri-

mera clase las dos centurias de fabrii, diciendo expresamente:
"a esta primera clase añadió dos centurias de obreros, que servirían sin llevar armas y cuyo trabajo consistía en preparar las máquinas de guerra (13).

Es evidente que para llevar a cabo tales trabajos no bastaría sólo con los fabrii tignarii, sino que se requeriría también la especialidad de los fabrii aerarii. Dionisio de Halicarnaso atribuye las dos centurias de fabrii a la segunda clase (14).

Tito Livio dice que los músicos fueron asignados a la quinta clase junto con los accensi y Dionisio de Halicarnaso sostiene que fueron incorporados a la cuarta, puntualizando que las centurias de fabrii y de músicos se distribuyeron también por centurias de juniores y seniores.

La misión de los fabrii aparece bien definida en Tito Livio (15) excluyendo totalmente que manejaran las máquinas de guerra.

Las diferencias en la incorporación a las grandes unidades militares de las centurias no armadas, pueden explicarse porque no siempre estuvieron agregadas a las mismas clases.

Esta hipótesis podía también servir de base para aclarar otro enigma relativo a la organización centuriada.

Se ha dudado si las centurias de artesanos tenían o no derecho de voto en los comicios centuriados.

En favor de que ^{¿agraban?}de este ~~der~~cho, están las palabras Te
de Tito Livio, según el cuál no se excluía a nadie del voto "ut

neque exclusus quisquam suffragio videretur".

Ahora bien, si resulta difícil concebir que en una organización basada en la riqueza personal esto fuese así, la dificultad se transforma en imposibilidad aceptando que pudiese variar la adscripción de las centurias de artesanos a las distintas clases.

El sistema de los sufragios se basaba en una determinada proporción de centurias repartidas por las diferentes clases y al variar la asignación de las centurias no armadas a las clases armadas, ésta proporción se alteraría y se desvirtuarían los fines políticos previstos (16).

Sin embargo, si los artesanos no tenían derecho de sufragio, es posible que fueran atendidos económicamente por el Estado.

Es verdad, a primera vista, esto puede parecer incompatible con la primera organización administrativa y financiera de Roma, pero Tito Livio, en el lugar tantas veces citado, se refiere a la subvención de diez mil ases a cargo del Tesoro Público para la compra de caballos, cuya alimentación quedaba asegurada por un impuesto de dos mil ases que pagaban las viudas "con lo cual todas las cargas gravitaban sobre los ricos quedando aliviados los pobres".

El mismo Tito Livio, en otro pasaje (17) dice que el Senado adelantándose a toda petición del pueblo o de los tribunos, decretó que los soldados recibieran su paga del tesoro público

y aunque al final del párrafo el historiador latino dice: "Hasta entonces cada cuál había hecho la guerra a su costa, ésto puede interpretarse literalmente en el sentido de que hacían la guerra a su costa los que efectivamente tomaban parte en las batallas, ésto es, las centurias armadas (18).

La espontánea decisión del Senado pudo muy bien apoyarse en algún precedente.

En toda la problemática de la antigüedad de la organización centuriada, siempre está presente una dificultad: La inexistencia del aes signatum en las primeras épocas, pero cabe suponer, como hace Arangio Ruiz que solamente figurarían en las clases, los propietarios de inmuebles que eran los que precisamente recibían el nombre de adsidui (19) y los criterios de valoración en dinero serían introducidos, por vez primera, cuándo hicieron su aparición otros criterios basados en el capital mobiliario.

Igualmente las ayudas a los artesanos pobres pudieron consistir en aportaciones en especie.

N O T A S

- (1) XII Tablas, I, 4.
- (2) G. de Sanctis, *Storia dei romani*, II, p. 186 n. 23.
- (3) IX, 30.
- (4) Cfr., Ch., Seltman, *Wine in the ancient World*, Londres, 1957, p. 158 y ss.
- (5) Abundan las referencias al uso de la flauta en las ceremonias religiosas. Un curioso texto de Plinio el Antiguo (N.H., XXVII, 11) cuenta que mientras se recitaban fórmulas propiciatorias, un músico tocaba la flauta para que no pudiera percibir palabra alguna extraña a las fórmulas que se recitaban.
- (6) Varrón, De L.L., VII, 58. Cfr. Marquardt, *De l'organisation militaire chez les romains*, París 1891, p. 15 y ss (trad. frac.).
- (7) Mommsen, (*De Collegiis et sodaliciis romarum*, Kiel 1843 p. 30) rechazaba la idea de que todos los collegiati formasen parte de la respectiva centuria.
- (8) Tito Livio, VIII, 20.
- (9) La alusión que hace Tito Livio a los sellularii, artesanos que trabajaban sentados, no es relevante a la finalidad que se pretende con la cita del texto titoliviano.
- (10) Vidas paralelas: Mario, IX.
- (11) Re pública, II, 22, 39.
- (12) I, 43.
- (13) No era misión de los fabri disparar las máquinas de guerra, pero si parece que estaban obligados a facilitar su transporte. Así suele interpretarse la expresión de Tito Livio datum munus ut machinas in bello ferrent.
- (14) IV, 17.
- (15) Loc. cit.
- (16) Huschke, (*Verfassung des Servius Tullius*, Heidelberg 1838, p. 151) intentó explicar el sufragio de los artesanos imaginando que a éstos se les aplicaba un censo con cantidades menos elevadas y, por supuesto, inferiores a las exigidas para la quinta clase. Pero, aparte de que siempre quedaría el problema de los carentes de bienes de fortuna, es una hipótesis que no se apoya en ningún dato histórico ni legendario.
- (17) IV, 59 (in fine).

- (18) Cfr. sobre la antigüedad del estipendio militar, De Sanctis, *Storia dei romani*, II, p.p. 189-190. Este autor ve en la asignación de tie
rras quitadas a los vencidos, un medio de indemnizar a los más débi
les económicamente de los gastos y perjuicios ocasionados por la gue
rra.
- (19) V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Nápoles 1937, p. 34.

CAPITULO IV

Epoca de la República: Generalidades

EPOCA DE LA REPUBLICA: GENERALIDADES

A lo largo de la época republicana se va precisando mejor la organización de las asociaciones profesionales y, al mismo tiempo, se producen medidas legislativas tendentes a controlar o suprimir actividades de las asociaciones perturbadoras de la paz pública y del orden establecido.

Medidas que se producen, sobre todo, a fines de éste período y a causa de las tensiones que la crisis política y social de aquél tiempo creó.

Sin embargo, no puede afirmarse, sin alguna reserva que las medidas restrictivas apareciesen por vez primera en la República.

Existe un texto de Dionisio de Halicarnaso (1) según el cual el rey Tarquino el Sobervio prohibió a los habitantes de las curias, pagi y vici, celebrar reuniones con ocasión de ceremonias religiosas o sacrificios comunes.

Este texto se ha utilizado para tratar de probar que la vigilancia sobre las asociaciones profesionales existió desde épocas muy antiguas y, por supuesto, desde antes de la república, aunque las condiciones demográficas y territoriales de la Roma arcaica hicieran que ésta vigilancia no alcanzase las proporciones que más tarde hubo de tener.

Pero en contra de esta tesis existe una corriente de opinión representada especialmente por V. Bandini (2) según el cual la mencionada medida de Tarquino el Sobervio no puede ponerse en

relación con las asociaciones profesionales porque éstas no existían y la prueba de que no existían se encuentra en el hecho de que no son mencionadas por Dionisio de Halicarnaso, que sólo habla de curias, pagi y vici.

No es que no existiesen los colegios profesionales, sino que éstos, integrados en su mayoría o quizás en su totalidad por etruscos, no constituían realmente un peligro para un monarca de esa dinastía y por ello no fue preciso adoptar especiales medidas contra las asociaciones.

De todos modos la prohibición del rey etrusco fue arrebatada por el vendaval político que siguió a la caída de los reyes y no fue casualidad que ese vendaval fuese designo latino y que ese vendaval estuviese alimentado por el odio a la dinastía etrusca.

Suponer, como hizo Martin Saint-León (3) que los primitivos colegios profesionales se mezclaron en las luchas civiles de los primeros siglos con Menenio Agripa, más tarde con los Gracos y, posteriormente con Mario, combatiendo a la poderosa oligarquía del patriciado, es una suposición excesiva, ya que es atribuir a las asociaciones profesionales una actitud de carácter combativo en el plano social, que, en modo alguno, puede confundirse con las luchas políticas generalizadas, propias del tiempo de la crisis republicana.

A mediados de la República se produce un gran cambio en las circunstancias sociales y económicas del mundo romano, ~~can~~

~~bio en las circunstancias sociales y económica del mundo roma~~
no, cambio precursor de la honda crisis política que había de tener lugar a fines de la República.

Este cambio se revela, tanto por el aumento del número de esclavos y libertos, como por la ruina de los pequeños agricultores, el incremento de la población urbana y el auge de las relaciones comerciales.

Hacia poco tiempo que se había introducido el aes signatum y un hecho de tan gran relieve en la vida económica debía influir necesariamente en el desarrollo de las actividades profesionales (4).

Pero los momentos históricos más importantes de la evolución histórica de la política seguida respecto a las asociaciones son las siguientes: La aparición de la Ley de las XII Tablas; 10 las medidas adaptadas por el cónsul Postumio en el año 186 a. de C., con ocasión de los excesos cometidos en el culto a Baco y las disposiciones adoptadas respecto de las asociaciones en el último siglo de la República.

Las fuentes de conocimiento que ilustran sobre las asociaciones profesionales en este período son, sobre todo, textos extrajurídicos y fuentes epigráficas, aunque no falte algún texto jurídico de excepcional interés.

N O T A S

- (1) IV, 43, 2.
- (2) Appunti sulle Corporazioni romane, Milán 1937, p. 33 y ss.
- (3) Historia de las Corporaciones de oficio, Buenos Aires 1947, p. 35.
- (4) Mattingly, The First Age of Roman coinage (Journal of Rom. Stud., XIX, 1929, p. 19).

CAPITULO V

Las asociaciones en la Ley de las XII Tablas

LAS ASOCIACIONES EN LA LEY DE LAS XII TABLAS

En el Digesto (1) se conserva el texto de Gayo, que sirve de punto de partida para el estudio histórico del régimen jurídico aplicado en Roma a las asociaciones.

Es un texto del que se han intentado múltiples reconstrucciones (2).

En el libro IV del comentario de Gayo a la Ley de las XII Tablas (3), según el pasaje del Digesto ya citado se lee: "son sodales los que pertenecen al mismo colegio, que los griegos llaman hetairia. La ley les permite establecer los pactos que quieran, con tal de no infringir la ley pública. Esta disposición parece copiada de la ley de Solón que dice: Si no se oponen las leyes públicas, sea válido lo que pacten entre sí, para sus fines, los de un pueblo o fratria; los socios para un culto; los que se unen para celebrar banquetes, para sepultar sus muertos, para fines de culto y los que emprenden una captura o negociación (4)".

Lo primero que se advierte en el texto es el amplio sentido que tiene la palabra sodales, puesta en relación con la enumeración de distintos tipos de asociaciones que figuran al final del pasaje, como contenidos en la ley de Solón.

Sartori (5) ha sostenido la identificación collegium = eteria en Gayo como un fundamento importante en su teoría contra la calificación de eteria como sociedad antidemocrática.

Aunque el texto griego de la ley de Solón, que Gayo reproduce, se considera alterado, parece cierta la preocupación de Solón por la actividad laboral.

En Plutarco (6) se dice que, atento Solón a la realidad de las cosas, como observase que las tierras apenas bastaban para proveer de lo necesario a sus cultivadores, se preocupó de las artes y encargó al Aerópago que velase sobre el modo con que cada uno ganaba su vida y castigase a los holgazanes.

Importante es el sentido de pacere y pactio en las XII Tablas y que aparece en el fragmento que Gayo comenta.

Manenti sostuvo la tesis de que el término pactum no tiene el mismo significado que conventio. Para éste autor la palabra conventio tiene el sentido general de acuerdo entre las partes, pero el término pactum tiene un sentido más restringido y particular.

Según esto habría pactum cuándo una parte renuncia total o parcialmente a un derecho que le corresponde en favor de la otra (7).

Ferrini se opuso a ésta doctrina y uno de los puntos de apoyo para su argumentación era el texto de Gayo relativo a las asociaciones, ya que en éste texto no cabe atribuir a pactio otro significado que el de acuerdo entre los asociados (8).

Más recientemente Magdelain (9) entiende que ya en las XII Tablas se hacía un uso frecuente de pacere en el sentido de acuerdo sin forma.

Para éste autor el precepto decenviral no ha de interpretarse como la instauración de una transcendental reforma en el régimen de las asociaciones, sino simplemente como el reconocimiento de la validez jurídica de un acto que hasta entonces no la tenía, aunque fuese practicado usualmente. Se trataba de dejar claro que el estatuto de un colegio, fuese de anterior creación o estuviese a punto de crearse podía fundarse sobre una simple pactio. Sin que pueda asegurarse que el fruto de ésta pactio recibiese el nombre de lex.

Es evidente que el estatuto o ley a que se refiere Gayo, no podía tener más alcance que el de una ley privada relativa a colegios privados, ya que si se hubiese tratado de colegios públicos, habría afectado a terceros y no se hubiera podido concebir que los redactores de las XII Tablas concediesen una posibilidad tan amplia y una manera de legislar tan simple (10).

Pero el principal problema que surge en torno al texto procedente del comentario de Gayo a las XII Tablas, es el de si puede invocarse dicho texto como testimonio de una concesión de libertad para constituir asociaciones o si, por el contrario, supone el establecimiento de un control estatal que vendría a romper con un régimen anterior en el que regían criterios de libertad.

Ante todo hay que tener en cuenta la gran diferencia que existe entre el texto de las XII Tablas, citado por Gayo, y dos leyes citadas por Porcio Latron (11): Una que corresponde al Código Decenviral y que no hace otra cosa más que prohibir las reuniones nocturnas y otra conocida con el nombre de Lex Gabi-

nia que castigaba con pena capital las reuniones clandestinas.

Esta última ley parece ser un plebiscito propuesto por el tribuno Quinto Gabinio y probablemente muy posterior a la época de las XII Tablas (12).

Estas leyes, de las que no poseemos suficiente información, no serían otra cosa que medidas concretas contra los coetus nocturni.

Tito Livio alude a reuniones nocturnas que se celebraban en tiempo de los cónsules A. Virginio y T. Veturio y tenían lugar en las Esquilias y en el Aventino. Reuniones que se consideraban consecuencia de una falta de autoridad en Roma. Por ello, se ponen en boca de los senadores frases como éstas: "Seguramente no se celebrarían esas reuniones que dividen y destrozan la República, si Roma tuviese magistrados" (13) y en otro pasaje y en relación con la situación creada por la afrentosa persecución de que era objeto Virginia, se dice que el decenviro Apio estaba convencido de la existencia de conciliabulos secretos, celebrados durante la noche en la ciudad, para provocar una sublevación.

El texto citado por Gayo, que se comenta en este capítulo, ha sido objeto de muy diversas interpretaciones.

Se ha dicho que se trataba de un expreso reconocimiento de la libertad de asociación frente a un estado de cosas anterior en el que habría sido necesaria la autorización por parte de los poderes públicos (14).

A esta suposición se oponen varias razones.

En primer lugar, del tenor literal del precepto transmitido por Gayo, no se desprende que se instaure una libertad de asociación hasta entonces inexistente.

La expresión "potestatem facit les pactionem quam velint sibi ferre" carece de todo énfasis revelador de un cambio político-jurídico de tal importancia. Más bien parece referirse a una posibilidad de regular sus relaciones internas los miembros de una sociedad ya constituida, que a la posibilidad de crear nuevas asociaciones.

Además, no se tiene noticia de ninguna costumbre o disposición legal de la Roma arcaica que restringiese la creación de asociaciones.

Es cierto que este último argumento puede considerarse un tanto vulnerable debido a la defectuosa información que se tiene del derecho anterior a las XII Tablas. Por ello ha sido preciso recurrir a otro tipo de argumentación y es la que se basa en que el escaso desarrollo del derecho público romano, de los primeros tiempos, hace difícil pensar en un régimen de autorizaciones para los colegios privados, similar de algún modo al que empezó a desarrollarse a comienzos del Principado.

Mommsen (15) ha destacado que el solo hecho de que el Senado, para prohibir las reuniones de los fieles de Baco, haya tenido que recurrir a un senadoconsulto, constituye una prueba evidente de la inexistencia de una ley anterior prohibitiva. Si

tal ley hubiera existido, no habría faltado la oportuna invocación a ella. Dado el sentido conservador de los romanos y su espíritu tradicional, hubiera sido más fácil y más popular, acudir a la Ley antigua que no publicar un senadoconsulto de carácter restrictivo.

Cohn (16) fue el primero en atacar la teoría de Mommsen fundándose en un texto de Tito Livio (17).

En este texto, el cónsul Postumio se dirige al pueblo y le dice que, según habían establecido los antepasados, no podían celebrarse reuniones ni podía existir una asamblea legal sin que la bandera ondease sobre el Janículo y sin que presidiese un magistrado. El cónsul explica estas exigencias por el temor de unas reuniones en las que la multitud carezca de rectores y quede incontrolada.

Ahora bien, en la misma argumentación de Cohn hay un punto débil y que, incluso, puede ser utilizado para contradecir su tesis.

Si el cónsul tuvo necesidad de buscar analogías y comparar multitudes con asociaciones, es sencillamente porque no existía una ley ni disposición alguna que exigiese autorización previa para la constitución de los colegios (18).

Mommsen, aún negando la existencia de una ley de carácter prohibitivo anterior a las medidas adoptadas contra las reuniones baquicas, admite que durante la república podrán adoptarse

por el Senado medidas administrativas de carácter extraordinario (19).

Gierke sostuvo que el precepto de las XII Tablas era perfectamente conciliable con un sistema de control de las asociaciones (20).

Coli figura entre aquellos autores que desplazan la polémica acerca de si el precepto decenviral era un avance o un retroceso en orden a la libertad asociativa, a un plano diferente. Para este autor los antiguos consideraban el asociarse sólomente como un hecho, la regulación jurídica vendría después para disciplinar las actividades de los asociados e incluso, si era preciso, para reprimirlas (21).

Sin prolongar excesivamente la enumeración de los diferentes puntos de vista que se han adoptado sobre el precepto decenviral citado por Gayo (22) parece conveniente tratar de buscar el verdadero sentido del texto a que se está haciendo referencia.

En este texto se habla de "sodales" y de "collegium".

Las alternativas del texto parecen indudables, como indudable es que el género femenino del pronombre "quam" no puede referirse a "collegium" que es neutro. Sin embargo, esta observación no debe llevar forzosamente a suponer que "collegium" fue introducido por los compiladores justinianeos, sino que puede muy bien pensarse en la supresión de un término femenino que justificase la utilización del pronombre "quam".

Lo cierto es, partiendo naturalmente de este último supuesto, que Gayo sitúa collegium en un contexto más amplio.

Lo que se corrobora con el final del pasaje alusivo a la ley de Solón, que trata de varias clases de asociaciones.

Partiendo de esta consideración, podría suponerse | el pre | que
cepto de las XII Tablas lo que pretende no es conceder una libertad de asociación hasta entonces inexistente, ni tampoco suprimir la que ya existía, sino impedir que ciertas medidas administrativas obstaculicen la adopción por parte de los asociados, de los acuerdos de régimen interno que estimen convenientes.

Con esta interpretación encaja perfectamente el significado de "pacto". Igualmente resulta lógico que no se hable de la posibilidad o no de celebrar reuniones (coetus). Si se presume la existencia de asociaciones y de reuniones que los asociados celebraban, resulta perfectamente lógico que las XII Tablas sólo se ocupen del fruto de esas reuniones: Pactiones.

Presumiendo la existencia de asociaciones y reuniones surge una dificultad: la de que lo lógico sería que las XII Tablas estableciesen limitaciones en vez de destacar que los asociados pueden celebrar los acuerdos que quieran, pero se trata solamente de una aparente dificultad que se explica considerando el precepto de las XII Tablas como una reacción contra ciertas presiones o coacciones de que habrían sido objeto anteriormente los collegiados por parte de ciertos magistrados.

En este punto la ley reflejaría un cierto equilibrio en la

tensión patricio-plebeya.

Por un lado se ampara a los artesanos (etruscos) corrigiendo posibles abusos que contra ellos se venían cometiendo y por otro se establece la natural limitación de que no pueden atentar con sus acuerdos contra el orden (patricio) establecido.

Esto viene a recordar otros textos de las XII Tablas en que aparece también reflejado un equilibrio similar.

En el comienzo mismo de las XII Tablas (23) se dice que si el llamado a juicio está enfermo, tiene muchos años o padece algún defecto corporal se le debe facilitar una caballería, pero, al mismo tiempo, se advierte que si rechaza la caballería no se le facilitará un carruaje cubierto (24).

En este texto se comienza otorgando una facilidad al demandado, pero a renglón seguido se trata de cortar posibles abusos.

Para Guarino (25) no es probable que las XII Tablas contuviesen normas constitucionales y normas en materias sagradas (26). Este romanista cree que el verdadero contenido de las XII Tablas estuvo constituido por normas declarativas y, sólo subordinadamente, integradoras del viejo Jus civile. Este punto de vista encuentra una aplicación y confirmación en la interpretación dada del precepto sobre la posibilidad de establecer los pactos que juzguen convenientes los asociados.

Enfocar éste precepto como concesión de libertad de asociación, sería darle un alcance de norma simplemente declarativa, aunque en último término venga a integrar el viejo ordenamiento civil.

Otro aspecto del precepto decenviral, que merece atenta consideración, es el empleo del verbo corrumpere, en la frase "dum ne quid ex publica lege corrumpant".

Partiendo de la exclusión de aquellas acepciones de "corrumpere" que están muy lejos de todo posible significado en el texto de que se trata (27), hay que tener en cuenta que existe una acepción que es la de no perjudicar el derecho ajeno. Acepción que se utiliza en la frase corrumpere ius (28).

Ciertamente que en el texto de Gayo no se habla de corrumpere ius, pero si de perjudicar algo que está amparado por la ley publica, es decir, por el viejo Derecho quiritario.

Enfocada así la redacción del texto, puede parecer algo forzada, pero no hay que olvidar que todo el razonamiento de Gayo está montado sobre la comparación con la ley de Solón y ello pudo dar lugar a que se concediese a "lex publica" una importancia que no era propia de la Roma arcaica.

N O T A S

- (1) D., 47, 22, 4.
- (2) De Robertis, Il Diritto associativo romano, Bari 1938 p. 41 y ss. y p. 42 n.5.
- (3) Cfr. Zocco - Rosa, Il commento di Gaio alle XII Tavole en Rivista italiana di scienze giuridiche, 1888, V, p. 210.
- (4) Edición del Digesto de Mommsen, Berlin 1928. Sobre el influjo griego en las XII Tablas cfr. E. Volterra, Diritto romano e Diritti orientali, Bolonia 1937, p. 175.
- (5) Iura, 1958, p. 100.
- (6) Vidas paralelas: Solón XXII.
- (7) Contributo critico alla teoria generale dei pacta, Siena 1891.
- (8) Opere, III, Milán 1929, p. 246.
- (9) La loi a Rome, Paris 1978, pp. 46-47.
- (10) Sobre la actitud Justiniana respecto a las citas de las XII Tablas, Cfr. Berger en Studi Riccobono, I, p. 639.
- (11) In Catilinam, XIX.
- (12) G. Rottondi, Leges publicae populi romani, 1962. Desde luego Porcio Laetrón observa que la ley Gabinia es posterior a las XII Tablas, pero no indica el tiempo que las separa.
- (13) II, 28 y III, 48. Cfr. Cic., De leg. agr., II, 5, 12.
- (14) Pernice, Labeo, Halle 1873, I, p. 290.
- (15) De collegiis et sodaliciis romanorum, Kiel 1843, p. 36 y ss.
- (16) Zum römischen Vereinsrecht, Berlin 1873, p. 35.
- (17) XXXIX, 15.
- (18) Cfr. Waltzing, Etude historique sur les Corporations Professionnelles, Roma 1968, I, p. 80.
- (19) Droit public romain, Paris 1891 (trad. frac) VII, p. 402.
- (20) Das deutsche Genossenschaftsrecht, III, Berlin 1881, p. 84.
- (21) Scritti, I, p. 44.
- (22) Diritto associativo romano, Bari 1938, p. 44, ns. 10, 11, 12 y 13.

- (23) I, 3.
- (24) "Si nolet arceram me sternito".
- (25) Storia del Diritto romano, Nápoles 1969, p. 135.
- (26) Al error de considerar incluidas en las XII Tablas normas de este tipo condujo una palingenesia moderna desacertada.
- (27) Corruptum servum, corruptum tabulas, etc.
- (28) D., 9, 4, 30.

CAPITULO VI

Collegia compitalicia y collegia opificum

COLLEGIA COMPITALICIA Y COLLEGIA OPIFICUM

Compitum se llamaba al cruce de vías urbanas o rústicas y también a las capillas o altares cubiertos en los que los habitantes de la vecindad rendían culto a los Lares protectores del lugar (1).

Las fiestas se celebraban en la época invernal, una vez terminadas las faenas del campo y quienes participaban en ellas eran normalmente personas humildes y de clase plebeya. Culto que parece ser de origen antiquísimo.

Para Mommsen estas ceremonias religiosas dieron lugar a la creación de asociaciones llamadas collegia compitalicia (2).

Entendía dicho historiador que cada compitum estaba dividido en vici; cada vicus tenía sus magistrados y cada compitum tenía otros magistrados propios.

Esto supone, en primer lugar, ceder una extensión no suficientemente fundada al concepto de compitum que en las fuentes antiguas (3), no aparece como una agrupación de vici.

En segundo lugar, si se acepta el significado de compitum como unión religiosa de los habitantes de un barrio, será sinónimo de vicus, pero nunca un conjunto de vici (4).

En tercer lugar, desde el punto de vista religioso y administrativo Roma estaba dividida, sobre todo en tiempos de la República en distritos urbanos (montes) y distritos rústicos (pagi).

Lo que no coincide exactamente con la tesis de Mommsen.

En cuarto lugar Quinto Cicerón (5) distingue nítidamente entre Collegia, Montes, Pagi y Vicinitates; por lo que, en modo alguno, pueden confundirse las asociaciones religiosas con los colegios propiamente dichos.

Hay un texto de capital importancia para esclarecer la cuestión de la identificación o no de los supuestos collegia compitalicia y los vici, que según Marquardt eran una misma cosa (6). Este texto pertenece a Asconio (7).

En el texto de Asconio se lee: "Solebant magistri collegiorum ludos facere sicut magistri vicorum faciebant, compitalicios praetextati".

¿A qué magistri collegiorum se refiere Asconio?

No parece muy convincente la afirmación de algunos autores de que los magistri vicorum fuesen los mismos que los magistri collegiorum compitaliciorum y desde luego no puede utilizarse el texto de Asconio para sostener que existieron unos collegia compitalicia.

Resulta difícil suponer que los magistri collegiorum y los magistri vicorum fuesen una misma cosa, puesto que Asconio los enuncia separadamente y si son dos cosas distintas, no se explica la existencia del compitum como una agrupación de vici.

Pudiera intentarse superar la dificultad, diciéndo que los

lares a las nuestras, que constan, por lo general, de una sola calle rodeada de casas" (11).

También se apoya Gaudenzi en el hecho de haberse observado que en las inscripciones sepulcrales son artesanos aquellos de los cuales se dice que son de vico o a vico.

Finalmente puede señalarse otro argumento de Gaudenzi: "Aquellos que celebraban los juegos compitalicios eran hombres de modesta condición, según revela un texto de Tito Livio (12) pero no esclavos, por lo que cabe preguntarse ¿de quienes se trataría sino de artesanos?

Al hacer ésta pregunta parece que se prescinde de la existencia de hombres de humilde condición, que trabajaban en los campos y no estaban incorporados a los primitivos colegios profesionales, de que se tiene noticia, según ya hubo ocasión de afirmar al hablar de la hipótesis del noveno colegio.

El propio Gaudenzi advierte una dificultad: Si Servio Tulio reconoció la existencia de colegios de artesanos, en cuanto que les atribuyó la celebración de los juegos compitalicios, cabe preguntar ¿dónde habitaban los patricios dividida la ciudad por colegios, sino habitaban en los vici?

Gaudenzi entiende que esta dificultad puede ser resuelta estableciendo que la división territorial con juegos compitalicios, parece tener relación con la división de los ciudadanos en montani y pagani y que los montani debían ser casi exclusivamente patricios y los pagani especialmente plebeyos.

magistri collegiorum a que se refiere Asconio son los magistri de los collegia opificum, pero ésto supone confirmar la inexistencia de los collegia compitalicia.

La cuestión de si en el texto de Asconio debe leerse faciunt o faciebant, queda resuelta por el hecho de que Tito Livio corrobora la lectura faciebant (8).

Queda por determinar la significación de "sicut".

Cohn (9) propuso que se interpretase el texto de Asconio en el siguiente sentido: "Los magistri collegiorum solían celebrar las fiestas (sin decir qué fiestas) como los magistri vicorum celebraban las fiestas compitalicias". Sin embargo esta interpretación resulta en extremo aventurada, porque, como observó Waltzing (10) los juegos que celebraban los hasta este momento no identificados magistri collegiorum eran las fiestas compitalicias.

Gaudenzi pretendió identificar la división territorial de la ciudad efectuada por Servio Tulio, con la división de la población en colegios.

Para poder asentar sobre una base sólida esta suposición, el citado autor se ve obligado a proponer una especial significación de vicus, que en Varrón se define como una calle con edificios a ambos lados.

Gaudenzi escribió: "Se comprende, pues, como un vicus podía también servir para indicar las aldeas, que debían ser simi-

para a pag. anterior.

Aparte de que compitum no era sólo el cruce de caminos ^{rú}místicos, sino también el cruce de vías urbanas, como ya hubo ? ocasión de señalar, resulta muy difícil admitir el "confinamiento" de los patricios en los distritos urbanos y la gran preponderancia de los artesanos en los distritos rústicos, al menos en las primeras épocas. De nuevo se prescinde de la distinción entre artesanos y labriegos.

De todos modos, aún aceptando ese reparto de población, lo que podría concluirse es que los artesanos, sin excluir a los labriegos, por supuesto, tuviesen una gran participación en las fiestas del "compitum", pero ésto no es lo mismo que concluir admitiendo la existencia de unos collegia compitalicia como quería Mommsen o identificando magistri vicorum con magistri collegiorum.

Precisamente estas hipótesis chocan frontalmente con el texto de Quinto Cicerón de que se trató al principio del tema y en el que se distingue entre Collegia, Montes, Pagi y Vicinitates.

Partiendo de la teoría de Gaudenzi de que la reforma de Servio Tulio, en el orden laboral, consistió en distribuir por barrios a los colegios encargándose así los magistri collegiorum de los juegos compitalicios, se dedujo que el reclutamiento de los trabajadores de cada collegium se hacía por barrios (victim) y en reuniones organizadas por los tribunos de la plebe en el Foro, de un modo análogo a las reuniones celebradas por Claudio en el año 58 a. de C., lo que evidentemente no puede significar otra cosa que una anticipación.

Para Bandini, los collegia a que se refiere Asconio no pueden ser otros que los collegia opificum y, naturalmente, los magistri collegiorum que celebraban las fiestas compitalicias, como (sicut) los magistri vicorum, no podían ser, en consecuencia, otros que los magistri de los colegios profesionales (13).

La conclusión es lógica, según el pensamiento de Bandini. Los colegios profesionales son los encargados de los juegos compitalicios, porque sustituyen y suceden a los collègia vicorum, uniéndose así la conservación de los cultos del barrio a la conservación de las tradiciones artesanas.

Lo mismo que había ocurrido antes con las vicinitates, ocurrirá luego con los colegios de artesanos: el Estado se limitaba a reconocer una situación preexistente, no la creaba.

Además, indica Bandini, la evolución, sería gradual y lenta, ^{fn} lo que explicaría el texto de Asconio.

Sicut significaría así una sucesión: Los magistri collegiorum celebraban el culto compitalicio como "en otro tiempo" lo celebraban los magistri vicorum.

Esta teoría hay que reconocer que encaja perfectamente en las ideas de Bandini acerca de la inexistencia de verdaderos colegios profesionales en los primeros tiempos de Roma.

Para sostener su punto de vista, Bandini ^{fn} analiza el texto de Tito Livio (14) en que este historiador llama a los magistri vicorum: "Infimum genus hominum", pero no esclavos. ¿Quiénes eran estas personas? El romanista citado no vacila en afirmar

que serían, con toda probabilidad, libertos, jornaleros libres que se dedicaban a la agricultura en la época de mayor trabajo y mercaderes.

A ésta hipótesis hay que objetar que en ella se desconoce la existencia de trabajadores especializados que, sin duda alguna, habría en Roma desde la época de la dinastía etrusca y como consecuencia de los grandes trabajos públicos que ésta dinastía impulsó. También parece desconocerse la existencia de trabajadores del campo libres, salvo que se identifiquen con esos jornaleros y, de ser así, ya no se tratará de desconocer sólo la existencia de obreros especializados, sino de pretender que el trabajo del campo y los trabajos industriales se atendían por unas mismas personas en diversos períodos de tiempo.

Tampoco parece haber sido estimable la proporción de libertos y mercaderes en la Roma primitiva, grupos sociales con los que Bandini completa su enumeración (15).

Pero, de todos modos, siempre quedaría planteada la cuestión de en qué momento se verificó el paso de las asociaciones de los barrios a los colegios profesionales.

Se dice que hasta algunos años después de la caída de la monarquía etrusca, las circunstancias sociales y económicas de Roma no parecían propicias para fomentar la organización y materialización de los colegios profesionales.

Parece cierto que en los primeros siglos de la historia Ro-

mana, la vida era simple, frugal y sencilla, alejada de todo exceso consumista. Pero la constatación de ésta realidad no es suficiente para retrasar la aparición de los colegios de artesanos hasta el extremo de afirmar, como hace Bandini, que aparte de la significación que tuvieron los Collegia Mercatorum y Capitolinorum, como puente o elemento de transición entre las organizaciones religiosas y las laborales, "pocos colegios artesanos han surgido antes de la segunda mitad del siglo VII en Roma" (16).

En primer lugar, existe una firme tradición, que se refleja en Plutarco, Floro y Plinio, de un modo directo y, en otros autores, como Tito Livio de un modo indirecto.

No importa que se aprecien diferencias de detalles entre estos autores tales como alteraciones en el orden de lo que parece ser una jerarquización de los colegios o en sus específicas denominaciones, pues aparte de que éstas alteraciones y diferencias pueden haber tenido su origen en variantes de los relatos tradicionales o bien en cambios que se produjeron a lo largo de la evolución histórica, como consecuencia de la adaptación a las necesidades del momento de esquemas y sistemas anteriores, lo que no cabe duda es que nos conducen a situar el origen de los colegios de artesanos en épocas muy anteriores al siglo VII de Roma.

Además de esa identidad en lo sustancial que se comprueba en la tradición romana, hay que observar también que cuándo se habla de circunstancias sociales y económicas que arguyen un caso consumismo en la Roma primitiva, se olvida el consumismo derivado de las continuas guerras que Roma sostuvo en aquellas épocas.

Si escaso fue el consumismo en la paz, no podía serlo en las actividades bélicas, ya que las empresas militares lógicamente tenían que exigir una intensa actividad de obras y servicios, de transporte y reparación de máquinas, de apertura y conservación de caminos, de fortificación de defensas, de suministros y avituallamiento, etc.

Conclusión a la que se llega no sólo por natural razonamiento, sino también por las noticias que poseemos acerca de la participación de los artesanos en el ejército romano de aquél período.

Finalmente, al retrasar excesivamente la aparición de los colegios de artesanos, quizá no se valora justamente la presencia de población etrusca en la Roma arcaica; población existente desde un principio, potenciada con la implantación de la dinastía etrusca, uno de cuyos reyes se preocupa de traer artesanos a Roma, población que imprimió a las asociaciones profesionales la fuerte religiosidad que impregnaba su raza.

La relación de los colegios de artesanos con las actividades compitalicias, después de todo lo expuesto, puede enfocarse así:

En un principio, ciertos cruces de caminos se utilizaban como lugares de reunión de la multitud que vivía en los alrededores y que encontraba ocasión de celebrar allí fiestas que, a la vez que significaban el final de las duras tareas de los campesinos, de los meses del verano y del otoño, servían también para rendir culto a los Lares, protectores del lugar.

Junto a las ceremonias del culto, el bullicio y la algazara. La multitud no estaría organizada en los collegia compitalicia que imaginó Mommsen, llevado del prejuicio de una organización.

En esa multitud tendrían, eso sí, un papel destacado los artesanos ya organizados en colegios y la gente humilde como señalaba Asconio, en el pasaje repetidamente citado, pero sin identificar a quienes intervenían de modo preeminentes en aquellas fiestas con los magistri de los collegia.

Con el tiempo, los colegios profesionales fueron haciéndose cargo de las ceremonias del culto y de la organización de las fiestas, hasta llegar a ser los magistri collegiorum los que desempeñaron el papel que antes desempeñaban los magistri vicorum (17).

N O T A S

- (1) Plinio, N.H., XXXVI, 204 y Horacio, Epístolas, I, 1, 49.
- (2) De collegiis et sodaliciis romanorum, Kiel 1843, p. 75.
- (3) Varrón, De L.L., VI, 25; Cic., De leg. agr., I, 3, 7, y Ovidio, Fasti, I, 142.
- (4) De Robertis, Storia delle Corporazioni, Bari, I, p. 92, n. 31.
- (5) De petit. cons., VIII, 30.
- (6) Le culte chez les romains (trad. frac) I, Paris 1889, p. 245 y ss.
- (7) In Pisonem, ed. Kiessling y Schoell, p. 6-7.
- (8) XXXIV.
- (9) Cohn, Zum römischen Vereinsrecht, Berlín 1873 p. 40 n. 62.
- (10) Etude historique sur les Corporations professionnelles, I, Roma 1968, p. 102, n. 2.
- (11) Archivio Giuridico, XXXII, p. 277.
- (12) XXXIV, 7.
- (13) Appunti sulle Corporazioni romane, Milán 1937, p. 39 y ss.
- (14) XXXIV, 7.
- (15) Ob. cit. p. 34 y ss.
- (16) Bandini, ob. cit., p. 36.
- (17) La objeción de que resulta inexplicable que un colegio profesional dirija y encauce una multitud integrada por personas de diversas preparaciones y ocupaciones, puede ser fácilmente contestada con la observación de que hasta llegar el tiempo en que la utilidad pública era lo decisivo en la configuración de un colegio profesional, no se mantuvo con rigor la unidad de actividad laboral en el seno de éstas entidades.

CAPITULO VII

Los colegios profesionales y la organización de
las tribus

LOS COLEGIOS PROFESIONALES Y LA ORGANIZACION DE LAS TRIBUS

Las tribus de la organización territorial serviana comprendían solamente a los que poseían bienes inmuebles, quedando excluidos de ellas todos aquellos que poseían bienes muebles, como asimismo los que nada tenían.

Remontándonos a los orígenes y a base de las conjeturas y reconstrucciones más aceptables, parece que las primitivas tribus fueron cuatro; tribules eran los propietarios de fincas, llamadas también adsidui porque tenían una sede.

Más antiguas aún fueron las tribus gentilicias de Ramnes, Titios y Luceres, basadas en criterios de raza.

Una de las primitivas tribus territoriales fue la del Esquilino y en ella figuraban familias prebeyas acomodadas. Más tarde, tendrá lugar la aparición de la comunidad autónoma de los plebeyos, instalada en el Aventino.

La más importante reforma territorial fue la llevada a cabo por Apio Claudio que incluyó en las tribus a quienes no tenían bienes inmuebles.

La fecha exacta de ésta reforma no es conocida. En textos de Tito Livio (1), unas veces se habla del año 312 a. de C. y otras del año 310, también antes de Cristo.

Tampoco es absolutamente seguro si la reforma de Apio Claudio incluía en las tribus a los que no tenían nada (2).

Tito Livio narra así la reforma de Apio Claudio (3): "Privado Apio de la influencia que había creído conseguir en el Senado, corrompió el Foro y el Campo de Marte, distribuyendo la infima plebe en todas las tribus".

Sin entrar en la polémica, que durante algún tiempo se mantuvo viva, acerca de si la reforma de Apio Claudio se refirió sólo a los libertos o también a los ingenuos de las clases inferiores, puede decirse que parece más fundada la segunda solución.

La reforma de Apio Claudio, cuenta Tito Livio (4) que produjo gran indignación.

Como observó Mammsen, semejante tentativa era demasiado avanzada para aquel tiempo (5) y uno de los sucesores de Apio Claudio, famoso vencedor de los samnitas, el Censor Q. Fabio Ruliano trasladó la masa de la plebe pobre a las cuatro tribus urbanas con lo que se restableció el equilibrio y dió lugar a que al citado cónsul se le otorgara el calificativo de Máximo. Esta contrarreforma determinó que una tribu urbana estuviese integrada por una población superior a la que era propia de una tribu rústica.

La reforma de Apio Claudio probablemente no fue determinada por el talante democrático de su autor, sino porque la situación había llegado a convertirse en insostenible.

En un principio la industria tenía menos importancia que la propiedad rústica, pero más tarde, al convertirse Roma en un cenen

tro de atracción para diversas corrientes inmigratorias, al incrementarse la circulación de la moneda y perfeccionarse la tecnología, fue creciendo la importancia de la propiedad mueble y engrosando el número de los que vivían de su trabajo (6).

La reforma de Apio Claudio tuvo, por tanto, una honda repercusión en la influencia política de los artesanos que repartieron por todas las tribus su capacidad de decisión, sus iniciativas y su proselitismo, pero este aumento de influencia se valora rectamente si se piensa en la importancia que tuvieron las decisiones de los comicios por tribus y que si en la organización centuriada el valor del voto estaba en relación directa con la fortuna de los votantes, en las tribus el valor del voto era igual para todos.

Puede parecer extraña la evolución que tuvo la organización por tribus en relación con la presión política de la plebe, pero ello fue debido a que las tribus locales se crearon no con una finalidad política sino administrativa, ya que, como base de organización política existían las curias.

La reordenación topográfica parece responder a nuevas exigencias. Se habían producido importantes cambios, antiguas familias habían desaparecido, otras familias plebeyas habían sido asumidas en el Patriciado y existía una plebe rústica independiente.

Todos éstos factores influyeron en el desarrollo e incremento de las primeras unidades territoriales (7) y consecuentemente

en la evolución política romana. Existe un pasaje de Tito Livio (8) según el cual ciudadanos que no eran propietarios de inmuebles fueron incluidos en las tribus rústicas, en atención a su nacimiento, su condición jurídica o su profesión.

Se trata de una reforma de los censores M. Emilio Lépido y M. Fulvio Nobilior, llevada a cabo a comienzos del siglo III a. de C.

El conocimiento que de ella tenemos es insuficiente, pero es posible que a partir de esta reforma se verificase la agrupación en una misma tribu de las que tenían la misma profesión, independientemente de la tribu a que originariamente perteneciesen.

A esta conclusión se llega porque Tito Livio dice a propósito de los indicados censores: "Mutarunt suffragia regionatim-que generibus hominum causisque et quaestibus tribus descriperunt" y así como "causa" parece tener un significado amplio de condición jurídica (9), sin embargo "quaestus" tiene un significado más preciso de profesión u oficio con el cuál una persona obtiene las ganancias precisas para atender a su subsistencia.

N O T A S

- (1) IX, 33-34.
- (2) De Martino, Storia della costituzione romana, Nápoles 1951, I, p. 329.
- (3) IX, 46.
- (4) Loc. cit. Cfr. V. Arangio - Ruiz, Storia del Diritto romano, Nápoles 1977, p. 85, n.1.
- (5) Historia de Roma, Madrid 1965 (trad. española), I, p. 384.
- (6) E. De Sanctis, Storia dei romani, Florencia 1960, II, p. 214.
- (7) G. Niccolini in Studi Bonfante, II, p. 243.
- (8) XL, 51.
- (9) Cicerón, De legibus, III, 18.

CAPITULO VIII

El Senadoconsulto de las Bacanales

EL SENADOCONSULTO DE LAS BACANALES

En el año 188 a. de C., se produjo un grave acontecimiento que puso en peligro la paz y la estabilidad de la ciudad de Roma.

Eran a la sazón cónsules Sp. Postumio y Q. Marcio Filipo, en el intervalo entre la segunda y tercera guerra púnica.

Se trataba de una conjuración en la que bajó la apariencia de celebrar fiestas religiosas nocturnas en honor del dios Baco, individuos criminales y degenerados tramaban asesinatos y practicaban la magia, y no terminaban aquí los torpes designios de los que tomaban parte en aquellas reuniones nocturnas, sino que también atentaban contra la seguridad del Estado.

Gracias a un relato conservado por Tito Livio, se conocen algunos detalles de aquellas turbias maquinaciones y como la asociación de quienes profesaban culto a Baco, se convirtió en guarida y cobijo de las peores intrigas y afechanzas (1). /s

El primero que organizó aquellas reuniones nocturnas y secretas, fue un individuo de origen griego y de no muy claros antecedentes, que se hacía pasar por adivino.

El número de iniciados fue creciendo poco a poco. En las reuniones había hombres y mujeres y los banquetes que frecuentemente se asociaban a la práctica del culto, se convirtieron en grandes orgías, en las que el vino calentaba los ánimos y se cometían toda clase de excesos (2).

No aparece con claridad, según las fuentes que han llegado a nuestro conocimiento, en qué medida fue decisiva la preocupación política o la preocupación por las inmoralidades cometidas, para impulsar la acción del Senado.

La práctica de acciones criminales contra quienes se resistían a ser víctimas de actos nefandos parece comprobada (3).

Además de los ataques contra la integridad física de los iniciados en los que quedaba algún resto de pudor, se realizaban otra serie de actos ilícitos, como preparación de falsos testigos, falsificación de documentos, etc. Todo ello en medio de grandes gritos, alaridos, sonido de tambores y cimbales y alocadas corridas de bacantes que con los cabellos sueltos portaban teas encendidas.

Estos ritos secretos parecen haber tenido un origen oriental y se han descubierto afinidades con los Misterios cretenses. Todos estos crímenes y excesos que aparecen vivamente coloreados en el relato de Tito Livio, venían practicándose desde hacía algún tiempo en Roma y el secreto se mantenía por la amenaza constante de muerte que pesaba sobre los asociados a estos cultos que osaran descubrir los misterios de las ceremonias en honor del dios Baco.

El episodio que dio lugar a que los poderes públicos tomaran cartas en el asunto y se dispusieran a corregir el estado de cosas, fue el siguiente:

La madre y el padrastro de un joven romano llamado P. Ebu -

cio, hijo de un enriquecido caballero, concibieron el torpe propósito de iniciarlo en los ritos báquicos a fin de desembarazarse de él y apoderarse de la cuantiosa fortuna que le correspondía.

En este punto entra en acción una joven cortesana, amiga de P. Ebucio llamada Hispalia Fecenia, cuya figura y personalidad quizá sea una de las más sorprendentes del relato de Tito Livio.

Esta mujer, mientras que por una parte es definida como persona de vida inmoral, por otra parte se presenta como mujer de elevados sentimientos y de propósitos dignos y rectos.

Otros dos aspectos difíciles de conciliar en la personalidad de Hispalia Fecenia, es que habiendo sido esclava y como tal iniciada en los misterios de Baco, no había formado nunca parte activa en ellos (4).

Finalmente, aquella mujer, que temía ser despedazada por los iniciados si revelaba los secretos que conocía, encuentra en su amor a P. Ebucio el valor suficiente para aconsejar a su amante que no se someta a las obscenas ceremonias del culto en el que se le quería iniciar por sus familiares.

En el ánimo de P. Ebucio, pesaron más las advertencias y consejos de Hispalia que la presión que sobre él ejercían su padrastro y su propia madre.

Expulsado de casa ya por sus parientes, que veían frustrados

sus propósitos por la enérgica resistencia del joven, éste se refugia en casa de una tía suya llamada Ebucia, a la que hace depositaria de graves acusaciones.

Ebucia, mujer de ánimo decidido, no vacila en aconsejar a su sobrino que formule la correspondiente denuncia ante el cónsul Postumio, quién no obstante esta en gran medida absorbido por las preocupaciones militares de su consulado, que siguió a la pacificación de la Liguria, llevada a cabo por el cónsul C. Flaminio, juzgó el asunto de tal gravedad que dió comienzo sin demora a la adecuada investigación de los hechos que le eran denunciados.

Otro detalle curioso se interfiere en el relato y, sin duda alguna, contribuyó a que Ebucia animase a su sobrino a declarar ante Postumio.

Ebucia era amiga de Sulpicia, suegra de Postumio y esto permitió llevar a cabo la investigación muy discretamente.

Es a casa de Sulpicia donde acudió a declarar Hispalia Fecenia, no sin tener que vencer serios temores. Hispalia facilitó valiosos detalles de las tenebrosas ceremonias en las que a veces intervenían menores de veinte años.

El cónsul después de haber garantizado la seguridad personal de Hispalia y de P. Ebucio, pasó a informar al Senado de la denuncia recibida, lo que motivó una minuciosa investigación. Fruto de esta investigación fue un decreto publicado para toda Italia en el que se prohibía a todos los iniciados en los ritos de Baco, cual-

quier reunión o asamblea para celebrar los misterios de este culto, así como cualquier ceremonia de análoga naturaleza.

Para hacer efectiva esta prohibición se adoptaron ciertas medidas: Los ediles curules deberían detener a los oficiantes de tales ceremonias; los ediles de la plebe vigilar para que no se llevase a cabo sacrificio secreto alguno; los Triunviros capitales, impedir toda reunión nocturna.

Finalmente se resolvió dar la mayor publicidad posible a la disposición del Senado. A cuyo efecto los cónsules deberían dar lectura de la misma, como también a un edicto en el cuál se contenía la terminante prohibición de dar cobijo a los fugitivos, de esconderlos o de favorecer de cualquier manera la huida de los acusados (5).

Estas últimas medidas se consideraron necesarias, porque era tan amplia la red de contactos sociales tejida por los iniciados que existía el peligro de que pudieran sustraerse a la acción de la justicia, encontrando la protección o amparo de individuos pertenecientes a todas las clases sociales.

Una plancha de bronce, conservada en Viena, contiene el texto oficial del Senadoconsulto relativo a la conjuración de las Bacanales, texto al que se acompaña una carta dirigida a las autoridades locales del Ager Teuranus en la que se ~~les~~ ordenaba divulgar y ejecutar el acuerdo del Senado.

La publicación del senadoconsulto sembró el terror en Roma y en los territorios próximos.

Se sabía de más de siete mil personas, de ambos sexos, complicadas en las reuniones báquicas.

Los efectos que produjo el terror fueron muy diversos: Unos se suicidaban; otros fueron ejecutados, como les sucedió a algunos jefes plebeyos que eran grandes sacerdotes de Baco; otros huyeron.

Aquellos iniciados que se habían comprometido a realizar todos los excesos y crímenes, propios de aquél culto, pero no se encontraron culpables de haber cometido delito de falsificación, de haber matado a alguien, de haberse dedicado a la prostitución o de haber cometido otros actos fraudulentos fueron encadenados para el resto de sus días.

En cambio aquellos cuya culpabilidad se probó y que eran los más, fueron castigados con la pena capital.

Estas medidas y castigos fueron encaminados a cortar de raíz los hechos delictivos que se venían cometiendo en Roma y en otras ciudades, pero junto a la represión vino la reglamentación del culto a Baco. Reglamentación que tiene singular valor para el estudio del control de las asociaciones romanas (6).

El senadoconsulto a que se está haciendo referencia es una medida de signo positivo pues no se trata de castigar sino de establecer condiciones y requisitos para tomar parte en las reuniones y asambleas del culto de Baco. En lo sucesivo nadie podría celebrar las ceremonias en honor de Baco sin dirigirse previa-

mente al pretor en Roma. Este debería llevar la solicitud a una reunión del Senado, a la que debería asistir un mínimo de cien senadores. El Senado resolvería acerca de lo solicitado.

Pero este requisito no era sólo para organizar los actos de culto, sino que el mismo procedimiento debía ser seguido por todo aquel ciudadano romano, latino o aliado, que deseara asistir a los bacanales.

Junto a los requisitos, las prohibiciones.

Nadie, ni hombres ni mujeres, podían ostentar el título de sacerdotes o sacrificadores en las reuniones autorizadas, ni podía constituirse un fondo común.

Las prohibiciones no se referían simplemente a las ceremonias y al acto de realizar los cultos, sino que a fin de evitar que esas reuniones fuesen la semilla para ulteriores asambleas que desbordasen el marco legal establecido, también se disponía que a la terminación de los actos religiosos, no podrían vincularse los asistentes con juramentos, compromisos o promesas que excediesen las formalidades prescritas.

Igualmente estaba prohibido ofrecer un sacrificio secreto en la ciudad de Roma y fuera de Roma estaban prohibidos los sacrificios, tanto públicos como privados.

Una limitación se establecía en cuanto al número de los asistentes a los sacrificios rituales. Este número no podía exceder de cinco, de los cuales tres debían ser hombres y dos mujeres, salvo

la decisión del Pretor. La pena establecida para todos aquellos que no respetasen las normas fijadas era la de pena capital (7).

Se atendió cuidadosamente a la difusión de los preceptos establecidos en el senadoconsulto y a éste fin se dispuso que su texto debía ser fijado, al menos, durante tres mercados.

El Senado ordenó también grabar sobre una plancha de bronce el senadoconsulto, para que todos lo tuviesen muy presente.

Un segundo senadoconsulto, dado algún tiempo después, ordenó el traslado de Mino Cerrino, uno de los grandes sacerdotes del culto a Baco, a las prisiones de Ardea, mandando a los magistrados de esta ciudad que extremasen las precauciones para que el preso no pudiera suicidarse.

Con posterioridad a este senadoconsulto se establecieron recompensas para P. Ebucio y su amiga Hispalia Fecenia.

Las medidas limitando y controlando los cultos de Baco no fueron aceptadas sin resistencia en algunos lugares. Especialmente en Tarento (8) y en Apulia (9). En las provincias meridionales puede situarse el principal foco de las iniciaciones dionisicas y por ello osaron durante algún tiempo desafiar la rigurosa vigilancia del Senado de Roma.

En la misma Roma es posible que se produjese una reaparición fugaz de las antiguas Bacanales (10). Ya hubo ocasión de indicar que para Mommsen el que se necesitase publicar un senadoconsulto constituye una prueba fehaciente de la libertad de

asociación que anteriormente existiría, ya que de haber habido una ley anterior que restringiese la libertad para asociarse, en ciertas supuestos, o estableciese controles y requisitos para las reuniones y asambleas de los particulares, no habría dejado de ser invocada con ocasión del suceso de las bacanales.

Sin embargo, según una corriente doctrinal, que se inició con Cohn y a la que pronto se adhirió Krüger (11), del Senadoconsulto de las Bacanales no se deduce un anterior estado de libertad de asociación, sino, por el contrario, un sistema de autorización estatal.

Krüger, partiendo de la observación de que en el Senadoconsulto sobre las Bacanales se contenían normas precisas y concretas en orden a la disciplina del culto y acerca de las asociaciones con él relacionadas, pensó que ello probaba que en la época de la República regía el sistema de la autorización estatal.

Bandini, en cambio, entiende que el cónsul Postumio no prohibió las reuniones en general, sino sólo aquellas reuniones en que los ciudadanos se unen como pueblo, esto es, para deliberar acerca de algo superior a los intereses particulares (12).

El Senado intervenía cuándo constataba que las relaciones de los asociados no tenían sólo por objeto organizar banquetes o realizar sacrificios en determinadas ocasiones y cuándo los miembros de la asociación no conservaban su propia individualidad, sino que se confundía en una colectividad única.

El hecho de que el senadoconsulto reprimiendo las Bacanales tuviese por objeto un caso concreto, un determinado tipo de asociación y, dentro de éste tipo de asociación, sólomente las relativas a Baco, impide cualquier generalización, en conformidad con la tesis de Bandini.

Lo cierto es que el senadoconsulto no prohíbe radicalmente el culto, sino que solamente establece ciertas precisiones.

Se ha discutido si el senadoconsulto tenía valor de ley o si era solamente un consejo dado a los cónsules, que, por supuesto, en este caso atendieron.

Pero aún aceptando que el senadoconsulto tuviese valor de ley, sigue en pie la observación de Mommsen de que si hubiese existido una ley restrictiva de la libertad de asociación no había de jado de ser citada en el razonamiento expuesto por el Senado. De no tener el senadoconsulto valor de ley, había tenido más fuerza el consejo dado por los senadores de poder ser apoyado en una legislación anterior.

Más aún la variedad de expresiones y las diferencias de terminología que se aprecian en el texto de Tito Livio, impiden llegar a conclusiones seguras acerca del grado de aplicabilidad del senadoconsulto y de su valoración como fuente de normas.

Hay veces que Tito Livio utiliza la expresión "censuit" para referirse al acuerdo en que el Senado agradece al cónsul la diligencia empleada en las investigaciones. Otras veces, utiliza el plural "mandant" para aludir al acuerdo por el que se ordena a

los cónsules la quaestio extra ordinem, etc. (13).

Por otra parte, a fines de la República, el senadoconsulto no es siempre una mera opinión que se emite para contestar a una cuestión propuesta por un magistrado, sino que en ciertos asuntos que afectaban a la seguridad del Estado o a la dignidad nacional, la intervención del Senado era más directa.

Había ciertos departamentos de la Administración, en los cuales el poder ejecutivo tenía necesidad del consentimiento previo del Senado. Es lo que sucedía en los departamentos del culto, de la hacienda, de los asuntos exteriores, de la guerra, de las colonias y de las provincias. Durante los tres últimos siglos de la República, al menos, ninguna medida importante de la competencia de estos departamentos, podría adoptarse sin que el Senado manifestase su conformidad (14).

Otra cuestión es la de si la recomendación senatorial no fue seguida por los magistrados que sucedieron a los cónsules encargados de ejecutar dicha recomendación (15).

Esta última suposición se basa en un texto de Varrón (16) que muy bien puede referirse, como sostuvo Lenormant (17) a una época anterior.

La referencia ^fa Cicerón (18) al senadoconsulto, tampoco re- ^fde ^fsuelve la cuestión de si pronto dejó de aplicarse, porque la palabra "auctoritas", que emplea Cicerón, no siempre significa senadoconsulto privado de fuerza legal.

En conclusión, podrá ser objeto de polémica la determinación del carácter de la represión, si fue una persecución política o religiosa; si prevaleció en las decisiones adoptadas el celo por la ^hmodalidad o el deseo de salvaguardar el estado contra las asechanzas de los conspiradores; pero lo que parece que puede sostenerse como más verosímil es que las medidas adoptadas revelan la inexistencia de un régimen jurídico anterior de control de la libertad asociativa.

N O T A S

- (1) Tito Livio, XXXIX, 8-19. Cfr. Cova, Livio e la repressione dei Baccanali, Athenaeum, 52 (1974) p. 106 y ss.
- (2) Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain. Apendice "Les Mysteres de Bacchus a Rome", Paris 1930.
- (3) Tito Livio, XXXIX, 13.
- (4) Cumont, ob. cit., p. 307.
- (5) Tito Livio, XXXIX, 17.
- (6) E. Massoneau, Le crime de Imagie, Paris 1933, p. 153 y ss.
- (7) Cfr. C. St. Tomulescu, La valeur juridique de l'histoire de Tito Live, Labeo 21 (1975) p. 297 y ss.
- (8) Tito Livio, XXIX, 41.
- (9) Tito Livio, XL, 19.
- (10) Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, v. Bacchanalia.
- (11) Die rechtliche Stellung der vorKonstantinischen kirchen, en "Kirchenrechtliche Abhandlungen", 115-116, (1935) p. 11 y ss.
- (12) Appunti sulle Corporazioni romane p.p. 46-47.
- (13) Sobre la variedad de términos empleados por Tito Livio al hablar de la actividad del Senado en el caso de los Bacanales vid. C. Rascón en los Estudios jurídicos en homenaje al profesor Ursicino Álvarez Suárez, Madrid 1978, p. 394 y ss.
- (14) Willems, Le Sénat de la Republique Romaine, II, Lovaina 1883, p. 224.
- (15) De Robertis, Diritto associativo romano, Bari 1938, p. 58.
- (16) Sátiras Menipeas.
- (17) Daremberg - Saglio, v. citado.
- (18) De legibus, II, 15, 37.

CAPITULO IX

El Senadoconsulto del año 64 a. de C.

EL SENADOCONSULTO DEL AÑO 64 a. DE C.

Ascanio en su comentario al discurso de Cicerón In Pisonem, suministra la noticia de un senadoconsulto correspondiente al tiempo en que eran cónsules L. Julio César y C. Marcio Figulo (1), noticia que completaba con otras fuentes (2) permite recons- truir la actitud del Senado frente a las asociaciones que tomaban parte en la turbulenta vida política del último siglo de la República romana.

Corría el año 64 a. de C., año de inquietud y conjuraciones y el Senado hubo de tomar determinadas medidas para evitar el trastorno de las instituciones a través de la corrupción electoral y de las maquinaciones de diferentes grupos de presión. Entre estas medidas figuró la de disolver aquellas asociaciones que bajo el nombre de colegios constituían auténticos focos de subversión.

Si la supresión de los colegios supuso la desaparición de los Juegos Compitalicios o si esta desaparición fue llevada a cabo por una específica decisión del Senado, no tiene especial relieve, ya que, en todo caso, la relación entre ambos hechos parece evidente.

Los Juegos Compitalicios, según ya fue indicado, habían pasado a ser organizados por los Magistri collegiorum, como consecuencia del auge y del prestigio que las asociaciones profesionales habían alcanzado en el seno de la multitud que acudía a aquellas fiestas.

El desprestigio de no pocos colegios por su intervención en las turbulencias del siglo I a. de C., produjo el efecto contrario y arrastró consigo la desaparición de tales juegos. Pero el deseo de celebrar las fiestas se mantuvo vivo y posteriormente fueron restablecidas, aunque con adversa fortuna.

La identificación del Senadoconsulto que suprimió numerosos colegios profesionales, presenta varias dificultades, tanto respecto de su fecha como de su alcance.

En cuánto a la fecha, se ha observado que Asconio cuenta que los colegios fueron restablecidos en el año 58 a. de C., nueve años después de haber sido suprimidos.

Nueve años antes del 68 nos sitúan en el año 67 a. de C. y en éste año no eran cónsules L. Julio Cesar y C. Marcio Figulo, sino C. Calpurnio Pisón y M. Acilio Glabrio.

Se ha propuesto la lectura "Post X annos" en lugar de "Post IX annos" siendo los cónsules L. Cecilio y Q. Marcio (3).

De este modo, encajarían fecha y nombres de los cónsules pero lo que no encajaría es que si los colegios habían sido suprimidos en el año 68 (58+10) en el año 65 estuviesen en funcionamiento, según parece afirmar Asconio, cuándo con referencia a esta fecha escribe: "Frequenter tum etiam coetus factiosorum hominum sine publica auctoritate malo publico fiebant" (4).

Claro que si se interpreta el pasaje transcrito como que colegios ya disueltos siguieron reuniéndose, la dificultad desa-

parece, pero queda sin justificar la medida del Senado, ya que es muy distinta una disposición encaminada a prohibir reuniones que otra dirigida a suprimir colegios.

La opinión que parece más aceptable es la que defiende la fecha del año 64 a. de C. y propone la corrección de "Post IX annos" por "Post VI annos" y los nombres de los cónsules entiende que deben leerse así: "L. Julio César" y "C. Marcio Regulo" que fueron cónsules en ese año (5).

Sin embargo, la polémica sobre el tema ha sido muy amplia, habiendo producido bastante desorientación el hecho de que en algunos manuscritos se lea como nombres de los cónsules "L. Julio - C. Mario" pareja consular inexistente.

Incluso se ha propuesto leer con referencia a la reforma de Clodio "Post V annos" lo que llevaría al Senadoconsulto al año 63 a. de C. (6).

Lo que más ha desconcertado a los investigadores es que hay textos, entre ellos uno de Dión Casio (7) que presentan los nombres de los cónsules, de que habla Asconio, en otro orden: "Figulus - Caesar".

En base al estado social y político de Roma durante el año 65 a. de C., parece lo más probable asignar al Senadoconsulto la fecha del año 64 a. de C.

Mayor importancia que la determinación de la fecha del Senadoconsulto, tiene la fijación de sus efectos y campo de apli-

cación de las normas que en él se contienen.

Para muchos autores se trata de un Senadoconsulto que se refiere especialmente a las asociaciones de artesanos. Entre los más modernos defensores de esta tesis puede citarse a Eliachevitch (8).

Este autor afirmó que estaba fuera de toda duda que el Senadoconsulto se refería concretamente a las asociaciones profesionales.

Tal teoría contó entre sus defensores, antes de Eliachevitch, a Sigonius, Brissonius y Heineccius (9).

Dos son, sobre todo, las razones en que se apoya Eliachevitch para hacer tan rotunda afirmación.

Una es la de que Asconio emplea el término collegia que indica frecuentemente asociaciones profesionales y la otra razón es que Asconio, al señalar algunas excepciones a las medidas establecidas por el Senadoconsulto, cita colegios de artesanos y no otra clase de entidades o asociaciones.

En cuanto al primer argumento, no resulta demasiado convincente, porque, dado el amplio significado de collegium, como ya hubo ocasión de señalar, no puede pretenderse que su empleo sirva para identificar un tipo concreto de asociación.

Algo muy distinto sucede con el segundo razonamiento que expone Eliachevitch.

En efecto, carecería totalmente de lógica que, si el Sena-

doconsulto no se refería exclusivamente a los colegios profesionales, se citasen como excepciones únicamente colegios de esta naturaleza.

Es cierto, que los colegios que se citan pueden no ser los únicos excluidos de la disolución, por no tratarse de una enumeración exhaustiva, sino sólomente demostrativa; pero, si los colegios suprimidos no eran sólo los profesionales, la lógica más elemental obligaría a incluir entre los que se citan como no disueltos, alguna representación del otro tipo u otros tipos de asociaciones.

A mayor abundamiento, no sería ya falta de lógica, sino abierta contradicción que, no siendo asociaciones de artesanos las asociaciones disueltas, fuesen presentadas como excepciones, como colegios a los que no afectó la disolución, algunas asociaciones profesionales (10).

También se ha afirmado que la finalidad perseguida principalmente por el Senadoconsulto fue la disolución de los collegia compitalicia, pero ya se indicó que, según la mayoría de la romanística moderna, tales colegios nunca existieron. Existían, si, las fiestas compitalicias, primero organizadas por los magistri vicorum y luego por los magistri collegiorum.

De aquí que la tesis de Mommsen de que la medida senatorial afectaba particularmente a este tipo de asociaciones (11) haya perdido credibilidad.

Villems que en su obra sobre el Derecho público romano, des-

de la fundación de Roma hasta Justiniano (12) no vaciló en afirmar: "Desde la más remota antigüedad, los habitantes de los barrios estaban organizados en colegios religiosos, collegia compitalicia"; pero años más tarde, en su obra sobre el Senado de la República romana (13) no sigue fielmente la opinión de que el Senadoconsulto había disuelto los collegia compitalicia, sino que se limita a decir: "En el año 64 un Senadoconsulto suprimió como peligrosas para el Estado un gran número de asociaciones que tenían a la vez un carácter religioso y político, especialmente los collegia sodalicia" (14).

Se trata pues, de una ligera rectificación, no de una radical rectificación, como la que llevó a cabo el mismo Villemans, cuando después de haber dicho que el Senadoconsulto era del año 68 (15) luego declaró, sin más aclaraciones, que se había tratado de un error (16).

De Robertis, prescindiendo de entrar a debatir la tesis de Mommsen sobre la existencia de unos collegia compitalicia, con magistri propios, por entender que es una cuestión que no interesa directamente al objeto de aclarar cuáles fueron las asociaciones afectadas por el Senadoconsulto del año 64, pasa a desarrollar su tesis (17).

Entiende éste historiador que aparte de que el Senadoconsulto se aplicase a las asociaciones religiosas establecidas para el culto de los Lares, no cabe duda que afectó también a otro tipo de asociaciones.

En definitiva, este autor sostiene que el Senadoconsulto tuvo un alcance general, que fue dirigido no sólo contra las asociaciones de artesanos, sino también contra asociaciones religiosas.

Contra la idea de que el Senadoconsulto se aplicó también a las asociaciones religiosas, puede alegarse que seis años después, en el 58 a. de C., los cónsules Pisón y Gabinio tuvieron que adoptar medidas contra algunas asociaciones de sacra peregrina. Se tiene noticia de asociaciones formadas por los adoradores de Isis, cuyo culto fue declarado contra el orden público (18).

También se sabe que las asociaciones religiosas de los judíos establecidos en Roma, subsistían después del año 64 a. de C. (19).

En base a estos datos, puede concluirse que, si las asociaciones dedicadas a los sacra peregrina no fueron disueltas por él tantas veces citado Senadoconsulto, no puede aceptarse la tesis de que las asociaciones que estaban dedicadas a los dioses del Estado romano hubieran sido disueltas.

Sin embargo, De Robertis (20) no consideró válido este argumento, por entender que el Senado había previsto la posibilidad de que hubiera excepciones y, por tanto, aquellas asociaciones pudieran ser a las que Asconio se refiere con la expresión "Pauca atque certa".

Claro está que existe tal posibilidad, pero lo que no expli-

ca De Robertis es por qué no se citan expresamente asociaciones religiosas entre las excepciones.

El razonamiento de que el empleo genérico de collegia por Asconio permite considerar incluidas las asociaciones religiosas junto a los Collegia Opificum, tendría fuerza relativa si no fuese porque, insistimos, las únicas excepciones que se establecen se refieren a asociaciones de artesanos.

Lo mismo puede decirse de la expresión "coetus factiosorum hominum" en la que tampoco se indica de que asociación se trataba.

Wallon (21) enfoca esta cuestión del siguiente modo. Para él, las sodalitates a que la ley de las XII Tablas reconocía el derecho de gobernarse por si mismas, tenían por fin celebrar en común los sacrificios y los banquetes religiosos y, más tarde, cuidar de los funerales de los asociados.

Entiende Wallon que ésto era así porque colegios como el de los Hermanos Arvales no tenían nada de mercenarios (22).

Finalmente se advierte que esta opinión que sigue muy de cerca los puntos de vista de Mommsen, empieza por excluir a los collegia opificum de la regulación decenviral a que se refiere Gayo (23).

Sin embargo, después de haber aludido a colegios religiosos, Wallon no tiene más remedio que relacionar a estas asociaciones con los colegios de artesanos y, para ello, afirma que aunque por su origen y características eran bien distintos, en el cur-

so de la historia pasaron a tener mucho en común.

No fueron sólo las sodalitates las que se mezclaron en política, sino que los colegios de artesanos, hombres humildes y alejados durante mucho tiempo de la política, no permanecieron insensibles a la llamada de la ambición y a las insinuantes voces de los agitadores políticos que les ofrecían fortuna y poder.

Esto dio lugar para Wallon a que el Senadoconsulto del año 54 a. de C. afectase a unas y a otras asociaciones.

A este planteamiento de Wallon pueden formularse varias objeciones:

- 1a) Que toma demasiado al pie de la letra la referencia a "sodales" que se contiene en el texto de Gayo, que tantas pruebas ofrece de haber sido alterado.
- 2a) Que no precisa el momento y las circunstancias en que parecen comenzar a moverse sobre una base común las asociaciones religiosas y los collegia opificum.
- 3a) Que no utiliza ningún argumento capaz de desvirtuar o neutralizar el razonamiento de Eliachevitch, ya transcrito, en favor de la limitación del Senadoconsulto a los colegios profesionales.

Zumpt (24) pensó que el Senadoconsulto se refería a asociaciones puramente políticas compuestas por personas de baja condición económica.

A esta tesis se opuso Cohn (25) y sobre todo Waltzing (26) ⁴ quien hizo notar, muy acertadamente, que los pobres no se asocian únicamente para fines políticos. Estas personas o vendían sus votos o se convertían en instrumento de los demagogos.

En el primer supuesto, entraban a formar parte de las decurias de electores, enrolados por los clubs políticos, pero de éste modo, ni constituían colegios profesionales, ni se integraban en asociaciones que persiguiesen fines religiosos.

En el segundo supuesto, los demagogos no formaban asociaciones políticas, sino que juzgaban mucho más eficaz utilizar los colegios ya existentes o constituir unos nuevos, pero siguiendo fielmente el modelo de los antiguos.

Waltzing parece atribuir al Senadoconsulto del año 64 a. de C. un campo de aplicación más amplio que el que le atribuyen De Robertis y Wallon, pero al mismo tiempo indica que, aunque no se dice en el Senadoconsulto a que tipo de asociación se aplicó, se trata de una medida que encaja mejor en los colegios de artesanos que en otra clase de asociaciones (27).

Heinecio creyó que los colegios disueltos por el Senadoconsulto fueron los colegios de artesanos. Es la misma teoría de Eliachevitch y de Cohn (28).

El último autor citado se detiene a considerar la tesis de Mommsen de que lo que se disolvieron fueron los colegios compitalicios y observa, con gran fundamento que la inscripción de Féru las, en que se basó Mommsen para afirmar la existencia de tales

colegios es del siglo tercero y esto no es suficiente para probar la existencia de tales colegios en la época de la República romana.

La dificultad de explicar todo el esfuerzo de los demagogos por restablecer los Juegos Compitalicios, no siendo los Colegios Compitalicios los suprimidos por el Senadoconsulto, resulta más aparente que real, puesto que no se niega que estos juegos tuviesen relación con los colegios de artesanos.

El hecho de que los magistri collegiorum se ocupasen de celebrar las fiestas en los compita no es lo mismo que identificar los colegios de artesanos con unos supuestos colegios compitalicios y mucho menos considerar a éstos últimos como asociaciones dotadas de entidad propia.

Para Bandini, el Senadoconsulto disolvió asociaciones de las cuales resulta difícil fijar las características (29).

La causa principal de esta dificultad es el empleo por Asconio del término collegia con el sentido que tenía en el Imperio y emplear "coetus factiosorum hominum" y collegia en el mismo sentido, cuando en el lenguaje de la República no podían ser empleadas tales expresiones con sentido similar.

Monti (30) creyó que el Senadoconsulto, más que una disposición de carácter general contra las asociaciones, fue una medida de policía solo contra aquellas asociaciones que ejercían actividades pseudopolíticas, medida que se conjugaría con las adoptadas contra Catilina y sus seguidores, entre las cuales fi-

guraría la supresión de los famosos Juegos Compitalicios.

La teoría de Monti se separa, tanto de la de Mommsen, que creía que la medida afectó sólo a los colegios compitalicios, como de la de Waltzing, que entendió que tales colegios no existieron y que la medida se dirigió contra las asociaciones de artesanos y de cultos extranjeros.

La teoría de Monti ofrece la ventaja de acomodarse mejor al texto de Asconio, que alude no sólo a una medida, sino a varias y también se compagina mejor con la significación jurídica de los senadoconsultos a fines de la República.

Mas esta postura doctrinal es perfectamente compatible con la idea de que las asociaciones de artesanos fueron las afectadas principalmente, lo que encuentra su principal punto de apoyo en las fuentes extrajurídicas.

Sin insistir en los pasajes de Cicerón, de gran interés en estos temas y, en general, en la problemática de las asociaciones de artesanos de fines de la República, ya que, como hizo observar Costa (31) el carácter apasionado y polémico de no pocos escritos de Cicerón y su parcialidad en favor del partido senatorial, hace que resulte muy delicada la valoración de sus juicios y opiniones acerca de los acontecimientos de aquél tiempo, procede indicar otras fuentes.

Puede citarse un texto de Salustio (32) en el que se revela la intervención de los artesanos en los desórdenes propios del tiempo de crisis de la República romana.

En un pasaje de la guerra de Yugurta (33) Salustio escribió lo siguiente: "Ultimamente la plebe estaba tan acalorada que los artesanos y los labradores, que no tenían más crédito ni bienes que el trabajo de sus manos, abandonando sus haciendas iban a casa de Mario y dejaban de atender a sus familias por obsequiarle. De este modo, consternada la nobleza, se concedió al fin el consulado a este hombre de condición inferior, cosa que no se había visto desde hacía mucho tiempo".

Varias causas han perturbado la recta visión del alcance del Senadoconsulto del año 64 a. de C.

En primer lugar, el empleo por Asconio del término collegium, que no siempre tuvo la misma significación y que, a veces, se empleaba para designar cualquier tipo de asociación.

En segundo lugar que los colegios profesionales tuvieron una evolución muy acusada y, de ser unas asociaciones prestigiosas, cuyos magistri llegaron a asumir la organización de las fiestas de la vecindad o Juegos Compitalicios, pasaron más tarde a verse mezclados en todo tipo de turbulencias y maniobras de carácter político.

En tercer lugar el apasionamiento y la parcialidad de algunos autores del último siglo de la República, ofrecen una visión un tanto deformada de los acontecimientos y, rápidas y breves afirmaciones en las que, quizás a impulsos de la polémica o de la diatriba, más que la precisión técnica de los términos empleados, lo que se buscaba era el énfasis o el tono despectivo. Esto permite

explicar el uso que hace Asconio de "coetus" como equivalente a collegium.

Pero con el Senadoconsulto del año 64 a. de C., las medidas represivas de las asociaciones no habían hecho en realidad más que empezar.

N O T A S

- (1) Q. Asconii Pediani orationum Ciceronis quinque enarratio, ed. A.C. Clark, Oxford 1966.
- (2) F.M. De Robertis, Diritto associativo romano, Bari 1938, p. 75.
- (3) T. Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843, p. 74.
- (4) Asconio, In. Corn., p. 67.
- (5) Waltzing, Etude historique sur les Corporations professionnelles, Roma 1968, I, p. 92, n.1.
- (6) Rinkes, Mnemosyne, X, p. 208.
- (7) XXXVII, 10. Cfr. Cohn, Zum romischen Vereinsrecht, Berlin 1873, p. 41.
- (8) La personnalité juridique en Droit privé romain, Paris 1942, p. 233 y ss.
- (9) Vid. Dkirsen Historische Bemerkungen über der Zustand der juristischen Personem nach römischen Recht en "Civilistische Abhandlungen", Berlín 1820, II, p.p. 31-37.
- (10) Se disiente acerca de cuales fueron los colegios exceptuados, por haberse propuesto varias lecturas del texto. Cfr. Eliachevitch, ob. cit. p. 232. n. 79.
- (11) De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843, p.p. 74-76.
- (12) Lovaina 1880, p. 56.
- (13) Lovaina 1883.
- (14) Ob. cit., II, p.p. 322-323.
- (15) Loc. cit. n. 4 de la p. 114.
- (16) Loc. cit. n. 6 de la p. 322.
- (17) Storiadelle Corporazioni, I, Bari, p. 98 y ss.
- (18) El Senado se pronunció varias veces contra la práctica de este culto. De ello hay noticias en Tertuliano (Apolog., 6) y Dión Casio (XL, 47 y XLII, 26).
- (19) Flavio Josefo Antiquitates, XIV, X.
- (20) Storia della Corporazioni, Bari, I, p. 100.
- (21) Historie de l'esclavage dans l'antiquité, Paris 1879, III, p. 459 y ss.

- (22) Lo que dice Wallon de los hermanos Arvales lo extiende también a todos aquellos que, a propósito de la reforma de Clodio, se citan en las fuentes y aparecen bajo formas nuevas en los municipios del Imperio: Colegios de Diana, de Minerva, de Marte, etc. Cfr. Wallón, ob. cit., III, p. 460.
- (23) D., 47, 22, 4.
- (24) Das Priminialrecht der röm Republik, Berlin 1869, p. 383.
- (25) Zum römischen Vereinsrecht, Berlin 1873, p.p. 45-46.
- (26) Waltzing, Etude historique sur les Corporations professionnelles, Roma 1968, I, p. 107.
- (27) Ob. cit., p. 108.
- (28) Gaudenzi, Archivio Giuridico, XXXII, p. 294.
- (29) Appunti sulle Corporazioni romane, Milán 1937, p. 48 y ss.
- (30) Le Corporazioni, Bari 1934, p. 24.
- (31) Cicerone giureconsulto, Roma 1964, I. p. 289.
- (32) El mismo Salustio manifiesta sus dudas acerca de algunos excesos y enormidades que se atribuyen a Catilina, achacando las posibles exageraciones al deseo de algunos de templar el aborrecimiento suscitado contra Cicerón, con la mención de los delitos cometidos por quienes habían sido objeto de duros castigos.
La conjuración de Catilina, XXII.
- (33) LXXIII.

CAPITULO X

Clodio y el Senadoconsulto del año 56 a. de C.

CLODIO Y EL SENADOCONSULTO DEL AÑO 56 a. DE C.

La situación política romana durante el año 58 a. de C., era la siguiente: Habían sido designados cónsules Gabinio, incondicional de Pompeyo, y L. Calpurnio Pisón.

Iba a aparecer en escena un singular personaje, que había protagonizado un escandaloso suceso, dos años antes: El patricio P. Clodio. Con ocasión de la fiesta anual de la Bona Dea que se celebraba de noche, en casa del Pontífice Máximo y a la que sólo podían asistir las matronas romanas, un joven se introdujo vestido de mujer, quizás ayudado por Pompeya, la mujer de César, que era quien a la sazón ocupaba el cargo de Pontífice Máximo.

El joven fue descubierto, pese al vestido que llevaba e inmediatamente expulsado de la casa. El escándalo no pudo ser evitado.

César, que aquella noche estaba fuera de casa, tan pronto como tuvo conocimiento de lo ocurrido, repudió a su mujer.

Sacerdotes y magistrados se conmovieron y la sociedad romana vivió días de intensa curiosidad y vivos comentarios.

La actitud de César, después de haber repudiado a su mujer afirmando que sobre los suyos no debía pesar ni siquiera una leve sombra de sospecha fue, respecto del joven intruso que no era otro sino P. Clodio, bastante sorprendente.

Llamado a declarar César en las investigaciones que se iniciaron para aclarar lo ocurrido, manifestó que no sabía nada. Declaración que motivó la absolución de P. Clodio y que éste quedara profundamente agradecido a su salvador.

En cambio bien diferente fue la actitud de Cicerón en relación con este suceso.

Clodio había dicho, en su descargo, que la noche que ocurrió el escandaloso hecho él se encontraba fuera de Roma. Pero la coartada de Clodio fue destruida por Cicerón que manifestó que Clodio estaba en Roma en aquella fecha.

Las consecuencias de estas diferentes actitudes habían de dejar honda huella en el carácter apasionado y violento de Clodio. Nació en él un sentimiento de gratitud y de adhesión a César y un intenso odio hacia Cicerón.

Estos sentimientos influirían grandemente en los acontecimientos de aquel tiempo. Especialmente en el exilio de Cicerón, acusado de haber utilizado poderes excepcionales contra Catilina.

Habiendo presentado P. Clodio una propuesta para que los patricios fuesen admitidos al Tribunado de la plebe, fracasó en su intento y ello le hizo proclamar su decisión de renunciar a su pobreza, para, de éste modo, convertirse en plebeyo y poder alcanzar el Tribunado (1).

La carrera política no estaba en las filas de la nobleza, sino en el ambiente de la plebe y haciéndose adoptar por un ple-

beyo consiguió pertenecer a esta clase social y ser tribuno.

La ambición política de Clodio le hizo vivir una agitada actividad política que terminaría con su muerte violenta a manos de los seguidores de Milón.

El nombre de Clodio, con el que es más conocido, fue una modificación plebeya de su verdadero nombre de Claudio.

Según Tácito (2) P. Clodio representaría una notable y destacada excepción en la línea política de los miembros de la gens Claudia, firmemente conservadora. Pero, si es cierto que Clodio manifestó claras tendencias demagógicas, no puede asegurarse, generalizando, que los miembros de la gens Claudia mantuviesen a través de los tiempos una línea inalterable de soberbia oligárquica, de intransigencia aristocrática y de conservadurismo a ultranza.

Estos detalles relativos a tan singular personaje, contribuyen a explicar, en cierta medida, cuál fue su intervención en la evolución histórica del Derecho asociativo romano.

Publio Clodio, desde que tomó posesión de su cargo de tribuno, el diez de diciembre del año 59 a. de C., empezó a desarrollar una política legislativa con la que pretendía alcanzar una doble finalidad, por una parte, atraerse el apoyo y la adhesión incondicional de la plebe, y por otra, pulverizar la resistencia y la capacidad de reacción del partido conservador.

Propuso para ello cuatro leyes:

Una ley frumentaria en la que se disponía que las entregas de trigo al pueblo fuesen totalmente gratuitas.

Una ley que restablecía las asociaciones que habían sido prohibidas en el año 64 y que es la que ha de merecer especial atención en este estudio.

Una ley que prohibía la obnuntiatio (3).

Y una cuarta ley que limitaba el derecho de los censores a borrar de la lista del Senado a los senadores que fuesen considerados indignos.

Luego vendrían una serie de medidas contra Cicerón, el enemigo personal de Clodio desde el famoso episodio que ya ha sido relatado.

Aparte de las medidas legislativas propuestas y para preparar la realización de sus proyectos, Publio Clodio venía disponiendo desde algunos años antes el ambiente.

Parece casi seguro que fue a iniciativa de Publio la decisión tomada por Sexto Clodio de presidir personalmente y revestido de la toga praetexta, la celebración de los Juegos Compitalicios, a pesar del Senadoconsulto de que ya se trató y a pesar del tribuno L. Nínio, pero con el consentimiento del cónsul al que correspondían los fasces. Esto motivó que Cicerón dirigiera al cónsul L. Calpurnio Pisón, durísimas palabras: "Te atreverás todavía a hablar de tu consulado, es decir, que fuiste consul en Roma? ¿Acaso crees que el consulado consiste en los lictores y

en la toga pretexta, ornamentos que siendo tú cónsul, quisiste que tuviera también un Sexto Clodio? ¿Crees que las insignias de ese perro clodiano tuyo deben tomarse como propias de la dignidad consular?" (4).

P. Clodio hizo votar una ley que permitía no sólo restablecer los colegios que habían sido suprimidos sino que además permitía que se pudieran construir nuevos colegios sin limitación alguna.

De este modo, pudo proporcionarse Clodio bandas de indeseables que bajo la apariencia de miembros de las nuevas asociaciones estaban dispuestos a secundar por la violencia los más turbios designios del demagogo y tribuno Clodio.

Todo el que quería ser inscrito, se le enrolaba, cualquiera que fuese su condición, cualesquiera que fueran sus antecedentes; lo mismo obreros, que antiguos secuaces de Catilina, presos liberados de las cárceles y esclavos (5).

Los hombres así reclutados eran divididos en centurias y decurias.

Las medidas adoptadas por Clodio no encontraron una adecuada resistencia ni por parte de la aristocracia, ni tampoco por parte del mismo Cicerón, que más tarde hubo de arrepentirse de su condescendencia.

Sin embargo, en modo alguno pueden ser confundidos los nuevos colegios con los antiguos, ya que éstos se manifestaron, en

algunas ocasiones, favorables a Cicerón.

Otras puntualizaciones que es preciso hacer para ponderar debidamente las disposiciones adoptadas por Clodio, son las siguientes:

- 1a) Que al establecer nuevos colegios, Claudio no iba, en realidad, en contra del Senadoconsulto del año 64 a. de C. ya que este Senadoconsulto no podía referirse a colegios que, al tiempo de adoptar el Senado aquella disposición, no existían.
- 2a) Que, en íntima conexión con lo que acaba de señalarse, está la explicación de que Cicerón no se refiera más que a los antiguos colegios cuándo critica las actuaciones de Clodio "contra senatusconsultum" (6).
- 3a) La creación de nuevos colegios por parte de Clodio, no revelaba un deseo de fomentar el fenómeno asociativo o una actitud contraria a las restricciones impuestas a la libertad de asociación, sino el decidido propósito de proporcionarse bandas de hombres dispuestos a todo.
- 4a) Al dar una ley Clodio permitiendo fundar nuevos colegios, garantizaba a éstos contra las medidas concretas y específicas que pudieran adoptar los magistrados en orden a su disolución.
- 5a) Clodio parece que no se limitó sólo a dejar sin efecto las medidas adoptadas por el Senadoconsulto del año 64 a.

de C., sino que iba mucho más allá. Se trataba de conceder expresamente el derecho de asociación a los esclavos y de restringir las facultades de los magistrados para proceder a la disolución de las asociaciones por vía administrativa (7).

La política demagógica de Clodio pronto fructificó en graves y numerosos desórdenes. Cicerón, en una carta dirigida a su hermano Quinto (8) traza un vivo y riguroso cuadro de las dramáticas jornadas del mes de febrero del año 56, que obligaron al Senado a adoptar determinadas medidas.

Clodio había acusado a Milón delante de la asamblea del pueblo de ejercer la violencia y con ocasión de la comparecencia de Milón, el siete de Febrero se produjeron grandes desórdenes y violentos ataques contra Pompeyo, provocados por Clodio y sus bandas, terminando la sesión con una dura pelea entre las bandas de Clodio y de Milón.

A esto se refiere Cicerón cuando escribe: "El día siete, Milón compareció; Pompeyo habló o, al menos, era esa su intención, porque en cuanto se levantó los hombres de Clodio se pusieron a dar gritos y durante todo el discurso Pompeyo hubo de sufrir una obstrucción que no estaba solamente trecha de clamores, sino de injurias e interrupciones groseras".

Cuando acabó de hablar Pompeyo, sigue Cicerón: "Clodio subió a la tribuna y tales gritos le acogieron que ya no pudo controlar sus ideas, ni su lenguaje ni su fisonomía", mientras esto

duró "todas las injurias posibles y las coplas más obscenas fueron gritadas contra Clodio y Clodia".

El Senado se reunió el día nueve en el templo de Apolo y juzgó que lo que había pasado dos días antes constituía un atentado contra la seguridad del Estado.

El ambiente era sumamente tenso y el Senado hubo de tomar el acuerdo de disolver las sodalitates y decuriae, sin referirse únicamente a las bandas de Clodio.

El senadoconsulto es del día nueve de febrero del año 56 a. de C. y los sucesos relatados por Cicerón tuvieron lugar dos días antes.

En la carta de Cicerón se pone de relieve una relación de causa a efecto, entre los sucesos del siete de febrero y el Senadoconsulto del día nueve. Sin embargo, Cohn (9) consideró esta relación muy poco probable.

Para llegar a esta conclusión, Cohn se basó en el poco tiempo transcurrido entre el día de los sucesos y el senadoconsulto y también en el hecho de que después de la decisión del Senado las bandas de Clodio y de Pompeyo seguían actuando.

Cohn, siguiendo a Mommsen (10) creyó que el objeto de la disposición senatorial fue la disolución de los círculos políticos que se dedicaban a la compra de votos (sodalitates) y de las organizaciones (decuriae) a su servicio.

En cuanto al argumento de que el Senadoconsulto se dio casi

inmediatamente después de los sucesos ocurridos el nueve de febrero, con ocasión del proceso de Milón, no es preciso combatir lo como hace De Robertis (11) sosteniendo que la deliberación del Senado había tenido lugar tres días después de los sucesos. La distancia en el tiempo seguirá siendo mínima y, por otra parte, hay que tener en cuenta que, aunque la causa próxima del Senadoconsulto fuesen los referidos sucesos, la tensión política se venía advirtiendo con anterioridad a esa fecha [es muy probable que los senadores hubieran empezado a tomar conciencia de la necesidad de poner coto a maniobras subversivas protagonizadas por grupos de hombres facciosos. fig?

Más relieve tiene el argumento de que resulta difícil explicar cómo siendo el Senado, en aquel tiempo, el representante más caracterizado del partido conservador, privó a éste partido del medio más práctico y eficaz para dominar en las elecciones.

Ahora bien, este argumento se basa en una premisa que no ha podido ser demostrada y es la de que las asociaciones de carácter político sólo favorecían al partido conservador (12).

Aparte de la falta de prueba de la premisa, hay que hacer notar que es muy posible que hayan influido en la elaboración del argumento, que ahora se critica, dos circunstancias.

Una de ellas es que la resonancia de los desórdenes del siete de febrero, que erróneamente se consideran como causa única o casi única del Senadoconsulto del 56, ha enturbiado los planteamientos de la cuestión, por haberse producido dichos desórdenes

en un proceso intentado por el partido democrático contra Sestio, hombre político partidario de los conservadores.

La otra circunstancia es que no se tiene en cuenta la evolución sufrida por los colegios profesionales, evolución que Cohn reconoce (13) aunque no extraiga de ella las últimas consecuencias.

En cuanto a la existencia de bandas formadas después del Senadoconsulto, ello es fácilmente explicable si se piensa, siguiendo la teoría de Eliachevitch, que el Senadoconsulto fue en realidad una medida administrativa concreta (14).

Esto se demuestra, tanto porque la lucha contra los oradores de Isis continúa después del año 56 a. de C., como porque en el mismo Senadoconsulto se prevee la promulgación de una ley.

En definitiva, el Senadoconsulto no afectó a las asociaciones religiosas como tales ni a los colegios profesionales por el hecho de serlo, sino sólo en la medida en que, separándose de sus fines propios, intervinieron en las agitaciones políticas de fines de la República, y tampoco se aplicó exclusivamente a las asociaciones de carácter político por razón de su naturaleza.

Medidas de carácter general contra la corrupción electoral hubo varias y la historia de éstas medidas con las que se quería evitar las maniobras ilícitas encaminadas a triunfar en las elecciones o "ambitus" (15) es extensa.

Tito Livio (16) relata algunas acusaciones que se hacían a los patricios en tiempo de los tribunos militares L. Pinario, Sp. Postumio y L. Furio: "Por sus cábalas y artificios, los plebeyos no podían acceder a los honores. Si dejasen respirar al pueblo, si no le persiguiesen con sus ruegos y amenazas, éste al votar, se acordaría de sus defensores, se protegería y se apoderaría del poder. Decidiose que para acabar con las intrigas y maniobras, presentarían los tribunos una ley por la cuál se prohibiese a los candidatos brillantar sus togas" (17).

Sigue diciendo Tito Livio que una medida, de tan poca importancia, produjo, no obstante violentos debates entre el Senado y el pueblo pero los tribunos triunfaron al fin y se aprobó la ley, aunque parece que su vigencia fue breve.

En el año 358 a. de C. siendo cónsules C. Fabio Ambusto y C. Plautio Próculo, el tribuno de la plebe C. Petelio hizo aprobar un plebiscito conocido con el nombre de ley Poetelia de ambitu, que tenía por objeto poner fin a las peticiones de votos en las reuniones públicas o mercados.

También de esta ley habla Tito Livio (18) en los siguientes términos: "El tribuno C. Petelio presentó por vez primera al pueblo, con la aprobación del Senado, una ley contra las intrigas, creyéndose que con esta ley podría reprimirse especialmente la ambición de los hombres nuevos que acostumbraban a recorrer las ferias y los mercados en solicitud de votos". Sin embargo, parece que la ley no consiguió plenamente los efectos apetecidos.

En efecto, en el año 314 a. de C., parece que habían llegado a tal extremo las intrigas y las maniobras para alcanzar los honores, que se encargó al dictador Menio que llevase a cabo las oportunas investigaciones para descubrir las coaliciones que se formaban para obtener magistraturas.

El dictador no pudo soportar las sospechas que los nobles difundieron contra él y, en un rasgo de dignidad ofendida, abdicó la dictadura para someterse, él mismo, a la investigación, de la que salió absuelto.

Finalmente, como dirá Tito Livio (19): "Pronto la investigación no alcanzó más que a los nombres más oscuros y cesó ahogada por las intrigas y las facciones contra quienes se había decretado".

En el año 181 a. de C. una ley Cornelia Baebia (20) estableció la pena de incapacitación durante diez años para ostentar magistraturas, contra los responsables de actos ilícitos realizados para conseguir votos.

Aparte de otras disposiciones encaminadas al mismo fin, pueden citarse la ley Gabinia, uqé para evitar abusos introdujo el voto secreto en el año 139 a. de C., la Ley María, da dada durante el segundo consulado de Mario y en la que se establecía que los electores debían pasar por unos estrechos pasadizos a fin de que no les agobiasen los agentes electorales (21); el plebiscito propuesto por el tribuno Cornelio en el año 67 a. de C., en el que se castigaba la compra de votos y a los encargados de repartir

dinero entre los electores; la ley Tullia del año 63 a. de C., dada con la misma finalidad, etc.

Es en el año 55 a. de C., cuándo aparece una ley que, a la vez que trata de evitar la corrupción electoral, incide también notablemente en la historia del Derecho asociativo romano, es la Ley Licinia de sodalitiis (22).

N O T A S

- (1) Dión Casio, XXXVII, 51.
- (2) Tácito (I,4) dirá refiriéndose a Tiberio Nerón que aunque de edad madura y probado en las guerras era, al fin, de aquel linaje soberbio de los Claudios.
- (3) La obnuntiatio era la notificación que se hacía por un magistrado de haber observado signos desfavorables que impedían la celebración de determinados actos y concretamente el ejercicio de la soberanía popular. Los efectos de la obnuntiatio fueron regulados por las leyes Aelia y Fufia del año 154 a. de C. Leyes que fueron muy alabadas por Cicerón. Cfr. Har. resp., XXVII.
- (4) In Pisonem, X.
- (5) Se trataba en, definitiva, de colegios que sólo lo eran de nombre y en apariencia. Cfr. Cicerón, Pro Sestio, XV, 34.
- (6) Cicerón, Pro Sestio, XXII, 55.
- (7) Cfr. T. Mommsen, Le Droit penal romain, París 1907, p. 207, n. 2.
- (8) II, 3.
- (9) Zum römischen Vereinsrecht, Berlín 1873, p. 59.
- (10) De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1842, p. 60.
- (11) Storia della Corporazioni, I, Bari, p. 121, n. 23.
- (12) Cohn, ob. cit., p. 45.
- (13) Ob. cit. p. 63.
- (14) La personnalité juridique en droit privé Romain, Paris 1942, p.p. 234-235.
- (15) El nombre de ambitus venía de la costumbre que tenían los candidatos de pasear por el campo de Marte o por el Foro para obrener votos en tiempo de la República, ya que ambitus, de ambio, significa movimiento circular, dar vueltas.
- (16) IV, 25.
- (17) Las togas blancas propias de los candidatos eran a veces abrillantadas, para resaltar más su blancura, con determinadas sustancias a fin de atraer las miradas de los transeúntes y que, de este modo, prestasen atención a los candidatos.
- (18) VII, 15.

- (19) IX, 26.
- (20) G. Chaigne, L'ámbitus et les moeurs électorales des Romains, 1911.
- (21) Cicerón, De legibus, III, 17.
- (22) Sin embargo, Cfr. Zumpt, Das Criminalrecht der röm. Republik, Berlín 1869, II, 2, p. 399 y ss.

CAPITULO XI

La Ley Licinia.

LA LEY LICINIA

Existen numerosas dudas y polémicas acerca de cuál fue la naturaleza y alcance de la Ley Licina de sodaliciis.

La primera cuestión que se presenta es la de si dicha ley era aquella que anunciaba el Senadoconsulto del año 56 a. de C. o era una ley distinta.

Para Mommsen (1) la ley Licinia se refería sólo a los candidatos, mientras que la ley que anunciaba el Senadoconsulto harí referencia a los decuriati y a los sodalitia.

Es cierto que entre el Senadoconsulto y la ley Licina había transcurrido poco tiempo y que ello permite dudar de que se hubiera podido elaborar una ley de alcance general, pero este argumento es extremadamente vulnerable, ya que se ignora en que fase de elaboración se encontraba la ley cuándo el Senadoconsulto fue publicado.

Frente a la teoría de Mommsen se situó Bandini (2) que partiendo del término "hominibus" que figura en la ley, sostuvo que se trataba de una ley de alcance general, que no se refería únicamente a los jefes de los partidos culpables de corrupción, sino que también castigaba a los simples sodales, a los homines sodalicii.

La Ley Licinia castigaba la participación en asociaciones formadas para corromper las elecciones y manipular los votos y preveía varios delitos: Sequestrem esse, conscribere, largiri,

decuriare. Delitos que se definen a continuación.

Uno de los actos que servían para la corrupción electoral era el largiri. El verbo largior, que, en general, significa repartir generosamente, dar en abundancia, tiene también el sentido de granjearse la simpatía de la plebe con regalos. En el tema presente este término es un eufemismo, puesto que sirve para indicar la compra de votos.

Había veces que el comprador de los votos pagaba antes de que llegara el momento de la elección, lo que podía dar lugar a que, cuando llegase el momento de la votación, el elector, que ya había colocado de antemano, no votase. ¿cobrado?

En otras ocasiones, no se pagaba de antemano, sino que se prometía pagar cuándo se hubiese votado, lo que podía dar lugar a que después de haber votado en el sentido que se solicitó, el corruptor electoral no cumpliera la promesa hecha.

Cicerón (3) cuenta que entre las medidas que se propusieron para acabar con las maniobras ilícitas en las elecciones, figuró la de eximir de la obligación de pagar lo que se prometió a fin de obtener el voto.

Para superar la desconfianza que reinaba entre el que pagaba el voto y el que lo vendía, solía depositarse la suma prometida en poder de una persona de confianza. De este modo, se pensaba que podrían evitarse los dos riesgos anteriormente apuntados. Incumplimiento de la promesa de votar, luego de haber cobrado; incumplimiento de la promesa de pagar, luego de haber obtenido el voto.

La persona de confianza que recibía y se hacía cargo, en depósito, de la suma convenida, recibía el nombre de "sequester".

En algunos casos, el que prometía la suma se convertía, él mismo, en sequester, lo que evidentemente suponía una desviación del significado del término (4).

Al sequester se refieren no pocos textos literarios, entre ellos uno de Plinio el Joven (5).

"Conscribere" alude al reclutamiento de aquellos que estaban Te dispuestos a favorecer con sus votos a un candidato determinado y "decuriare" alude a la formación de asociaciones en el seno de las diferentes tribus con aquellos que ponían sus votos a disposición de sus jefes.

Cicerón defiende a Plancio de haber enrolado votantes (conscripsisse), de haber formado secciones (decuriasse) y de haber recibido depósitos (sequestrem fuisse) (6).

Existe un pasaje en el discurso Pro Plancio (7) en que Cicerón parece rechazar la aplicación de la ley Licinia al delito de ambitus.

Se trata de la reacción ciceroniana contra el acusador de Plancio, que había invocado la ley Licinia como una ley que castigaba la corrupción electoral. Dentro del contexto de una defensa, hay que considerar las afirmaciones de Cicerón y no como un modelo de precisión jurídica.

El acusador de Plancio no habría invocado la ley Licinia si las disposiciones de esta ley fuesen totalmente ajenas al delito de corrupción electoral.

Parece claro que el acusador de Plancio prefirió llevar el juicio al terreno de las asociaciones ilícitas, más bien que al de la corrupción electoral, porque así el procedimiento penal era más riguroso y había una mayor libertad para la elección de jueces, pero para ello era preciso que existiese una conexión entre la legislación acerca de las asociaciones y las disposiciones sobre los fraudes electorales; esta conexión existía y el enlace no era otro que el "crimen tribuarius sodaliciorum".

A este delito se refiere Cicerón (8) cuando dice que se da a los partidarios de Plancio un calificativo deshonroso al llamarles sodales, pues se trataba de amistades que estaban fundadas en un intercambio de servicios legítimos y no había, por tanto, nada delictivo en aquella campaña electoral: "Quos tu si sodales vocas officiosam amicitiam nomine inquinans criminoso".

En definitiva, lo que prohibía la ley Licinia era, más que el fraude electoral simple, el fraude electoral organizado, es decir, se trataba de evitar que utilizando la vía asociativa y, a través de ella, los pactos de compra de votos, se garantizase, en una cierta medida, que los votos prometidos se harían efectivos y que la suma de dinero que solía depositarse previamente, sería pagada en el momento convenido.

El crimen sodaliciorum adquirió una independencia formal, en Derecho penal, al lado del ambitus ordinario, también llamado ambitus communis (9).

Parece que la ley Licinia castigaba con la pena establecida para la violencia, no sólo la utilización por los candidatos de las sodalitates de electores, distribuidos por secciones y dirigidos por los encargados de repartir las recompensas, sino también la misma incorporación a las sodalitates y la renuncia a la libertad de votar en conciencia, que aquella incorporación suponía.

Menos grave era el ambitus communis. Entre otras razones porque el acusado podía recusar, según las normas que regulaban las quaestiones, los jueces propuestos por el acusador.

De aquí que Cicerón, al defender a Plancio, acusado por Juvencio Lateranense de haber utilizado sodalitates, constituidas con fines de manipulación electoral, en unas elecciones a ediles, se preocupase ante todo de demostrar que Plancio no había cometido corrupción electoral alguna por medio de sodalitates en las tribus y, sólo en un segundo término, se dedicase a demostrar la inexistencia del ambitus simple (10).

N O T A S

- (1) De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843, p.p. 42-73.
- (2) Appunti sulle Corporazioni, Milán 1937, p. 56 y ss.
- (3) Ad Att., I, 16, 13.
- (4) Cicerón, Pro Plancio, XVI, 38.
- (5) Ep. VI, 19.
- (6) XVIII, 45.
- (7) XV, 36.
- (8) Pro Plancio XIX, 46.
- (9) T. Mommsen, Le droit penal romain, Paris 1907, (trad. franc.) III, p. 203.
- (10) E. Costa, Cicerone Giureconsulto, Roma 1964, p. 95.

CAPITULO XII

La Ley Julia sobre los colegios

LA LEY JULIA SOBRE LOS COLEGIOS

Si el Senadoconsulto del año 64 a. de C. fue más bien una medida de carácter administrativo y la ley Licinia de Sodali-
ciis se refería concretamente a la utilización de las sodali-
tates como medio de organizar la corrupción electoral, es en
tiempo de Julio César cuándo aparece una ley de carácter gene-
ral que afecta de modo directo a la existencia de los colegios.

De esta ley tenemos referencias en Suetonio (1) y en Fla-
vio Josefo (2).

Suetonio cuenta que Julio César mandó disolver todas las
asociaciones, salvo aquellas que existían desde antiguo.

Ante todo hay que hacer notar que Suetonio no nos dice que
procedimiento utilizó Julio César para suprimir las asociacio-
nes, es muy posible que lo hiciese por medio de una ley, pero
nada se puede afirmar con seguridad en este sentido (3).

Flavio Josefo, por su parte, dice que César abolió todas
las asociaciones religiosas de cultos extranjeros existentes en
Roma, con excepción de las asociaciones religiosas de los he-
breos. Por ello el procónsul de Asia Servilio Valia autorizó
las asociaciones de los judios en Paros (4).

La primera cuestión que se plantea acerca de las medidas
adoptadas por César, es determinar la relación que guarda la
decisión que se adoptó con las características del personaje
político.

E. Pais (5) creyó que siendo César hombre de tendencias liberales y jefe del partido popular, sintió la necesidad de disolver aquellos colegios que se habían ido multiplicando y que por propia experiencia conocía muy bien, pero al mismo tiempo reconoció la legalidad de aquellos que se remontaban a tiempos antiguos.

En cuanto al ambiente social, hay que destacar que, aparte de las tubulencias políticas y la corrupción electoral de fines de la república a que ya se ha hecho referencia al tratar del ambitus y de las medidas legislativas a que dió lugar, tiene especial importancia la progresiva decadencia del sentimiento religioso y el abandono de las ceremonias del culto, que aparece incidiendo en la evolución de las instituciones jurídicas romanas y que ha servido para explicar el origen de la usucapio pro herede (6).

De este ambiente social pudo decir un historiador (7) que la revolución y la anarquía habían producido los mismos efectos que, según Tucídides, se habían producido en Grecia durante la guerra del Peloponeso.

El efecto de esa anarquía social parece haber trascendido a Roma, en algún modo, a través de los Graeculi que, según el testimonio de Cicerón, acompañaban a Clodio (8).

Pero el más grave problema planteado al considerar la política de César en materia de asociaciones, es el de determinar si hubo una ley en tiempo de César y otra en tiempo de Augusto, es

decir, si hubo una Ley Julia o hubo dos.

El tema de la paternidad de unas leges Juliae no es la única vez que se plantea, ya que también se planteó a propósito de la ley Julia sumptuaria, de la ley Julia de maiestate, de la Ley Julia de vi, de la Ley Julia de Cessione bonorum, etc.

Gran parte de la doctrina, comparando el texto de Suetonio, últimamente citado, con otro del mismo autor (9) piensa que hubo dos leyes Julias, una de César y otra de Augusto.

En el texto relativo a la vida de César, Suetonio, después de haberse referido a una serie de medidas adoptadas por aquél, como el establecimiento de ochenta mil ciudadanos en las colonias de ultramar, la exigencia de que los ganaderos tuviesen entre sus pastores una tercera parte de hombres libres en edad juvenil, al menos, la disposición de que los deudores pagasen sus deudas a los acreedores tasando las propiedades de aquellos al precio que cada una de ellas hubiese costado antes de la guerra civil y deduciendo del total de sus deudas lo que hubiesen pagado a título de intereses, etc., dice, como ya se indicó, que César mandó disolver todas las asociaciones, salvo aquellas que existían desde antiguo.

Las medidas de César que Suetonio expone precedentemente no son de gran utilidad para aclarar el significado y alcance de la medida encaminada a la supresión casi general de las asociaciones, ya que los motivos que inspiraron las anteriores medidas no siempre son suficientemente diáfanos.

Por ejemplo, a propósito de la obligación impuesta a los ganaderos para que tuviesen entre sus pastores una tercera parte, al menos, de hombres libres en edad juvenil, se duda de si se trataba de proporcionar ocupación a una buena parte de la población libre o bien lo que se pretendía era evitar la concentración de esclavos en el pastoreo, por el peligro que podía suponer la presencia de un gran número de siervos armados, ya que los pastores llevaban armas para defenderse y los esclavos, en aquél tiempo, estaban dispuestos, muy frecuentemente al motín y a la sublevación y también se ha pensado que quizás fue se el motivo de la medida atraer a los soldados a las ocupaciones civiles.

Pero si analizando el contexto de las disposiciones, entre las cuales figura la relativa a la supresión de las asociaciones, no se obtienen indicaciones que puedan ilustrar adecuadamente acerca de las causas que inspiraron la decisión de César, algo semejante sucede considerando la disposición en si misma, tal como la relata Suetonio, ya que el relato se caracteriza por su brevedad y concisión y carece de toda referencia expresa a la antigüedad exacta de los colegios que fueron conservados.

En el texto de Suetonio relativo a la vida de Augusto, que ya se citó, se observa un planteamiento algo diferente. Suetonio está hablando de una serie de medidas adoptadas por Octavio, ante una situación que se describe de la siguiente forma: "Gran número de indeseables se mostraban en público con un puñal en el cinto, según ellos para defenderse. En el campo se detenía a los viajeros y se les encerraba en los barracones destinados a los siervos,

sin distinguir entre libres y esclavos y se fundaban bajo el nombre de colegios nuevos gran número de asociaciones con fines delictivos. Algunos de estos excesos procedían de las licencias y costumbres de las guerras civiles pero también algunos habían surgido en épocas de paz" (10).

Al exponer el último de los excesos se advierte la evocación por parte de Suetonio de lo sucedido en la época de Clodio, cuando éste se instaló en el Foro y, con un registro en la mano, iba inscribiendo en él a todo el que se presentaba, enrolando a hombres de muy diversa procedencia, que luego eran agrupados en centurias y decurias, a las que se aplicó el honorable nombre de colegios (11) y que sirvieron al tribuno para su lucha contra Cicerón, Catón y Pompeyo.

Después de haberse citado algunos de los desórdenes y excesos que había en tiempo de Augusto, viene la exposición de las correspondientes medidas que para evitarlos fueron adoptadas. Augusto, sigue diciendo Suetonio, suprimió el vagabundeo, instalando estaciones en los lugares estratégicos, hizo inspeccionar los ergástulos que eran los barracones donde se encerraba a los esclavos que se capturaban y disolvió todos los colegios con la excepción de los antiguos, que habían sido legítimamente tm establecidos.

La medida que Suetonio atribuye a Augusto tiene un fundamento y una explicación más claros y convincentes que los que el mismo Suetonio atribuye a César. Augusto trató de evitar que ciertas asociaciones se convirtiesen en nidos de delincuentes.

La intención no es nueva, pero la dificultad estriba, en caso de aceptarse la existencia de dos leyes Julias, una de César y otra de Augusto, en explicar como en el corto espacio de tiempo que media entre uno y otro gobernante, fue necesario dar dos leyes sobre una misma materia.

Se hace forzoso, ante todo aclarar qué acontecimientos hubieron de producirse en tan breve período para que fuese preciso renovar una ley que ya se había dictado anteriormente suprimiendo la casi totalidad de las asociaciones.

Para Mommsen (12) las "plures leges" de que habla Asconio al comentar el discurso de Cicerón en favor de Cornelio, diciéndo que suprimieron las asociaciones, excepto algunas pocas y determinadas, no pueden ser otras que las leyes de César y de Augusto. Sin embargo, Mommsen no sostiene, en este punto, una afirmación vigorosa, ya que dice "Al menos, no conocemos otras".

Más convincente es la tesis de que los colegios suprimidos por César habrían vuelto a resurgir, como consecuencia de las turbulencias que se produjeron a su muerte. Es decir, es la tesis de que el escaso tiempo transcurrido entre César y Augusto, fue vivido con tanta intensidad, dejó una huella tan profunda en la historia de Roma que prácticamente fue como si hubiesen pasado muchos años (13).

Ante tal estado de cosas Augusto no había tenido más remedio que dar una nueva ley.

Eliachevitch enfoca de otro modo la relación entre la ley de

Julio César y la de Augusto. Entiende que César adoptó una medida más radical que la del Senadoconsulto del año 56 a. de C., pero no se ocupó de regular la fundación de las asociaciones. Fue Augusto el que abordó este problema (14).

Hay que hacer notar frente a la tesis de Eliachevitch que este autor se funda para hacer dicha afirmación en una prueba que él califica de prueba directa (15).

Esta prueba no sería otra que las palabras de Suetonio contenidas en el ya mencionado pasaje relativo a la vida de Augusto: "Se fundaban bajo el título de colegios nuevos gran número de asociaciones con fines delictivos".

Este argumento sería incontestable si el hecho de fundarse nuevos colegios, en tiempo de Augusto, fuese debido a que César solamente se ocupó de suprimir los existentes, pero no de impedir que se fundasen otros, mas no resulta plenamente convincente si los nuevos colegios se fundaban no aprovechando una laguna legislativa, sino en contra de una disposición legal.

En favor de esta última interpretación pueden aducirse dos razones.

En primer lugar, basta con observar que la fundación de nuevos colegios figura en la relación de Suetonio entre la lista de "abusos que deterioraban el orden público". La fundación de nuevos colegios, no contemplados por la medida de César no podría calificarse de abuso. En cambio, si sería un abuso y un exceso que, a

pesar de estar prohibidas, esas asociaciones se constituyesen.

En segundo lugar hay que tener en cuenta que Suetonio lo que dice es que en tiempo de Augusto se fundaron "plurimae factiones". Aunque se suelen traducir estas palabras por colegios o asociaciones, el término "factio" es despectivo y peyorativo y en el mismo Suetonio suele emplearse para designar una cuadrilla de cocheros que actuaba en el circo. Este sentido se apreciaba aún más claramente en el adjetivo "factiosus" derivado de "factio".

Por tanto, las nuevas asociaciones que se fundaban no lo hacían amparándose en el hecho de que César no se hubiese ocupado de prohibir la aparición de nuevos colegios, sino que los nuevos colegios se constituían ilegalmente.

La tesis de Eliachevitch quizás deba entenderse no en el sentido de que las asociaciones que surgieron después de César se amparaban en la falta de prohibición de nuevos colegios, sino en el sentido de que César disolvió las asociaciones existentes y se limitó únicamente a prohibir que se fundasen nuevos colegios, pero que Augusto el que puntualizó los trámites y los requisitos con arreglo a los cuales podían fundarse. T fue

Para Orestano (16) la legislación, inspirándose en motivos políticos, fue sucesivamente limitando la libertad de las asociaciones.

Primero el Senado; después César y, más tarde, Augusto, disolvieron muchos colegios cuya actividad resultaba peligrosa para

el orden público.

No faltan, sin embargo, autores que, en contra de las corrientes doctrinales expuestas, niegan la existencia de dos leyes, una de César y otra de Augusto.

Entre estos autores puede citarse a Pernice (17) quién, sin embargo, no atribuyó, con seguridad, la única ley a César o a Augusto.

Al negar la existencia de dos leyes y atribuir la única ley a Augusto, surge inmediatamente una cuestión y es la de la calificación jurídica de la medida adoptada por Julio César.

Planteadas así las cosas puede convenirse en que la medida adoptada por César y de la que informa Suetonio, fue de rango inferior a la ley y, en un sentido amplio, puede calificarse como medida de carácter administrativo, lo que lleva a la investigación del carácter específico de la medida adoptada o, si se prefiere, a la investigación de cuál fue el título de poder, de los varios de que estaba investido César, en base al cuál tomó la decisión.

Existen varias opiniones sobre este punto.

Cohn entiende que César actuó en calidad de Praefectus morum (18).

Cohn se funda en dos razones para defender su punto de vista.

En primer lugar considera que cualquier decisión encaminada a suprimir asociaciones tenía que resultar impopular, dada la simpatía de que gozaban los colegios entre los plebeyos y, ante el temor de encontrarse con un fuerte rechazo por parte del pueblo, César habría optado por no proponer una ley en la asamblea comicial.

En segundo término, piensa Cohn que si César hubiese propuesto una ley comicial, Augusto no hubiera acudido de nuevo a un procedimiento legislativo de esta naturaleza.

Al primer argumento esgrimido por Cohn, puede objetarse que en la inestable situación de fines de la República y ante la utilización de las asociaciones por diferentes sectores de la vida pública, no puede identificarse la aversión o el favor de los colegios con un determinado partido político, y en cuanto al segundo argumento, puede considerársele insuficiente, porque la duplicidad de leyes puede estar indicada no por una diferencia de procedimiento, sino por una diversidad de objetivos.

Bandini (19) opinó que César no se había interesado en el problema de los colegios con una medida de carácter general, sino que sólo se ocupó de las asociaciones de culto, por su condición de Pontífice Máximo.

Según este enfoque de Bandini, los colegios que aparecieron después de César no es que surgiesen al calor de las turbulencias políticas de la época, sino que su supresión no había sido contemplada en la disposición de César por tener ésta un carácter limitado.

Aceptando la tesis de Bandini, queda sin la debida explicación el calificativo de factiones que emplea Suetonio y a que antes se ha hecho referencia, ya que se trataría de simples asociaciones de fines privados, perfectamente legitimadas.

Monti (20) entiende que sólo hubo una ley, pero no de Augusto, sino de César y que lo que hizo Augusto, en realidad, fue llevar a cabo un simple acto administrativo, con el cuál se disponía la observancia y cumplimiento de la ley de César.

A esta conclusión de Monti se puede oponer que nada hay en el texto de Suetonio que permita entender que Augusto, con un simple acto administrativo, se limitó a imponer la observancia de la Ley de Cesar.

Karlowa (21) atribuyó la medida a César en su calidad de dictador encargado de proceder a la reforma de la constitución.

Saleilles (22) muestra una prudente reserva al decir que cuando César ocupó el poder su primer cuidado fue continuar la política de Cicerón, suprimiendo los colegios y asociaciones existentes, salvo excepciones en favor de los colegios respetados y conservados por el Senado en el año 64 a. de C.

Ante la escasez de fuentes de información acerca de la medida adoptada por César, ya que éstas fuentes se limitan casi exclusivamente al pasaje de Suetonio, Saleilles reconoce que aunque la creencia general es la de que César actuó a través de una Ley, la ley Julia, no existe seguridad absoluta de que así fuese.

De Robertis no encuentra razones sólidas para sostener que César no actuó por medio de una ley.

Este autor observa, en primer lugar, que resultaría extraño que César no hubiese acudido a una ley, tratándose de una materia que venía siendo regulada por medio de leyes y senadoconsultos.

Existe el testimonio de Asconio, en su comentario al discurso de Cicerón Pro Cornelio (23) quién al referirse a las diferentes medidas represivas adoptadas contra las asociaciones, alude únicamente a leyes y senadoconsultos, sin hacer mención alguna a otras fuentes, como los adictos. Te

En cuanto a la primera parte del razonamiento de De Robertis, hay que observar que para poder afirmar que la materia de las asociaciones venía siendo regulada por leyes y senadoconsultos sería preciso disponer de una abundante información sobre el aspecto formal de las decisiones de César y esa es precisamente la cuestión.

Por lo que se refiere a la segunda parte del argumento, no es imposible pensar que Asconio está empleando el término leges en un sentido amplio en el mismo sentido en que lo emplea Gayo al comienzo de sus Instituciones y al hablar de leyes y costumbres como los dos términos que comprenden y resumen todas las fuentes del Derecho.

Coli afirmó que para proceder a la disolución de los colegios no era absolutamente preciso utilizar una ley, sino que la

disolución podía llevarse a cabo con un senadoconsulto o mediante la orden de un magistrado dotado de imperium (24).

Sin embargo, Coli después de haber formulado esta afirmación dice que puede verse una relación entre la disolución de los colegios dispuesta por Augusto y una ley Julia anterior. La clave de esta relación la cree descubrir, el mencionado romanista, en el hecho de haber excluido Augusto además de los collegia antiqua a los collegia legitima. El calificativo de legitima aplicado a ciertos colegios exigiría, según Coli, una ley anterior y esta sería la ley Julia. En definitiva sugiere la inexistencia de una segunda ley.

Sin embargo, el razonamiento basado en el empleo del calificativo legitima no resulta muy convincente, por varias razones.

Ya Mommsen (25) había observado que el término legitimus podía tener un significado muy amplio, podía significar "conforme al ordenamiento jurídico". Es cierto que a propósito de la distinción entre judicia legitima y judicia imperio continentia, se formularon diversas interpretaciones de la significación de legitimus (26).

Pero aún aceptando que legitimus, en este caso collegia legitima, quiera decir colegios autorizados por una ley, siempre podría dudarse de qué ley se trataba.

En opinión de De Robertis la ley de la que deriva el calificativo de legitimus no podía ser la ley Licinia de sodaliciis por

dos motivos:

Por una parte, porque dado el carácter especial de la ley Licinia que se refería solamente a un tipo de asociaciones (las políticas), sin prejuzgar para nada el principio general de libertad de asociación, no se habían podido denominar legitimi los colegios no afectados por dicha Ley, y, por otra parte, porque en el caso de derivarse legitimi de la ley Licinia, también podían haber recibido este nombre los colegios que conservó Cesar (27).

En cuánto al primer orden de ideas hay que tener en cuenta dos cosas: Una, que es un razonamiento basado en el supuesto alcance de la ley Licinia, o, lo que es lo mismo, una hipótesis fundada sobre otra hipótesis, aunque sea ésta una hipótesis bien fundada y también que no era preciso para que ciertos colegios pudieran ser denominados legitimi que la ley Licinia se hubiese ocupado expresamente de ellos, ya que al no estar prohibidos, pudieran ser considerados implícitamente y a sensu contrario permitidos o, si se prefiere, legitimados.

Pero hay más, el segundo orden de ideas: "qué en caso de derivar legitimi de la ley Licinia, también podían haber recibido ésta denominación los colegios conservados por César", supone que no se considera definitivo el primer argumento, sino que se acompaña otro con carácter subsidiario y si se desvirtúa el primer argumento, la conclusión a que se llega es "que si pudieron ser así llamados los colegios conservados por César". Contra lo cuál no supone nada que Suetonio no los llamase así. El hecho de

que Suetonio no emplee el calificativo de legitimi a propósito de los colegios conservados por César y si a propósito de los conservados por Augusto, no tiene trascendencia alguna, porque se trata de una descripción y no de una definición jurídica (28).

Solazzi (29) se ha ocupado con detalle del empleo de legitimus para indicar no sólo lo que procede de la Ley, sino también lo que procede de un senadoconsulto. Certestamente, afirma éste autor, que lex y legitimus perdieron su significado técnico con la equiparación que ha dejado en los textos vestigios abundantes y no todos descubiertos (30).

De aquí que legitima aplicado a los collegia, conservados por Augusto, pudiera indicar también en teoría, los colegios permitidos o conservados por un senadoconsulto, sobre todo cuando el autor de la referencia no es un jurista, que pudiera sentir el escrúpulo de una mayor precisión técnica, sino un historiador como Suetonio.

Finalmente, puede decirse, continuando con la relación de las interpretaciones que se han formulado acerca de legitima, que De Rossi (31) creyó que con el aludido calificativo se querían indicar los collegia que en lo sucesivo fuesen establecidos legalmente, no aquellos que fueron autorizados antes de la Ley Julia.

Aparte de cuál sea el significado de Legitima y las consecuencias que de ese significado puedan deducirse al efecto de caracterizar y precisar el alcance de la medida adoptada por Julio César, existe otra cuestión: ¿Cuáles fueron los colegios conservados?

Herzog (32) creyó que fueron tres los tipos de colegios conservados: 1º los antiguos colegios de artesanos; 2º las sodalitates religiosas y 3º los colegios funerarios.

Parece evidente que entre los colegios conservados había antiguos colegios de artesanos, pero en cuánto a las otras clases de asociaciones existen fuertes dudas.

Como señaló Waltzing (33) para aceptar el mantenimiento de los colegios funerarios tendría que estar demostrado que ya existían tales colegios y en cuánto a las sodalitates religiosas, si se supone que eran las fundadas por el estado, evidentemente no encajarían en el término collegium.

Para el estudio de la Ley Julia es fundamental partir del texto que se contiene en una placa de mármol descubierta en una construcción funeraria correspondiente a la época de Augusto y que contiene la siguiente inscripción:

"dis . manibus . collegio . Symphoniacorum . qui . sacris . publicis . praestu . sunt . quibus senatus c. c. c. permisit . E lege Julia ex auctoritate Aug. ludorum causa" . (34) .

La primera cuestión que surge es la de desarrollar las siglas c.c.c.

Mommsen en un artículo publicado en el año 1850, sostuvo que debía leerse así: (c)oire (c)onvocari (c)ogi (35), basándose en la vieja fórmula "comitiales dies apellantur quum populus coire convocari cogi potest ac lege Aqi" (36)

Después de Mommsen se abrió la polémica.

Adolf Berger, en la revista Epigraphica (37) sostuvo una interpretación de las siglas c.c.c. diferente de la de Mommsen.

Para Berger estas siglas debían desarrollarse así: "collegium coire convenire" o bien "collegium constituere coire".

Berger puso de relieve que aparte de la fórmula de los fasti praenestini "dies comitiales..." no existe ningún ejemplo de la lectura propuesta por Mommsen, lo cuál es exacto.

El fallo de Berger es que no puede citar ningún ejemplo de la fórmula que él propone.

Es cierto que relacionar la asamblea de un colegio con los comicios del pueblo resulta algo forzado, como hace notar Berger, pero menos fuerza tiene el argumento esgrimido por este mismo autor de que los senadoconsultos de la época de Augusto no podrían estar concebidos en un estilo tan arcaico como haría suponer la hipótesis de Mommsen.

Berger citó también un texto de Ulpiano (38) como prueba de que las palabras "coire convocari cogi" no podían significar lo que Mommsen quería que significasen. Sin embargo, Duff (39) afirmó que el texto puede también interpretarse a favor de la opinión de Mommsen.

De todos modos la fórmula en la que aparece "coire convenire" y que sugirió Berger, puede suponer un cierto progreso respecto de la lectura de Mommsen.

En este sentido se pronunció Ch. Saumagne.

Este autor destaca que en la inscripción, de que se trata, el Senado concede ciertos derechos (Senatus permisit) y precisamente el objeto, la naturaleza y la extensión de esos derechos serían definidos y calificados por las tres letras c.c.c.

Ahora bien, la fórmula en que se apoya Mommsen no concede derechos, sino que se limita a señalar los días durante los cuales el pueblo puede ejercer un derecho que ya tiene, el de coire, de dónde deriva el nombre de comitia. Durante ese tiempo una autoridad puede convocar al populus (convocare) y como consecuencia de esta convocatoria, reunirlo (cogere) (40).

En cuanto al texto de Ulpiano, citado anteriormente, su lectura es la siguiente: "Si non erit a testatore electus tutor aut gerere nolet, tum is gerat cui maior pars tutorum tutelam decreverit. Praetor igitur iubebit eos convocari, aut si non coibunt, aut coacti non decernerent causa cognita ipse statuet qui tutelam geret".

El uso que hace Ulpiano de las palabras "coire, convocari, cogi" no supone ninguna confirmación de la tesis de Mommsen; ni confirmación ni rechazo. Por eso el mismo texto pudo ser aducido con opuestas finalidades por Berger y por Duff, como ya hubo ocasión de indicar.

Según ese texto, el pretor puede convocar a los tutores, pero el hecho de ser convocables no les confiere ningún derecho ni les supone obligación alguna (41).

Por todo ello, en la interpretación de las letras c.c.c. preferimos seguir la tesis de Saumagne.

La primera letra, representaría la palabra coire, por referencia al texto de una famosa inscripción de Lanuvio, a que más adelante habí^a ocasión de dedicar un estudio más detallado. Texto que precisa la noción jurídica de coitio en relación con collegium. [r

La segunda letra indicará convenire y la tercera colligi, con el sentido de ser incorporado.

El poder público se preocuparía sobre todo del derecho que pueden tener los individuos de adherirse a una asociación, más que de la creación de la sociedad misma.

La creación nacía de un acuerdo de voluntades. El poder público sólo intervendría para controlar la facultad de los individuos de someterse a las obligaciones de una lex collegii que ellos no hicieron, sino que hicieron los fundadores de la asociación. O, lo que es lo mismo, el poder público controlaría la facultad de ser adlecti, de ser collecti, en definitiva, de convertirse en collegae.

También se ha discutido acerca de la fecha de la Ley Julia.

Para algunos autores la ley sería del año siete a. de C. (42).

Rotondi (43) hace remontar dicha ley, aunque no muy convencido, al año 21 a. de C., época en que Augusto desarrolla una notable actividad de carácter legislativo.

De Robertis (44) sitúa la ley, no en un año determinado, sino en el período de tiempo comprendido entre los años 49 y 44 a. de C., período de tiempo en el que César desarrolla una gran actividad como estadista. La cuestión de la fecha de la ley Julia sólo puede resolverse en base a dos supuestos: Atribución de la ley a César o a Augusto y exacta identificación del colegio de los symphoniaci.

Partiendo de suponer que César se preocupó de suprimir los colegios y Augusto de legislar sobre los requisitos para la fundación de estas entidades y atribuyendo las normas a que se refiere la inscripción a Augusto, puede fijarse un período comprendido entre los años 21 y 7 a. de C., dentro del cuál la ley se publicaría.

Mayor aproximación en cuanto a la determinación de la fecha no parece posible. A partir del año 21, es cierto que Augusto desarrolla una gran actividad legislativa, por lo que puede presumirse que en ese tiempo acometió la regulación de los collegia, pero como, por otra parte, representaba una decisión de la máxima importancia política, no es probable que demorase mucho la realización del proyecto.

Por lo que se refiere al término symphoniacus hay que distinguir entre su aplicación a los flautistas que en las naves regulaban con su música el ritmo de los remeros (45) y su utilización para referirse a los músicos que se empleaban en las casas de buena posición económica, para actuar en fiestas y banquetes.

Ahora bien, en la inscripción en la que se alude a la ley Julia, ciertamente que no se trata de los flautistas utilizados en las naves y tampoco de los músicos empleados en las viviendas particulares, sino de los músicos que participaban en los actos de culto. A ésta conclusión se llega porque la autorización se concede ludorum causa.

Después del régimen establecido por Augusto, aparecen en las fuentes epigráficas varios colegios autorizados por un senadoconsulto.

En este punto surge ya una cuestión: ¿Se trataba de un senadoconsulto general que se aplicaba a cada colegio que se constituía, o, por el contrario, para cada colegio hacía falta un senadoconsulto?.

Mommsen sostuvo inicialmente la opinión de que se trataba de un senadoconsulto único (46). Esta misma teoría sostuvo Wallon (47).

Sin embargo, es más aceptable la teoría mantenida, entre otros, por Waltzing (48).

Resulta muy difícil admitir, dada la variedad de colegios, la existencia de un único senadoconsulto, pero, aparte de ello, el texto relativo al colegio de los symphoniaci habla de un senadoconsulto que se basa en la ley Julia "permisit e lege Julia". Es decir, se admite la posibilidad de varios senadoconsultos que desarrollan las normas contenidas en la Ley Julia.

Esta posibilidad aparece confirmada por un texto del Digesto en el que se alude a una multiplicidad de senadoconsultos (49).

El colegio tenía que solicitar la autorización del Senado, pero lo que no aparece tan claro era la intervención del Príncipe.

El hecho de que en la inscripción relativa a la ley Julia se diga "quibus senatus c.c.c. permisit e lege Julia ex auctoritate Augusti" no es una prueba decisiva en el sentido de que siempre fuese el Príncipe el que tenía que someter al Senado la petición del colegio, lo único que puede probar es que en aquél caso, así se hace. Cuestión distinta es la de por qué en este caso se menciona al autor de la propuesta (50).

Tampoco puede conducir a la conclusión de que siempre el Príncipe sometía al Senado la petición del colegio, el famoso pasaje del Panegírico de Plinio el Joven, en el que se lee: "Antes, por muy mezquina e insignificante que fuese la cuestión de la que se tratara en el Senado, los oradores de turno no dejaban de extenderse en elogios a los príncipes. Teníamos, por ejemplo, que deliberar sobre el aumento del número de gladiadores o sobre la creación de una asociación de artesanos y como si hubiesen avanzado las fronteras del Imperio, dedicábamos en honor de los Césares, unas veces enormes arcos o inscripciones honoríficas, que excedían de los frontispicios de los templos, otras veces hasta un mes o más de uno (51), les eran de-

dicadas. Este pasaje revela, ciertamente, varias cosas:

En primer lugar, se reputa asunto no demasiado importante la creación de un colegio de artesanos. Esto prueba que ya habían quedado lejos, si no en el tiempo, si en el ambiente político, los desórdenes de fines de la República, cuándo la creación de nuevos colegios podía representar graves amenazas para el orden público.

También revela una dura crítica contra la adulación que se hacía por parte de los senadores y la torpe complacencia de los emperadores ante estas muestras de adulación. En este sentido escribe Plinio lo siguiente (52): "Ellos lo consentían y se alegraban como si lo hubiesen merecido de verdad".

En modo alguno el texto de Plinio dice que la propuesta tuviera que partir del Príncipe.

En definitiva puede afirmarse que la Ley Julia fue aplicada, completada e incluso a veces modificada, por una serie de senadoconsultos y de constituciones imperiales de los que no tenemos la deseable información.

Si disponemos, en cambio, de dos textos de juristas clásicos que arrojan una relativa luz sobre el desarrollo de la ley Julia. Un texto es de Gayo y otro de Marciano.

En el texto de Gayo (53) tomado del libro tercero de sus comentarios al Edicto Provincial, se lee: "No se concede a todos el poder constituir una sociedad, un colegio, u otra corporación semejante, porque ésto se encuentra regulado por leyes, senado-

consultos y constituciones imperiales".

En el texto de Marciano (54) se dice lo siguiente: "En suma, si se hace una asociación o una corporación cualquiera, sin ajustarse a la autoridad del senadoconsulto y del Príncipe, el colegio actúa contra el senadoconsulto y contra las constituciones". Mas estos textos no nos informan con detalle acerca de los requisitos exigidos para la autorización. Lo que si puede desprenderse del texto de Gayo es que no fueron muchos los colegios autorizados.

Tal conclusión se obtiene de la continuación del texto de Gayo anteriormente citado, donde se dice: "En muy pocos casos se han permitido tales corporaciones".

Sin embargo, si la verdadera lectura de Gayo no fuese la de: "neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur" sino la de "neque societati neque collegio neque huiusmodi aliis corpus passim omnibus habere" (ni a una sociedad ni a un colegio ni a cualquier otra entidad se le permite, sin más, tener corpus) resulta que se da más rigor técnico a corpus, como capacidad corporativa, al mismo tiempo que se suaviza el rigor de la limitación (55).

En caso de aceptarse la anterior reconstrucción, la continuación del pasaje: "Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora" no debe leerse: "En muy pocos casos se han permitido tales corporaciones" sino "a muy pocas entidades se les ha concedido capacidad corporativa".

En las autorizaciones se tenían en cuenta dos factores, la falta de peligrosidad y la utilidad.

Ahora bien ¿cuál sería la solución en caso de que esos dos factores entrasen en conflicto? ¿primaría la seguridad del Estado sobre la utilidad del colegio o a la inversa?

Parece que primaría la seguridad del Estado. De nuevo es oportuna la cita de otro texto de Plinio el Joven. En este caso se trata de una carta de Plinio al Emperador Trajano (56). Plinio escribió: "La ciudad libre y federada de Amiso se gobierna, gracias a tu benevolencia, por sus propias leyes. Se me ha hecho llegar una memoria sobre pago de socorros mutuos que yo acompaño a esta carta a fin de que tú, señor, decidas acerca de lo que creas conveniente permitir o prohibir y en qué medida".

La respuesta del Emperador fue clara y terminante: "A los habitantes de Amiso, de los cuáles acompaños una memoria a tu carta, puesto que sus leyes, en conformidad con los términos del tratado, les permiten tener una asociación de socorros mutuos, Nosotros no les podemos impedir que la tengan y, con mayor razón, si una sociedad de este tipo no le sirve para organizar turbulencias y reuniones ilícitas, sino para acudir en ayuda de los más necesitados. En las otras ciudades que están sometidas a nuestro poder, una cosa así debe ser prohibida" (57).

Resulta evidente que la preocupación de Trajano se dirige en primer lugar a la posibilidad de que una asociación pueda ser

utilizada como medio de alteración del orden público.

Si en lugar de plantearse la cuestión a propósito de una ciudad libre, se hubiera planteado con relación a una ciudad sometida al poder imperial, la prohibición se habría indudablemente producido, no la prohibición de la sociedad en si misma, sino la prohibición encaminada a impedir las actividades religiosas. Es en este sentido como ha de interpretarse el final de la carta de Trajano a Plinio: "Rex huiusmodi prohibenda est". TS

N O T A S

- (1.) Cesar, 42
- (2) Antigüedades Judaicas, XIV, 18, 8.
- (3) R. Saleilles, De la personnalite juridique, París 1922, p. 61.
- (4) Mendelsohn, en Acta Soc. philolog., Leipzig 1875, vol. 5, p. 216.
- (5) Ricerche sulla Storia e nel Diritto pubblico di Roma, I, 1925, p. 332.
- (6) Es la explicación que da en primer lugar Gayo, al decir que con la usucapio pro herede se quería evitar que se retrasase la adición de las herencias para que cuánto antes existiese un encargado del culto familiar. Explicación que precede a la que se basa en la conveniencia de que se haga cuánto antes quién continúe la titularidad de las deudas del difunto. Instituciones, II, 55. Cfr. Franciosi, Usucapio pro herede, Nápoles 1965, p. 21 y ss.
- (7) País, ob. cit. p. cit.
- (8) Pro Milone, XXI
- (9) Augusto, XXXII.
- (10) Augusto, XXXII.
- (11) G.M. Monti, Le Corporazioni, Bari 1934, p.p. 24-25.
- (12) Le Droit public romain, VII, París 1891 (trad. franc.) p. 403 y n. 1.
- (13) De Robertis, Storia delle Corporazioni, I, Bari, p. 198.
- (14) La personnalité juridique en Droit privé romain, Paris 1942, p. 235.
- (15) Loc. cit., n. 95.
- (16) Il problema delle Fondazioni in diritto romano, Turín 1959, p. 85.
- (17) Labeo, I, p. 299.
- (18) Zum römischen Vereinsrecht, Berlín 1873, p. 71.
- (19) Appunti sulle Corporazioni romane, Milán 1937, p. 61. Cfr. Radin, Legislation of Grecks and Romans on Corporations, p. 89 y ss.
- (20) Le Corporazioni, Bari 1934, p.p. 27-28.
- (21) Römische Rechtsgeschichte, II, Leipzig, 1892, p. 67.
- (22) De la personnalité juridique, Paris 1922, p. 61.

- (23) F. De Robertis, *Storia delle Corporazioni*, Bari, I, p. 201, n. 14.
- (24) *Scritti di diritto romano*, Milán 1973, I, p. 48. n. 9.
- (25) *Gesammelte Schriften III (Juristischen schr.)* p. 356 y ss.
- (26) Cfr. Bonifacio en *Studi in onore di Arangio-Ruiz*, II, p. 213 y ss.
- (27) *Storia delle Corporazioni*, Bari, I, p. 204 n. 23.
- (28) Por otra parte, es preciso tener en cuenta que, con relación a los colegios conservados por César, Suetonio dice: "Antiquitus constituta" y, de los conservados por Augusto, el mismo Suetonio dice: "Antigua et legitima". Pero la primera expresión puede equivaler a la segunda, ya que se alude a una constitución jurídica, es decir, válida y conforme a derecho.
- (29) En *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, Palermo, I, p. 78 y ss.
- (30) En la misma línea que Solazzi, aunque con alguna vacilación, Perozzi, *Istituzioni*, II, p. 590, n. 4.
- (31) *La Roma sotterranea cristiana*, III, Roma 1877, p.p. 509-510.
- (32) Herzog, *Geschichte und System der röm. Staatsverwaltung*, II, Leipzig 1887, p. 988.
- (33) *Etude historique sur les Corporations professionnelles*, Roma 1968, I, p. 117, n. I.
- (34) C.I.L. VI, 4416.
- (35) *Gesammelte Schriften III (Juristischen schr.)* p. 114 y ss.
- (36) Arangio-Ruiz, *Fontes juris romani anteiustiniani*, P. 3ª, *Negotia*, Florencia 1969, p. 111. Cfr. la bibliografía allí citada.
- (37) Milán, marzo de 1949.
- (38) D., 26, 7, 3, 7.
- (39) *Revue internationale des droits de l'antiquité*, Bruselas 1951 (VI) p. 80.
- (40) Ch. Saumagne en *Revue historique de Droit français et étranger* (XXXII) 1954, p. 254 y ss.
- (41) Saumagne, ob. cit., p. 255.
- (42) Mitteis se basó en el estatuto de un colegium fabrum tignariorum que comenzaba en el año VII a. de C. el cómputo de los lustrós (Röm. Privatrecht I, p. 395, n. 22).
- (43) *Leges publicae populi romani*, 1962, p. 442.

- (44) Il diritto associativo romano, Bari 1938, p. 179.
- (45) Cicerón en el discurso contra Q. Cecilio XVII, se refiere, en este sentido, a unos symphoniacos servos.
- (46) Tesis abandonada más tarde por Mommsen. Cfr. Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, XV, p. 354 y ss.
- (47) Historie de l'esclavage dans l'antiquité, 3, Paris 1879, p. 462.
- (48) Etude historique sur les Corporations professionnelles, I, p. 118.
- (49) D., III, 4, 1.
- (50) De Robertis, Storia delle Corporazioni, I, Bari, p. 226.
- (51) Panegírico de Trajano, ed. Alvaro d'Ors, (Madrid, 1955) 54. Como ejemplo de un mes dedicado a un personaje político, puede citarse, entre otros, el caso de Nerón que dió el nombre de Claudio al mes de Mayo.
- (52) Loc. cit.
- (53) D., 3, 4, 1.
- (54) D., 47, 22, 3, 1.
- (55) P.W. Duff, Personality in Roman private Law, Cambridge, 1938, p. 147.
- (56) X, 92.
- (57) X, 93.

CAPITULO XIII

LOS COLEGIOS ILICITOS

LOS COLEGIOS ILICITOS

El polémico tema de la calificación de un colegio como lícito o ilícito, en la época clásica, arranca de una contradicción entre los textos de Gayo a que últimamente se ha hecho referencia y la realidad que se puede constatar en las fuentes epigráficas, según las cuales, sobre todo a principios del siglo tercero, había numerosos colegios profesionales en Roma y en todo el Imperio.

Según el testimonio de Gayo los colegios eran escasos; según los datos suministrados por las fuentes epigráficas, eran numerosos.

Tratar de resolver esta contradicción con la hipótesis de que Gayo poseía una larga lista de colegios autorizados y que si sólo aparecen referidos (1) los de los panaderos y los armadores, como colegios romanos ello se debe a que los compiladores al mutilar el pasaje sólo conservaron los dos colegios más importantes de su tiempo (2) es una explicación que se presta a varias objeciones.

En primer lugar, hay que observar que existieron también otros importantes colegios en la época de Justiniano, como había ocasión de indicar más adelante y no se comprende fácilmente cuales habrían de ser los criterios empleados para llevar a cabo la discriminación.

En segundo lugar, no parece lógico que se conservase por

los compiladores una más extensa descripción de los colegios de provincias: "ut ecce vectigalium publicorum sociis permissam est corpus habere vel aurifodinarum vel argentifodinarum et salinarum" y que, en cambio, se restrinja extraordinariamente el número de los colegios romanos que Gayo relacionaba.

En tercer lugar que, partiendo de las expresiones atribuidas a Gayo, parece que la relación de los colegios de provincias es más bien demostrativa, como resulta del encabezamiento con "ut ecce", mientras que la relación de los colegios de Roma parece ser exhaustiva: "item collegia Romae certa sunt".

En cuarto lugar que la expresión "paucis admodum in causis concessa sunt" no debe ser traducida por "en muy pocos casos se han concedido" sino "por muy pocas causas se han concedido".

Muchos textos se pueden citar para probar la utilización de causa en el sentido de finalidad para la que se autoriza un colegio, pero baste con recordar la inscripción que alude a la autorización del colegio de los Symphoniaci. Este colegio fue autorizado "ludorum causa".

Resulta pues que tiene poca trascendencia a efectos de señalar una limitación en las autorizaciones de los colegios durante el período clásico, que la lista que expone Gayo sea más o menos extensa, porque siempre quedaría establecida una limitación por razón de las causas.

Otra teoría para explicar la contradicción de que se viene tratando, es la de que habiendo pocas causas había muchos cole-

gios, es decir, distintos colegios serían autorizados por la misma causa.

Esta explicación (3) tropieza con dos dificultades.

La primera es que de aceptarse tal hipótesis, no tendría mucha razón de ser la enumeración por Gayo de los pistores y los navicularii, porque lo importante no era el número de colegios, sino el número de las causas o fundamentos y la segunda dificultad es que aunque varios colegios fueran autorizados por la misma causa no dejaban de existir entre ellos diferencias que tendrían que ser puestas de relieve. Por ejemplo, además de los pistores y navicularii existía una gran cantidad de colegios necesarios para el abastecimiento de la ciudad, pero éstos tenían no obstante su propia función, una denominación particular y sus especiales características.

Es cierto que en el texto de Gayo se lee: "veluti pistorum et quorundum aliorum", pero la inexistencia de una semejante ampliación, a propósito de los navicularii hace pensar que estemos ante una extensión operada por los compiladores.

Una tercera explicación se ha querido encontrar en la posibilidad de que hubiese pocos colegios autorizados y muchos colegios sin autorizar.

En este sentido es básica la distinción que se establece en un texto del Digesto atribuido a Paulo (4): "Desde que el Senado permitió en tiempo del Emperador Marco Aurelio, de consagrada memoria, hacer legados a las asociaciones (collegia) no cabe duda

que si se legó a una reconocida como lícita (corpori) se debe el legado; si se lega a una que no está reconocida, no valdrá el legado, a no ser que se lege individualmente a sus miembros, pues éstos pueden adquirir el legado, no como asociación (collegium) sino como personas individuales".

Sobre este texto y cuál deba ser su recta interpretación se insistirá más adelante, pero ahora es preciso subrayar que con él se abre la amplia polémica acerca de los colegios lícitos y los colegios ilícitos, colegios tolerados y colegios no tolerados.

Ante todo es preciso fijar cuál es la calificación de un colegio no autorizado.

Tácito da cuenta del siguiente hecho: "Como consecuencia de las incidencias surgidas en su espectáculo de gladiadores se suscitó una disputa entre los de Pompeya y los de Nocera. De las palabras se pasó a los hechos, intervinieron las armas y por fin ganaron los de Pompeya, que era la ciudad en la que tenía lugar el espectáculo. El resultado de la lucha fue desastroso. Se trasladaron a Roma los heridos para prestarles la debida asistencia sanitaria e iniciar las oportunas diligencias".

Tácito pondera lo sucedido diciendo que muchos lloraban la muerte de un padre o la muerte de un hijo. El juicio de lo sucedido fue remitido por el Principe al Senado y por el Senado a los Cónsules (5).

Al final del relato de Tácito se contiene lo más interesante

a efectos de estudiar el Derecho Romano de asociaciones: "Después el Senado, al que se llevó de nuevo el asunto, prohibió durante diez años que se celebrasen reuniones de esta naturaleza y disolvió las asociaciones que se habían fundado en contra de las leyes". Livinio Régulo, el organizador del espectáculo y otros que habían sido autores de la revuelta fueron castigados con el exilio.

Tácito alude a unas asociaciones que se habían fundado, que se habían establecido en contra de las leyes, pero no arroja mucha luz acerca de cuál era la situación jurídica de estas asociaciones, es decir, no aclara si eran ilícitas o simplemente no autorizadas.

Antes de pasar a analizar el texto de Trajano y el de Paulo a que ya se hizo referencia, parece oportuna una exposición de las principales doctrinas formuladas sobre la distinción entre colegios lícitos e ilícitos, tolerados y no tolerados.

Waltzing (6) afirmó que los colegios no autorizados podían ser tolerados y que frecuentemente lo eran. La expresión collegium illicitum se emplearía para indicar algo más que la mera falta de autorización, para indicar sólo esto la expresión utilizada sería collegium cui non licet coire.

Al colegio no autorizado no se le califica, sigue diciendo Waltzing, ordinariamente de colegio ilícito, salvo que se quiera hacer notar que ese colegio está en contradicción con la ley, que es ilegal. La corriente sería emplear el calificativo illi-

citum para designar un colegio, autorizado o no, que tuviese un carácter peligroso para el estado.

En la misma orientación que Waltzing se sitúa Cohn (7) quién afirmó que todos los colegios ilícitos a que se refieren los textos del Digesto eran los colegios que representaban un peligro para el Estado y que de aquellos colegios carentes de autorización se decía: "collegia quibus non licet coire".

Sin embargo, fue más absoluto en sus conclusiones Cohn que Waltzing, al decir que jamás el carácter de ilícito radicaba en la falta de autorización, sino únicamente en el carácter de peligroso. Es decir, interpretado más rigurosamente el término illicitum, no admite que se pueda emplear para señalar, en algún caso, el carácter ilegal de un colegio con cuya existencia se conculca la ley.

El variado uso de illicitum, como las varias acepciones de coire no permiten afirmaciones tan rigurosas y excluyentes (8).

Humbert (9) expone así el régimen aplicable a los colegios ilícitos: "En el Imperio los magistrados resolvían extra ordinem contra las asociaciones ilícitas de cualquier naturaleza, lo que daba lugar a la mayor arbitrariedad en cuanto a la instrucción del proceso y la imposición de la pena. Después de la disolución de una asociación, dispuesta por el Senado o por el Príncipe, todo ciudadano estaba autorizado en virtud de un rescripto de Severo a acusar a los asociados delante del Praefectus urbi. Esos asociados podrán ser perseguidos de oficio y sin acu-

sación regular, en virtud de las constituciones imperiales que prescribían a los gobernadores de las provincias que reprimiesen las asociaciones ilícitas, especialmente las militares. La contravención de esas disposiciones era considerada como un delito análogo al delito de violencia pública o de lesa majestad".

Sin embargo, continúa Humbert, no parece que tal infracción fuese castigada en todo caso como un delito de lesa majestad. Sólo se aplicaba éste castigo riguroso a las asociaciones formadas con un fin culpable; las asociaciones simplemente irregulares, es decir, no autorizadas, tenían que disolverse y los asociados recuperaban sus aportaciones (10).

Humbert no establece una distinción basada en dos tipos de ilicitud, una formal y otra substancial, sino que lo que hace es señalar una diferencia en la actuación de las autoridades ante el hecho de personas que se reunían sin estar legalmente autorizadas para constituir una asociación.

De Robertis (11) se opuso abiertamente a la distinción entre collegia illicita y collegia quibus non licet coire, concluyendo que collegium cui non licet coire no puede significar otra cosa más que colegio ilícito.

Para Monti (12) la doctrina, bastante extendida, de que existió un gran número de colegios con deficiencias de forma, pero que la autoridad pública dejaba existir y prosperar porque no ofrecían peligrosidad alguna para el orden público, es inexacta, ya que el fundamento jurídico de la ilicitud ha de verse en

la falta de requisitos exigidos por las leyes.

Coli (13) afirmó que la teoría de que existieron en el Imperio colegios ilícitos por la forma, es decir, que se consti-tuyeron sin la debida autorización y colegios ilícitos por la finalidad que perseguían, cuando esta finalidad era peligrosa para el Estado, no pasa de ser una elegante distinción de mar-ca germánica, de la que los romanos no tuvieron ni la más mí-nima idea.

Schnorr von Carolsfeld (14) sostuvo la tesis de la liber-tad de asociación en la época clásica era el régimen imperante. Según este autor no existía en dicha época ninguna disposición de carácter general que restringiese la libertad de los ciuda-danos para asociarse.

Schnorr von Carolsfeld interpretó el texto del Digesto 47, 22, 3, en el sentido de que para disolver un colegio era preci-sa, caso por caso, una decisión de la autoridad suprema del Es-tado romano.

Dos principales objeciones pueden formularse a esta teo-ría: Una de ellas es que en el caso de haber existido la liber-tad de asociación se hace difícil explicar la vigilancia que sobre los colegios ejercieron el Praefectus urbi, los magistra-dos locales y los gobernadores de las provincias y la otra, es que de no existir una ley restrictiva de la libertad de asociar-se no puede darse una recta interpretación a los términos con-tenidos en la inscripción en la que se recuerda la autorización

concedida por el Senado al colegio de los Symphoniaci "ludorum causa".

Baudini (15) desechando también la doble figura de ilicitud, ilicitud por defecto de forma e ilicitud por la finalidad perseguida, entiende que aquellos colegios para los cuales se requería una especial autorización, hasta que esta autorización no se obtenía, carecían totalmente de existencia.

Después de expuestas las teorías que anteceden es preciso volver a los textos jurídicos y extrajurídicos para ver en que medida se compadecen con lo que nos dicen los escritores antiguos.

Tácito (16) decía que fueron disueltas las asociaciones establecidas contra las leyes. Esta medida se indica inmediatamente después de haber dicho que se prohibió a los de Pompeya tener reuniones durante diez años del estilo de la que había dado lugar a la tragedia ya mencionada.

Cabe pues, pensar, que se trata de una medida meramente preventiva, no de una medida encaminada a castigar a una asociación que ha tomado parte en una revuelta, que ha ocupado templos, etc. Se trata solamente de que no se sigan celebrando reuniones que hasta entonces se acostumbraban a celebrar por unos grupos de personas.

Es cierto que Tácito emplea la palabra collegia, pero para poder decir que se trataba de colegios tolerados porque sólo eran

ilícitos por razón de la forma, había que saber si tales colegios habían merecido anteriormente la atención de las autoridades, cosa que no se desprende del texto de Tácito. Serían, por tanto, colegios a los que ni se les había permitido, ni se les había prohibido celebrar reuniones (coire) porque eran colegios ignorados, colegios inexistentes.

Esta explicación se refuerza con el texto de Paulo (17).

Paulo dice que si se lega a un colegio autorizado valdrá el legado, pero si se lega a un colegio no autorizado no valdrá el legado, a menos que se haga individualmente a sus miembros.

Entendemos que este texto lo que significa no es que se reconozca o se tolere la existencia de un colegio no autorizado, sino, sencillamente, que el colegio no autorizado no existe y por tanto sólo puede legarse a un grupo de individuos. El texto no dice que lo que se lega al colegio no autorizado se considerará como legado a sus miembros, lo que dice es que sólo será válido el legado hecho a un grupo de personas o el legado hecho a un colegio.

Si hubiera dicho que el legado hecho a un colegio no autorizado se consideraba hecho a sus miembros, si estaríamos ante el caso de un colegio ilícito por la forma, pero tolerado.

Existen dos textos atribuidos a Marciano que figuran en el Digesto, en los cuales si se invierte el orden en que aparecen conservados ganan en claridad.

En uno (18) se dice que "si se asocian algunos sin sujetarse a la autoridad del Senado o del Príncipe, las reuniones son contra el senadoconsulto y las constituciones de los príncipes". No se dice que el colegio sea ilícito pero existente, se dice que se actúa (collegium celebrat) en contra de lo dispuesto. Más que ser un colegio (que no existe) el que celebra las fiestas, lo que ocurre es que se solemniza un colegio que no se ha constituido. Esto explica la variante "celebratur" por "celebrat" (19).

En el otro texto (20) se afirma que las asociaciones ilícitas deben disolverse como ordenan los mandatos, constituciones imperiales y senadoconsultos, pero al disolverse se permite dividir el dinero común y repartirlo entre los socios.

Se trata de colegios ilícitos y no puede decirse que exista la menor tolerancia hacia ellos; en cuánto se advierte el hecho de las reuniones se ordena que cese tal actividad. La decisión que se adopta acerca del reparto del dinero tampoco supone tolerancia o benevolencia alguna.

Los que se reunían habían aportado dinero (pecunias communes, dice el texto) y como este dinero no había dejado de pertenecer a cada uno, al no poder seguir reuniéndose cada uno se lleva lo suyo.

Es cierto que si no hay reconocimiento, tolerancia o benevolencia, también es verdad que no hay penas. Las penas se aplicaban cuándo los grupos se reunían para cometer actos delictivos.

Una enumeración de los delitos cometidos por personas que se agrupan, reúnen o conspiran, aparece en un texto atribuido a Ulpiano (21).

En resumen puede decirse que no hay colegios ilícitos por falta de autorización y colegios ilícitos por perseguir fines peligrosos para la seguridad del Estado.

A las agrupaciones no autorizadas no se les permite continuar reuniéndose, a las agrupaciones y reuniones peligrosas se les castiga, se les aplican penas.

Puede suceder que un colegio autorizado se convierta en un colegio peligroso y también en este punto es de gran interés la correspondencia cruzada entre Plinio el joven y el Emperador Trajano.

Plinio da cuenta a Trajano de que mientras visitaba una parte de la provincia de Bitinia, a la que había sido enviado como gobernador, un inmenso incendio se declaró en Nicomedia y destruyó muchas casas particulares y dos edificios públicos, el asilo de ancianos y el templo de Isis aunque entre ellos mediaba una vía pública. Las causas que dieron lugar a la magnitud del siniestro fueron dos: Por una parte el fuerte viento reinante y por otra la falta de colaboración ciudadana. Todo ello agravado por la inexistencia de material contra incendios y de tomas de agua.

Plinio dispuesto a que el siniestro no vuelva a producirse adopta algunas medidas y escribe a Trajano proponiéndole la crea

ción de un colegio de ciento cincuenta obreros de la construcción (fabri) para que se ocupen de combatir los incendios.

Es interesante reproducir las últimas palabras de la carta de Plinio: "Yo me ocuparé de que a ese colegio no se incorporen más que fabri y de que una vez autorizado (jure concesso) no se aparte de su fin propio. No será difícil vigilarlos dado su corto número" (22).

Plinio prevé dos peligros que sin duda surgían con frecuencia cuando se autorizaban asociaciones: Uno que se incorporasen a él personas inconvenientes y otro que se desviase de la finalidad para la que fue creada la asociación. No sólo advierte de estos riesgos, sino que asume frente al Emperador un especial compromiso consistente en llevar a cabo la adecuada vigilancia.

La contestación del Emperador no es menos expresiva (23). Empieza reconociendo que la idea de Plinio ha surgido ante el ejemplo de los numerosos colegios existentes en otras ciudades, pero inmediatamente se advierten los recelos del Emperador que teme que cualquiera que sea el nombre que se de y la finalidad que se asigne a la asociación, ésta degenera pronto en una facción, como ya había sucedido en Bitinia y concretamente en Nicomedia.

Estos recelos llevan a Trajano a rechazar la propuesta de Plinio y recomendar, en cambio, que se adquiriera el material necesario para la extinción de incendios, que se instruya a los propietarios de los inmuebles en la lucha contra incendios

y que en caso necesario, se movilice a la población para combatir el fuego.

Tf

En esta correspondencia no se alude para nada a colegios ilícitos por defecto de autorización ni a colegios tolerados. Plinio somete la propuesta de creación de una asociación de artesanos, especializados en combatir los incendios, impulsado por la gravedad de los acontecimientos y la posible ilicitud que se contempla por el Emperador es la que pudiera surgir como consecuencia del abandono de la verdadera omisión que se les confía, por parte de colegios debidamente autorizados.

Lo que ha complicado no poco el panorama jurídico del régimen asociativo romano, en orden a las circunstancias y efectos de las autorizaciones concedidas a los colegios, ha sido el régimen especial que se aplicó a los collegia tenuiorum y por ello es preciso dedicarles a continuación un estudio adecuado.

- (1) D., 3, 4, 1, pr.
- (2) Cfr. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens, Leipzig 1890, p. 45.
- (3) Waltzing, Etude historique sur les Corporations professionnelles, Roma 1968, I, p. 129.
Este autor cita como ejemplo de causa el culto de los muertos y los funerales, pero una causa de esta naturaleza no serviría para agrupar varios colegios en un mismo tipo o categoría, por estar atendida en una gran variedad de asociaciones.
- (4) D., 34, 5, 20.
- (5) Anales, XIV, 17, Cfr. otro pasaje del mismo historiador: XIII, 31.
- (6) Etude historique sur les Corporations professionnelles, I, Roma 1968, p.p. 132-133.
- (7) Zum römischen Vereinsrecht, Berlin 1873, p. 91.
- (8) Cfr. Loening, Geschichte der deutschen Kirchenrechts, Estraburgo 1878, I, p. 203.
- (9) Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités Grecques et romaines, s.v. Collegia illicita.
- (10) D., 48, 4, 1, 1. Comparese D., 47, 22, 2, con D., 47, 22, 3.
- (11) Storia delle Corporazioni, I, Bari, p. 373.
- (12) Le Corporazioni, Bari 1934, p.p. 39-40.
- (13) Scritti di diritto romano, Milán 1973, I, p. 53.
- (14) Geschichte der juristischen person, I, Aalen 1969, p. 236 y ss.
- (15) Appunti sulle Corporazioni romane, Milán 1937, p. 82 y ss.
- (16) Anales, XIV, 17.
- (17) D., 34, 5, 20.
- (18) D., 47, 22, 3, 1.
- (19) Corpus iuris civilis, Mommsen - Krüger ed. 16, I, p. 840, n. 10.
- (20) D., 47, 22, 3, pr.
- (21) D., 48, 4, 1, 1.
- (22) Ep. x, 33.
- (23) Ep. x, 34.

CAPITULO XIV

Collegia Tenuiorum

No existe unanimidad en la doctrina acerca de cuál es el verdadero significado de tenuior.

Para algunos autores tenuior es sinónimo de pobre.

Lo cierto es que en el Digesto a veces aparece la contraposición entre tenuiores y honestiores (1).

Contraposición basada más en la posición social que en la económica.

Pero en otras ocasiones tenuiores aparece contrapuesta a divites y en estos casos no cabe duda de que lo que se contempla es una contraposición planteada a nivel económico.

Otros ejemplos de contraposiciones planteadas en diferentes niveles y en las que uno de los términos es tenuiores pudieran citarse en las fuentes literarias (2).

En una inscripción del año 136 descubierta en Lanuvio (3) aparece un Senadoconsulto en el cuál se ha creído descubrir la autorización otorgada a los Collegia tenuiorum apartándose de las normas establecidas en la ley Julia.

Existe una polémica acerca de si el citado Senadoconsulto contenía una autorización dirigida exclusivamente al colegio de Lanuvio en particular o si se autorizaba con carácter general todos los Collegia Tenuiorum por sus especiales características.

La tesis de que tenía carácter general fue defendida por

Mommsen (4) y la tesis de que tenía carácter particular por Cohn (5).

Para Mommsen, el texto del Senadoconsulto era el siguiente: Kaput ex senatusconsulto populi romani. Quibus coire convenire collegiumque habere liceat. Qui stipem menstruam conferre volent in funera in it collegium coeant neque sub specie eius collegii nisi semel in mense coeant conferendi causa unde defuncti sepeliantur" (6).

Parece evidente que sólo se recoge en esta inscripción un Kaput del Senadoconsulto, pero en ese Kaput conservado no hay la referencia a un colegio en particular, sino que se dirige a todos aquellos que están dispuestos a entregar una cuota mensual para asegurarse los funerales.

En los otros kapita del Senadoconsulto que no han llegado a conocimiento de los romanistas no se podrían contener contradicciones a este principio proclamado con carácter general, sino a lo más especificaciones o detalles.

Saleilles conjeturó acertadamente que el Senadoconsulto no fue hecho especialmente para Lanuvio, sino que los habitantes de Lanuvio lo invocaban en su beneficio a fin de fundamentar en él, el colegio que establecían (7).

Por tanto, según el citado autor, el Senadoconsulto no se dio para todos los colegios, ni tampoco para un colegio en particular, sino para una categoría de colegios. Los colegios de esta categoría, los Collegia Temiorum no necesitaban una autori

zación especial, sino que bastaba con que se conformasen con las normas generales fijadas por la Ley Julia.

Coli admitió también el carácter general del Senadoconsulto pero apunta la probabilidad de que los compiladores justinianeos tratasen de extender la dispensa de autorización especial a otras categorías de colegios que no fuesen los funerarios, siguiendo una tendencia ya advertida en Oriente en la época de Plinio el Joven (8). Sin embargo, este romanista entiende que la principal novedad introducida por el Senadoconsulto es el kaput conservado en la inscripción de Lanuvio consiste en permitir que se constituyese en forma de colegio un auténtico sodalicio, uno de aquellos sodalicios que, a partir del Senadoconsulto del año 50 a. de C., no eran tolerados por el Derecho romano, incluso cuándo no incurrían en el crimen de la Ley Licinia.

La conclusión a que llega Coli, se basa en su conocida tendencia a establecer una nítida separación entre colegio y sodalicio, separación muy difícil en el estado actual de las fuentes de conocimiento y ante la confusión terminológica que en ellas se advierte no pocas veces.

Otro de los autores que defienden la teoría de que el Senadoconsulto de Lanuvio otorgaba una autorización general a una categoría de colegios es Monti.

Este autor hace notar, en apoyo de su teoría, que la importancia de los colegios funerarios fue grande, especialmente a partir de la época de los Flavios, como consecuencia de la creciente

inmigración extranjera (9).

Monti también considera verosímil la hipótesis de la concesión de un privilegio a los jornaleros libres que deseaban asegurarse la adecuada sepultura.

Rostovtzeff (10) hizo observar que en las épocas de los Flavios y de los Antoninos las asociaciones de profesionales eran en su mayoría, asociaciones de comerciantes, navieros, tenderos y artesanos y cuando un sector interesaba directamente a la Administración Imperial, el gobierno protegía no sólo a las asociaciones de mercaderes y navieros sino también a las de los obreros.

Los jornaleros libres ocupados en sectores por los que el Estado no se interesaba, podían unirse en los Collegia Tenuiorum, que no perseguían fines económicos.

Schnorr von Carolsfeld (11) no niega el carácter general del Senadoconsulto, pero es fiel a su teoría, ya expuesta, de la existencia de una libertad de asociación durante el período imperial.

Al no encontrar argumentos suficientes para adherirse a la doctrina de quienes defienden la necesidad de que para los distintos colegios de la misma categoría se diesen senadoconsultos especiales y no querer, por otra parte, apartarse de su tesis fundamental en esta materia, no tiene más remedio que afirmar que el Senadoconsulto sólo tenía un valor declarativo, no introducía nuevas normas y sólo trataba de poner en claro que los

Collegia Tenuiorum no iban contra lo establecido y por tanto se podían considerar legítimos.

Atribuir esta finalidad al Senadoconsulto es algo que no parece encajar en las funciones del Senado en la época clásica y choca con otros textos del Digesto de que más adelante se tratará.

Waltzing (12) piensa que la inscripción de Lanuvio elimina toda duda acerca de si cada colegio requería una autorización especial o, por el contrario, la autorización se concedía en bloque a todos los Collegia Tenuiorum.

El citado romanista argumenta así partiendo de una doble consideración: En primer lugar, las palabras: "Quibus coire collegiumque habere liceat" no resultan comprensibles más que si se las considera como un título que anuncia que se va a dar a conocer quienes son los que siempre podrán formar un colegio y la frase siguiente informa de que serán aquellos que se proponen pagar una cantidad mensual para atender a sus generales.

En segundo lugar, si los adoradores de Diana y Antinoo, que era el colegio de Lanuvio, hubiesen obtenido un senadoconsulto especial, sólo para ellos, parece lógico que lo hubiesen reproducido íntegramente o, al menos, que conservasen la parte del senadoconsulto en que se dijese que se les había concedido a ellos especialmente.

Otros autores piensan que la expresión: "in it collegium" se referían precisamente al colegio de Lanuvio, pero esta expre

sión no puede ser valorada de un modo aislado y fuera del contexto de la inscripción. Si se valora en relación con la categoría de los colegios "quibus coire convenire collegiumque habere liceat" se llega a la conclusión de que no se refiere al Colegio de Lanuvio en concreto, sino a aquellos colegios en los que se aporta una cotización mensual para atender los asociados a sus funerales: "Qui stipem menstruum conferre in funera unde defuncti sepeliantur".

De Rossi en un principio sostuvo la teoría de la aplicación del Senadoconsulto únicamente al colegio de Lanuvio (13) pero más tarde, rectificó su parecer (14).

Distinto es el caso de Cohn, quién se aferró a la idea de la especialidad del Senadoconsulto (15).

Para Cohn la inscripción de Lanuvio debe leerse así: "quippe nobis coire collegiumque habere liceat" en vez de "quibus coire convenire collegiumque habere liceat".

La lectura propuesta por Cohn ofrece no pocas dificultades.

La introducción de "nobis" es esencial a efectos de singularizar el sentido de la inscripción, pero al introducir "nobis" queda sin sentido "quibus" y de ahí que se haya visto forzado Cohn a introducir "quippe" en vez de "quibus". Con estas alteraciones, aparte de los problemas de espacio que se plantean en la fuente epigráfica, pierde sentido la lectura y se hace difícil admitir cuál sería el contenido de los otros kapita que sin duda figuraban en el Senadoconsulto (16).

Otra teoría es la de Kayser (17). Este autor piensa que el Senadoconsulto era general, pero le da un curioso alcance: El Senadoconsulto no concedía la autorización, sino que lo que hacía era avisar a los humildes que la autorización les sería concedida, si bien tenían que solicitarla caso por caso.

Es una teoría que se aproxima un tanto a la de Schnorr von Carolsfeld, ya expuesta; pero se diferencia básicamente de ella en que Kayser no acepta el principio de que existiese libertad de asociación en el Imperio.

Los argumentos que utiliza Kayser son los siguientes:

Entiende que la concesión de una excepción tan general, la autorización en bloque de todos los Collegia Tenuiorum, habría dejado prácticamente sin efecto las previsiones de la Ley Julia y crearía un grave riesgo.

En primer lugar hay que objetar a este razonamiento que la autorización en bloque no habría dejado sin efecto las previsiones de la Ley Julia, porque no se trata de una concesión general en favor de todas las asociaciones, sino únicamente en favor de un tipo de ellas.

En cuanto al riesgo o peligro que pudiera suponer una concesión general, es preciso tener en cuenta cuál era la clase de personas a las que se concedía, personas, en principio, sin influencia social y sin poder económico. Por otra parte, nada impedía su supresión y su castigo si estos colegios demostraban, en algún caso, ser peligrosos.

Por tanto, todo se reduciría a una cuestión de vigilancia. Cuando Plinio solicitó de Trajano la creación de un colegio de fabri para luchar contra los incendios, termina la carta diciendo que dado su corto número no será difícil vigilarlos. El número limitado de los asociados en los Collegia Tenuiorum, aparte de su condición social, podría ser garantía de una fácil vigilancia.

Kayser cree encontrar otro fundamento para su teoría en el fragmento del Digesto (18) en el que Marciano dice que si se asocian varias personas sin atenerse a la autoridad del Senado o del César, se asocian en contra de lo dispuesto por el Senadoconsulto y las Constituciones de los Príncipes.

Kayser razona así: En este título de Marciano no se establece excepción alguna, luego los Collegia Tenuiorum no podían estar dispensados de solicitar la correspondiente autorización en cada caso, colegio por colegio.

Sin embargo, hay que hacer notar que si un Senadoconsulto autorizó con carácter general a todos los Collegia Tenuiorum, no puede decirse que cada uno de ellos en particular no esté amparado por el Senadoconsulto.

El texto de Marciano no exige que siempre hayan de ser autorizados los colegios uno por uno, sino que su constitución se base en las normas establecidas por el Senado o por los Príncipes.

Otro argumento de Kayser es que dada la importancia y trascendencia jurídica de la decisión del Senado de autorizar global

mente todos los Collegia Tenuiorum que se constituyesen, resulta inexplicable que los textos de la jurisprudencia romana que han llegado hasta nosotros, guarden el más absoluto silencio sobre esta decisión.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, como había ocasión de señalar más adelante, esta medida corresponde probablemente a la primera mitad de la época clásica y los compiladores pudieron no considerar necesaria la inclusión de textos referentes a dicha medida, dado el tiempo transcurrido y las profundas variaciones que se habían operado en el Derecho asociativo romano.

A estas consideraciones también puede añadirse que, para gran parte de la doctrina, no es exacto que exista un absoluto silencio sobre la autorización general de los Collegia Tenuiorum, sino que un texto, precisamente de Marciano alude a ella.

En este texto (19) Marciano dice que varios mandatos imperiales habían establecido que los Gobernadores de las provincias no deberían tolerar asociaciones políticas ni que los militares se asociasen en los campamentos, pero inmediatamente añade la excepción: "Sin embargo está permitido a los humildes (tenuiores dice el texto latino) establecen cotizaciones mensuales, con tal de que no se reúnan más de una vez al mes, a fin de que no se forme, con tal pretexto, una asociación ilícita".

Está claro que el texto de Marciano alude a asociaciones

de tenuiores, pero no indica las finalidades que pretendían con estas asociaciones, ni tampoco sirve para resolver la cuestión acerca de la identificación o no de los Collegia tenuiorum con los Collegia Funeraticia a que expresamente se refiere la inscripción de Lanuvio.

A continuación del pasaje que se acaba de transcribir y en el mismo texto de Marciano, se lee: "Lo que se dice en un rescripto de Septimio Severo, de consagrada memoria, que rije no sólo para Roma, sino también para Italia y las provincias (20). Inmediatamente sigue diciendo Marciano: "No obstante no se impiden las reuniones con fines religiosos, siempre que no se hagan contra el Senadoconsulto que prohíbe las asociaciones ilícitas".

Si se prescinde del párrafo intermedio, se lee así: "Está dispuesto por varios mandatos imperiales que los Gobernadores provinciales no toleren asociaciones políticas, ni que los militares se asocien en los campamentos, pero está permitido a los humildes establecer cotizaciones mensuales, con tal de que no se reúnan más de una vez al mes, a fin de que no se forme con tal pretexto una asociación ilícita. No obstante no se impiden las reuniones con fines religiosos, siempre que no se hagan contra el Senadoconsulto que prohíbe las reuniones ilícitas".

Después puede colocarse la referencia al rescripto de Septimio Severo y la aclaración de que esas normas no sólo se aplicaban en Roma, sino también en Italia y las provincias.

Con esta reconstrucción queda claro que los humildes podían reunirse cuantas veces quisieran para finalidades religiosas, pero para las otras finalidades, tales como ocuparse de la organización interna, administración de los fondos recaudados, etc., sólo una vez al mes, seguramente con ocasión del cobro de las cuentas.

No obstante precisarse más las disposiciones relativas a los Collegia Tenuiorum, con la reconstrucción propuesta quedan en pie algunas interrogantes: ¿Eran lo mismo los colegios funerarios que los Collegia Tenuiorum? ¿Qué finalidades perseguían éstos últimos? etc.

Mommsen (21) afirmó que los Collegia Tenuiorum eran colegios funerarios. Sin embargo la identificación no es fácil.

Existían dos tipos de colegios funerarios: Los columbaria y las asociaciones de cultores.

Los columbaria eran edificios subterráneos en cuyos muros se excarvaban nichos capaces para contener varias urnas u ollae. Lo más corriente era que contuviesen dos urnas, pero a veces contenían cuatro, en cuyo caso se colocaban dos sobre las otras dos o se ponían dos delante y las otras dos más al fondo (22).

En un principio estos enterramientos servían para los esclavos y libertos de familias de elevada posición. Se conoce, entre otras, una inscripción relativa al columbarium donde reposaban los restos de los esclavos y libertos de la casa de Livia (23).

Con el tiempo cambió el modo de financiarse la construcción de los columbaria, ya no eran los enterramientos de los esclavos o libertos de una casa rica, sino que se asociaban varias personas, ponían un dinero en común y construían el columbarium.

Otro grupo de colegios funerarios se distinguía por que sus socios se denominaban cultores. A este segundo grupo pertenecía el colegio funerario de Lanuvio. En él cada asociado entregaba, al tiempo de inscribirse, la suma de cien sextercios y una botella de buen vino. La cotización mensual era de cinco ases.

Los que integraban el colegio de Lanuvio eran demasiado pobres para poder construir un columbarium (24) y lo que hacían, al morir uno de los asociados, era entregar al heredero una cierta suma para que llevase a cabo el enterramiento, suma que recibía el nombre de funeraticium.

Se conocen las normas establecidas para el caso de que un asociado hubiese muerto a una distancia superior a veinte millas de Lanuvio o más cerca, ya que ésto influía naturalmente en los gastos del enterramiento.

El reglamento por el que se regía este Colegio estaba fijado en el pórtico del templo de Antinoo.

Por un sector de la doctrina se ha pretendido que los colegios funerarios no eran más que una categoría de los Collegia Te-

niorum; que éstos últimos tenían de común estar constituidos por gente humilde y necesitada, y que las atenciones que a este tipo de personas se dispensaban podían consistir bien en la previsión de una sepultura, bien en acudir en su ayuda en caso de enfermedad, bien en socorrer sus necesidades de subsistencia, etc.

En relación con esta postura doctrinal tiene especial importancia el pasaje citado de Marciano (25).

Este pasaje viene a continuación de otros en que el mencionado jurista se ha referido a las asociaciones de tenuiores, por lo que la norma que en él se contiene ha de considerarse lógicamente de aplicación a esta clase de Collegia.

Dice Marciano: "No es lícito pertenecer a más de una asociación, según está establecido por los emperadores Marco Aurelio y Vero, de consagrada memoria, y si alguien estuviese en dos asociaciones, dice el rescripto que debe elegir aquella en la que prefiera estar, pudiendo recuperar de la otra, a la que deja de pertenecer, lo que le corresponda de la cuenta que tenían en común".

Mommsen creía que el Senadoconsulto de Lanuvio (26) limitaba la asociación a un sólo caso, la asociación por causa de funerales, y para hacer esta afirmación se basó en el referido pasaje de Marciano.

Wallon (27) apoyándose también en el mismo pasaje, rechaza la opinión de Mommsen.

Wallon entiende en el hecho de contemplar el rescripto de Marco Aurelio y Vero, la posibilidad de que alguien formase parte de más de un colegio, ya que de no existir esta posibilidad caería por su base y carecería de sentido la decisión imperial, lo que prueba precisamente es lo contrario de lo que supuso Mommsen. Para hacerse enterrar basta un sólo colegio, luego ello quiere decir que los Collegia Tenuiorum atendían a otras necesidades distintas del enterramiento de sus miembros.

A primera vista parece incuestionable la afirmación de Wallon, pero hay que advertir que reposa sobre una confusión y sobre un malentendido.

Reposa sobre la confusión de los columbaria con las asociaciones de cultores, a cuya distinción ya se hizo anteriormente la oportuna referencia, marcando las características que les separaban.

Reposa sobre el malentendido de que en los collegia de cultores se disponía de enterramientos propios, cuándo en realidad, lo que se hacía era entregar una cantidad al heredero para los gastos de sepelio.

Partiendo de considerar ésta última finalidad, parece muy posible que alguien quisiera figurar en dos colegios, aunque fuesen colegios estrictamente funerarios, ya que si el lugar de sepultura no era acumulable, si lo eran las cantidades a percibir por uno y otro colegio.

Con este razonamiento no se quiere decir que el texto de Mar

ciano resuelva por si mismo la controversia y ésta es la razón por la que el mismo texto ha podido ser utilizado por Mommsen y por Wallon para sostener opiniones diametralmente opuestas (28).

Algunos autores de los que sostienen que los Collegia Tenuiorum tenían finalidades distintas de la de ayudar económicamente al enterramiento de sus socios, tienen que reconocer que en la inscripción tantas veces aludida sóloamente figuraba un kaput relativo a los colegios funerarios, prescindiendo de otras posibles finalidades de los collegia.

Sólo así puede explicarse la falta de concordancia entre el texto de Marciano, que se refiere en general a los Collegia Tenuiorum y la inscripción de Lanuvio que se referiría sólo a los colegios funerarios.

Partiendo de que el kaput conservado sólo se refiere a los Collegia Funeraticia, pero que había otros Collegia Fenuiorum con más amplias finalidades, se ha querido también justificar el silencio de Marciano acerca de las finalidades de estas asociaciones. El jurista tendría en cuenta a todos, pero dado su variedad optó por no entrar en detalles.

Waltzing (29) rechaza esta teoría, basándose en la identidad entre los textos de Lanuvio y de Marciano.

Sin embargo, es lo cierto que no puede afirmarse una absoluta coincidencia entre el texto contenido en la inscripción de Lanuvio y el texto de Marciano.

Marciano (30) emplea el término tenuiores, cosa que no hace el Senadoconsulto; el Senadoconsulto habla de una cotización mensual para los gastos de los funerales, mientras que Marciano no indica expresamente cuál era el destino que se daba a lo obtenido con la cotización mensual de los asociados.

Otro razonamiento utilizado por Waltzing para tratar de probar su teoría de que los Collegia Tenuiorum eran siempre Collegia Funeraticia, es el de que no se puede demostrar la existencia de Collegia Tenuiorum que no sean Collegia Funeraticia.

Este razonamiento tiene la debilidad propia de todos los argumentos que se basan en hechos negativos, en silencios, pero además no es absolutamente exacto que no se tenga noticia de colegios de gente humilde en que las ayudas a los asociados tengan otra forma de actuación que la de proporcionar dinero para atender a los gastos de enterramiento.

Existen las noticias contenidas en las cartas que se cruzaron entre Plinio el Joven y Trajano.

En una carta de Trajano (31) se habla de asociaciones que venían en ayuda de los pobres, literalmente se dice: "Ad sustinendam tenuiorum inopiam".

Waltzing no se considera convencido por estas palabras de Trajano en orden a caracterizar la sociedad aludida como una sociedad que tenía por finalidad, única o principal, socorrer a los indigentes y enfermos y hace notar que Trajano no dice de

qué manera se acudía en socorro de los pobres, ni era por medio de donativos o a través de préstamos reembolsables, como se hacía en los ἔργαυοι.

Parece, no obstante difícil aceptar como medio más idóneo de ayudar a los pobres, a los que están en la miseria, el sistema de préstamos que luego hayan de devolverse y tampoco es muy convincente la comparación con lo que se hacía en los institución de las ciudades griegas. Es cierto que Trajano dice que las leyes de Amiso permitían a sus habitantes "eranum habere", pero ello no quiere decir que el empleo del término "eranus" no fuese hecho con una intención meramente indicativa y por comparación más que con el objeto de definir el modo de actuación de la sociedad existente en Amiso, identificándola con instituciones de otros ámbitos jurídicos y culturales.

El mismo Waltzing (32) reconoce que no hay indicios en Occidente de sociedades idénticas a los ἔργαυοι.

A todo lo dicho acerca de la posible identificación a que se acaba de aludir, debe añadirse que como hizo notar T. Reinarch (33) no siempre se ha hecho la oportuna distinción entre eranus = préstamo y eranus = sociedad.

Bandini enfoca el texto de Marciano de forma bien diferente (34).

Este autor no excluye el que los Collegia Teruiorum tuviesen, además de la finalidad de atender al enterramiento de los asociados, la de socorrerles en sus necesidades. Más aún, rechaza

za la idea de que Marciano esté refiriéndose a Collegia Tenuiorum en los que sólo se atendía al enterramiento.

Para Bandini la prohibición de pertenecer a dos colegios tiene otra explicación, no se trata de evitar que los colegios funerarios se transformen en asociaciones sediciosas, es decir, de prevenir coaliciones, como pensó Waltzing. No cree Bandini que el hecho de pertenecer a un colegio de esta clase supusiese para el individuo un gran apoyo frente al estado y, por otra parte, no considera lógico que después de haberse autorizado en bloque los colegios de esta naturaleza, se sintiesen recelos o temores por el hecho de que alguien perteneciera a dos colegios.

La explicación que ofrece Bandini del texto de Marciano es la siguiente: La disposición de los Emperadores Marco Aurelio y Vero no se refería a los Colegios privados, sino a los oficiales.

Después de un examen de las fuentes epigráficas, concluye que se podía pertenecer a dos colegios privados o a uno privado y a otro público, pero no a dos colegios oficiales.

Ahora bien, la teoría de Bandini presenta una cierta dificultad para su aceptación, y es la de que parte de la suposición de que en tiempo de dichos emperadores, los colegios eran órganos administrativos por lo que un mismo individuo no podía ser funcionario con dos actividades distintas y ésta es una suposición que no ha sido confirmada.

En cuanto a la fecha del Senadoconsulto que permitió en bloque la constitución de los collegia tenuiorum se ha pensado que no debió ser posterior a Adriano y la opinión es fundada por que dicho Senadoconsulto se aplicó en Lanuvio en el año 133 y probablemente ya existía en el año sesenta y siete (35).

Por algunos autores se ha querido buscar el fundamento jurídico de la autorización global de los Collegia Tenuiorum y partiendo de la consideración de que se trataba de una disposición que derogaba la ley Julia, han creído encontrar dicho fundamento en la facultad del Senado de dispensar de la observancia de las leyes.

En los últimos siglos de la República, el Senado se atribuyó el poder de suspender las leyes, pero en rigor tal poder no le correspondía, porque tal facultad (*solvere legibus*) solamente al pueblo correspondía. El partido de los populares jamás reconoció que el Senado estuviese investido de tal competencia (36).

Durante el siglo I del Imperio se fue reforzando la atribución de esta competencia al Senado. Era el tiempo en que empezaba a declinar el poder legislativo de las asambleas del pueblo como consecuencia de las transformaciones producidas tanto en la extensión territorial del Imperio, como en su densidad de población y en su complejidad político-administrativa y todavía no se había afirmado el poder imperial que iría en progresión creciente, sobre todo a partir de Adriano, hasta culmi-

nar con Diocleciano y sus sucesores.

Ya Pernice (37) pensó que todo senadoconsulto que concedía autorización a un colegio que la solicitaba, tenía el valor de una dispensa de la ley Julia, no exactamente de una derogación del Derecho establecido por la ley.

Para Mommsen (38) el derecho de asociación fue abolido con carácter general por las leyes de Augusto y las dispensas para Italia y las provincias senatoriales tendrían que ser solicitadas del Senado.

Saleilles (39) ha replanteado el tema de la siguiente forma: Ante todo ha de resolverse una cuestión previa y es la de si la disposición del Senado tenía solamente el valor de una declaración encaminada a constatar que la inocuidad de la asociación era cierta, una declaración que lo único que hace es manifestar que el colegio que ha solicitado la autorización no ofrece ningún peligro para el orden público a la vista de sus estatutos, su composición y su finalidad, o si, por el contrario el Senadoconsulto puede ser identificado con un acto de creación jurídica.

En el primer caso, si se trata sólo de levantar una prohibición, la asociación se crea de algún modo por ella misma, en virtud del Derecho común existente. En el segundo caso, en cambio la existencia jurídica de la asociación procede de una concesión por parte del Estado que crea un Derecho nuevo.

Detrás de estos planteamientos teóricos existen cuestiones

de interés práctico.

Si se trata solamente de una medida de policía, levantando una prohibición legal, será suficiente con que se acredite que la asociación que se va a autorizar no encierra ningún peligro para el orden público y no será preciso exigir que se demuestre que encierra un positivo interés para la colectividad.

Si, por el contrario, es el Senado el que da vida jurídica a la asociación, será necesario probar su utilidad pública.

Parece que se trataba, más bien, de una creación por la vía de la autorización, si bien los requisitos para esta creación no fueron exigidos siempre con el mismo rigor, sino que al irse alejando en la historia de Roma, el recuerdo de los tiempos en que las asociaciones perturbaban grandemente la vida del Estado, se fue considerando suficiente una prueba negativa de que la asociación que solicitaba ser autorizada era inofensiva.

Mommsen a diferencia de Saleilles adoptó, en su tratado de Derecho público romano, un planteamiento uniforme y, por ello mismo, insuficiente al sostener que el Derecho de asociación fue abolido con carácter general por las leyes de Augusto y que las dispensas para Italia y las provincias senatoriales tendrían que ser solicitadas del Senado.

En primer lugar cabe observar que no debe hablarse de leyes de Augusto, sino de una ley de César y de otra de Augusto. La Ley de César suprimiendo colegios, la de Augusto establecien

do las normas para la autorización de nuevos colegios.

El Senado al autorizar asociaciones, les confiere vida jurídica pero obra respaldado por la ley "e lege Julia" y valorando según su parecer la oportunidad de la concesión.

Enfocada así la autorización de colegios no se advierte que exista una grave dificultad para la autorización en bloque de los Collegia tenuiorum, que deben ser entendidos simplemente como asociaciones de gente humilde que no sólo atendían a los gastos de funeral, que es a lo que se refiere la inscripción de Lanuvio, sino que también podían acudir al socorro de los necesitados en otra forma.

N O T A S

- (1) D., 48, 19, 28, 2. Cfr. Mitteis en Melanges P.F. Girard, Paris 1912, II, p. 215 y ss.
- (2) Así en el Tratado de las Leyes de Cicerón se establece la oposición Tenuiores-Principes.
- (3) C.I.L., XIV, 2112.
- (4) De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843, p. 81.
- (5) Zum römischen Vereinsrecht, Berlín 1873, p.p. 101 y 139.
- (6) F.M. de Robertis, Il diritto associativo romano, Bari 1938, p. 247.
- (7) R. Saleilles, De la personnalité juridique, Paris 1922, p. 65.
- (8) Scritti, Milán 1973, I, p. 50.
- (9) Le Corporazioni, Bari 1934, p. 36 y especialmente n. 4.
- (10) Historia social y Económica del Imperio Romano, Madrid 1937 (trad. esp.) I, p. 322.
- (11) Geschichte der juristischen Person, I. Aalen 1969, p. 241.
- (12) Etude historique sur les Corporations professionnelles, Roma 1968, I, p. 142 y ss.
- (13) Bolletino di archeologia cristiana, VI, serie, Roma 1864, p. 61.
- (14) La Roma sotterranea cristiana, Roma 1877, p.p. 507-514.
- (15) Zum römischen Vereinsrecht, Berlin 1873, p.p. 101 y 139.
- (16) Cfr. T. Mommsen, Römische Urkunden en Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, XV, p. 115 y ss. y T. Schiess, Die römischen Collegia funeraticia nach den Ynschriften, Munich 1888, p.p. 6-7.
- (17) Die Strafgesetzgebungen der Römer gegen Vereine en Abhandlungen aus dem Process und Strafrecht, Berlín 1837, II, p.p. 186 y 189 y ss.
- (18) D., 47, 22, 3, 1.
- (19) D., 47, 22, 1, pr.
- (20) D., 47, 22, 1, 1.
- (21) De collegiis et sodaliis Romanorum, Kiel 1843, p. 92.
- (22) E. Ruggiero, Dizionario Epigrafico, Roma 1961, v. columbarium.

- (23) C.I.L. VI, 3926-4327.
- (24) Es preciso hacer notar que Varron (De l.l.5) emplea el término co-lumbarium unas veces para indicar el edificio entero y otras un nicho.
- (25) D., 47, 22, 1, 2.
- (26) De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843, p. 90. Cfr. Cardinali, Diplomi imperiali, p. 264, n. 510.
- (27) Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, III, Aalen 1974, p. 462, n. 20.
- (28) De la misma opinión que Vallon fueron otros autores, por ejemplo, Kay-sen, ob. cit., p. 187 y Loening, Geschichte der deutschen Kirchenrechts, Estrasburgo 1878, I, p. 205.
- (29) Etude historique sur les Corporations professionnelles, Roma 1968, I, p. 145 y ss.
- (30) D., 47, 22, 1.
- (31) Ep. X, 93.
- (32) Ob. cit. p. 146.
- (33) Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s.v. Eranos.
- (34) Appunti sulle Corporazioni romane, Milán 1937, p. 86 y ss.
- (35) C.I.L., VI, 471.
- (36) P. Willems, Le sénat de la République romaine, Lovaina 1883, II, p.p. 116-117.
- (37) Labeo, I, p. 303.
- (38) Le Droit public romain, Paris 1896 (trad. franc.) V, p.p. 160 y 164.
- (40) De la personnalité juridique, París 1922, p. 62 y ss.

CAPITULO XV

Collegia Tenuiorum y Comunidades Cristianas

Una cuestión que ha motivado diversas investigaciones y dado lugar a no pocas publicaciones es la de cuáles fueron las formas jurídicas utilizadas por los cristianos para poseer bienes durante los primeros siglos del cristianismo.

De Rossi (1) sostuvo que la Iglesia poseyó bienes bajo la forma de una asociación funeraria.

Para este autor, las asociaciones de ayuda mutua y las asociaciones funerarias fueron las utilizadas por los cristianos, antes de Alejandro Severo, para poseer en muchas ciudades del Imperio sus propios cementerios. En tiempo de Alejandro Severo y los emperadores que le sucedieron favorables a los cristianos, aquél título fue legalmente reconocido y dio lugar a una mayor tolerancia.

De Rossi se está refiriendo, como es obvio a los Collegia tenuiorum calificados por Mommsen como Collegia Funeraticia.

Para Allard las posibilidades son mayores, ya que entiende que al lado de las asociaciones profesionales y de los colegios funerarios existían en realidad numerosas asociaciones que no pertenecían ni a una ni a otra categoría, las cuales, si bien no tenían personalidad jurídica, eran sin embargo, toleradas, siempre que no degenerasen en facciones ilícitas (2).

Duchesne, por el contrario, sostuvo que la Iglesia poseía bienes por sí misma, como sociedad religiosa, sin necesidad de recurrir a subterfugio legal alguno.

Piensa Duchesne que los emperadores del siglo III tuvieron para la Iglesia una actitud muy definida, o la perseguían o la toleraban, pero jamás la ignoraban. Insiste Duchesne en que los documentos y en general, las fuentes de conocimiento, no sólo no dan testimonio, sino que ni siquiera permiten albergar sospecha alguna acerca de la utilización de ficciones legales o el recurso a títulos misteriosos (3).

La teoría de Duchesne fue acogida y desarrollada por Waltzing quién añadió la hipótesis de que los cristianos poseyeron a título colectivo y no corporativo y que este régimen les permitió vivir día a día. Waltzing escribió (4): "Pensamos que hasta el Edicto de Milán los cristianos tuvieron que contentarse con esta situación precaria, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista jurídico, salvo cuándo ciertos emperadores adoptaron en su favor decisiones que podían ser consideradas como una autorización formal de su culto y de sus asociaciones".

La Piana (5) estudió detenidamente las asociaciones extranjeras en Roma, especialmente las judaicas y llegó a las siguientes conclusiones: Las asociaciones romanas de cultores, tanto si rendían culto a divinidades extranjeras, como si rendían culto a divinidades romanas, eran colegios funerarios; eran numerosos los colegios que perseguían principalmente una finalidad funeraria y reclutaban a sus miembros entre los inmigrantes de una misma provincia o ciudad que tenían el mismo oficio, por lo general bastante modesto. Esto conduce a pensar en un gran frac-

cionamiento de los cristianos en Collegia Funeraticia y lleva a Lapiana a decir que el cristianismo romano más que una comunidad [P homogénea fue una federación de grupos étnicamente diversos y a estimar que siguiendo las costumbres de los grupos inmigrantes y las exigencias de la industria o del oficio con el que se ganaban la vida o la situación social que ocupaban entre las clases más humildes, también los cristianos debieron reagruparse más o menos, siguiendo las afinidades regionales o de profesión y formando en consecuencia en los diversos distritos pequeñas Iglesias domésticas.

Marucchio (6) escribió que se puede pensar que la Iglesia poseía bajo el nombre de particulares, que habrían sido los propietarios legales, los responsables a los ojos del poder civil (7).

La teoría expuesta por De Rossi fue muy combatida. En contra de ella se dijo que las comunidades cristianas eran tan numerosas que no podían hacerse pasar por colegios funerarios y que si se admitía la constitución de esos colegios por ciudades, la legislación romana podría haber obstaculizado su formación, añadiendo que no es necesario recurrir a la hipótesis de asociaciones funerarias cuando se puede explicar igualmente el desarrollo de la propiedad eclesiástica teniendo en cuenta la actitud del Estado romano hacia las asociaciones y hacia el Cristianismo en los tres primeros siglos (8).

También se ha hecho observar por Roberti que es muy difícil de admitir que las comunidades cristianas se refugiasen en

la figura del colegio funerario, renunciando así a la concepción de la Iglesia como corpùs, como persona jurídica por si misma (9).

Monti cree que hay que puntualizar en el sentido de que la cuestión no podía plantearse antes de fines del siglo II, puesto que según Celso, los cristianos se reunían secretamente y en contra de lo dispuesto por las leyes de aquel tiempo (10) y además parece que eran enterrados en los cementerios privados de los correligionarios ricos.

Se ha aducido en este mismo sentido el hecho de que Plinio en su correspondencia con Trajano no menciona los comentarios de los cristianos, lo que viene a poner de relieve que las autoridades no tenían noticia de la existencia de sepulcros comunitarios o bien que estaban legítimamente tutelados contra los senadoconsultos que prohibían las asociaciones y las religiones extranjeras y contra los edictos imperiales que prohibían las asociaciones ilícitas (11).

Contra De Rossi argumente Duchesne (12) alegando que los colegios funerarios eran asociaciones poco numerosas de unas docenas de personas y la Iglesia de una gran ciudad, como las Iglesias de Roma, de Cartago o de Alejandría, podría contar fácilmente a mediados del siglo tercero de treinta a cuarenta mil fieles por lo que difícilmente podía ser presentada como colegio funerario una multitud tan considerable.

Esta objeción no es muy sólida puesto que se basa en la hi

hipótesis | concentración de un gran número de personas en un sólo | de la
colegio funerario.

En este sentido se pronunciaron Besnier (13) y Leclercq (14), añadiendo la observación de que los cristianos de una gran ciudad podrían constituir tantos colegios como comen-
tarios había.

Más no se trata solamente de una hipótesis, sino que tam-
bién se poseen datos históricos, correspondientes al siglo ter
cero.

Se sabe que el Papa Fabiano en el año 238 distribuyó entre
siete diáconos los cementerios de la amplia zona suburbana pró-
xima a la ciudad asignando a cada uno de ellos una región que
comprendía un grupo de cementerios (15).

También el Papa Dionisio en los años 159-268, manteniendo | ?
la división en siete regiones, asignó a cada parroquia un cemen-
terio, quedando encargado del mismo el correspondiente sacerdo-
te titular de la parroquia (16).

No obstante las alegaciones de Besnier y Leclercq, Walt-
zing se mantuvo en la línea de oposición a la teoría formula-
da por De Rossi y en apoyo de la de Duchesne, razonando del si-
guiente modo: La organización de las comunidades cristianas era
única en cada ciudad, bajo un sólo Obispo y la autoridad religio-
sa no habría podido soportar la existencia de grupos independien-
tes en la misma ciudad.

Frente al razonamiento de Waltzing se ha dicho que la división puramente jurídica a efectos de relación con los poderes públicos es algo diferente de la unidad propia del vínculo religioso (17), lo que vendría a reforzar las alegaciones de Besnier y Leclercq.

Una nueva objeción plantea Duchesne a la teoría defendida por De Rossi.

Duchesne (18) habla de la profunda repulsión que los colegios inspiraban a los cristianos. Para hacer esta afirmación se funda en Tertuliano y en un episodio sucedido a un Obispo español, el Obispo Marcial de León y Astorga.

Este Obispo fue depuesto en el año 254 por haber participado en los banquetes de un colegio pagano y haber hecho que enterrasen a un familiar suyo (19).

Roberti ha citado diversos textos cristianos que revelan una profunda antítesis entre Cristianismo e Imperio.

Hay un texto que revela una acusada intransigencia. Tertuliano dice: "En rigor el cristiano no deberá pagar los impuestos porque nada deberá poseer. No podrá prestar un servicio militar tan profundamente viciado por el espíritu paganizante. No podrá ocupar cargos públicos. Alguien podía murmurar ¿cómo será posible entonces vivir? Será preciso dejar este mundo". A esto, Tertuliano responde que casi no es tan gravoso salir de este mundo como el ser tenido por idólatra.

Sin embargo, existen otros textos de los cuales se puede deducir que la Iglesia no fue siempre hostil a todas las leyes del Estado.

No se consideraba un sacrilegio ni una amenaza al concepto de la Iglesia como institución de carácter divino, el seguir las leyes romanas que no violasen la fe. Los primeros cristianos se mostraban observantes de las leyes romanas.

A todas estas consideraciones se han añadido otras por Monti (20) como por ejemplo que las inscripciones cristianas seguían las indicaciones cronológicas paganas, no dejando suponer la existencia de un espíritu de partido.

El autor citado expone claramente su punto de vista de que los fieles cristianos de los primeros siglos no consideraban pecaminoso ni odioso revestir la forma de Collegia Tenuiorum.

En contra de la teoría de Rossi, es decir, en favor de la doctrina de que la Iglesia Católica, antes de Constantino, no necesitaba adoptar la forma de los Collegia Tenuiorum, sino que podía vivir a la luz pública se ha citado por Besnier (21) una inscripción griega del Monte Athos en la cuál un tal Eufrosino prohíbe que se sepulte junto a él y a su esposa a otras personas y amenaza con una multa a favor de la Iglesia Católica y de la ciudad Efestia.

Sin embargo, esta inscripción contiene algunos detalles que hacen que no sea absolutamente segura.

En primer lugar, la inscripción no tiene fecha y solamente por las características de la escritura se ha podido conjeturar que debe corresponder más al siglo XIII que al siglo IV y naturalmente si perteneciese al siglo IV carecería de toda utilidad para enjuiciar la organización jurídica de las comunidades cristianas durante los tres primeros siglos.

Millet que publicó la inscripción afirmó que si fuese realmente del siglo III estaríamos ante un documento capital que probaría cuál era la situación de la Iglesia antes de Constantino (22).

No sólo mantiene Millet cierta reserva, pues también Besnier advierte que hasta realizar una más amplia investigación la inscripción a de acogerse con toda clase de reservas.

Existen otras circunstancias que permiten dudar acerca de la pertenencia de la inscripción a los tres primeros siglos.

Entre estas circunstancias puede citarse la denominación de Católica que sólo se aplicó a la iglesia en los cánones de los Concilios del siglo III y es necesario llegar al siglo IV para que en los documentos de Constantino tome un carácter oficial. En conclusión, la inscripción de Monte Athos no constituye una base firme de objeción contra la tesis mantenida por De Rossi.

En contra de la teoría de Marucchi se ha dicho que no existen pruebas en que poder fundamentarla. En determinados casos po

día ocurrir que los bienes donados permaneciesen en poder de los donatarios o bien, que quizás el jefe de la comunidad cristiana, Presbítero u Obispo recogiese en nombre propio no sólo bienes muebles sino también los bienes inmuebles pertenecientes a las comunidades cristianas, pero parece que tal medio no era el más adecuado, dadas las posibles dispersiones en una época en que los cristianos eran perseguidos (23).

Tampoco parece admisible la teoría de que los bienes propiedad de la Iglesia o de las comunidades cristianas carecían de todo reconocimiento por parte del Estado, por existir claros testimonios que contradicen tal suposición.

Entre estos testimonios podemos señalar uno citado por Duchesne. Es el caso de Calixto, Diacono puesto al frente de un cementerio cristiano, no como administrador a título privado, sino como representante del Corpus fidelium (24).

Otro testimonio muy significativo, casi contemporáneo del anterior y que se remonta a los primeros años del siglo III, es el de Tertuliano, el cuál hablando de las amenazas del pueblo pagano en Cartago contra las sepulturas de las comunidades cristianas dice: "Sub Hilarione praeside cum de areis sepulturarum nostrarum adclamassent: Areae non sint" (25).

Una treintena de años después se hizo famosa una sentencia de Alejandro Severo a propósito de un lugar público que era reclamado a la vez por la comunidad cristiana y por la asociación de vendedores de vino. Alejandro Severo decidió a favor de la co

munidad cristiana, empleando la siguiente argumentación: "Me-
lius esse ut quemadmodumcumque illic Deus colatur quam propi-
nariis dedetur" (26).

Del año 272 es una sentencia del Emperador Aureliano a propósito de un pleito entre los cristianos de Antiquioquia y un Obispo de la misma ciudad que había incurrido en heregia. La discusión versaba sobre la propiedad de la casa de la comu-
nidad y el Emperador Aureliano resolvió que la casa fuese dada a aquél de los dos obispos que estuviese en relación epistolar con los Obispos de Roma y de Italia (27).

Entre otros textos que pudieran citarse cabe mencionar una disposición del Emperador Galieno en el año 260, ordenando que se cedieran a los obispos los lugares de culto y declarando abiertamente que podían tomar posesión de sus cementerios.

Monti resume así su teoría sobre la organización jurídica de las comunidades cristianas (28): Por un lado parece seguro que los bienes inmuebles, especialmente los sepulcros estaban atribuidos como propiedad corporativa a determinadas comunidades cristianas y por otro la Iglesia no podía ser reconocida legalmente como sociedad religiosa, porque se trataba de una religión prohibida, lo que lleva a concluir que la única forma en que cada Iglesia podía ser reconocida como persona jurídica apta para suceder, debía ser aquella de los Collegia Tenuiorum a que tan favorable se mostraba la legislación romana.

Viene pues Monti a coincidir con la teoría que defendiera

De Rossi, pero establece algunas precisiones acerca de como debe entenderse esta teoría al afirmar que es la menos improbable y no convincente en todas sus partes. No debe entenderse, puntualiza, como la entendieron Duchesne y Waltzing, es decir, como que las comunidades cristianas se ocultaron bajo la forma de aquellos colegios a los ojos del Estado y de su policia, con una posible convivencia de esta última.

El mismo De Rossi consideró difícilísimo que aquella institución fuese constantemente disimulada a los ojos de la ley (29).

El problema para Monti está, en separar el aspecto político y práctico de la cuestión, del jurídico. El Estado, dice, puede tolerar y toleró a menudo la existencia de hecho de las comunidades cristianas, pero no alteró o mudó su legislación sobre la propiedad de la cuestión del jurídico. El Estado, dice, puede tolerar y toleró a menudo la existencia de hecho de las comunidades cristianas, pero no alteró o mudó su legislación sobre la propiedad inmobiliaria y las personas jurídicas.

Admitida la existencia de una propiedad eclesiástica corporativa, se hacía preciso determinar a quienes serían atribuidos los bienes en concreto, a nombre de quienes serían pagados los impuestos, a nombre de quienes se recibirían los legados, etc.


La función jurídica del colegio funerario no habría sido la de esconder los cristianos a los ojos del Estado, sino la de hacerlos aptos para poseer.

Con razón afirma Saleilles que hay que aceptar las cosas tal como son, tal como los textos nos las presentan. No debe hablarse más que de propiedad colectiva de la comunidad, de lugares de culto que pertenecían a las Iglesias. Es precisamente esta propiedad colectiva y no otra cosa la que es preciso explicar y justificar, desde el punto de vista jurídico, frente al carácter ilícito de la asociación a la cuál se atribuye esa propiedad, sin esquivar el problema.

Establecido este planteamiento, Saleilles (30) parte de una consideración previa y es la de que desde el siglo II no se trata, en los textos, de la ley Julia, aunque se le hagan vagas alusiones. Si parece haber habido numerosos edictos, constituciones imperiales y rescriptos para regular la aplicación de aquella ley y parece resultar de esta confusa legislación que la libertad de asociarse iba ganando terreno bajo el Imperio y las asociaciones no autorizadas existían libremente y se multiplicaban.

Según este autor puede afirmarse que el Derecho común era que las asociaciones, de hecho, se fundasen libremente, pero a su propio riesgo, pudiendo ser disueltas cuando se considerasen facciosas.

Otra cuestión es si este Derecho común se aplicó a los cristianos. Esto parece difícil afirmarlo pues si el Cristianismo serían ilícitas en consecuencia, no por falta de autorización, si no por el fin perseguido.



Saleilles no dejó de tomar en cuenta esta circunstancia y para resolver la dificultad y después de reconocer el significado del discurso apologético de Tertuliano, hace observar que si bien es indiscutible que existían leyes especiales para el delito individual de profesar el Cristianismo, no las había, en cambio, para prevenir el delito colectivo. Este último sólo podía resultar de un razonamiento jurídico, de una jurisprudencia administrativa que aplicaba las leyes sobre el delito individual al hecho del delito colectivo.

En opinión de Saleilles no existían en la época de Tertuliano leyes que prohibiesen expresamente las comunidades cristianas, porque dicho autor no las cita. Lo que hace Tertuliano es protestar contra la aplicación abusiva de la ley.

Es verdad que se ha dicho que si el ser cristiano era un delito, una asociación de cristianos tendría que ser un delito contra el orden público. Ahora bien, no hay nada más variable que la noción de orden público y la concepción de finalidad ilícita en materia de asociaciones.

En los largos períodos de tolerancia, cuándo las autoridades dejaban a los cristianos en paz y no les inquietaban en sus reuniones, parece lógico que tendrían una concepción del orden público modificada y tendente a la creación de una jurisprudencia nueva.

Hubo épocas en que los cristianos celebraban su culto al aire libre y no se puede concebir que toda esta vida exterior

fuese una vida extralegal.

En conclusión, Saleilles (31) entiende que los cristianos no trataron de ocultarse bajo una nueva forma corporativa extraña, la de los Collegia tenuiorum, lo que no habría engañado a nadie. Puestos a correr los riesgos inherentes a su condición de proscritos, prefirieron correrlos a cara descubierta protestando contra el ostracismo que los ponía fuera de la ley y pudiendo acogerse al Derecho común. Su actitud paciente y heroica les valió ser admitidos a éste Derecho.

Después de esta expresión de teorías acerca de cual fue la organización jurídica de las comunidades cristianas en los tres primeros siglos, sobre todo en el aspecto de sus propiedades inmobiliarias y concretamente sus cementerios, se hace preciso formular algunas conclusiones.

1a) No se pueden obtener conclusiones seguras acerca del enigma suscitado por la asistencia de ciertos bienes atribuidos a determinadas comunidades cristianas con carácter corporativo y no a cada uno de sus miembros individualmente, considerado, en un ambiente en el que ser cristiano era considerado como un delito.

2a) A esta inseguridad contribuye el hecho de que algunas fuentes de conocimiento que podían aclarar el enigma, lo mismo pueden pertenecer al siglo III que al siglo IV, con lo cuál su información se hace cuestionable.

3a) Tampoco pueden obtenerse conclusiones firmes utilizan-

do textos de autores especialmente rígidos e intransigentes, que no representan la actitud común de los escritores cristianos de la época.

4a) A lo largo de tres siglos, vividos en un ambiente de constante reforma y progresión, tuvo que ser muy distinto el tratamiento jurídico adoptado respecto de los bienes de las comunidades cristianas, lo mismo que también cambió a lo largo de tan dilatado período la actitud de los poderes públicos frente a la religión cristiana.

5a) No debe ser confundida la organización jurídica de las comunidades cristianas, en cuánto a sus bienes inmuebles, con la identidad del vínculo religioso.

6a) Una cosa eran las leyes establecidas y otra bien distinta la aplicación que de esas leyes se hacía en casos concretos.

7a) La posible utilización de la figura precristiana de los Colegia Tenuiorum solo puede aceptarse para breves períodos de tiempo y para difíciles circunstancias de supervivencia de los cristianos.

N O T A S

- (1) La Roma sotterranea cristiana, Roma 1864-1877, I, p.p. 101-108, 209-210 y II, p.p. 258 y 370 y ss, asimismo III, p.p. 473, 507-514.
- (2) Roberti en Studi P.P. Zanzucchi, Milán 1927, p. 10. Cfr. Le Christia nisme et l'Empire romain de Nerón a Theodose, París 1897. p. 78 y ss.
- (3) Histoire ancienne de l'Eglise, I, París 1923, p. 387.
- (4) En Cabrol Leclerq, Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne III, 2, Pa ris 1912, col. 2114.
- (5) L'Immigrazione a Roma nei primi secoli dell'Impero en Ricerche Reli giose, 1926, II, p. 540 y ss.
- (6) Elements d'Archeologie Chretienne, I, Roma 1905, p. 124.
- (7) Cfr. Neubecker, Vereine ohne Rechtsfähigkeit, I, Leipzig 1908, p.p. 80-87.
- (8) Objeciones formuladas por Duchesne y Waltzing.
- (9) Cfr. Roberti, ob. cit. p.p. 14, 18, 23.
- (10) Orígenes, Contra Celsum, I, 1.
- (11) Monti en Studi in onore di Salvatore Riccobono, Palermo 1936, III, p. 75.
- (12) Ob. cit., p. 385.
- (13) Les Catacombes de Rome, Paris 1909, p. 46.
- (14) Dictionnaire d'Archeologie chritienne, III, París 1914, s.v. Catacom bes.
- (15) De Rossi, La Roma sotterranea cristiana, Roma 1864-1877, III, p. 525.
- (16) De Rossi, Loc. cit.
- (17) Monti, Studi in onore di Salvatore Riccobono, Palermo 1936, p. 82.
- (18) Histoire ancienne de l'Eglise, I, Paris 1923, p.p. 384-385.
- (19) Cipriano, Ep. LXVIII, 6.
- (20) Studi in onore di Salvatore Riccobono, III, Palermo 1936, p. 87 y ss.
- (21) Eglises chretiennes et Colleges funeraires en Melanges Albert. Dufourcq, París 1932, p.p. 9-19.
- (22) G. Millet, Recherches au Mont Athos, I, en Bull. de correspondance helle nique XXIX, 1905, p.p. 55-72.

- (23) Roberti; ob. cit. p. 13.
- (24) Histoire ancienne de l'Eglise, Paris 1923, I, p. 293.
- (25) Monti; ob. cit. p. 77.
- (26) Lampridio, Vita Alexandri Severi, XLIX.
- (27) Eusebio, Historia ecclesiastica, VII, 30.
- (28) Ob. cit. p. 91 y ss.
- (29) La Roma sotterranea cristiana, Roma 1964-1977, I, p. 209.
- (30) L'organisation juridique des premières communautés chrétiennes en Melanges Girard, II, Paris 1912, p. 469 y ss.
- (31) Ob. cit., p.p. 508-509.

CAPITULO XVI

Organización interna de los colegios

ORGANIZACION INTERNA DE LOS COLEGIOS

De la época en que los collegia tenían carácter privado y no eran instituciones de carácter público y obligatorio y el Estado no controlaba directamente los cargos directivos de los colegios y sus funciones específicas, no abundan los textos referentes a la organización interna de las asociaciones, pero gracias a las fuentes epigráficas, sobre todo, se ha podido reconstruir con bastante aproximación la organización interna de los colegios, al menos en sus líneas generales.

Los miembros de los colegios se reunían en asambleas o conventus (1), bajo la presidencia de los magistri. No se sabe con seguridad cuáles eran exactamente las atribuciones de estas asambleas, pero si se sabe de acuerdos tomados para honrar a determinadas personas, especialmente a los patronos.

Los colegios se dividían en centurias, al frente de las cuáles había centuriones u optiones (2).

Las centurias frecuentemente se dividían en decurias y al frente de cada decuria estaba un decurión (3).

Los decuriones formaban una especie de comité de dirección que recibía el nombre de ordo decurionum.

Los patronos, en el período clásico, eran personas de prestigio e influencia que prestaban asistencia y protección al colegio, no siendo preciso que perteneciesen a él.

También se han encontrado en algunas inscripciones las denominaciones de pater o mater en el sentido de protector o protectora de un colegio.

Los directivos del colegio, propiamente dichos, eran los magistri, nombrados normalmente por los asociados o por el comité directivo del colegio.

En época de Adriano y como una manifestación más de la política de este emperador, se sabe que algunos magistri fueron designados por orden imperial (4).

La duración del cargo de magister duraba uno o cinco años.

En algunas inscripciones se ha encontrado la denominación de quinquennales perpetui (5) pero teniendo en cuenta que los romanos emplean el termino perpetuus en un sentido relativo, según se desprende, entre otros datos, de la denominación de actiones perpetuae, a las acciones que tienen señalado un plazo de treinta o cuarenta años, no existe contradicción en el empleo de los términos quinquennales y perpetui para designar unos cargos en las asociaciones.

Los magistri convocaban las asambleas de los asociados, dirigían las discusiones, hacían ejecutar los acuerdos, velaban por la disciplina y eran los encargados de dirigir las actividades de carácter religioso.

En las asociaciones de artesanos, no en las organizaciones funerarias, podían imponer sanciones a los afiliados que actuaban contra los estatutos (6).

Los curatores eran de un rango inferior a los magistri, se puede decir que eran quienes se limitaban a ejecutar los acuerdos, por lo que pudieran ser calificados como una especie de jefes de secretaría.

Sin embargo, no deben ser considerados como cargos de nivel modesto, ya que a veces el que era curator en una asociación era magister en una sociedad distinta y no era raro que perteneciese a familias influyentes. Se tiene noticia de estatuas elevadas en honor de curatores (7).

Los quaestores eran quienes normalmente dirigían la gestión financiera del colegio.

Función que excepcionalmente correspondía a un curator arcae. El quaestor también se llamó arcarius en algunas asociaciones.

Tratándose de colegios funerarios se han encontrado alusiones a quaestores pertenecientes al sexo femenino (8).

Si el curator puede ser considerado como una especie de secretario general, existían también secretarios especiales y subordinados como el scriba, el tabularius y el notarius. Venían a desempeñar funciones de fedatarios y archiveros.

El viator era el mensajero del presidente y el que citaba para las reuniones de los asociados. Aparte de estos cargos que, hasta cierto punto, pudieran considerarse como ordinarios, existían otros que parecen haber existido en determinadas asociaciones.

nes y que no siempre tenían las mismas funciones.

Así el dispensator o fiscalizador de las cuentas; el magister cenarum encargado de la organización de los banquetes; el vexillifer o portaestandartes, etc.

En algunas inscripciones se menciona a los honorati. ¿Cuál era el rango de éstos en la organización colegial?.

Ante todo hay que indicar que los honorati no aparecen mencionados en todas las inscripciones relativas a los colegios. Hay veces que los honorati figuran a continuación de los patronos y delante de los decuriones (9), otras en que los honorati van detrás de los magistri quinquennales y falta toda alusión a los decuriones (10).

En una inscripción relativa al colegio de los fabri teignarii de Ostia (11), el gran puerto de Roma que con el de Puteoli constituían los principales puntos de llegada de los suministros a Roma, se lee lo siguiente: "Honorati et decuriones et numerus militum caligatorum". En esta inscripción se presenta a los honorati formando parte del colegio pero, en cambio, existen otras inscripciones en las que los honorati son considerados como si no estuviesen integrados en el colegio, es decir, que no fuesen miembros ordinarios del mismo, distinguiéndose entre corporatus y honoratus.

Lo que parece casi seguro es que sus funciones debían ser semejantes, en buena medida a las de los decuriones y ésta sería probablemente la causa principal de que en alguna inscrip-

ción apezcan los honorati y falten los decuriones.

En doce inscripciones se encuentran mencionados los immunes (12).

Lo que ofrece una interesante particularidad en estas inscripciones es que en nueve de ellas la calificación de inmune no va acompañada de la indicación del cargo que en el colegio desempeñaba esa persona. Lo que plantea varias cuestiones:

Cuándo se acompaña el calificativo de inmune a un cargo de terminado ¿quiere decir que los otros cargos no conferían la inmunidad? ¿significa que se trataba de cargos que por si mismos no conferían inmunidad y por ello era preciso destacar esa circunstancia? ¿Cómo se explica que pueda tener inmunidad quién no desempeña en el colegio cargo alguno? Los immunes sin cargo ¿se rían personas que habían adquirido la inmunidad por méritos o servicios ajenos al colegio?

La escasa información que se posee acerca de estos immunes no permite formular conclusiones seguras.

En relación con la organización de los colegios en el Principado hay que citar un funcionario llamado Praefectus fabrum existente ya en la primera mitad de la época clásica (13).

Este cargo ofrece varias notas interesantes. En primer lugar viene a representar una especie de anticipación en la evolución histórica del intervencionismo imperial en las asociaciones profesionales evolución que había de culminar en el Bajo Imperio.

En segundo lugar, la creación de este cargo demuestra la importancia de las asociaciones de fabri, centonarii y dendrophori, asociaciones profesionales a las que ligaba su colaboración en las tareas de extinción de incendios y que precisamente por ello, requerían una especial disciplina y organización (14). En tercer lugar, se trata de un cargo situado fuera del cursus honorum, elegido libremente por el Emperador entre personas especialmente dotadas y dignas de la total confianza imperial.

Como es lógico, una vez que las asociaciones profesionales fueron transformadas en instituciones oficiales el cargo de Praefectus fabrum dejó de existir absorbido por las nuevas estructuras y ya no aparece después de Alejandro Severo.

Sin embargo, la existencia de este especial Praefectus fabrum no ha sido aceptada por todos los romanistas, por entender que la vigilancia de las asociaciones profesionales en esta época correspondía al gobernador de la provincia.

Entre los que se han opuesto a la existencia de un funcionario de las características que se han descrito figura W. Liebenam y también Hirschfeld (15).

El autor últimamente citado hace notar que el Praefectus fabrum tenía ordinariamente un carácter casi militar y no solía limitarse a un solo tipo de asociaciones.

Jullian (16) ha insistido en un punto interesante y es el de que el Praefectus fabrum no tenía mando de tropas fundamen-

talmente porque los fabri no estaban militarizados.

Tampoco parece habersele exigido condiciones y aptitudes técnicas para dirigir los trabajos de los fabri. Era más bien un juez que ayudaba al gobernador en la administración de la justicia y no sólo tratándose de fabri.

El medio de hipótesis y conjeturas, lo que puede afirmarse es que él Praefectus aparece a veces identificado con el patronus collegii de la época clásica y sus funciones propias no están bien definidas.

N O T A S

- (1) C.I.L., V., 1.012; VI, 10.298; XI, 970.
- (2) C.I.L., V, 5.701 y V, 5.738.
- (3) C.I.L., V, 5.869.
- (4) C.I.L., XIV, 3.003.
- (5) C.I.L., VI, 266, 267, 480 y 1925.
- (6) C.I.L., VI, 9.289 y 10.298.
- (7) Waltzing, Etude historique sur les Corporations professionnelles, I, Roma 1968, p. 408.
- (8) C.I.L., VI, 16.342.
- (9) C.I.L., VI, 1.060.
- (10) C.I.L., XIV, 256.
- (11) C.I.L., XIV, 128.
- (12) Por ejemplo: C.I.L., V, 4.048: VI, 85; X, 3.764, etc.
- (13) Vid. Mavé Der Praefectus fabrum, Halle 1987.
- (14) El Praefectus fabrum a que se está ahora haciendo referencia, no tenía sentido cuándo se trataba de brigadas de fabri incorporadas a las legiones. En este caso la disciplina militar correspondía al jefe superior quién designaba a un oficial de su confianza para que dirigiese los trabajos de los obreros.
- (15) E. Ruggiero, Dizionario Epigrafico v. Praefectus fabrum.
- (16) Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, v. Fabri.

CAPITULO XVII

Asociaciones profesionales en Pompeya

ASOCIACIONES PROFESIONALES EN POMPEYA

En la imposibilidad de hacer una referencia pormenorizada a todas las noticias que han llegado hasta hoy acerca del desarrollo de las asociaciones profesionales en las diferentes partes del Imperio ya que tal intento llevaría a realizar una obra de desmesuradas proporciones y a un acopio ingente de testimonios contenidos en fuentes epigráficas; testimonios que, por otra parte, no siempre resultarían fecundos, por la existencia de lagunas que dificultan la necesaria coherencia en un plan de reconstrucción histórica, ha parecido conveniente limitar la referencia a los testimonios que se poseen de la vida profesional y asociativa en la ciudad de Pompeya.

Pompeya, colonia romana en el año 80 a. de C., fue a mediados del siglo I una ciudad en la que florecía la industria, fomentada por el talante laborioso y emprendedor de sus habitantes, que habían asimilado rápidamente el tipo de vida romano y en la que también cobraba auge un intenso comercio propiciado por la situación geográfica de Pompeya (1).

Esta floreciente ciudad fue terriblemente azotada por las fuerzas de la naturaleza. El terremoto del año 62 causó graves daños en la ciudad y pocos años después, cuando con ilusión y esfuerzo apenas se habían restañado las heridas causadas en la estructura urbana, se produjo el definitivo golpe que había de hundir para siempre a la bella Pompeya en el silencio y en el recuerdo. Esto ocurrió a causa de la terrible erupción del Vesubio del año 79.

Plinio el joven se hallaba en Minerva y gracias a esta circunstancia se conserva una descripción bastante detallada de la erupción donde halló la muerte su padre adoptivo y tío Plinio el Viejo, llevado de su insaciable afán de naturalista (2).

No todo se perdió en el cataclismo, ya que las excavaciones efectuadas en aquel lugar, han permitido descubrir decoraciones murales, utensilios y piezas de ajuar, a través de los cuales se han podido reconstruir no pocos detalles y aspectos de la vida social, cultural y económica de Pompeya.

En Pompeya existían dos grupos sociales fácilmente diferenciables. Por una parte estaban las antiguas y tradicionales familias samnitas que vivían apegadas a sus tierras en las villas próximas a la ciudad y por otra, una población joven y emprendedora que iniciaba nuevos negocios, que abría tiendas, que cubría sus paredes con distintivos y reclamos para atraer la atención de los viandantes, que ponía sus comercios bajo la protección de los dioses, especialmente bajo la protección de la Venus Pompeyana.

A través de las inscripciones y pinturas de Pompeya se ha podido comprobar que en aquella ciudad se producía el mismo fenómeno que en Roma y del que tantas informaciones existen: La influencia de las asociaciones profesionales en la marcha de la vida política y en la integración de las estructuras administrativas (3).

Las agrupaciones profesionales no pocas veces conseguían

la designación de los candidatos para puestos influyentes, accediendo a los cargos personas que más tarde se mostrarían agradecidas, favoreciendo a aquellos que les habían apoyado, incluso con dinero para conseguir el éxito político.

Se sabe que en Pompeya existieron asociaciones de labradores (agricolae) de fruteros (pomarum), de vendedores de aves (gallinarii) y de horticultores (caeparii).

La industria del vestido contaba también con tejedores (textores) cardadores (lanificarii) fabricantes de fieltros (coactiliarii) entre otras profesiones.

Al servicio de la industria del transporte había trabajadores que utilizaban mulas para llevar cargas (muliones), otros que confeccionaban embalajes de madera (lignarii), porteadores con carretillas (csiarii), y cargadores (saccarii).

Como oficios relacionados con la alimentación que existían en Pompeya, pueden citarse, además de los panaderos que aparecen elogiados en un rótulo que figuraba a la puerta de una posada y que ha llegado hasta nosotros "Viator Pompeis panem gustas Nuceriae bibes", los reposteros o clibanarii.

Como asociaciones de oficios relacionados con el arreglo personal pueden citarse los peluqueros o tonsores y los perfumistas o unguentarii.

Especial importancia tenían las asociaciones de tintoreros, lavanderos y fabricantes de paño, siendo famoso el edifi-

cio dedicado a la sacerdotisa Eumachia patrona de la asociación de los fullones.

También se sabe que en el Foro estaba situada la mensa ponderaria para el contraste de las unidades de volumen del mismo tipo que en el sistema romano.

Muchos son los vestigios que han quedado en las minas de Pompeya del ejercicio de las más variadas profesiones: La tienda de "Felix pomarius"; un establecimiento de fullones en el que hay un "pressorium" para planchar; la "statio saliniensium" sede de las asociaciones de los que trabajaban en las salinas, un obrador de pan en el que se aprecia el ennegrecimiento de las paredes por el humo del horno, etc, etc.

Muy curiosas e interesantes son las pinturas que adornaban una lujosa mansión, perteneciente, al parecer, a unos comerciantes enriquecidos. Estas pinturas representan escenas de amos realizando los más diversos trabajos, preparando ungüentos y esencias, trabajando el oro y otros metales, vendiendo vino, lavando telas, etc.

Tales pinturas son una buena prueba de los diversos oficios y asociaciones profesionales que existían en Pompeya. También demuestran la pujante vida económica de la ciudad el Forum holitorium o mercado de la verdura; el macellum o mercado cubierto y el horreum o depósito de cereales, todos ellos de grandes proporciones.

Pero si los restos pompeyanos son de evidente utilidad pa
ra comprobar el desarrollo de las especialidades laborales y
mercantiles en el mundo romano y la difusión de las asocia-
ciones profesionales fuera de Roma, es igualmente cierto que
al desaparecer la ciudad en el siglo I, esos restos no han po
dido transmitir noticia alguna acerca de la existencia y actii
vidad de los colegios oficiales y obligatorios del Bajo Impe-
rio, a que más adelante se dedicará especial atención (4).

N O T A S

- (1) Séneca. (Nat. quaest. VI, 1) 1, escribió que Pompeya, famosa ciudad de Campania quedó allanada y arrasada por un temblor de tierra. Cfr. Plinio el Viejo, N.H., II, 137; Tito Livio, IX, 38 y Suetonio, Claudio XXVII.
- (2) FS Plinio el Joven cuenta que su tío se acercó demasiado al volcán "a pe^{da}dar de que las llamas y el olor a azufre habían hecho huir a sus acom^{pa}pañantes". El aire lleno de cenizas le asfixió". Cfr. Epistolas VI, 16, 21.
- (3) Tácito, Anales, XIV, 173.
- (4) También en la colonia de Paesum, próxima a Pompeya se conservan restos de edificios: Tabernae y Horrea que demuestran la existencia de una organización comercial y asociativa de tipo romano.

CAPITULO XVIII

La personificación jurídica de las asociaciones

LA PERSONIFICACION JURIDICA DE LAS ASOCIACIONES

Antes de abordar el tema de la personificación jurídica de las asociaciones profesionales hay que considerar algunas cuestiones.

En primer lugar hay que tener en cuenta que en los primeros tiempos los collegia eran reuniones de personas en torno a un dios.

Este dios era el que presidía los banquetes, las ceremonias; era el protector de los que integraban la asociación. De este modo venía a personificarla, sin que fuera precisa la personificación de la entidad en si misma.

Los bienes del colegio pertenecían al dios y los administradores puestos al frente de la asociación eran solamente los administradores de los bienes del dios.

Este planteamiento coincide perfectamente con cuánto se sabe acerca de la personificación del Estado romano a través de la religión (1).

Los romanos no consideraban a sus dioses como personas ficticias, sino como entes semejantes a los hombres, como individuos que vivían entre los hombres (2).

En segundo lugar no hay que suponer la existencia de personalidad jurídica por el hecho de que los asociados posean una caja común. La existencia de una caja común para atender los

gastos de los banquetes, las ceremonias, etc, no supone otra cosa sino la existencia de una propiedad común análoga al fondo social de una sociedad (3).

Pasando a analizar las posibilidades de actuación concedidas a las asociaciones en el período clásico, hay que formular las siguientes consideraciones:

La posibilidad de manumitir esclavos fue concedida a los municipios en época de Adriano (4) y más tarde extendida a las asociaciones por una constitución de Marco Aurelio (5).

Se ha pensado que la posibilidad de manumitir no se concedió por vez primera a los colegios, en virtud de la dispoisición de Marco Aurelio que se acaba de citar sino que este Empe^{ra}dor se había limitado a conceder a los colegios lícitos la posibilidad de manumitir que hasta entonces habían tenido todos los colegios (6).

Sin embargo, resulta absurdo pensar que los colegios ilícitos tuviesen concedida facultad alguna. Frente a ésto se dijo que no existe tal absurdo, porque antes de exigirse autorización para constituir asociaciones, no había colegios lícitos ni colegios ilícitos. La discriminación empezaría cuando hubo colegios ilícitos sólo por falta de autorización. El sentido del texto de Ulpiano que alude a la disposición imperial sería que los colegios que no obtuviesen la autorización exigida perderían la facultad de manumitir esclavos.

Existe en todos estos razonamientos un presupuesto y es el

de que, aparte de los colegios ilícitos por la finalidad perseguida hubo otros colegios que sólo eran ilícitos por falta de autorización.

Como anteriormente hubo ocasión de razonar contra esta distinción, al hablar de los colegios ilícitos, en el capítulo correspondiente, es lógico que no se acepte la teoría que en ella se fundamenta.

En D., 40, 3, 1, y 2, lo que se dice simplemente es que Marco Aurelio concedió la facultad de manumitir a todas las asociaciones, es decir, a las asociaciones que eran permitidas porque no atentaban contra la seguridad del Estado, añadiendo: Por lo que tendrán también derecho a la herencia legítima de los libertos.

En cuanto a la relación cronológica entre la posibilidad de tener esclavos los colegios y la posibilidad de manumitirlos, no es necesario establecer una separación, por dos razones, en primer lugar porque en el ^o tiempo en que se conceden facultades de obrar a las asociaciones como tales, es indudable que todo propietario de esclavo podía manumitirlos (7) y en segundo lugar, porque dada la trascendencia del principio del favor libertatis, no parece verosímil que las asociaciones pudieran tener esclavos propios y, sin embargo, no pudiesen manumitirlos hasta la concesión de Marco Aurelio.

Existe una inscripción (8) alusiva a un liberto, de comienzos del Principado, en la que como consecuencia de una laguna apa

rece dudoso si se trata del liberto de una asociación o del liberto de una persona física.

Dada la inseguridad que existe en la determinación del patrono, esta ^{ins} ~~sub~~scripción no constituye prueba alguna frente al texto del Digesto comentado, para retrasar la atribución a las asociaciones de la facultad de manumitir esclavos.

La primera actividad negocial de un colegio no pudo ser otra que la recepción de las cuotas aportadas por los asociados para atender a las finalidades de la asociación.

Se ha dicho, no obstante, que no era absolutamente preciso que un colegio dispusiese de medios económicos, bien fuese a través de cuotas de los asociados o de donativos de los benefactores, ya que el colegio podía funcionar mediante reuniones en casa de uno de los asociados que sería el encargado de pagar los gastos efectuados por sus invitados (9).

Ni las finalidades de los colegios, ni lo que sabemos acerca de su organización interna, permiten acoger favorablemente esta suposición.

Como texto fundamental acerca de la capacidad de los colegios para actuar en Derecho de obligaciones, puede citarse el conservado en el Digesto y atribuido a Ulpiano en el que se dice que si se debe algo a una universitas, no se debe a cada uno de sus miembros, así como tampoco se debe a la universitas lo que se debe a uno de aquellos (10).

Para Albertario (11) el texto aludido se refiere a la civitas, al municipium y la referencia a universitas fue obra de los compiladores, siguiendo la tendencia a extender, mediante interpolaciones, las normas clásicas que sólo se referían a las civitates y al municipium. En este sentido cita Albertario, entre otros, los pasajes D., 2, 4, 10, 4: "... rem publicam (vel universitatem); D., 3, 4, 2: "... municipes (vel aliqua universitas). [vi]

Para Eliachevitch (12) no es aceptable la tesis de Albertario de que los compiladores hubiesen interpolado universitas, en vez de civitas, en D., 3, 4, 7, 1, basándose para este rechazo en la estrecha conexión que guarda el indicado párrafo 1 con el siguiente en el que se habla del supuesto de que una universitas haya quedado reducida a un sólo miembro, caso en el cuál Ulpiano reconoce que la teoría más convincente es la de que esta persona, este único miembro, puede demandar y ser demandado, ya que el derecho de todos se concentró en él y subsiste el concepto de universitas.

Evidentemente, en el caso de una civitas, no era presumible que se realizase tal supuesto de concentración. Claro que la argumentación de Eliachevitch se funda en que existe una estrecha relación entre los párrafos uno y dos y, sin embargo, no es imposible que esta conexión estuviese también afectada por las alteraciones justinianeas que Albertario cree descubrir en el texto de Ulpiano.

Orestano, después de una minuciosa crítica de la teoría de

Albertario, según el cuál en la época clásica el término universitas indicaría la colectividad de los miembros de una asociación personificada, llega a la conclusión de que no es posible establecer una neta división entre una concepción clásica de universitas y una concepción postclásica completamente diferente (13).

Tesis que parece la más aceptable ya que así como a veces el empleo del término corpus es anodino y lo mismo puede suponer una concepción realística o de sentido colectivo que una concepción abstracta, también el término universitas unas veces aparece alterado, como en D., 3, 4, 2 (14) y otras veces es difícil admitir la alteración, como demostró Eliachevitch a propósito de D., 3, 4, 7, 1.

Existe un texto que parece representar una inequívoca prueba de concepción corporativa o abstracta y que también pertenece a Ulpiano (15).

En este texto se lee: "servus corporis nec plurium videtur sed corporis". Ulpiano se está ocupando de los interrogatorios bajo tormento y dice que existen muchos rescriptos según los cuales puede someterse a tormento a un esclavo del municipio en el juicio capital contra algunos de los ciudadanos, pues no es un esclavo que a éstos pertenezca, sino que es de la ciudad y lo mismo debe decirse respecto de los demás esclavos de las asociaciones (in ceteris servis corporum) pues no se trata de un esclavo que pertenezca a varios, sino que es de la misma asociación.

La primera cuestión que se plantea es la de si el texto está interpolado o no. Atendiendo a la construcción del pasaje la alteración no aparece tan clara como en otros textos.

En efecto, no se dice que "lo mismo ha de decirse respecto de los siervos de otras corporaciones" sino "respecto de otros siervos de las corporaciones" (16). No se extiende la abstracción del municipio a otras entidades, sino que lo que parece generalizarse es el tipo de siervo. Al final del pasaje, en coincidencia con lo anterior, no se dice que tales esclavos se considere que no son de varios sino del municipio o de otras asociaciones, lo que había constituido una prueba evidente de interpolación por vía de extensión, sino que lo que se dice es que no son de varios sino de la misma entidad (sed corporis).

Con esta redacción y ante la diversa significación del término corpus que demostró Orestano, el texto mantiene la interrogante acerca del predominio o no de la concepción abstracta, sin resolverla.

Ahora bien, se ha pensado que la aclaración acerca del verdadero alcance del pasaje, viene de la comparación que puede hacerse de él con otro de Marciano, que se ocupa de un tema semejante.

En el aludido texto (17) tomado del libro tercero de las Instituciones de dicho jurista y que figura en un título dedicado a la clasificación de las cosas, se dice que el esclavo de la ciudad no es un esclavo común de los ciudadanos y que, en consecuencia

cia, puede ser torturado para obtener su confesión, tanto a favor como en contra de un ciudadano y que así lo manifestaron por rescripto los Emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero.

Que se están refiriendo Ulpiano y Marciano al mismo caso, resulta no sólo del texto del pasaje sino de la invocación de los rescriptos.

La diferencia está en que Marciano se refiere única y exclusivamente a las ciudades y Ulpiano generaliza. La generalización podría ser prueba de interpolación si no fuese por la existencia de otros textos alusivos a los esclavos y libertos de las asociaciones, alguno ya citado y otros de los que se tratará a continuación.

Cuándo Ulpiano habla de la facultad concedida por Marco Aurelio a todas las asociaciones para manumitir a sus esclavos, inmediatamente y como lógica consecuencia, expresada con "quare" dice que podían las asociaciones reclamar la herencia de sus libertos.

El texto (18) es bastante claro, lo que enturbia un tanto su significado es otro texto, este del Código de Justiniano, en el que se contiene una disposición de los Emperadores Diocleciano y Maximiano, según la cuál es indudable que, a no mediar un especial privilegio, un colegio no puede adquirir una herencia (19).

Dado el carácter absoluto con que aparece redactada la constitución, parece ofrecer una evidente contradicción con el texto de Ulpiano.

Varios autores han tratado de aclarar el alcance y significado de esta constitución imperial.

Ha habido quién, como Binding (20) ha pensado que el privilegio no se refería a la capacidad para recibir herencias, sino a la concesión de la personalidad jurídica, es decir, que sólo los colegios que tuviesen reconocida personalidad jurídica podrían adquirir herencias.

Esta teoría supone o una tautología o una discriminación. La primera no debe suponerse, la segunda no está probada.

Pero, aparte de ello, si se da tal interpretación a la constitución se consiguen dos efectos injustificables: Uno hacer decir a los Emperadores Diocleciano y Maximiano lo que no dijeron y otro agrandar en vez de superar la contradicción entre el pasaje del Digesto y el del Código, ya que Ulpiano habla de todas las asociaciones.

Bonfante al hacer la crítica de esta teoría, afirma que ni ha convencido ni podía convencer (21) ya que sería absurdo que el Emperador tratase de excluir de la capacidad de suceder a los colegios ilícitos que son incapaces de cualquier adquisición.

Según otros autores el texto se refería a la "capacitas" en sentido extricto. De esta teoría se ha dicho que sería una interpretación que no resuelve el problema, sino que simplemente lo desplaza (22).

A esta observación se podría añadir otra y es la de que la

"capacitas", en sentido estricto, tiene unas motivaciones y unas finalidades perfectamente explicables en el plano de las personas físicas, pero que difícilmente se podrían razonar en el plano de las personas jurídicas o incorporales.

Bonfante después de haber criticado las dos teorías, formula una nueva hipótesis.

Entiende este autor que para captar el verdadero sentido de la disposición imperial hay que partir de una consideración: La de que no se refiere a la sucesión testamentaria. Justiniano al colocarla bajo el título "De heredibus instituendis" ^{com- Tha} aplicado extraordinariamente la interpretación del texto.

Si se prescinde de esta circunstancia de pura situación en el sistema del código, parece vislumbrarse cierta claridad en la interpretación de la constitución imperial. Lo que ocurre es que dentro de esa claridad pueden verse distintas soluciones.

Bonfante piensa que Diocleciano y Maximiano se referían a aquél privilegio, que se otorgaba a ciertos colegios, de recibir la herencia de sus miembros, en defecto de próximos parientes y con preferencia al Fisco (23).

Mas esta interpretación plantea un nuevo problema y la claridad se enturbia, porque los privilegios de adquirir la herencia intestada se confieren a los colegios solamente en la época del Bajo Imperio, después de Constantino y tales privilegios están íntimamente relacionados con la organización forzosa y el

régimen vinculante de las asociaciones.

La única salida a esta dificultad se encuentra en la existencia de alteraciones en el pasaje del Código de Justiniano. Basta con considerar interpolado el inciso "si nullio speciali privilegio subnixum sit" para que se lea la rotunda afirmación de que un colegio no puede adquirir herencias y, por tanto, el texto de Diocleciano y Maximiano no haría otra cosa, en su redacción original que reafirmar la incapacidad de los colegios para heredar.

Pero existen otros dos textos de Ulpiano de los que se deduce claramente la capacidad de suceder ex testamento de las asociaciones.

Uno de estos textos se ocupa de la restitución de la herencia por fideicomiso y en él se dice (24): "Si el ruego de restitución se hace a una asociación (collegium vel corpus) a favor de alguno de los que la componen, es válida la restitución decretada por todos los miembros de la asociación en atención a la persona individual de uno de ellos, pues se estima que ninguno de los miembros de la asociación se hace la restitución a si mismo".

En el otro texto (25) que corresponde al mismo título del Digesto (26) se dice: "Igualmente si son instituidos herederos los munícipes de una ciudad y declaran sospechosa la herencia, debe decirse que han de ser obligados a aceptarla y también a restituirla y lo mismo debe afirmarse respecto de una asociación (idemque erit in collegio)".

Si estos textos no están interpolados se hallan en abierta contradicción con el texto de la constitución de los Emperadores Diocleciano y Maximiano a que antes se ha hecho referencia, tanto si se considera que aquella constitución tenía alcance general como sucesión testamentaria, según se desprende de la colocación en el título "De heredibus instituendis".

Si los textos de Ulpiano estuviesen interpolados resultaría que la disposición imperial (27) no estaría en contradicción con ellos, sino que además de reafirmar cuál era la postura del Derecho clásico, abriría la posibilidad de la concesión de un especial privilegio para que las asociaciones pudiesen heredar; lo que tendría cierta congruencia con la política de Diocleciano, situado en la frontera de dos concepciones jurídicas bien distintas, la clásica y la postclásica.

Si los textos de Ulpiano no estuviesen alterados también cabría otra interpretación de la constitución de Diocleciano. Se trataría de limitar una capacidad de heredar preexistente y señalaría uno de los aspectos en que se reflejó el incremento de la intervención estatal en materia asociativa.

Pero esta interpretación que teóricamente pudiera ser hasta cierto punto aceptable, encontraría dos fuertes obstáculos para su admisión: Uno, que no concuerda con lo que se sabe acerca de la evolución histórica del Derecho asociativo romano y otro, que en la época de las corporaciones forzosas y el régimen vinculante, a las obligaciones y cargas impuestas acompañan normas encaminadas más a robustecer la capacidad patrimonial de

las asociaciones que a restringirla.

Acudiendo a otros textos del mismo Ulpiano, en un esfuerzo para aclarar las dudas suscitadas, se advierte un pasaje de los Tituli ex Corpore Ulpiani (28) en el que se dice que "ni los municipios ni los municipes pueden ser instituidos herederos porque el ente es incierto y no pueden ni formular una aceptación solemne de la herencia, ni adquirirla mediante gestión de la misma. Sin embargo, está permitido por un senadoconsulto que las asociaciones puedan ser instituidas herederas por sus libertos. Mas la herencia puede ser restituida mediante fideicomiso a los municipes, lo que ha sido establecido finalmente por un senadoconsulto".

En otro pasaje de Ulpiano conservado en el título del Digesto dedicado a la adquisición y repudiación de la herencia, se dice que el esclavo de un municipio, de un colegio, o de una decuria, si es instituido heredero y luego manumitido o enajenado podrá adir la herencia (29).

En cuanto al texto de los Tituli ex Corpore Ulpiani cabe hacer las siguientes observaciones:

- 1a) Presenta como algo excepcional que la herencia pueda ser restituida a los que componen los municipios.
- 2a) No sólo presenta ésta posibilidad como una excepción a la incapacidad de suceder de los municipios sino como algo reciente, según revela el empleo de "denique".

3a) Solamente se está refiriendo a los municipios, no habla para nada de otras personas incorporales.

En cambio en el pasaje de Ulpiano conservado en el Digesto (30) no se presenta como excepcional la posibilidad de que se restituya una herencia a los municipes.

Después de cuánto se lleva dicho, puede ofrecerse otra interpretación del texto del Codex en el que se dice que no existe la menor duda de que un colegio no puede adquirir una herencia salvo especial privilegio.

Este privilegio especial no sería otro sino el concedido a las asociaciones para recibir la herencia de sus libertos.

Con esta interpretación no existe contradicción alguna entre los textos de Ulpiano y la disposición de Diocleciano.

Si del análisis de los textos se pasa a reseñar algunas de las teorías mantenidas acerca de la posibilidad de suceder de las personas incorporales, es preciso comenzar con la doctrina defendida por Savigny (31).

Este autor afirmó que el derecho de sucesión se concedió a las personas jurídicas mucho después que los otros medios de adquirir y para sostener esta opinión se basa en que al no poder morir esta clase de personas carecen de herederos y, por otra parte, ni tienen parientes próximos, ni la adquisición mortis causa les resulta indispensable para la realización de los fines que les son propios, ya que es un modo de adquirir que se produce de modo fortuito y accidental, es decir, que no puede

ser controlado ni utilizado a voluntad.

Las dos primeras observaciones que formula Savigny son evidentes e incontestables, pero la tercera no es plenamente convincente, ya que la mayor rapidez o regularidad de otros modos de adquisición, comparados con la adquisición mortis causa no es razón suficiente para rechazar la concesión de la capacidad de suceder a las personas jurídicas, entre otras razones porque las adquisiciones que pueden llevarse a cabo por este medio, quizá sean menos rápidas o regulares que las obtenidas por otros medios de adquirir, pero también pueden ser más cuantiosas.

Voci (32) reconoce que en la época clásica una capacidad general de ser instituidos herederos no existía para los collegia, pero que podía haber excepciones por vía de privilegios.

Esta afirmación conduce al sospechoso pasaje de Ulpiano D., 36, 1, 1, 15, que Voci cita expresamente en una nota (33).

El mismo romanista reacciona ante las dificultades que existen para la aceptación de la herencia y que Ulpiano pone de relieve en el pasaje de los Tituli ex Corpore Ulpiani. La reacción de Voci se concreta diciendo que las dificultades para la aceptación de la herencia debieron ser superadas en el caso de las asociaciones de modo análogo a como se hizo en el caso de las ciudades.

A esto cabe observar que, como es sobradamente conocido, la extensión de los recursos aplicables a los municipios tardó en

llevarse a cabo en favor de los colegios y además, como el mismo Voci reconoce en su Derecho hereditario (34) es poco lo que se sabe acerca de las adquisiciones por parte de las personas jurídicas en la época clásica.

En resumen puede decirse que la postura de Voci no es tan rotunda como la de Savigny.

Fadda (35) reconoce, por una parte, que la capacidad de suceder de las asociaciones fue muy restringida, pero al mismo tiempo no desconoce que, además de los textos examinados, existe otro (36) en el que se dice que no sólo a los municipios, sino también a las sociedades, decurias, y corporaciones, se reconoce la facultad de pedir la posesión de los bienes hereditarios, como también existen numerosas inscripciones en las que se alude a herencias dejadas a collegia (37).

Fadda concluye diciéndo que si bien las fuentes nos informan acerca de que un colegio puede ser heredero, no afirman que pueda serlo siempre y por tanto debemos ⁿextender que los casos en que es posible la institución de un colegio, se debe o bien a que se trata del testamento de un liberto o que existe un privilegio especial (38). Con lo cuál queda sin aclararse de qué privilegio especial se trata.

Para ^fiondi la persona jurídica no puede tener herederos, como consecuencia de su misma naturaleza de ente incorporal, pero aunque su duración sea, en principio, indefinida, es posible su extinción, la cual, en cierto sentido, se equipara a la muer

FB

te de las personas físicas (39). Excluida la posibilidad de que la persona jurídica pueda hacer testamento, la sucesión legítima sólo se admite en un caso especial: En razón a que los bienes de los libertos pasan a su muerte al patrono y la persona jurídica, como patrono, puede adquirir tales bienes (40) y concluye Biondi su razonamiento diciéndo que puesto que no es posible la sucesión se trata del destino de los bienes de la persona jurídica al momento de su extinción pero, añade, "en torno a ésto estamos escasamente informados" (41).

De todo lo expuesto se deduce que no puede afirmarse la personificación de los colegios en orden a la capacidad de suceder, en el período clásico.

Existen textos alterados, la doctrina se muestra vacilante, los juristas plantean abiertamente la dificultad que ofrece la aceptación de las herencias por esta clase de asociaciones, fatigosamente se abre una vía partiendo de los municipios y los términos collegium y corpus se emplean sin precisión técnica.

Lo único que existe es la posibilidad de recibir herencias de los libertos y de adquirir mortis causa por privilegios cuya verdadera naturaleza se desconoce y que, al ser soluciones prácticas para casos concretos, militan en contra de una capacidad general.

Pasando a lo que, con terminología moderna pudiera llamarse sucesión mortis causa a título singular, se hace preciso ante todo tratar de un texto de Paulo que se refiere a un senado-

consulta de la época de Marco Aurelio.

En este texto (42) existe una primera parte en la que simplemente se dice que un senadoconsulto de la época de Marco Aurelio permitió que se legase a favor de los colegios. Después de la referencia, Paulo pasa a exponer consideraciones personales y dice que si se legó a un colegio autorizado, el legado valdrá y si no estaba autorizado no valdrá el legado salvo que se legue a cada uno de sus miembros.

Al hablar de los colegios ilícitos ya hubo ocasión de decir que Paulo con su comentario no añade nada nuevo a la noticia que da al comienzo del pasaje.

El problema está en compaginar el texto de Paulo con el pasaje de Gayo (43) en el que se dice que es inútil el legado dejado a favor de una persona incierta.

¿Puede ser considerada persona incierta un colegio? Gayo aclara lo que se debe entender por persona incierta: "Consideramos como inciertas aquellas personas respecto de las cuales el testador no se forma una idea precisa, como si se legase de este modo: Al primero que concurra a mis funerales dele diez mil mi heredero. Lo mismo^M se entiende si legase en general a todos los que concurran a los funerales. En el mismo caso está el legado que se dispone así: A cualquiera que casase a su hija con mi hijo, déle diez mil mi heredero. También el que se deja de esta otra manera: A los que fueren designados cónsules después de hecho mi testamento. Porque semejantes legados se consi

deran hechos a favor de personas inciertas y así en otros muchos casos. Pero cuándo se lega a personas inciertas con una referencia precisa, vale el legado: Por ejemplo, a aquél de mis parientes actuales que concurra el primero a mis funerales le dará diez mil mi heredero".

Cuándo pone Gayo el último ejemplo, aún cuándo habla sólo de una persona igualmente podía estar refiriéndose a varios.

Al referirse a uno toma el aspecto de un legado individual, en el caso de referirse a varios "mis parientes que ahora viven" se refería a un género, pero el legado sería igualmente válido, puesto que la incertidumbre viene eliminada por la indicación "que ahora viven".

Dentro de esos límites los componentes de un colegio pueden ser considerados personas ciertas (f4).

Por otra parte tampoco cabe pensar en que los colegios fuesen autorizados caso por caso y atendiendo a sus especiales circunstancias para recibir legados. No cabe pensarlo por dos motivos: porque si así fuese no faltaría en el texto de Paulo, bien fuese en su primera parte, al dar la noticia escueta del senado consulto, bien en el breve comentario que sigue, la alusión del privilegio que suponía para un determinado colegio el poder recibir legados y también, es el segundo motivo, porque de haber sido así siempre que en una fuente aparece la mención de un colegio al que se concedió un legado se haría constar la concesión especial y quizás hasta la causa por la que se hizo ésta conce-

sión, ya que ello constituiría un motivo de gloria y de satisfacción para los asociados.

Si se admite que la autorización de que los colegios recibían legados no contradice los criterios establecidos acerca de la inutilidad de los legados dejados a favor de personas inciertas y aceptando también que la concesión era de carácter general y no caso por caso, queda por explicar por qué en materia de legados tuvieron más posibilidades los colegios que en materia de sucesión universal.

La explicación no puede ser otra sino la de que el régimen de las herencias guarda más íntima conexión con la continuación de la personalidad del de cuius, con los vínculos familiares e incluso con la continuidad del culto, que el régimen jurídico de los legados.

En materia de legados se advierte un mayor relieve del carácter patrimonial, del carácter económico y por tanto se reconoció la adquisición de los legados como procedimiento más idóneo para obtener los medios precisos a fin de que las asociaciones pudiesen cumplir sus propios fines.

Una última cuestión es la relativa a cómo puede explicarse la existencia de legados dejados a favor de colegios, con anterioridad a Marco Aurelio.

Dejando aparte la explicación más fácil, pero menos convincente de que se trataba de legados mal redactados y que más que legados a favor de los colegios lo eran a favor de los indivi-

duos que los componían, puede observarse que ya antes de Marco Aurelio se había concedido a las ciudades del Imperio la posibilidad de recibir legados (45) y es muy verosímil que, a imitación de los legados que se dejaban a las ciudades, se dispusiesen fideicomisos a favor de los colegios, eludiendo así la incapacidad de éstos para ser legatarios (46).

Otro aspecto íntimamente ligado a la lenta marcha hacia la personificación jurídica de los colegios es el de su capacidad para comparecer en juicio.

Sin embargo, aunque tal afirmación sea válida, aunque se pueda decir sin temor a equivocarse que el edicto del Pretor concediendo a los colegios esa capacidad es el primer paso en el reconocimiento de su personalidad jurídica, es preciso establecer una clara diferenciación entre municipios y colegios en el proceso de la personificación. Mientras que la personalidad jurídica era para los municipios la sola forma posible de participación en el comercio jurídico, para los colegios ésta era una de las varias formas posibles.

Los colegios existieron durante siglos sin tener personalidad jurídica y poseían sus bienes como algo distinto de los de sus miembros. Lo que sucedió fue que los instrumentos y formas jurídicas que estaban a su disposición para hacer posibles las relaciones con terceros, tales como la fiducia y los actos realizados no por uno sólo de sus miembros, sino por todos y cada uno de ellos con el transcurso del tiempo y el progreso jurídico resultaron insuficientes y carentes de agilidad (47).

La gran cuestión que se plantea acerca de la representación procesal de las asociaciones gira en torno a un texto del Digesto, tomado del libro noveno de los Comentarios de Paulo al Edicto (48): "si los decuriones decretaron que se ejercitase una acción por aquél a quién los dunviros hubiesen elegido, éste se considera como elegido por la comunidad (ordo) y, por lo tanto, puede litigar; pues poco importa que lo eligiese la misma comunidad o aquél a quién la comunidad dió el encargo. Pero si los decuriones hubiesen dispuesto que cualquiera que fuese la controversia que surgiese, tuviese Ticio el encargo de actuar, tal decreto sería jurídicamente nulo, pues no puede considerarse que se ha concedido por decreto el encargo de reclamar en un litigio que todavía no se ha planteado. Pero hoy se pueden llevar a cabo actuaciones de esta naturaleza mediante síndicos, según la costumbre local".

Lo primero que hay que determinar que se entiende por síndico y antes de entrar de lleno en esta investigación no puede olvidarse otro texto del Digesto, tomado del libro octavo de los Comentarios de Ulpiano al Edicto (49).

Se ha dicho que el síndico es el procurador de una comunidad como persona jurídica y no sólo el procurador de algunos miembros de la misma y que así como la comunidad mantiene su propia identidad aunque cambien muchos e incluso todos los miembros que la componen, así tampoco cesa el encargo conferido a un síndico aunque la mayor parte de los miembros de la comunidad que lo eligieron hayan muerto o renunciado al litigio. De

donde se sigue que un síndico no está obligado a ocuparse de los litigios particulares de los individuos que componen la comunidad, ni de asuntos que no interesan a la comunidad por entero (50).

Sin embargo, el texto de Paulo no es tan claro y uniforme como pudiera parecer a primera vista.

Se ha considerado que la segunda parte del pasaje en la que se habla de la nulidad del decreto en que se dispone el nombramiento de un síndico, para un litigio, que aún no se ha planteado tiene un fuerte sabor postclásico, porque parece algo muy extraño al pensamiento de Paulo y, en general, al de los juristas clásicos, admitir una forma de representación procesal que no fuese ad certam causam (51).

Mitteis (52) denunció la última frase del texto D., 3, 4, 6, 1: "Pero hoy se suelen llevar a cabo actuaciones de esta na turaleza mediante síndicos según la costumbre local" como una evidente interpolación.

El fuerte contraste de la frase final fue ya advertido con anterioridad a Mitteis por Fabro y con posterioridad a Mitteis por Albertario (53) entre otros.

Este romanista hace notar, en apoyo de la tesis de Mitteis, que el término "syndicus" no es latino sino griego y, por tanto, llevado a la terminología latina después de ser importado de la terminología de los griegos (54).

Para sostener esta afirmación Albertario se funda en otro texto del Digesto, atribuido a Arcadio Carisio y en el que se lee: "Los que representan a las comunidades, que los griegos llaman síndicos, para una causa determinada como defensores o como demandantes asumen la labor de una carga personal" (55).

De las cargas municipales personales se ocupa Hermogeniano en otro texto, también conservado en el Digesto, especificando que, entre otras, son las siguientes: El ser síndico de una ciudad, el encargo de cobrar los tributos, el hacer de escribano, la prestación de camellos, la administración del suministro etc (56).

Albertario plantea la cuestión de determinar quién es el autor de la observación "los que los griegos llaman síndicos" y considera más probable el origen postclásico y justiniano del inciso.

Esa aclaración, como otras semejantes que aparecen en otros textos del Digesto (57) resultan mucho más lógicas si se atribuyen a compiladores o a comentaristas griegos que persiguen una finalidad didáctica, que si se atribuyen a jurisconsultos clásicos. Aunque ésta última posibilidad no puede rechazarse totalmente cuando se trata de romanos que han tenido grandes contactos con la literatura griega, como es el caso de Gayo y, aunque con menos seguridad, de Labrón, por ejemplo.

Otro argumento que utiliza Albertario y que resulta aún más vigoroso que el primero, aunque no puede decirse que sea absolu-

tamente convincente, es el de que resultaría imperdonable en un jurista clásico confundir los representantes de las comunidades nombradas para una causa determinada y los síndicos o representantes estables.

A la teoría de Albertario opuso Simone (58) que la observación, "los que los griegos llaman síndicos" puede muy bien pertenecer a Arcadio Carisio, pues basta con leer su obra Liber singularis de muneribus civilibus para darse perfecta cuenta de que el lenguaje del jurisconsulto está tan plagado de palabras de origen griego que si quisiéramos considerar como interpotaciones todas las palabras de ese origen que aparecen en dicha obra (59) ésta resultaría gravemente mutilada.

Pero todavía se puede añadir en defensa de la atribución del pasaje íntegro a Arcadio Carisio, que éste no está confundiendo, ni mucho menos, los representantes de las comunidades designados para una causa determinada, con los síndicos o representantes estables, sino que los separa con toda claridad y por eso dice que están sujetos a cargas personales, no sólomente los representantes para causas determinadas, sino también aquellos otros que los griegos llaman síndicos; si los confundiese se habría ahorrado la doble alusión.

De Robertis (60) también refiere al siglo III, aunque con alguna anterioridad al tiempo de Arcadio Carisio, la existencia de representantes estables de las asociaciones profesionales, basándose muy especialmente en un texto de la Historia Augusta (61) en el que se recuerda que entre las iniciativas de Alejandro Se-

vero figuró el establecimiento de representantes permanentes en las diferentes asociaciones de artesanos y no se hace, en el lugar indicado, una alusión global, o de carácter genérico, sino en cierta medida detallista, al indicar como tales asociaciones: "Corpora vinariorum, lupinariorum, caligariorum et omnino omnivum artium".

Puede pues, concluirse que la representación con carácter estable de las asociaciones es muy posible que se remonte al siglo III.

Aceptado ésto también es preciso referirse al título del Edicto Perpetuo: "Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra eam agatur".

Kniep, el gran comentador de Gayo, afirmó que tal título no existía más que en el Edicto Provincial (62).

Ahora bien, ésto en lugar de resolver la cuestión la complica, porque complicado es cuánto se refiere al Edicto Provincial, que ha dado lugar a numerosa bibliografía, en la que destacan los nombres, no sólo del ya citado Kniep, sino de Von Velsen, Weiss, Buckland, R. Martini, A. d'Ors, ~~A.~~ Valiño y tantos otros. Si el TE. Edicto Provincial fue más bien una adaptación provincial del Edicto Pretorio, despojado de lo estrictamente urbano, antes que un verdadero edicto general para todas las provincias o para algunas de ellas, la tesis de Kniep cae por su base (63).

Antes que Kniep, H. Krüger (64) negó, aún más radicalmente la existencia de tal título en el Edicto. Para este autor tam

poco había existido en el Edicto provincial.

Contra las opiniones de Kniep y H. Krüger, O. Lenel, considera existente el título en el Edicto Perpetuo y así lo hace constar en su tercera edición del Edicto.

Schnorr v. Carolsfeld (66) siguiendo a H. Krüger sostuvo que el título sólo se refería a la representación de los municipios.

Los textos en que se basa Lenel son los siguientes:

Un texto de Gayo (67) en el que se dice: "Los que pueden constituirse como colegio, sociedad o cualquier otra corporación tienen, a ejemplo de la ~~cosa~~ pública, bienes comunes, caja común ^{to} y un representante (actor) o síndico por medio del cuál, como en la cosa pública, se trate y haga por todos (communiter) lo que deba hacerse y tratarse.

Otro texto de Paulo (68) en el que se lee: "Si el representante de una comunidad (actor universitatis) demanda, se le obliga también a que defienda, más no se le apremia a que garantice la ratificación; pero a veces, cuando se duda acerca del decreto que le designó, entiendo que es preciso prestar esa garantía. Así pues, este actor ~~actor~~ hace las veces de procurator y no se le concede por el Edicto la acción ejecutiva a no ser que haya sido designado en interés propio. Puede también aceptar un plazo del deudor. Puede cambiarse de actor por las mismas causas que puede cambiarse de procurador. También puede nombrarse actor al hijo de familia".

El tercer texto en que se basa Lenel es el de Ulpiano (69) del que ya se ha tratado a propósito de la nulidad del nombramiento de representante para una materia que aún no está en litigio. Al que sigue un párrafo en el que se pregunta que ha de decirse si el nombrado representante (actor) hubiera sido revocado después por decreto de los decuriones ¿Se perjudicará acaso la excepción? Ulpiano cree que ha de entenderse así: Que se le permita hacer aquello para lo que el permiso se mantiene.

Además de los textos mencionados, en los que se apoya Lenel para la reconstrucción de la rúbrica del Edicto relativa a la representación procesal de los colegios, existen otros de cierto interés.

Así puede citarse el texto tomado del libro quinto de los Comentarios de Ulpiano al Edicto (70) en el que se distingue claramente ~~en el que se distingue claramente~~ el caso del liberto de una asociación que quiere demandar a un miembro de la misma, del supuesto del liberto que quiere demandar a la asociación. En relación con éste último supuesto se dice que deberá pedir permiso al Pretor el demandante, es decir el permiso que tenían que solicitar los libertos para demandar a sus patronos.

En este texto hay una frase final muy significativa, se dice que el demandante, "debe pedir el permiso del Edicto, aunque haya de citar en juicio al representante (actor) constituido por la asociación". La presencia de "quamvis" desconcierta un poco, pues si el liberto de la asociación quiere llevar a ésta a jui-

cio lo natural es que comparezca en juicio representante, el actor. Sin embargo, el decir "aunque haya de citar al representante" parece indicar que aún no se ha consolidado la idea de la personificación y parece como si fuera en alguna medida incongruente que habiéndolo citado a una asociación sea una persona física la que comparezca en juicio.

Algún autor (71) ha sostenido que en Gayo al hablar del actor como representante de los colegios se está refiriendo al servus actor, lo que no sería propiamente representación.

Gayo cuándo se refiere al actor, está aludiendo a un verdadero representante y si a esta consideración se añade la mención de syndicus junto a actor resulta difícil admitir la equiparación actor = servus.

Mas aún, al final del texto D., 3, 4, 6, 3, después de haber estado tratando del actor, Paulo (72) dice que puede desempeñar este cargo un hijo de familia. La aclaración no tendría mucho sentido si se estuviera hablando del servus actor, dada la equiparación, en cierta medida de filius y servus.

Puede concluirse que la aplicación de representates permanentes a los colegios posiblemente se remonta al siglo III.

Puede concluirse igualmente que es muy probable la existencia en el Edicto del Pretor Urbano de una rúbrica relativa a la representación judicial de las asociaciones y que a los municipios corresponde, sin duda, la prioridad histórica en la concesión de la capacidad para comparecer en justicia y luego, por analogía se fueron aplicando a las asociaciones los logros obtenidos

por los municipios.

Tema distinto es el de la responsabilidad por la actuación de la órganos representativos de las asociaciones. El Corpus Juris no ofrece muchos datos seguros para su determinación en la época clásica.

Según Schnorr v. Carolsfeld (73) pueden extenderse a las asociaciones las limitaciones establecidas en dos textos del Digesto a la responsabilidad por actos de los representantes.

El primer texto se refiere a las ciudades y el otro a las societates.

En el texto referido a las ciudades se dice: Una ciudad puede quedar obligada por una entrega en mutuo, si las cantidades recibidas hubiesen revertido en utilidad de la misma, en otro caso tan sólo se obligan los que contrataron, no la ciudad (74).

No parece, sin embargo, adecuado aplicar este texto a las asociaciones, porque en este tipo de entes no se da la utilidad pública como en el caso de las ciudades, es decir, no se da con carácter general y de principio. Otra razón es que en D., 12, 1, 27, se habla clara y expresamente de civitas y no aparece extendido el argumento, por analogía, a otras entidades a diferencia de lo que sucede en D., 3, 4, 7, 1, siéndo así que ambos textos proceden de una misma fuente, el libro décimo de los Comentarios de Ulpiano al Edicto.

El otro texto (75) citado por Schnorr v. Carolsfeld, el que se refiere a las sociedades, establece el principio de que un socio no se obliga a la deuda de otro socio por el derecho de sociedad, a no ser que la ~~entidad~~ prestada haya ingre ^{Tca}sado en la caja común.

En este texto no se limita la responsabilidad por razón de la utilidad sino por razón de la entrega en la caja común.

Ahora bien, Mancaleoni (76) demostró el uso no clásico del plural pecuniae que hace dudar del clasicismo del texto.

También se ha hecho notar la contradicción del texto D., 17, 2, 82 con el D; 17, 2, 67, p2. (77) a lo que se opone F. Serrao quien afirma que tal contradicción no existe porque mientras el primer texto se refiere al mutuo, el segundo se refiere a una compraventa, (78). No puede asegurarse por tanto D., 12, 1, 27, sea apto para fundar una extensión de sus preceptos a las asociaciones, al menos en la época clásica.

Es posible que a fin de salvaguardar la ~~nueva~~ fé y los intereses de los terceros pudiera enfocarse la responsabilidad del ente a través de la culpa in eligendo, pues ello llevaría a un planteamiento impropio del período clásico.

Hasta ahora se han examinado una serie de textos a través de los cuales se aprecia cómo poco a poco se va agilizando el funcionamiento de las asociaciones en el tráfico jurídico, pero sin culminar su calificación como personas jurídicas, sin alcanzar una verdadera abstracción.

Ahora bien, un texto de Alfeno Varo sirve para descubrir como mucho antes del período postclásico empieza a germinar la idea de identidad como superación de los cambios sufridos circunstancialmente por una res y esa idea había de cuajar en la configuración del ente como centro de imputación de derechos y obligaciones.

En el texto de Alfeno (80) se lee: "Se proponía un caso en el que algunos jueces, de los que habían sido nombrados para un mismo asunto, se excusaron después de haber oído la causa y en su lugar se nombraron otros. Se preguntaba si acaso el cambio de algunos de estos jueces habría determinado que el juicio fuese otro o si seguía siendo el mismo. Respondí que no sólo si habían sido cambiados uno o dos de los jueces, sino que aunque hubiesen sido cambiados todos, tanto el asunto como el juicio continuaban siendo los mismos y que no sólo en este caso sino en otros muchos ocurría que al cambiar las partes se consideraba que la materia (res) era la misma; pues también se consideraba que la legión en la que hubiesen muerto muchos legionarios y puestos otros en su lugar es la misma y se entiende que hoy es el mismo pueblo que existía hace cien años, aunque ya no viva ninguna de los que lo componían y también una nave, hubiese sido reparada tantas veces que no quedase en ella ninguna tabla de las antiguas se considera que es la misma de antes. Pero si alguno creyese que por el cambio de las partes, es una cosa se convertía en otra, resultaría por la misma razón que nosotros no éramos los mismos de hace un año porque, como dirían los filósofos, diariamente se separan de nuestro cuerpo algunas de las minúsculas partículas de que estamos formados y otras par-

tículas extrañas vienen a ocupar el lugar de aquellas. Por todo esto, si se mantiene la forma de cualquier cosa, se considera que la cosa también es la misma".

Este texto de Alfeno mereció especial atención por parte de Orestano (81).

Indica Orestano que el texto revela lo lejos que estaba un jurista de la época de Augusto de la idea de utilizar en el plano corporativo el principio de la identidad en el cambio de los elementos, pues aunque a primera vista pudiera parecer que esta idea se desprendía de los ejemplos de la legión y del populus, los ejemplos de la nave y del cuerpo humano prueban que el jurista se colocaba en el plano material. Sin embargo, continúa Orestano estaba abierta la vía para una transposición de estas concepciones al plano ideal.

Tales observaciones son exactas pero de donde no se pueden derivar consecuencias, en el sentido apuntado, es del empleo de res, dado que este término no tenía en Roma un sentido material precisamente.

Para Arangio-Ruiz: "El concepto de corporación se había desenvuelto fatigosamente a través de una lucha con una concepción más elemental y particularista, según la cuál los derechos y las obligaciones del grupo no eran todavía concebidos como propios del ente, sino perteneciendo pro parte o por el total a cada uno de los miembros del grupo (82).

De Robertis (83) hace una magnífica síntesis del planteamiento clásico en los siguientes términos: "A la personificación civil de las asociaciones se habría llegado, según la communis opinio de los estudiosos al cabo de una evolución plurisecular, desde la época clásica hasta la compilación justiniana".

Se trataría de un desarrollo gradual promovido y sostenido por una serie de intervenciones estatales, que van atribuyendo, de vez en cuándo, ciertas dosis de capacidad: Capacidad para recibir legados, potestad para manumitir esclavos, capacidad para heredar a los propios libertos y representación procesal.

Fue en la segunda mitad de la época clásica y más concretamente desde Marco Aurelio hasta Alejandro Severo, cuándo fueron entregadas esas parcelas de capacidad o, si se prefiere, esas capacidades específicas. Pero estudiando la rica documentación epigráfica que se conserva sobre las actividades de los colegios en la época clásica y en dos importantes sectores de la vida jurídica como son el de las obligaciones y el de los derechos reales, se advierte inmediatamente que no tenemos datos claros ni fiables de intervenciones estatales promoviendo y sosteniendo las capacidades necesarias para actuar en dichos sectores, por lo que necesariamente hay que admitir una práctica jurídica que sólo a través del tiempo fue recibida en el ordenamiento jurídico.

Posiblemente uno de los factores que más han contribuido a dar un nuevo enfoque de la evolución hacia la personificación

de las asociaciones en Derecho romano ha sido el significado atribuido por parte de la doctrina al término "corpus".

Según la opinión tradicional la palabra "corpus" fue sinónima de collegium y designaba un grupo, una colectividad, por lo que "corpus habere" significaba simplemente formar una asociación.

Frente a esta opinión tradicional Savigny atribuyó a "corpus" el sentido de capacidad jurídica y a esta opinión de Savigny se adhirieron Mommsen, Gierke, Gradenwitz, Waltzing, Mitteis, Betti y Duff (84).

Para Mitteis que fue uno de los más fervientes defensores de la teoría de Savigny, la adquisición de la capacidad jurídica dependía de una concesión distinta de la simple autorización (85).

Entre los autores que se han opuesto a la teoría de Savigny pueden destacarse dos: Eliachevitch y De Visscher. Si bien, con diferentes planteamientos.

Eliachevitch hizo notar que si la palabra "corpus" significase capacidad jurídica sería preciso admitir que Gayo empleaba el término "corpus" en un sentido que más tarde desapareció, por lo que Paulo pudo escribir "corpus cui licet coire et cui non licet coire" (86) y Ulpiano pudo decir "collegium vel corpus" (87) así como yuxtaponer populus, curia, collegium et corpus. Lo que sería una yuxtaposición inadmisibles para un jurista

si collegium o curia eran nociones concretas y corpus una noción abstracta.

Según Eliachevitch Gayo atribuye a corpus el mismo sentido que todos los demás juristas clásicos cuándo escriben "collegium vel quodcumque corpus" (88).

Para De Visscher, corpus significa durante toda la época clásica, unidad (89).

Mas, en un sentido extrínsecamente clásico, la palabra "corpus" puede aplicarse lo mismo a una simple unidad que a una unidad compuesta e incluso "ex distantibus", como populus, legio, o grex (90).

Una colectividad organizada puede ser considerada como constituyendo un todo, una unidad, y es conforme al uso clásico hablar de corpus populi, plebis o senatus. Sólo más tarde, pero todavía en el siglo I, aparece como sinónimo de colegio y es a lo largo del siglo II y, sobre todo, después del reinado de Antonino Pío cuándo comienza a aparecer regularmente en las fuentes epigráficas.

Entre los escritores jurídicos aparece por vez primera en Calistrato (91). Cuándo Gayo escribe su comentario al Edicto Provincial, época de Antonino Pío el sentido colectivo del término "corpus" no aparece en la terminología jurídica.

Según De Visscher el término "corpus" que aparece en Gayo (92) significa un privilegio que puede ser acordado o no en fa-

vor de los asociados, lo que supone una distinción entre las nociones de colegio o sociedad, por un lado y la de "corpus" por otro.

Esta explicación de De Visscher acerca del pasaje de Gayo parece confirmar la teoría que iniciara Savigny y secundaria, entre otros, Mitteis.

Pero lo que hace notar De Visscher es que "corpus" en el indicado pasaje, no expresa una cualidad común, como la capacidad o la personalidad jurídica, sino el privilegio concedido a los asociados de aplicar y oponer frente a terceros el estatuto unitario de los bienes comunes, con lo cuál se trata de un significado que están tan lejos del de capacidad jurídica que defienden Savigny y Mitteis como el de colectividad que se propone por la doctrina contraria (93).

En definitiva puede concluirse lo siguiente a cerca del significado de "corpus":

- A) En la polémica acerca del significado de corpus se centra exclusivamente o casi exclusivamente la atención en el pasaje de Gayo citado.
- B) El mencionado pasaje ofrece evidentes huellas de alteración, lo que hace inseguras las conclusiones que sobre él se establezcan.
- C) El término "corpus" sufrió una evolución a lo largo de la época clásica, especialmente a partir de finales del siglo II.

- D) "Corpus" aparece con relativa frecuencia intercambiándose con collegium dentro de un mismo texto.
- E) A la vista de las fuentes epigráficas pueden puntualizarse los siguientes extremos: 1º) Que corpora son llamados así siempre las asociaciones de artesanos, comerciantes y similares pero nunca las asociaciones funerarias o religiosas; 2º) Que a partir del siglo III es muy frecuente que corpus sustituya a collegium; 3º) Que en algunas partes del Imperio, a veces dentro de Italia, corpus se usa muy raras ocasiones (94).

Por tanto no parece aceptable una anticipación de la personificación jurídica de las asociaciones, haciéndola remontar a la época clásica en base a una especial valoración del término Corpus.

N O T A S

- (1) Fadda, Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, I, p. 204.
- (2) Pernice, Labeo, I, p. 261.
- (3) V. Bandini, Appunti sulle Corporazioni romane, Milán 1937, p. 189.
- (4) C., 7, 9, 3. Cfr. Eliachevitch, la Personnalité juridique en Droit privé Romain, Paris 1942, p. 156 n. 167.
- (5) D., 40, 3, 1 y 2.
- (6) Schnorr v. Carolsfeld, Geschichte des Juristischen Person, Munich 1933, p. 222.
- (7) Según Dionisio de Halicarnaso (IV, 22) en tiempo de Servio Tulio se permitía manumitir esclavos y en tiempo de las XII Tablas, ya era la manumisión una institución antigua. Cfr. Buckland, The Roman Law of Slavery y Cambridge 1908, p. 439.
- (8) C.I.L., 8744.
- (9) Duff, Personality in Roman Private Law, Cambridge 1938, p. 120.
- (10) S., 3, 4, 7, 1.
- (11) Studi di diritto romano, Milán 1933, p. 99 y ss.
- (12) La personnalité juridique en Droit privé Romain, Paris 1942, p-p. 297-298.
- (13) Il problema delle fondazioni in diritto romano, Turín 1959, p. 124 y ss.
- (14) Tomado del libro VIII de los Comentarios de Ulpiano al Edicto.
- (15) D., 48, 18, 1, 7.
- (16) Tan importante es la diferencia de redacción que ha centrado la atención de los estudiosos, motivando que las palabras "in ceteris servis corporum" fueran consideradas sospechosas por Schnorr v. Carolsfeld. Cfr. Duff. Personality in Roman Private Law, Cambridge 1937, p. 29.
- (17) D., 1, 8, 6, 1.
- (18) D., 40, 3, 2.
- (19) C., 6, 24, 8.
- (20) Entwicklungsgang der Erbfähigkeit juristischen Personen en Zeitschr. für Rechtsgeschichte, VIII (1869) p. 301.

- (21) Corso di diritto romano, VI, Milán 1974, p. 396.
- (22) Bonfante, loc. cit.
- (23) Ob. cit. VI, p. 397.
- (24) D., 36, 1, 1, 15.
- (25) D., 36, 1, 6, 4.
- (26) Que lleva la rúbrica de "Ad Senatusconsultum Trevellanium".
- (27) C., 6, 24, 8.
- (28) XXII, 5.
- (29) D., 29, 2, 25, 1.
- (30) D., 36, 1, 1, 15.
- (31) Sistema del Derecho romano actual, II, Madrid 1979, p. 98 y ss. 18
- (32) Diritto ereditario romano, I, Milán 1967, p. 423.
- (33) Ob. cit. p. 423, n. 94.
- (34) Ob. cit. p. 657.
- (35) Concetti fondamentali del diritto ereditario romano, I, Milán 1949, p. 232.
- (36) D., 37, 1, 3, 4.
- (37) Cfr. Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens, Leipzig 1890.
- (38) Fadda, ob. cit., p. 234.
- (39) D., 7, 4, 21.
- (40) D., 38, 3, 1, pr.
- (41) Biondi, Diritto ereditario romano, Parte general, Milán 1954, p. 193.
- (42) D., 34, 5, 20.
- (43) II, 238.
- (44) Mommsen, Gesammelte Schriften, III, p. 67.
- (45) Tituli ex Corpore Ulpiani, XXIV, 28 y D., 30, 117.
- (46) Waltzing, Etude historique sur les Corporations professionnelles, II, Roma 1968, p. 464.

- (47) Eliachevitch, La personnalité juridique en Droit romain, Paris 1942, p. 268 y ss.
- (48) D., 3, 4, 6, 1.
- (49) D., 3, 4, 2.
- (50) F. Glück, Commentario alle Pandelte (trad. it) III, p. 160.
- (51) Cfr. F. De Robertis, Storia delle Corporazioni, II, Bari, p.p. 489-490.
- (52) Romisches Privatrecht.
- (53) Studi di diritto romano, Milán 1933, I, p. 121 y ss.
- (54) Importación de la que hay varios ejemplos en la terminología relativa a las asociaciones.
- (55) D., 50, 4, 18, 13.
- (56) D., 50, 4, 1, 2.
- (57) D., 50, 16 y 19 y D., 41, 2, 1 pr.
- (58) V. Arangio-Ruiz, Synteleia, II, Nápoles 1964 p. 1064.
- (59) D., 50, 4, 18.
- (60) Novissimo Digesto Italiano, v. Syndicus.
- (61) Lampridio, Vida de Alejandro Severo, XXXIII.
- (62) Der Rechtsgelehrte Gaius, p. 165.
- E. (63) A. Valiño, El comentario de Gayo al Edicto Provincial, Valencia 1979, p.p. 11-12.
- (64) Z. S.S., XXIX (1908) p. 523.
- (65) P. 100, n. 5.
En contra de la rúbrica Gradenwitz en Z.S.S. XII (1891) p. 141.
- (66) Geschichte der juristischen Person, Aalen 1969, p. 145.
- (67) D., 3, 4, 1, 1.
- (68) D., 3, 4, 6, 3.
- (69) D., 3, 4, 7, 1-2.
- (70) D., 2, 4, 10, 4.
- (71) Cfr. Kornemann, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, v. Collegium, Stuttgart 1910.

- (72) Texto tomado del libro noveno de los Comentarios del Edicto.
- (73) Geschichte der Juristischen Person, Aalen 1969, I, p.p. 337-338.
- (74) D., 12, 1, 27.
- (75) D., 17, 2, 82.
- (76) Il Filangieri, XXIV, (1899) p. 64 y XXVI (1901) p. 89.
- (77) Tomado del libro trece de los Comentarios de Pomponio a Sabino.
- (78) F. Serrao en Studi in onore di E. Volterra, v, p. 743 y ss.
- (79) Cfr. Responsabilità contrattuale in diritto romano, Bari 1968, I, p. 104 y ss.
- (80) D., 5, 1, 76.
- (81) Il problema delle fondazioni in diritto romano, Turín 1959, p. 101 y ss.
- (82) Istituzioni di diritto romano, Nápoles 1968, p. 68 y la bibliografía citada en n.1.
- (83) Storia delle Corporazioni, II, Bari p. 400 y ss.
- (84) Cfr. F. de Visscher, études de Droit romain Public et privé, Milán 1966, III Serie, p. 172 y especialmente la bibliografía citada en las notas 1 y 2.
- (85) Römisches Privatrecht, p. 400 y ss.
- (86) D., 34, 5, 20.
- (87) D., 36, 1, 1, 15. Cfr. D., 2, 4, 10, 4.
- (88) La personnalité juridique en Droit privé romain, Paris 1942, p. 264.
- (89) Etudes de Droit romain public et privé, III Serie, Milán 1966, p. 178 y ss.
- (90) Séneca, Epist., 102, 6.
- (91) De Visscher, loc. cit.
- (92) D., 3, 4, 1, pr.
- (93) De Visscher, ob. cit. p. 180.
- (94) Sólomente hay una referencia a un Corpus Augustalium en una lápida encontrada en Dalmacia (C.I.L., III, 3016).
- (95) E. Ruggiero, Dizionario Epigráfico, Roma 1961, v. Corpus.

CAPITULO XIX

Las asociaciones profesionales con el Bajo
Imperio

LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES EN EL BAJO IMPERIO

En el Bajo Imperio las asociaciones se convierten en colegios obligatorios, cuyos miembros ven extraordinariamente mermada su libertad e independencia a fin de mantener la continuidad y la eficacia de los servicios prestados a la comunidad, pero ello no supone que en épocas anteriores, en el período clásico, las asociaciones no desempeñasen funciones de utilidad pública, no realizaran servicios que interesasen directamente a la comunidad, lo único que supone es que esas funciones y esos servicios se realizaban a través de diferentes esquemas de organización asociativa y dentro de un ambiente social, político, económico y administrativo, muy distinto del que caracterizó a la época que se conoce con el nombre de Bajo Imperio.

En primer lugar hay que hacer notar que, a partir de la Ley Julia, la posibilidad de que las asociaciones puedan cumplir una labor de utilidad pública es un factor fundamental en el proceso de autorización.

En segundo lugar que en el período clásico no había contradicción alguna entre que una asociación fue^{va} debida a la iniciativa privada y realizase funciones de interés público.

En tercer término, que podía ocurrir que fuesen las autoridades las que tomasen la iniciativa para constituir una asociación útil para determinados servicios públicos, como lo revela claramente el proyecto de creación de un colegio de fabri en Nicomedia, a que se refiere la carta de Plinio que ya fue objeto

de especial atención (1).

En cuarto lugar, que los Collegia Tenuiorum tenían fines exclusivamente privados y ello fue una de las razones que determinaron que a ellos se aplicase un sistema de autorización completamente excepcional.

Finalmente hay que hacer notar que a comienzos del Imperio la creación de asociaciones profesionales por iniciativa estatal estaba fuertemente limitada por la preocupación de que pudiesen derivar hacia actividades pseudopolíticas.

También es importante llevar a cabo una distinción entre asociaciones que en los tres primeros siglos del Imperio realizaban una actividad que pudiera calificarse de normal prestación de un servicio público y aquellas otras en que la especialización profesional de sus miembros era utilizada ocasionalmente para atender servicios públicos.

En la primera clase pueden incluirse las asociaciones de navicularii y en la segunda, pueden figurar, entre otras, las asociaciones de los centonarii y si no fue más frecuente la utilización de colegios, que de suyo tenían fines privados, para atender finalidades públicas, como por ejemplo la lucha contra incendios, ello fue debido a que los primeros emperadores trataron de organizar los servicios públicos utilizando esclavos del Estado. En este sentido puede citarse el dato de que Augusto destinó seiscientos esclavos a la lucha contra incendios y doscientos cuarenta a atender los acueductos de Roma, seguido en esta política, especialmente por Claudio.

~~Faustino~~ (2) cuenta que M. Agripa dispuso de equipos de ^{con} esclavos públicos especializados en atender los acueductos, los depósitos y las fuentes y según un senadoconsulto del año 13 a. de C., los intendentes de las aguas llevaban consigo, cuando salían de Roma, dos lictos y tres esclavos públicos (3).

Había también esclavos empleados como subalternos para atender a las reuniones de las Asambleas (4), para el transporte de mensajes (5) y también como subalternos en la administración de justicia (6) aparte de otros cometidos.

Una diferencia fundamental entre los colegios que prestaban servicios públicos en la época clásica y aquellos otros que lo hacían en la época del Bajo Imperio es la siguiente:

En la época clásica no se obligaba directamente a las asociaciones a que llevasen a cabo los servicios, a costreñirlas a realizar funciones de utilidad pública, sino que se empleaba otro procedimiento, el de las recompensas y los privilegios, es decir, se prefería el estímulo a la coacción.

Existen dos textos en el Digesto que ofrecen el interés de mostrar que los privilegios se concedían, más que a los colegios por sí mismos, a los miembros que efectivamente prestaban un servicio de interés público.

Uno de estos textos es de Calistrato y en él se lee: "Aunque uno pertenezca a la asociación de los que se dedican al transporte marítimo, si no tiene una o varias naves y no reúne todos

los requisitos previstos en las constituciones imperiales, no podrá aprovecharse del privilegio concedido a quienes se dedican al transporte por mar y así se dice en un rescripto de los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero, de consagrada memoria, con las siguientes palabras, escritas en Griego: Había otros que alegando la inmunidad concedida a los transportistas por mar y a los mercaderes del trigo y del aceite, que atienden al suministro de la población de Roma han solicitado la exención de las cargas municipales, siendo así que no realizan ese servicio ni tienen la mayor parte de su fortuna en el negocio del transporte marítimo o de aquél comercio, por ello, priveseles de la exención de tales cargas" (7).

En el otro texto, que es un párrafo ulterior del mismo fragmento de Calistrato (8) se lee: "Se atribuye la inmunidad (9) a algunas asociaciones (collegia vel corpora) a las que se ha concedido por ley el derecho de asociarse, es decir, a aquellas asociaciones en las que se integra cada cuál según su profesión, como por ejemplo la asociación de los artesanos (fabri) y algunas otras que tienen la misma razón de ser y que fueron creadas para prestar algún servicio de utilidad pública, pero no se da la inmunidad de manera indistinta, a favor de todos los que figuran en estas asociaciones (collegia) sino únicamente a los profesionales (artífices) y no pueden alegarla los de cualquier edad, en conformidad con lo dispuesto por Antonino Pío, de consagrada memoria, que rechazó a tales efectos los hombres demasiado viejos o demasiado jóvenes y consta en muchas constituciones que aquellos que se han enriquecido y pueden

sobrellevar las cargas de la ciudad ni siquiera pueden valerse de los privilegios que se conceden a los pobres distribuidos por tales asociaciones".

Acerca de estos textos y su significación para comprender el tratamiento jurídico de las asociaciones que en la época clásica podían prestar servicios de utilidad pública, han de hacerse algunas observaciones.

Ambos textos son de Calistrato probablemente de origen griego (10), y más dedicado a la dogmática que a la casuística y proceden de una obra (De cognitionibus) escrita en tiempo de Caracalla (11).

En el primer texto se acredita la posibilidad de que se pertenezca a una asociación y no se ejerza la actividad que la caracteriza y da nombre. Entre los pertenecientes a una asociación podía haber quién sin ejercer la actividad correspondiente tuviese la mayor parte de su fortuna dedicada a hacer posible el desarrollo de las tareas propias de la asociación, pero también podía haber quién ni ejerciese ni colaborase con su patrimonio. A estos últimos no se les concede la exención de las cargas municipales.

En el segundo texto hay que hacer notar que primero designa a las asociaciones de que está tratando con los nombres de collegia y corpora y más adelante pero en el mismo párrafo, habla sólo de collegia.

Por otra parte, cuándo emplea los dos términos collegia y

corpora, dice "asociaciones a las que se ha concedido por ley el derecho de asociarse", eliminando así la posibilidad de utilizar como criterio de distinción la concesión del ius coeundi.

En este texto aparece escrito: "Ut fabrorum corpus et si qua eandem rationem originis habent". Esta frase a veces ha sido traducida así: "Como por ejemplo la corporación de los artesanos y alguna más de similar origen" (12). Pero también es posible traducirla así: "... Y alguna más con la misma razón de ser" con esta traducción no se plantea el tema de la creación estatal o por iniciativa privada de los colegios que prestan servicios de utilidad pública, sino únicamente se plantea la cuestión de la idoneidad para prestar el servicio.

A los servicios prestados el Estado correspondía con privilegios y con entregas de dinero o de especies. A estas compensaciones se hace referencia al analizar el régimen jurídico de los colegios obligatorios en el Bajo Imperio y al tratar de algunos colegios en particular.

El cambio en el régimen jurídico de los colegios: el paso de un ordenamiento en que el Estado solicitaba de las asociaciones servicios públicos a cambio de concesiones y privilegios, a aquél otro en que el mismo ejercicio de la profesión constituía el servicio público; el paso de la prestación pasajera, ocasional e intermitente de funciones de utilidad pública, que tenían una relación más o menos directa con la propia actividad profesional, a los colegios obligatorios, necesarios y con prestacio

nes continuas, se inicia en rigor a fines del siglo III, aunque se perciban mejor sus características y naturaleza en las fuentes del período postclásico y se inicia con notables cambios en la economía y en la organización social.

Aureliano introdujo en Roma la distribución del tocino y la venta de vino a bajo precio, sustituyó los repartos de trigo a la plebe por las entregas de pan y aumentó el número de los barqueros del Tiber (13) aunque parece ser que todavía no se había implantado la incorporación forzosa para llevar a cabo el servicio de navegación fluvial.

Más reveladora es una disposición que parece proceder de Diocleciano y según la cuál se prohibió que se obligase a ciertos empleados del Gobernador de Siria a dedicarse al transporte marítimo o a entrar en la curia (14).

Además puede muy bien pensarse que como los textos más antiguos del Código Teodosiano, textos que se remontan a los años 314, 315 y 317 (15), nos presentan ya las corporaciones romanas como obligatorias y hereditarias, la primera fase de la evolución ya se había consumado al comienzo mismo del siglo IV, aunque, por supuesto, esta evolución continuase a lo largo de la época postclásica.

Una vez fijado con relativa aproximación el momento del cambio, es necesario analizar los factores que determinaron una transformación tan radical en el Derecho asociativo romano.

En el siglo III se advertía una crisis económica y política que si bien no ofrecía idénticos rasgos que la crisis de la República, era de no menor gravedad.

La corrupción de las costumbres, el largo período de paz, el ocio y la prosperidad habían minado el espíritu fuerte y emprendedor de los antiguos romanos, al mismo tiempo que la difusión de ideas políticas extrañas habían minado el patriotismo tan característico de los habitantes de Roma, en otros tiempos. Bárbaros y persas presionaban en las fronteras del Imperio.

El temor a las invasiones produjo inmediatos efectos. Los habitantes de las villas ante el temor de las posibles guerras y desórdenes las abandonaban.

Se han encontrado numerosas monedas escondidas en la Galia y en Germania correspondientes a este período, que prueban claramente que los propietarios escondían sus tesoros y luego, por las vicisitudes de las operaciones militares, no podían recuperarlos.

Una constitución del Emperador Aureliano revela a que extremos había llegado el abandono de las tierras y en un título del Código de Justiniano (16) se conservan diversas constituciones relativas a los efectos que este abandono producía.

Alguna de estas constituciones corresponde al Emperador Constantino (17) pero es preciso hacer notar que en ella se refiere a anteriores disposiciones sobre el mismo tema que habían sido dictadas por el Emperador Aureliano.

Es indudable que las cuestiones suscitadas por el abandono de las tierras no aparecen por vez primera en los siglos III y IV, pero es indudable que en las fuentes de esta época se advierte una gran preocupación por el fenómeno.

Pero la crisis no afectaba únicamente a la agricultura, si no también a las artes y a la cultura que languidecían en un ambiente en el que se debilitaba la fe en el porvenir y la confianza en el Estado (18).

A la crisis de la agricultura, las artes y la cultura acompañó un fuerte quebranto demográfico y una gran decadencia de la industria y del comercio. Ya no se encuentran en los hallazgos de objetos del siglo II muestras de enseres refinados, utilizados por las clases acomodadas, sino más bien cach~~os~~^{erros} toscos La propios de personas que conocen la pobreza.

La inflación monetaria unida a la insuficiencia del artesano libre y a la disminución del trabajo servil (19) influyeron extraordinariamente en la decadencia de la industria y la decadencia de la industria acarreó consigo la decadencia del comercio.

Como observó De Martino (20) el problema de la crisis del siglo III es muy complejo y no se puede resolver con fórmulas esquemáticas.

Sin embargo, como telón de fondo de la crisis puede señalarse la disminución de la población romana, favorecida por el abandono de los niños, el aborto, la guerra, las malas condiciones.

nes higiénicas y las epidemias.

Si a todos los factores señalados se agrega el efecto producido por la creciente imposición de gravámenes por parte del Estado y la difusión de los munera de origen oriental, se puede alcanzar una visión de la crisis del Imperio en la época de transición del período clásico al postclásico.

Era preciso un esfuerzo titánico para superar tantos males y el esfuerzo se produjo por obra de emperadores como Diocleciano y Constantino. Había que actuar en varios frentes.

Hacía falta atajar la anarquía y las discordias intestinas. Era necesario fortalecer la unidad del Estado y ello se procuró con el establecimiento de una monarquía absoluta. Urgía dotar de eficacia el funcionamiento de los organismos oficiales y a ello se atendió con el montaje de un formidable aparato burocrático. Se sentía la necesidad de restaurar la unidad moral y a tal efecto se publicó el Edicto de Milán.

Pero además había que atajar otro mal, que aunque no ofreciese de inmediato caracteres de catástrofe como los males anteriormente numerados, si podía producir, a la larga, muy graves consecuencias.

Existía el peligro de que el relajamiento de la iniciativa privada ante las condiciones adversas diera lugar a que ciertas actividades y trabajos de interés público quedasen desatendidos.

Hacía falta adoptar enérgicas medidas, obligando a cada uno a permanecer en su puesto, prohibiendo deserciones y abandonos. Estas medidas pueden calificarse de gravosas y atentatorias a la libertad individual, pero también pueden ser calificadas de necesarias para evitar la ruina y toda clase de desórdenes que el malestar generalizado engendra.

El Estado transformó en instituciones oficiales las asociaciones de mercaderes y artesanos.

La pertenencia a una asociación profesional se hizo obligatoria y hereditaria, en la forma que más adelante se detallará (21).

Más aún, se acudió al reclutamiento forzoso y hasta se llegó a liberar a los reclusos de las cárceles para hacerles entrar en algunas asociaciones consideradas particularmente gravosas (22).

La actuación del Estado respecto de las asociaciones profesionales en el período del Bajo Imperio se produjo en múltiples aspectos.

En primer lugar, respecto de la composición de las asociaciones y la identidad de sus miembros.

Puesto que se trataba de conseguir la máxima eficacia en la prestación de los servicios públicos, era lógico que se procurase la selección de quienes reunían las debidas condiciones físicas o intelectuales para la tarea encomendada.

Esta orientación se descubre claramente en un texto del Código de Justiniano en el que se establece que nadie debe ser incorporado a una asociación profesional si no es idóneo, tanto

por razón de su arte como por razón de su edad; correspondiendo a la misma asociación determinar acerca de la idoneidad y no se considera suficiente el dictamen de la corporación, si no que se añade el control del Estado que, en su caso, corroborará el informe de la asociación con un documento oficial que servirá de credencial para el declarado idóneo.

Llego a tal extremo la preocupación por evitar que se incorporasen a las asociaciones personas carentes de las aptitudes requeridas que quién hubiese violado las normas establecidas no solamente tenía vedado el acceso a la asociación, sino que, sometido a tormento en el curso de las investigaciones era luego relegado a perpetuidad fuera de la provincia, castigo que se aplicaría también a cuantos hubiesen favorecido el propósito de figurar en una asociación sin tener las condiciones exigidas para ello (23).

En este tiempo dado el nuevo carácter de las asociaciones no eran admitidos los esclavos. Sí era posible, en cambio, encontrar esclavos propiedad de un colegio o del Estado.

Otro aspecto en que también se manifiesta la ingerencia estatal, es el de la limitación de las atribuciones de la asamblea general (24).

Precisamente a propósito del texto del Código de Justiniano a que antes se ha hecho referencia y que se ocupaba de la comprobación de las aptitudes de los que querían ingresar en una asociación, se advierte inmediatamente que por encima de lo que decida la asociación acerca de la idoneidad del aspirante está el control del Estado y las credenciales de aptitud no las expi de la misma asociación, sino que se expiden por orden del Emperador.

Waltzing afirmó que la organización colegial parece que continuó siendo democrática, aunque por todo el Imperio dominasen el absolutismo y la centralización (25).

Resulta infundada esta afirmación, pues no es verosímil que tratándose de asociaciones que realizaban funciones de interés público pudiesen estar aisladas de la organización política y administrativa que caracteriza al Bajo Imperio y el mismo Waltzing añade a su anterior afirmación tales reservas que notoriamente la desvirtúan. La asamblea general, escribe, "era la que siempre decretaba cómo habían de gestionarse los asuntos de la corporación; si ella no era soberana, no conocía otro dueño que el Estado. Los jefes de la corporación no hacían más que ejecutar las decisiones de la asamblea. Es verdad que en todo aquello que de cerca o de lejos interesaba al Estado, la asamblea tenía que seguir las reglas trazadas por él".

En esta época los patronos tuvieron una especial significación, por lo que es necesario hacer una comparación entre los patronos de las asociaciones del Bajo Imperio y los patronos de la época clásica. Los patronos de la época clásica estaban por encima de los funcionarios de un colegio. Era una institución cuyos antecedentes hay que buscarlos en el campo del Derecho público (26).

Existía la costumbre, en la época clásica, de que, tanto las ciudades y colonias como provincias enteras, tuviesen en Roma un patrono que cuidase de sus intereses, defendiese sus derechos y ayudara a sus miembros cuando estos se encontraran en dicha ciudad.

En Suetonio se encuentran varios ejemplos de este patronazgo. Así, por ejemplo, a propósito de la tensión surgida entre Marco Aurelio y Octavio y de las circunstancias que precedieron a la batalla naval que tuvo lugar junto a Accio, dice el historiador latino que Augusto dispensó a los vecinos de Bolo-
nia de unirse a su propio bando, en atención a que desde hacía mucho tiempo venían siendo clientes de la familia de Antonio. Es decir, que la familia de Antonio ostentaba el patronato de Bolonia (27).

Así también cuando Suetonio narra las vicisitudes y peripecias que hubo de sufrir Tiberio en su infancia, dice que fue llevado a través de Sicilia y de Acaya y confiado a los lacedemonios que estaban bajo el patronazgo de los Claudios (28).

Eran patronos los que habían llevado a cabo la deductio de una colonia (29) y también podían ser escogidos los patronos entre los senadores y los caballeros que no estuviesen desempeñando funciones en la provincia, sino que viviesen en Italia como particulares, pero fuesen hombres de prestigio e influencia.

Igualmente podían ser patronos quienes anteriormente habían desempeñado en la provincia el cargo de gobernador imperial.

Esta clase de protectores de las ciudades o patronos, tuvo su eco y reflejo en los colegios, a los que se transpasan tantas instituciones y características jurídicas que antes habían sido propias de los municipios.

Se conservan tabulae patronatus en las que se lee cuál era

el modo de nombrar a un patrono y las razones de la elección la principal de las cuales solía ser la generalidad mostrada con el colegio. Por parte de este no faltaban decretos honoríficos y también estatuas con inscripciones laudatorias.

En cambio, los patronos del Bajo Imperio eran órganos de enlace entre las asociaciones y el Estado. Aunque estos patronos eran elegidos por la asamblea del colegio, su elección debía ser ratificada por las autoridades y en vez de rendir cuentas al colegio de su actuación, tenían que rendir cuentas al Estado quién podía premiarlos o imponerles castigos.

Las contraprestaciones del Estado a los colegios podían ser de varias clases:

1º) Indemnizaciones o salarios en efectivo o en especie;
2º) privilegios, más concretamente exenciones de cargas públicas y 3º) concesión de títulos honoríficos.

También en materia de aportaciones económicas del Estado a los colegios se registra una clara evolución.

A comienzos de la época clásica el Estado pagaba los servicios prestados con arreglo a lo fijado en contratos libremente concertados con los diferentes asociados. Más tarde, pero todavía dentro del período clásico, se establecieron tarifas que había que satisfacer al colegio, no a los miembros que lo componían.

Pero a partir del siglo IV varió el procedimiento. Se enten

dió que debían ser los bienes del colegio los que sirvieran para atender a los gastos y que al Estado sólo le correspondía intervenir para compensar pérdidas eventuales o bien para ayudar económicamente a los colegios. En ningún caso se trataría de una remuneración propiamente dicha (30).

Esto era perfectamente compatible con que el Estado atribuyese ciertos bienes a las asociaciones profesionales, bienes que unas veces eran medios instrumentales, para el ejercicio de la profesión por ejemplo los edificios concedidos a los panaderos para poder moler el grano o las tiendas puestas a disposición de los curtidores, pero que en otras ocasiones eran bienes cuyas rentas percibían los colegios (31).

En cuanto a los privilegios, correspondientes al inicio del período postclásico, merece especial mención un título del Digesto (32).

En ese título figura un largo fragmento del libro primero de la obra De Cognitionibus de Calístrato, no exento de interpolaciones, pero que es útil porque revela cuál era el régimen de privilegios de las asociaciones al comenzar el Bajo Imperio.

Dice Calistrato que aquellos mercaderes que colaboran en el abastecimiento de Roma, lo mismo que los que hacen el transporte marítimo, consiguen la inmunidad de las cargas públicas mientras realizan efectivamente esos servicios.

La razón que se da para esta exención es doble. Por una parte se dice que la exención de las cargas públicas tiene por fin

lidad recompensar y, más aún, estimular con premios los peligros y los esfuerzos que lleva consigo la prestación de servicios de pública utilidad, por otra se argumenta que los que están fuera de la ciudad y dada la razón de su ausencia, pueden considerarse ausentes por motivos oficiales (respublicae causa abesse) (33).

Si alguno fue llamado a desempeñar un cargo municipal antes de comenzar a negociar o antes de ser admitido en una asociación de las que gozan del privilegio de la inmunidad, estará obligado a desempeñar el cargo (34).

La inmunidad no alcanzaba a aquellos que habiéndose enriquecido ya con la negociación volvieran a invertir la cantidad inicial, ni tampoco alcanzaba a quienes, siendo hombres de gran fortuna, invertían una pequeña parte de su capital en comprar naves para sustraerse así a las cargas públicas (35).

Resulta evidente, a la vista de estas normas, que la exención cesaba cuándo realmente la participación en las funciones públicas no representaba sacrificio económico alguno.

Había veces en que la exención se justificaba desde otra perspectiva. Es el caso de los arrendatarios de impuestos.

En este caso la exención no se concedía como un premio o ventaja para estas personas, sino por ser conveniente para el Estado.

Se razona del siguiente modo: Al declarárseles inmunes lo

que se perseguía era evitar que, como consecuencia del desempeño de ciertas cargas pudieran sufrir quebranto económico y disminuyera su fortuna. Fortuna que estaba obligada para con el Fisco. Como consecuencia de este enfoque de la concesión del privilegio, se produce naturalmente una consecuencia jurídica y es la de que aunque voluntariamente se ofrezcan para el desempeño de cargas municipales, no se les permite, salvo que ya hayan liquidado con el Fisco (36).

Podía ocurrir que se produjera una colisión entre dos funciones de interés público.

Sería el caso de uno que fue admitido en una asociación de las que otorgan inmunidad, pero hubiese aceptado ser decurión ¿estará exento del decurionato por razón de la asociación a que pertenece?

El caso debió darse efectivamente, porque hay noticia de un rescripto imperial que lo resolvió en el sentido de que había de ser compelido a desempeñar el cargo público (37).

La inmunidad era uno de los privilegios más importantes pues comprendía la exención de los munera civilia, municipalia y publica.

Para Festo munus puede significar administración de la casa pública (38).

Como hizo notar Mommsen (39) munus ha dado lugar a muchos derivados: Munire, immunis, communis y también parece derivar-

se munus, municipium. Al comienzo del libro cincuenta del Digesto (40) y en un texto tomado del libro segundo de los Comentarios de Ulpiano al Digesto se dice que se llaman propiamente municipes los que participan del cargo: "Proprie quidem municipes appellantur muneris participes".

Es probable que el sentido fundamental del término sea el de llevar a cabo trabajos de fortificación, construir las murallas de una ciudad (moenia) y luego por extensión se aplicó a otros trabajos y cargos de carácter público.

Se distinguen varias clases de munera. En un texto de Ulpiano se lleva a cabo la siguiente distinción: Munera personae, munera patrimoniorum y honores (41).

Ulpiano continúa explicando que los munera que se imponen a los patrimonios son de dos clases, porque unos se imponen a los poseedores, sean o no municipes y otros sólo se imponen si se trata de municipes o habitantes. También se dice que las cargas que se imponen a los campos o a los edificios se imponen a sus poseedores, pero las cargas que son consideradas de los patrimonios sólo se imponen a los municipios o habitantes.

Diferentes de las cargas patrimoniales son las cargas personales. Cargas personales son aquellas que con disposición de ánimo y esfuerzo corporal se desempeñan: El transporte de cosas, el cuidado de vehículos para viajes públicos, la custodia de acueductos, la guarda de edificios o archivos, etc. (42).

Cargas mixtas fueron las que exigían al mismo tiempo que

disposición de ánimo y esfuerzo personal, desembolso económico. En el Bajo Imperio muchas cargas personales se transformaron en cargas patrimoniales.

La inmunidad que se concedía a un colegio profesional era a veces tan amplia que no sólo comprendía los munera propiamente dichos, sino la excusatio tutelae, la exención de impuestos territoriales y de impuestos especiales e indirectos.

Finalmente en cuanto a las distinciones otorgadas a aquellos colegiados que servían al bien público, puede recordarse que Constantino concedió a los que se dedicaban al transporte marítimo la dignidad equestre, conferida por Juliano y Graciano (43).

El estar investido de la dignidad equestre no sólo determinaba que se castigase con graves penas cualquier injuria corporal que recibiese el así favorecido, sino que no se le podía torturar, impidiendo así que fueran víctimas de una práctica procesal muy extendida en aquel tiempo.

Sin embargo hay que precisar que en las investigaciones acerca de las causas y circunstancias de los naufragios, los que no podían ser torturados eran los magistri navis, pero si podían serlo los simples marineros, según resulta de una constitución de los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano del año 372 (44).

Los patronos de los suarii, de los mensores y los primi-

cerii fabricae fueron honrados con distinciones tales como el título de comités.

Concretamente Valentiniano VI. concedió el honor de ducenarius militae, nombre que se daba al militar que mandaba doscientos hombres (45).

También se adoptaron rigurosas medidas contra quienes no respetasen los privilegios concedidos a los colegiados por los emperadores. Medidas que iban desde simples multas hasta la pena capital (46).

No obstante los privilegios que se concedían a los miembros de las asociaciones profesionales y la protección de que gozaban algunos de ellos contra los abusos de funcionarios de todo rango, incluso gobernadores (47) se había extendido la práctica de ofrecer regalos a las autoridades superiores para atraer se su benevolencia.

Se sabe que esto ocurrió con algunos navicularii y ello motivó una constitución de Honorio del año 412 en la que además de una pena de diez libras de oro se disponía que quién aceptase tales regalos estaría obligado a entregar al Fisco el cuádruplo de lo leonino.

Estas medidas no sólo fueron adoptadas en favor de los navicularii, que sin duda alguna eran los más favorecidos por los emperadores, sino también a favor de otros colegiados, como panaderos, carniceros, etc. ya que todos ellos podían ser objeto de vejaciones y abusos por parte de las autoridades.

Un especial privilegio fue concedido a los suarii.

Los emperadores Valentiniano y Valente habían establecido en el año 364 que, con excepción de los senadores y dignatarios imperiales, así como administradores de las provincias, veteranos, militares que están haciendo el servicio y decuriones, las demás personas no pudiesen utilizar caballerías en sus desplazamientos por determinadas regiones de Italia (48).

Esta medida estaba motivada por el desarrollo del bandolerismo que hacía sumamente peligroso el tránsito por ciertos caminos. La excepción se establecía en atención a la dignidad personal, al reconocimiento por los servicios prestados y la fidelidad demostrada, en el caso de los veteranos y en atención a necesidades del servicio en el caso de los militares en activo.

Pero un año después, se publicó otra constitución en la que se ampliaba el número de las personas exceptuadas de la prohibición, al incluirse a los carniceros o suarii que por tener que desplazarse a lejanas tierras para adquirir los animales cuya carne habían de comercializar, era procedente que pudiesen utilizar caballerías (49).

De estos privilegios se tratará al considerar específicamente algunas de las asociaciones profesionales en el siguiente capítulo.

Más al lado de concesiones, privilegios y honores en favor de los colegios existía el otro aspecto de cargas, sujeción y obligaciones.

Este aspecto a su vez puede descomponerse en dos órdenes:
El orden material y el personal.

En el Bajo Imperio al referirse en las fuentes a los bienes particulares de los asociados se habla de patrimonio afectado al servicio: obnoxius functioni. Más no se trataba solamente de una parte del patrimonio sino del patrimonio en su totalidad: Bona omnia ac patrimonium requiruntur.

Estos bienes afectados al servicio no eran únicamente aquellos que se recibían en herencia, o a través de un modo de adquisición inter vivos, de otras personas que estuvieron o estaban también dedicadas a aquél servicio o función, es decir, no quedaban únicamente afectados los bienes por una especie de subrogación, sino que cualquiera que fuese la procedencia de los bienes adquiridos, cualquiera que fuese el modo de adquisición utilizado, aunque se tratase de bienes que nunca habían estado afectados al servicio, sólo por el hecho de pasar a pertenecer a un colegiado quedaban afectos al cumplimiento del servicio encomendado a su titular.

Es evidente que a la vista de una afectación patrimonial de esta naturaleza, las autoridades a quienes correspondía la alta vigilancia y el control superior de los servicios públicos, debiesen estar puntualmente informadas de los cambios producidos en orden a la titularidad de los bienes patrimoniales que podían pasar a estar sometidos a un nuevo régimen jurídico como consecuencia de la condición profesional del adquirente.

Esto es lo que motivó una constitución del año 364 en la que se disponía que se informase al Prefecto de la Anona de todos los cambios que se produjesen en las propiedades de los panaderos (50).

Otra consecuencia que se derivó de la circunstancia de estar sujetos a la función los bienes de propiedad individual, era la necesidad de vigilar estrechamente que el reparto de las cargas se hiciese de modo proporcional y equitativo (51).

El reparto no se hacía sólo en cuanto a las cargas patrimoniales, sino que también se procuraba una rotación en los trabajos pesados de carácter personal.

Si un colegiado transmitía sus bienes a otro este tenía la obligación de soportar las mismas cargas que el anterior, bien entendido que las cargas que no pudiese atender, por cualquier causa, el comprador seguirían gravando al vendedor, de suerte que la transmisión no supusiese nunca merma de la función a que se atendía con dichos bienes (52).

Por otra parte, en el comienzo del Bajo Imperio no se permitía la prescripción de los bienes afectados al servicio público (53).

En íntima conexión con la afectación de los bienes de los colegiados a la función de utilidad pública estaban las normas que establecían que para entrar en una asociación era preciso tener los bienes suficientes a fin de desempeñar adecuadamente el servicio de su competencia: idoneus facultatibus (54).

En el Bajo Imperio no sólo se produce la afectación de los bienes, sino también la vinculación de las personas.

Se ha discutido si en algún momento la afectación de los bienes dispensaba de la prestación del trabajo personal (55). Para Waltzing existió una clara evolución en orden a la vinculación de las personas.

En un principio los esfuerzos de los emperadores iban dirigidos a conseguir fijar la afectación de los bienes. Se consideraba que con las medidas encaminadas a este fin era suficiente la vinculación.

Sin embargo, más tarde, empezaron a surgir graves dificultades, cuando los pertenecientes a asociaciones de importancia básica para Roma, como la de los navicularii vieron mermar sus filas, porque los asociados estimaron que los privilegios que recibían no compensaba la falta de libertad en la disposición de su patrimonio. Era preciso dar un paso más y este paso no podía ser otro que el de vincular a las personas (56).

Examinando las fuentes se observa un cambio altamente significativo en la terminología empleada. En vez de hablar de prae dia obnoxia muneri o utilizar expresiones similares, aparecen expresiones en las que se revela la vinculación de las personas.

Ahora bien, aún aceptando la teoría de Waltzing, que se acaba de exponer, hay que precisar dos extremos.

En primer lugar hay que subrayar que la vinculación de las personas aparece ya constatada a comienzos del siglo IV (57).

Es cierto que en el año 365 Valentiniano alude a la vinculación personal de los pistori y seis años después se dice lo mismo respecto de los navicularii de Oriente (58), pero no es menos cierto que respecto de los fabricantes de monedas, ya se había expresado en términos semejantes, años antes, el Emperador Constantino.

Nos referimos a una constitución dada en el año 317 y en la que se dice a los de Bitinia que es necesario que los monederos permanezcan siempre en su condición profesional y no sólo se hace esta afirmación, sino que se adoptan previsiones para el futuro, advirtiéndole que no se librarán de esta condición por privilegio de cualquier dignidad (59).

La otra precisión es que la vinculación personal parece ser un principio que nació fuera del campo del Derecho asociativo, aunque dentro de él adquiriese gran auge y amplio desarrollo.

Comenzó con la vinculación de las personas, por su nacimiento, a las cargas de su ciudad natal.

Revillout describe así la evolución: En un principio se nacía solamente plebeyo o decurión y no se estaba ligado con el municipio o la curia más que por razón del origen.

Pero más tarde, dice el autor citado: "Al lado del pueblo y del Senado, que componían el cuerpo de la administración municipal, se formaron asociaciones más restringidas... Estas pequeñas sociedades, después de haber sido reconocidas por las leyes, fueron encargadas de ciertos servicios públicos y gratuitos y recibieron, en compensación, importantes privilegios e inmunidades... Los asociados no podían ser vinculados para toda la vida... Más tarde, se elevaron barreras que encerraban a todos los habitantes del Imperio en castas semejantes a las de la India. Se nacía miembro de una asociación profesional... lo mismo que se nacía "en otro tiempo" "ciudadano o decurión de un municipio" (60).

Por tanto la vinculación personal en las asociaciones profesionales puede decirse que tuvo un antecedente en la vinculación de los curiales que tanta responsabilidad tenían en el pago de los impuestos municipales.

En última relación con la vinculación personal está la continuidad hereditaria.

Los romanos conocieron antes que otros pueblos el testamento, pero en un principio la libertad de testar estaba limitada por requisitos de forma, pudiéndose desheredar a los descendientes con una sola mención en el testamento en forma de exhereda-
tio.

A veces se producía una cierta fricción entre la libertad de testar y la continuidad en ciertas cargas. Es lo que ocurrió, en cierto momento de la historia del Derecho romano con la continuación de los sacra (61).

En un principio los sacra privata se transmitían de padres a hijos y la observancia del culto era considerada un deber inexcusable, la familia romana era una sociedad incardinada en el culto de los antepasados, por línea paterna (62). Mas, pasa el tiempo y es preciso, ante el cambio de las circunstancias sociales y la evolución de las creencias, que la jurisprudencia pontifical imponga la obligación de mantener los sacra, aún sin ser heredero (63) y que el heres extraneus no sólo estuviese obligado a soportar los gastos que el culto ocasionaba, sino a ser sacerdote de la religión del de cuius (64).

Algo parecido pasó en el régimen jurídico de las asociaciones profesionales del Bajo Imperio.

Aunque los hijos fuesen los herederos naturales de sus padres, la libertad de testar, dentro de ciertas normas, no estuvo prohibida. La consecuencia fue que el heredero, cualquiera que fuese su clase, legatario o donatario, recibía la carga con los bienes.

Parece que en un principio no podía evitar la carga renunciando a los bienes, así se lee, en una constitución de los Emperadores Arcadio y Honorio del año 395 (65) pero más tarde estas normas se alteraron y se obligó a recibir los bienes con las cargas, al menos tratándose de hijos o, en su defecto, de herederos legítimos.

Con ésto resulta que no solamente responden del cumplimiento de determinadas obligaciones profesionales la persona y sus

bienes, sino que también responde la familia.

Se ha podido decir que con estas normas es el Derecho de la esclavitud el que pasa a regir al ciudadano (66).

Después de exponer la afectación de los bienes, de la persona y de la familia, queda por referirse a la afectación de la totalidad de las energías del individuo.

No se permitía la dispersión de actividades y por ello se prohibía a los asociados, desde las altas dignidades (67) hasta los simples subalternos (68).

En una constitución se dice (69) que cualquiera de los dependientes del jefe de los graneros, que por intriga, favor, dinero o de cualquier otro modo, hubiese conseguido una dignidad o un cargo, sea llamado de nuevo a la asociación de los panaderos, despojado de la dignidad que contra la prohibición imperial alcanzó y multado con veinte libras de oro.

En esta constitución se dispone, para asegurar al máximo la prohibición establecida, que quedará absolutamente invalidado cualquier privilegio especial que, de cualquier modo, hubiese sido obtenido contra la anterior disposición.

En cuanto a los modos de salir de las asociaciones en el Bajo Imperio, hay que distinguir dos géneros de causas de exclusión, las causas de exclusión de carácter patrimonial y las de carácter personal.

En cuánto a las causas de exclusión de carácter patrimonial hay que señalar la quiebra y el empobrecimiento.

El que perdía su fortuna podía abandonar el colegio, pero establecido ésto los fraudes no se hicieron esperar.

Si un colegiado hacía donación de sus bienes para quedar exento de las obligaciones profesionales que le incumbían, los bienes quedaban en poder del adquirente, pero el que se desprendió de ellos no podía abandonar la asociación. Así se dispuso en una constitución del año 319 (70).

Cuarenta y cinco años después se dispuso que la enajenación hecha a favor de un extraño que se negase a entrar en el colegio sería nula (71).

Finalmente, cinco años más tarde se declararon inalienables los bienes de los asociados (72).

En cuanto a las circunstancias personales que pudieran servir de fundamento para abandonar el colegio, cabe destacar la de haber desempeñado satisfactoriamente la labor profesional, habiendo alcanzado el grado más elevado de la jerarquía del colegio.

En una constitución del año 390 (73) dispuso que el director de la fábrica de armas, al cabo de un bienio fuese declarado exento del servicio.

Otra causa de liberación era el acceso a la carrera eclesiástica, si bien esta causa de exención no siempre se mantuvo (74).

Tales medidas, encaminadas a la obligatoriedad y continuidad de unos servicios considerados necesarios, no habían tenido eficacia sin unos órganos de control.

Como órgano más elevado de control estaba el emperador que, como se desprende de numerosas constituciones conservadas sobre todo en el Código Teodosiano, se preocupaba minuciosamente del funcionamiento de los colegios y de dictar normas para obtener de ellos la máxima eficacia.

En segundo lugar puede citarse el Praefectus urbi.

De las varias funciones que ejercía este alto magistrado, las más importantes eran las que se referían al control de las asociaciones profesionales en el Bajo Imperio.

El Praefectus urbi vigilaba el cumplimiento de las funciones asignadas a los colegios, correspondiéndole la represión de los grandes.

En el libro primero del Digesto se conserva un título en el que se especifican las atribuciones de este magistrado (75).

En primer lugar hay que indicar que no solo tenía competencia para conocer acerca de delitos cometidos en Roma, sino también en toda Italia (76).

El Praefectus urbi tenía que cuidar de que los cambistas actuasen honradamente (77).

Igualmente correspondía a la Prefectura de la ciudad la vi-

gilancia del abastecimiento de carnes, vigilando para que se ven diesen a su justo precio (78).

El Prefecto de la ciudad podía desterrar de la misma y de cualquiera otra de las ciudades acostumbradas y privar de la pro fesión y de la negociación tanto temporal como perpetuamente (79).

También y desde la época de Adriano (80) podía acudirse a él por los argentarii, solicitando su protección, lo mismo que los argentarii podían ser acusados ante este magistrado.

Pero no sólo tenía competencia para controlar el ejercicio profesional, sino que ante él podían ser acusados aquellos que se reuniesen en asociación ilícita (81).

Esta autoridad podía privar de sus privilegios a quienes fal taban a las disposiciones imperiales y en casos de fraudes podía exponer al público los nombres de los defraudadores, para conocimiento de los consumidores y para la debida ejemplaridad, pero al mismo tiempo vigilaba para que se respetasen los privilegios de las asociaciones cuándo los servicios se prestaban correctamente (82).

De todas las atribuciones del Praefectus urbi la más sobresaliente era la de cuidar del abastecimiento y ello le llevaba, en no pocas ocasiones a hacerse acreedor al fervor popular. Al lado del Praefectus urbi y sometido a él, se hablaba el Praefectus annonae.

El origen de la annona se encuentra en la distribución de

trigo a bajo precio en la época de los Gracos.

Cayo Graco desde el comienzo de su tribunado propuso que a todo ciudadano romano se concediese trigo por el Estado cada mes a un precio bajísimo. La propuesta fue aprobada y se construyeron graneros para conservar el grano que debía ser distribuido.

El demagogo Clodio ordenó el reparto gratuito. En tiempo de César había 320.000 ciudadanos que disfrutaban de estos repartos a costa del Estado; César los redujo a 150.000 y Augusto fijó el número en 200.000 (83). Augusto hizo algo más, creó el Praefectus annonae.

El citado magistrado era en un principio independiente y su competencia se extendía a todo el Imperio, pero con el tiempo ambas características fueron modificadas.

En época de Septimio Severo su competencia se redujo a Roma y al territorio próximo, pero no intervenía en las actividades mercantiles que se desarrollaban en Ostia, punto de llegada de los grandes transportes (84).

En el siglo IV este magistrado está subordinado al Praefectus urbi. Subordinación que a veces no fue obstáculo para que surgiesen ciertas fricciones que obligaban a puntualizar cuidadosamente los límites de las atribuciones de una y otra magistratura.

En ese sentido resulta muy significativa una constitución

del año 365 que figura en el título de Justiniano dedicado al cargo de Praefectus urbi (85).

Allí se dice que deseando dejar bien establecido todo lo referente al abastecimiento de la ciudad y al suministro de las provincias pareció oportuno que el cuidado de este suministro no debía confiarse a todas las autoridades.

Al tratar de dar cumplimiento a tales propósitos, surgió el escrúpulo de que el Prefecto de la ciudad pudiera pensar que se le quitaban algunas de sus atribuciones y para evitar esa posibilidad se insiste, en la constitución citada, acerca de cuál es la autoridad superior y cuál la autoridad de grado inferior: La primera el Prefecto de la ciudad, la segunda el Praefectos annonae.

También se dice que no se anula totalmente la competencia del Prefecto de la ciudad.

Los poderes del Praefectus annonae fueron poco a poco disminuyendo y limitándose a la vigilancia de las fábricas de pan y, por supuesto, de sus decisiones se podía apelar al Prefecto de la ciudad.

En las provincias, los órganos locales, bajo la superior autoridad del gobernador de la provincia y éste, a su vez, sometido al Prefecto del Pretorio, ejercían el control y la vigilancia sobre los colegios profesionales.

Puede finalizarse este capítulo aludiendo a un tema que ha

dado lugar a no pocas polémicas: El de la difusión por el Imperio de los colegios obligatorios y su coexistencia en la época postclásica con colegios libres.

Leicht (86) entendió que debía ser limitada la formación de colegios obligatorios romanos.

Este autor pensaba que tales colegios surgirían casi exclusivamente para algunas profesiones particularmente necesarias para la alimentación y la vivienda y de interés para la defensa y que sólo existieron en la capital y en escasas ciudades importantes, siendo probable que muchas profesiones fuesen libres en otras ciudades del Imperio.

Visconti se ha ocupado concretamente del colegio de los pistores profundizando en su estudio a través de las fuentes y llega a la conclusión de que asociaciones de esta naturaleza sólo las hubo en Roma y algunas en Bizancio, pero no en las ciudades de provincia (87).

En torno a este tema pueden formularse tres conclusiones:

1a) Que dada la evolución política que, se registra en el Imperio romano, parece difícil admitir la existencia de asociaciones profesionales que no desempeñasen trabajos de utilidad pública y no quedasen exentos del control resultante, tanto de su propia organización y régimen jurídico, como de la vigilancia de órganos superiores.

2a) Que el análisis de los textos contenidos en el Código

Teodosiano puede inducir a error. Esto que sucedió en la investigación sobre los colegios de los pistores. Los textos del Teodosiano no se referían a todas las ciudades del Imperio y por ello pudo obtenerse una visión deformada (88).

3a) Que fuera del Teodosiano existen fuentes que permiten suponer la existencia de colegios obligatorios en distintas ciudades del Imperio.

N O T A S

- (1) Ep., X, 33.
No está tan claro que el colegio a que se refiere Aurelio Victor (De Caesaribus, XIII, 5) fuese, en cuánto a su creación, de iniciativa es total.
- (2) De aquae ductu, urbis Romae, 98.
- (3) Frontino, ob. cit., 100.
- (4) Tito Livio XLIII, 16.
- (5) Wallon, Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, II, Aalen 1974, p. 87.
- (6) W.W. Buckland, the roman Law of Slavery, Cambridge, 1970, p. 320, n. 12.
- (7) D., 50, 6, 6(5), 6.
- (8) D., 50, 6, 6 (5), 12.
- (9) Inmunidad de las cargas municipales. Cfr. D., 50, 6, 1.
- (10) Esto lo hace pensar su nombre, su preferencia por las provincias de lengua griega, su atención a los rescriptos en esa lengua y su latín no demasiado perfecto.
- (11) Según se prueba en el texto del Digesto 1, 19, 3, 2, en que este autor escribe: Imperatores nostri Severus et Antoninus.
- (12) El Digesto de Justiniano, versión castellana, Ed. Aranzadi 1975.
- (13) Vopisco, Vita Aurel, c. 47.
- (14) C. Th., VIII, 4, 11.
Para Waltzing (Etude historique sur les corporations professionnelles, II, Roma 1968, p. 271) no existe aún el enrolamiento de particulares.
- (15) 314 navicularii; 315 pistores; 317 monetarii.
- (16) C., 11, 59.
- (17) C., 11, 59, 1. Otras constituciones que se refieren a tierras abandonadas, corresponden a los emperadores Valente, Graciano y Valentiniano (C., 11, 59, 3), Valentiniano, Teodosio y Arcadio (C., 11, 59, 8), etc.
- (18) Cfr. G. Ferrero, La Rovina della civiltà antica, Milán 1926, p.p. 23-44.
- (19) Muchas veces se prefería instalar a los bárbaros en las tierras del Imperio, en vez de reducirlos a la condición de esclavos.

- (20) Storia economica di Roma antica, II, Florencia 1979, p. 379.
- (21) El servicio prestado por muchos profesionales libres llega a cubrirse con las tintas sombrías de la esclavitud por las renunciaciones, sujeción y obligaciones que comporta. Cfr. Wallon, Histoire de l'esclavage, III, París 1879, p. 206 y ss.
- (22) G.M. Monti, Le Corporazioni, Bari 1934 p. 58 y ss.
- (23) C., 11, 7, 16.
- (24) Cfr. De Robertis, Il diritto associativo romano, Bari 1938, p. 445.
- (25) Etude historique sur les corporations professionnelles, II, Roma 1968, p 362.
- (26) J. Marquardt, Organisation de l'empire romain, I, Paris 1899, p. 276 y ss.
- (27) Octavio, XVII.
- (28) Tiberio, VI.
- (29) Cicerón, Pro P. Sila, XXI, 60.
- (30) Se resarcía por ejemplo a los suarii de la pérdida de peso de los animales durante el viaje. En este sentido puede verse C. Th., XIV, 4, 4,2.
- (31) Monti, Le Corporazioni, Bari 1934, p. 74.
- (32) D., 50, 6.
- (33) D., 50, 6, 5, 3.
- (34) D., 50, 6, 5, 7.
- (35) D., 50, 6, 5, 8.
- (36) D., 50, 6, 5, 10.
- (37) D., 50, 6, 5, 13.
- (38) V, 179.
- (39) Le Droit public romain, VI, 1ª Paris 1889 p. 252 y ss.
- (40) D., 50, 1, 1, 1.
- (41) D., 50, 4, 6, 4 y 5.
- (42) D., 50, 4, 18.
- (43) C. Th., XIII, 5, 16.

- (44) C. Th., XIII, 9, 1, 2.
- (45) Nov. Val., III, 35, 3.
- (46) C. Th., XIII, 5, 16.
- (47) C. Th., XIII, 5, 36.
- (48) C. Th., IX, 30, 1.
- (49) C. Th., IX, 30, 3.
- (50) C. Th., XIV, 3, 1, 3.
- (51) C. Th., XIV, 4, 4, 8, 2.
- (52) C., 11, 2, 3.
- (53) C. Th., XIII, 6, 9.
- (54) C. Th., XIII, 5, 1, 14 y XIII, 5, 1, 18.
- (55) F. De Robertis, *Diritto associativo romano*, Bari 1938 p. 432 n. 60.
- (56) Waltzing, *Etude historique sur les corporations professionnelles*, II, Roma 1968, p. 238.
- (57) C. Th., XIV, 3, 8.
- (58) C. Th., XIII, 5, 14.
- (59) C., 11, 7, 1.
- (60) Revillout en *Revue historique de Droit français et étranger*, III (1857) p. 216 y ss.
- (61) G. Franciosi, *Usucapio pro herede*, Napoles 1965, p. 74 y ss.
- (62) Cfr. *Voci en Studia et Documenta Historiae et Juris*, XIX (1953) p. 69.
- (63) Cic., *De legibus*, II, 20, 49.
- (64) Cic., *De legibus*, II, 22, 57.
- (65) C., 6, 30, 16.
- (66) H. Wallon, *Historie de l'esclavage*, III, Paris 1879, p. 206.
- (67) C. Th., XIV, 3, 4.
- (68) C. Th., XIV, 4, 8.
- (69) C., 11, 15, 1. Título De pistoriis.

- (70) C. Th., XIV, 3, 1.
- (71) C. Th., XIV, 3, 3.
- (72) Waltzing, Etude historique sur les Corporations professionnelles II, Roma 1968, p. 296.
- (73) C., 11, 9, 2.
- (74) Cfr. C. Th., XIV, 9. 11: XIV, 4, 8; Nov. Val., III, 15. Así como Nov. Maior, VII, 7.
- (75) D., 1, 12.
- (76) D., 1, 12, 1, pr.
- (77) D., 1, 12, 1, n.
- (78) D., 1, 12, 1, 11.
- (79) D., 1, 12, 1, 14.
- (80) D., 1, 12, 2.
- (81) D., 1, 12, 1, 14.
- (82) C. Th., VII, 21, 3.
- (83) Cfr. E. Callegari, La legislazioni sociale di Caio Gracco, Roma 1972, p. 92 n. 1.
- (84) Al restringirse la competencia del Praefectus annonae fuera de Italia, su vigilancia sobre los transportes pasó a ser competencia de cada uno de los cuatro Prefectos del Pretorio, en su propia Prefectura.
- (85) C., 1, 2, 8, 1.
- (86) Atti del I Convegno di studi Corporativi, 1930, p.p. 66-67 y Ricerche sulle Corporazioni professionali in Italia dal secolo V all'XI in Rendiconti R. Accademia Nazionale Lincei (Scienze Morali) 1936, p.p. 197-22.
- (87) En Rendiconti del R. Istituto Lombarda, 1931 y 1935.
- (88) Solmi (Corporazioni en Enciclopedia italiana, XI, 1931, p.p. 460-461) sostiene que pese a la circunstancia de que las disposiciones sobre el abastecimiento se referían principalmente a Roma y a Constantinopla, debe presumirse que una disciplina semejante debió establecerse también en otras ciudades, bajo la vigilancia de los órganos municipales. Cfr. Monti, Le Corporazioni, Bari 1934 p. 61 y ss.

CAPITULO XX

PARTE ESPECIAL

PARTE ESPECIAL

No ha parecido necesario, ni siquiera oportuno llevar a cabo un estudio detallado de determinadas agrupaciones profesionales, que, a pesar de alcanzar cierto relieve en épocas avanzadas del Derecho romano y ofrecer la característica de una fuerte vinculación de sus miembros a la actividad realizada, no figuran entre los verdaderos colegios de artesanos o entre las asociaciones de acusada trascendencia en el mundo de los negocios o en el de las actividades financieras de los romanos.

En el caso, por ejemplo, de los artistas de teatro o corpus scaenicorum (1), que dependían de un tribunus voluptatum; de los burgarii o vigilantes de las fortificaciones fronterizas, a las que estaban adscritos con sus mujeres y sus hijos (2); los centuriones (3) o especie de policías municipales, que no podían abandonar su profesión y nada tenían que ver, a pesar del nombre, con los oficiales del ejército romano.

Otras profesiones han sido agrupadas a efectos de su exposición en este capítulo, del siguiente modo:

Actividades del abastecimiento; actividades industriales; actividades del transporte; funcionarios subalternos; militares; argentarii y publicanos.

ACTIVIDADES DEL ABASTECIMIENTO

Existen varias disposiciones en el Código Teodosiano (4) dedicadas a los Mancipes thermarum.

Los mancipes thermarum eran los encargados de calentar los baños, estaban obligados a atender su trabajo y afectos a su empleo, pero como consecuencia de esta afectación estaba exentos de cargas extraordinarias (5).

Los que explotaban el negocio de los almacenes en que tenía que ser depositada toda la sal que se vendía en Roma (6), recibían el nombre de mancipes y conductores salinarum y a ellos se refiere una constitución de los Emperadores Arcadio y Honorio, conservada en el Código de Justiniano (7).

Este nombre de conductores salinarum aparece unido al de mancipes thermarum y de esta circunstancia se deduce que los arrendatarios de las salinas eran también los encargados de calentar los baños públicos (8).

Otra profesión relacionada con el abastecimiento fue la de los ensores que tuvo en el mundo romano muchas aplicaciones.

En las inscripciones se encuentra a veces empleada la palabra ensor en el sentido de agrimensor.

Otras veces se alude a ensores aedificiorum, no estando muy claras las diferencias que les separaban de los architecti.

En la organización militar aparecen unos ensores que qui-

zās eran los encargados de escoger el lugar más adecuado para la instalación de los campamentos y señalar su emplazamiento en grandes líneas.

Pero tiene especial interés ocuparse de los ensores que servían, junto a otros profesionales en el suministro de trigo a Roma.

Estos ensores se hacían cargo del trigo que los navicularii hacían llegar al puerto de Roma, Ostia y comprobaban la carga desembarcada, a fin de que no se cometiesen fraudes en el traslado a los almacenes (horrea).

No cesaba en ese momento la vigilancia de los ensores, sino que seguían controlando el trigo recibido, cuándo era sacado de nuevo de los almacenes del puerto, trasladado a las ligeras embarcaciones de los caudicarii y llevado a Roma.

El nombre de estos profesionales era concretamente el de ensores frumentarii.

En algunas inscripciones se lee: "Corpus mentorum frumentariorum ostiensium" (9) y en otras (10) "corpus mentorum frumentariorum Cereris Augustae".

Parece que los que bajo la vigilancia de los ensores recibían el trigo de las naves y organizaban el transporte a los almacenes, recibían el nombre de acceptores. De todos modos la relación en que se hallaban los acceptores respecto de los ensores no es muy clara, habiéndose llegado a pensar que el colegio

de mensores se dividía en tres secciones: Mensores adiutores, nauticarii y acceptores, sin que se pueda precisar la actividad específica de cada una de estas tres secciones.

Los menores también tenían intervención en la administración del trigo que estaba almacenado en los "horrea" del puerto, como se demuestra por su actuación al vender doscientos mil modios de trigo a bajo precio cada año, que luego los pistores transformarían en pan que debía ser vendido al pueblo a bajo precio (11). Era el panis fiscalis Ostiensis que se vendió primero sólo en Roma y, después de Teodosio II, en Constantinopla y que no puede confundirse con el panis gradilis que se repartía gratuitamente. Por ello también fueron llamados patroni horreorum portuensium.

Para el caso de que se probara la infidelidad en el desempeño de sus funciones de un patronus mensorum, estaba establecida la pena de su incorporación al colegio de los pistores, según una constitución del año 417, lo que revela claramente la dureza del trabajo junto al horno (12).

En virtud de un rescripto de los Emperadores Marco Aurelio y Cómodo, dirigido al Prefecto de la anona, los mensores quedaron exentos del ejercicio de la tutela. De ello queda constancia en un texto de Paulo conservado en el Digesto (13). El mismo Paulo informa más ampliamente de los privilegios concedidos a los mensores al aclarar, en otro texto (14) que los menores de Roma estaban exentos de las cargas patrimoniales, pero no así los mensores de las provincias.

Los pescadores o piscatores ejercían una profesión que tuvo notable desarrollo en Roma.

No pocas veces se utilizaron escenas de pesca como motivos de decoración, lo mismo en pintura que en bajorrelieves y esculturas. Basta mencionar las pinturas conservadas de interiores pompeyanos, en las que aparecen pescadores entregados a su faena como temas favoritos.

Hubo asociaciones de pescadores en muchos lugares. En Pompeya se ve a los piscicapi intervenir en la elección de un edil (15).

Aunque en provincias existen asociaciones de pescadores y concretamente en España (16), la mejor conocida es la de Roma.

Esta asociación recibió el nombre de corpus piscatorum totius alvei Tiberis. Nombre que indica su extensión y que constituye una objeción a la tesis de que la asociación de pescadores romanos estaba localizada en el puerto de Ostia.

Esta asociación estaba unida a otra muy importante, la de los buceadores (urinadores) del Tíber, profesión también muy extendida en el mundo antiguo, especialmente en Grecia, como consecuencia de la pesca de esponjas.

En el Digesto (17) se conserva un texto en el que se alude de modo expreso a la importante actividad de los urinadores.

Se trata del caso de una nave que en medio de la tempestad fue aligerada con la echazón de las mercancías de un solo merca-

der y luego se hundió en otro lugar, habiéndose salvado las mercancías de los otros mercaderes mediante la utilización de bazos (per urinators). La solución que se da a este caso por Sabino es la de que la pérdida de las mercancías que se arrojaron al mar en un intento de salvar la nave, deberá ser compensada por los mercaderes cuyas mercancías salvaron los buzos.

Las asociaciones de pescadores parece que también comprendían la de los vendedores de pescado (18) que muchas veces eran las mismas personas.

El nombre de piscatores cetarii no se empleaba para designar a los pescadores de cetáceos, como parece indicar esta denominación, sino a los pescadores de piezas de gran tamaño (19).

Los pescadores de los moluscos que se utilizaban para la fabricación de la púrpura, tan utilizada en los talleres imperiales del Bajo Imperio, recibieron el nombre de murileguli y por la importancia que alcanzaron serán objeto de especial atención más adelante.

Del Bajo Imperio no existe suficiente información acerca del colegio de los pescadores. Sin embargo, se tiene noticia de su existencia no sólo en Roma y en Ostia, sino también en Cartagena, ya que en una inscripción no aparecen confundidos con los vendedores de pescado, sino formando los dos oficios corporaciones distintas (20).

También, puede concluirse que en el Bajo Imperio vieron ampliadas sus posibilidades laborales y que, aunque no estaban al

servicio exclusivo de la anona, compartían el servicio privado con el servicio público. A esta conclusión se llega en base a una estatua dedicada a una patrón, entre otros motivos, por haber conseguido autorización para transportar hombres y mercancías por el río Tíber (21) en concurrencia con quienes se dedicaban específicamente al transporte, como los lenuncularii.

La palabra pistores que se traduce ordinariamente por panaderos, significaba en realidad molineros.

Los romanos indicaban la fabricación de pan con el término panificium, pero como las dos operaciones, la de moler el trigo y la de hacer el pan solían realizarse por las mismas personas, de ahí que la palabra pistor significase a la vez molinero y panadero.

En un principio no existían hornos públicos. En las familias se procedía a mezclar cereales con agua, para obtener una pasta que luego era colocada entre dos piedras bien calientes y, de este modo, se obtenía el alimento básico para la casa.

Los hornos públicos aparecieron en Roma con posterioridad a la guerra de Macedonia y durante la república los pistores estuvieron bajo el control de los ediles y ya Trajano favoreció a estos profesionales.

De los graneros destinados exclusivamente a la anona, el grano sólo podía ser retirado por los pistores y siempre previo el oportuno registro de salida de los actuarii que debían llevar las anotaciones día por día. Estaba rigurosamente prohibido proveerse

de pan directamente de los hornos.

En el título tercero del libro catorce del Código Teod^o riano figura el siguiente encabezamiento: "De pistoribus et catabolensibus". Los catabolenses eran los encargados de transportar el trigo del suministro que estaba almacenado en los graneros del puerto de Roma. El transporte podía efectuarse a lomos de caballerías o por otros procedimientos.

En el Código de Justiniano (22) no se alude a esta asociación, ya que sólo figura una constitución del Emperador León sobre los pistores.

También se dieron casos de personas condenadas a prestar este trabajo como ya hubo ocasión de indicar (23).

La dureza del oficio, al que debía incorporarse el hijo del panadero al cumplir los veinte años de edad (24) y también el casado con la hija de un pistor, por la necesidad de trabajar junto al horno en rigurosas condiciones, dio lugar a que el legislador considerara la posibilidad de otorgar un merecido descanso, lo que no ocurría en otras profesiones menos duras y por ello se dispuso que los patronos panaderos que hubieran destacado en su profesión y durante cinco años ostentaran la dirección del establecimiento, podrían vender el mismo, con todos sus accesorios, animales y esclavos y retirarse a descansar (25).

No se podía salir del colegio de los pistores ni con el consentimiento de los miembros de la asociación, ni en virtud de un rescripto del Príncipe, ni tomando las órdenes sagradas, ni por

el hecho de pasar a ser senador, a menos de abandonar, en este último caso, los bienes en favor de la profesión que se venía ejerciendo (26).

Como no solamente se hacían al pueblo repartos de pan, aceite y vino, sino también de carne de cerdo, era preciso que alguien se ocupase de llevar esos animales a Roma, transportándolos desde las regiones que, como por ejemplo la Campania, eran famosas por la abundancia y calidad de esa clase de ganado (27). Estos profesionales eran los suarii, que además de recoger los animales y transportarlos, tenían que sacrificarlos, trocearlos y vender la carne al pueblo.

Las regiones tenían la obligación de proporcionar la carne de cerdo o de pagar el correspondiente valor, a cuyo efecto se fija en una constitución de Juliano del año 363 el valor de la libra de carne de ganado porcino.

Aparte de los suarii existían también los pecuarii que eran los encargados de recoger el ganado ovino. Honorio fusionó las dos asociaciones en una sola. Valentiniano III menciona los boarii que desempeñaban una actividad semejante respecto del ganado grande: Boves armenta (28).

La profesión de carnicero en tiempo de la República era considerada como una profesión despreciable. Entre diversos testimonios que pueden encontrarse en las fuentes literarias, figura una de Tito Livio (29) quién refiriéndose a C. Terencio Varron, que alcanzó la Pretura y el Consulado, afirmaba que su nacimiento

no sólo fue obscuro, sino innoble y, subraya el historiador latino que se decía que el padre era carnicero y vendedor de la misma mercancía.

Sin embargo las matanzas de ganado porcino no suscitaban los sentimientos de repulsión que provocaban las matanzas de ganado vacuno, al extremo de que en la Historia Natural de Plinio (30) se cita el caso de un ciudadano que fue condenado al exilio por haber matado a un buey de labor lo mismo que si hubiese dado muerte a su colono y Diomiciano decidió publicar un edicto que prohibiera la inmolación de bueyes (31).

Pero el gran consumo que en Italia se hacía de la carne de cerdo, determinó el auge de los suarii, aunge que se incrementó cuando Aureliano estableció los repartos de tocino.

Los suarii, en conformidad con los criterios que regían en el bajo Imperio, no podían dejar su profesión ni siquiera para tomar las órdenes sagradas, salvo que dejaran a alguien que los reemplazasen (32). A la muerte de un suarius, uno, al menos de sus hijos debía sucederle. También los bienes de los suarii respondían del cumplimiento de sus obligaciones.

La superior vigilancia sobre los suarii correspondía al Praefectus urbi, ya que colaboraban en el abastecimiento de Roma.

El Estado se preocupaba de impedir la rapacidad de los funcionarios subalternos de los mercados que tratasen de sustraer

parte de la carne dispuesta para la venta y a tal efecto se establecieron gravísimas penas (33).

Por otra parte no sólo eran tratadas con toda consideración, en los edictos imperiales, los suarii y los otros carniceros, en contraste con la actitud de menosprecio de épocas anteriores, si no que gozaron de no pocos privilegios. Entre otros los siguientes:

Los más destacados de la profesión podían recibir ventajas materiales y alcanzar dignidades (34).

Desde la época de Severo y Caracalla estaban dispensados de la tutela, como todos los que se ocupaban del abastecimiento de Roma, si dedicaban al ejercicio de su profesión dos terceras partes de su fortuna (35).

En el ejercicio de las funciones a ellos encomendadas los suarii recibían el apoyo de la fuerza pública y en todo momento estaba garantizada su integridad corporal y protegidos contra cualquier violencia.

Estaban exentos de prestaciones personales de carácter vil (36) y en una constitución de los Emperadores Arcadio y Honorio (37) se dice que cualquier individuo de la asociación de los suarii que quisiese comparecer en juicio, bien obligado por la necesidad de defenderse en un litigio o bien por espontánea voluntad de promoverlo, puede esperar el auxilio del tribunal del Prefecto urbano.

El beneficio económico que percibían era el de un 20% del importe de la carne y además la asociación de los suarii percibía cierta cantidad de ánforas de vino que luego se repartían entre ellos (38).

Las normas relativas a la continuación en el desempeño de la profesión eran parecidas a las que regían para los navicularii y los pistores.

En la Roma de los primeros tiempos no sólo no se abusaba del vino sino que incluso se llegó a prohibir esta bebida a las mujeres romanas que corrían el riesgo de serles aplicada la pena de muerte cuándo se notaba por su aliento que habían bebido vino (39).

Pero estas costumbres cambiaron con el paso del tiempo y la evolución de las costumbres. Evolución determinada en gran medida por el contacto con otras civilizaciones y por el profundo cambio de nivel de vida que condujo a los romanos de un ambiente rayano en la pobreza a las más altas cimas del esplendor y del lujo.

El vino pasó a ser elemento indispensable y muypreciado en los banquetes en los que los anfitriones regalaban a sus invitados las tazas de oro en que habían bebido.

Los poetas exaltaron las cualidades del vino y se hablaba de sus virtudes para mantener las fuerzas, estimular los nervios, tonificar el estómago y despertar el apetito.

Al éxito y difusión de esta bebida contribuyó no poco el hecho de que en Italia hubiera varias regiones en las que se cosechaban excelentes vinos. Lo que, sin embargo, no impedía que en las mesas de los magnates se consumiesen apreciadísimos caldos procedentes del extranjero, entre los que pueden citarse el vino de Málaga, el vino de Rhodas, el vino de Esmirna y el fuerte vino de Viena (vinum pictatum).

El gran consumo de vino produjo, como lógica consecuencia, un próspero comercio de esta bebida y un intensísimo tráfico del producto.

El vino era importado por mar por los susceptores vini, se descargaba en Ostia, y luego, por vía fluvial, se trasladaba al portus vinorum de la urbe, en las cercanías del Emporium.

Desde el puerto fluvial, el vino pasaba al Forum vinorum para su contratación por los mercatores vinarii y, por último, se depositaba en grandes depósitos: " Horrea Galvae ". ↙

Junto a estos depósitos y como prueba de la gran cantidad de vino importado, surgió una colina con los numerosísimos fragmentos de ánforas rotas al verificarse las operaciones de descarga, que allí quedaban depositadas. ?

Otros depósitos de vino se encontraban repartidos por la ciudad. De éstos, uno de los más importantes era el descubierto cerca de las Murallas Aurelianas, en el que se guardaba vino espumoso de la Galia.

En Ostia existían otros almacenes.

Había diversos colegios de importadores de vino, entre los que cabe señalar el de los negotiatores vini supernates, esto es, los que negociaban con el vino de las regiones septentrionales y negotiatores vini infernates, los negociantes con el vino que procedía de las regiones meridionales y de la parte del mediterráneo.

Con la construcción del puerto de Trajano el comercio de vinos al por mayor cambió de sede (40).

Entre los mercaderes del vino en Roma había muchos libertos, según se desprende de las noticias que transmiten las fuentes epigráficas (41).

Alejandro Severo organizó a los vinarii en asociaciones (42). No se conocen con detalle los privilegios de los vinarii (43) pero lo que si se sabe es que a partir de la organización de la venta de vino por el Estado, parte de esta bebida servía para pagar a ciertas asociaciones, como las de los suarii, los carreteros que transportaban la cal a Roma, etc.; y parte, la mayor parte, era destinada para su venta al pueblo.

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Los edificios públicos, los acueductos y las murallas de Roma o de Constantinopla, exigían la utilización de grandes cantidades de cal, lo que dio lugar al desarrollo de la profesión de los

calcis coctores.

Las cuatro provincias vecinas a Roma estaban obligadas a suministrar y conducir la cal necesaria para las necesidades de esta ciudad y a este fin existían las asociaciones de los vecturarii.

De las disposiciones contenidas en el título "De calcis coctoribus" y del lugar que este título ocupa en el Código Teodosiano resulta que estos trabajadores formaban una asociación semejante a las otras asociaciones de artesanos, cuyos servicios eran de utilidad pública.

También se llega a la misma conclusión, considerando que en Roma existía un Praepositus calcis, de cuyas atribuciones nos informa Casiodoro (44).

Las asociaciones de los calcis coctoribus eran de aquellas que como las de los suarii y algunas otras recibían ciertas cantidades de vino como pago de sus servicios, aparte del correspondiente salario.

El principal privilegio de que disfrutaban los calcis coctores o calcarienses, como también se les denominaba, era el de tener el monopolio de la cal necesaria para las obras públicas (45), pero respondían económicamente de los trabajos que debían llevar a cabo (46).

Otra actividad importante en el mundo romano fue la de los centonarii.

Aunque por algunos se ha creído que los centonarii eran los que cubrían con planchas de madera los techos de las casas, la opinión mayoritaria es la de que eran los que fabricaban con toscos pedazos de telas, de todos los colores, mantas o capotes para los pobres y cubiertas con remiendos (47). También se preparaban centones con pieles de animales (48).

Estas rústicas y bastas telas eran muy utilizadas en el servicio militar, ya que se empleaban para cubrir las máquinas de guerra y también para proteger las cubiertas de los barcos, así como para tapar los caballos del ejército e incluso se hacían túnicas resistentes para los soldados (49).

Otra aplicación que tenían esas bastas telas o cubiertas era la de servir en la lucha contra el fuego.

En un texto de Ulpiano, tomado del libro vigésimo de sus Comentarios a Sabino (50) a propósito de determinar las pertenencias de un fundo y dentro de la larga enumeración que de ellas se hace, se dice que son también pertenencias, según la opinión de Pegaso y otros muchos juristas, el vinagre que se utiliza para apagar los incendios así como las lonas (centones) que se empleaban para sofocar el fuego e igualmente las mangueras.

Los centonarii compartían pues, con los fabri y con los dendrophori la tarea de luchar contra los incendios, tarea que en algunas localidades era competencia de los vigiles.

En Puteoli y en Ostia no se tiene noticia de fabri y de centonarii, pero se sabe por Suetonio (51) que Claudio instaló una cohorte de vigiles en cada una de esas ciudades para combatir los incendios.

En Roma la lucha contra incendios era también competencia de los vigiles y esa es la razón por la cuál no aparecen mencionados los centonarii actuando en este sentido, mientras que se dio cierta relevancia a la actuación de los vigiles.

Hubo una Lex Visellia, propuesta por el cónsul L. Viselio Varron que completó la Ley Junia Norbana, que ofreció a los latinos libertos la posibilidad de adquirir la ciudadanía romana prestando servicio entre los vigiles de Roma (52).

Diversas disposiciones se dictaron en relación con el colegio de los centonarii.

Así en el año 399 (53) se prohibió que los curiales desertasen de sus obligaciones, refugiándose en la asociación de los centonarii. Se trata de una disposición semejante a la que se dio en el año 395 a propósito de los navicularii; en el 364 a propósito de los fabri; etc y que guarda íntima conexión con la constitución de Valentiniano y Valente, de carácter general, en la que se disponía que los decuriones si se incorporaban a un colegio de artesanos para escapar a sus deberes, debían ser devueltos a su anterior condición (54).

También en el Código de Justiniano se conserva una disposición análoga en relación con los fabricenses (55).

Estas medidas requerían un lógico complemento. Si a los curiales que trataban de evadirse de sus obligaciones, refugiándose entre los centonarii se les devuelve a su primitiva condición, también parece lógico que se pusieran dificultades a los centonarii para incorporarse a la asamblea municipal.

Esta disposición se dió y aparece en el Código Teodosiano. Es una constitución del año 369, en la que se prohíbe que los miembros de dicha asociación de artesanos se pasen a la curia y se establece una pena para la asociación si no lo impide o, al menos, toma inmediatamente medidas contra el asociado que desertó de sus obligaciones (56).

Los dendrophori eran los encargados de suministrar la madera y el carbón para los servicios públicos, las construcciones y la marina.

Se ha dudado si existieron dos especies de dendrophori, unos que integraban una asociación puramente civil y otros que constituían una organización de carácter religioso.

Lo más probable es que se tratase de una única asociación (57), habiendo surgido la duda, anteriormente expuesta, del hecho de que celebraban ceremonias religiosas en las fiestas patronales (58).

En relación con el comercio y la industria de la madera existían varias profesiones.

En primer lugar pueden citarse los importadores de madera,

a veces de lejanos países, que recibían el nombre de negotia-
tores materiarii.

Luego estaban los carpinteros o fabri tignarii, que cuándo se dedicaban específicamente a la construcción naval, recibían más concretamente el nombre de fabri navales o nauegi.

Los ebanistas, que llevaban a cabo su trabajo en el interior de las casas, opus intestinum recibían el nombre de fabri
intestinarii.

Entre estos profesionales de la madera están los dendropho-
ri cuya verdadera actividad a veces no aparece muy clara. Unas veces parecen ser los obreros que trabajaban la madera y así fi
guran en ocasiones junto a los fabri (59). Otras veces parecen ser los portadores del árbol sagrado de la Mater Magna (60).

En ocasiones también se les coloca junto a los centonarii (61). Además, en dos inscripciones se encuentran unidos los den
drophori con los navicularii (62).

En opinión común que el primitivo nombre de los deudropho- ^{rs/n}
ri fue el de lignarii y así aparecen mencionados por Tito Livio (63).

Los deudrophori, por otra parte, en su función de transpor ⁿ
tar la madera necesaria para calentar las termas parecen coincidir con los mancipes thermarum; sin embargo, es posible que la principal misión de éstos últimos, como ya se indicó, no fuese transportar la madera, sino la conservación y entretenimiento

de las ternas. En este sentido debe interpretarse una constitución del año 365 conservada en el Código Teodosiano (64). La gran difusión de las asociaciones de los dendrophori, que aparecen en sesenta y cinco ciudades revela la gran utilidad e importancia de las actividades profesionales de los asociados.

Que los dendrophori eran los encargados de cartar los árboles y transportar madera a Roma, no sólo para caldear las termas, sino para las más diversas utilizaciones de carácter industrial, resulta del hecho de que esta asociación floreciera en lugares como Ostia en que era preciso llevar a cabo importantes construcciones.

La colaboración de los dendrophori con los fabri y los centonarii en la lucha contra los incendios parece evidente: Los dendrophori aportarían su destreza en el uso del hacha, los fabri su habilidad como obreros de la construcción, los centonarii su capacidad para el manejo de grandes lonas en los servicios de salvamento y rescate.

La colaboración de los dendrophori con los naviculari también parece evidente, pues el transporte de madera no se podía llevar a cabo desde Africa, gran proveedora de este material, sin el empleo de embarcaciones y, por otro lado, la madera que los dendrophori llevaban era precisa para la construcción de las embarcaciones (65).

En cuanto a la composición del colegio de los dendrophori puede decirse que muy probablemente, lo mismo que en otras aso-

ciaciones de artesanos pudieron tener cabida de esclavos. De la presencia de mujeres no parece haber duda alguna, pues existieron sacerdotisas de la Gran Madre y la vinculación de este culto con los dendrophori está suficientemente probada (66).

Parece que el significado de fabri no es otro que el de obreros que trabajan cuerpos duros (67). Esta amplia significación dió lugar a que hubiera muchas clases de fabri:

Tignarii eran los carpinteros. El colegio de los fabri tignarii era de los más antiguos, dado el tipo de las construcciones de la Roma primitiva. Ferrarii eran los herreros, que a veces aparecen mencionados junto a los centonarii y dendophori, pero que en realidad constituían una asociación distinta, con sus propios privilegios (68).

Marmorarii eran los que trabajaban el mármol, y así pudieran citarse otras clases de fabri.

Si en vez de tener como referencia el material empleado, se tomaba en cuenta el objeto producido, podía hablarse de faber navalis, si se trataba de uno que construía embarcaciones, de faber balnearius si construía baños, de faber flatuarius si fundía estatuas de metal, etc.

En el Bajo Imperio el término faber se empleó muy frecuentemente para indicar el herrero, mientras que en la antigüedad casi siempre significaba carpintero.

Los fabri desplegaron una gran actividad en la construcción de obras públicas en la época del Bajo Imperio y desde épocas anteriores fueron muy utilizados para combatir los incendios, los fabri recibieron importantes privilegios, como exención de impuestos y poder excusarse de la tutela y tenían a su servicio un gran número de esclavos para realizar las tareas más duras y fatigosas.

Como asociaciones relacionadas con los collegia fabrorum, pueden citarse los collegia sectorum serrarium o aserradores y los mensores aedificiorum o arquitectos.

Los collegia fabrorum dependían en última instancia del Praefectus urbi, pero por la índole de sus trabajos también estaban bajo el control y vigilancia de determinadas autoridades administrativas que se crearon como consecuencias del desarrollo y engrandecimiento de la urbe. Estas autoridades eran: Los curatores viarum, los curatores operum publicorum, el curator aquarum y otros cargos de similar naturaleza (69).

Los fabricenses eran los fabricantes de armas.

Estos artesanos no podían ausentarse de las fábricas y para evitar que lo intentasen se les hacían marcas en los brazos (70) que permitían su identificación. Era el mismo procedimiento que se utilizaba con los reclutas.

Se establecía una especial responsabilidad solidaria entre los fabricenses que daba lugar a que los miembros del colegio fuesen responsables ante el Fisco del incumplimiento de sus colegas,

debiendo indemnizar del perjuicio que hubiesen ocasionado. Los hijos de los fabricenses debían seguir la profesión de los padres.

En una constitución de los Emperadores León y Antemio (71) se dice que los armeros, sus mujeres y sus hijos no puedan ser objeto de reclamación alguna sino ante el Magister officiorum, a cuya jurisdicción y potestad pertenecen y que, una vez terminado el tiempo de su servicio, no deberan ser molestados más de lo necesario por los gobernadores de las provincias o los oficiales de éstos, con motivo de cargas civiles o curiales a que demuestren no estar obligados.

A continuación de esta constitución, en la que se hace referencia a los privilegios procesales de los armeros y, en general, a la consideración que les debían las autoridades de las provincias, figura otra en la que se comienza por adoptar medidas para que en modo alguno se perturbe la dedicación de los que trabajan en la fabricación de las armas, disponiendo que ningún armero se inmiscuya en lo sucesivo en arrendamiento, administración o cultivo de bienes ajenos y para el caso de que algunos dueños se hubieran atrevido a contravenir estas disposiciones, se ordena que pierdan las casas o los predios cuya administración hubieran osado encomendar a los armeros, a pesar de constarles que tenían esta profesión, y para castigar a los mismos armeros se dispone que serán desterrados a perpetuidad, después de haber perdido todos sus bienes.

La constitución tiene un párrafo (72) en el que se dan nor-

mas para facilitar el transporte de las armas fabricadas. A tal efecto se ordena que siempre que para el traslado de armas se precisen medios de transporte, el Magister officiorum deberá enviar una comunicación al Prefecto, con indicación expresa del número de armas a transportar y del lugar a donde las mismas han de ser llevadas, para que a la mayor brevedad se de aviso a los gobernadores de provincias a fin de que se adopten las medidas conducentes a disponer de los medios de transporte adecuados al número de armas que deberán ser transportadas por tierra o por mar.

Ante la posibilidad de que, a partir de la comunicación a la Prefectura hubiese negligencia en el cumplimiento de lo ordenado y esa negligencia hubiera sido causa determinante de la imposibilidad de llevar a cabo el traslado, se establecen penas de treinta y cuarenta libras de oro para los responsables de la negligencia. También se previene la posibilidad de que se fabriquen armas defectuosas a causa del material empleado y, por ello, en una constitución del año 388 se ordena que a los fabricenses se les suministre hierro de buena veta y que fácilmente pueda ser sometido a la acción del fuego (73).

Por la Notitia dignitatum (74) y otras fuentes se tiene una información bastante completa acerca de las fábricas de armas.

Antes del siglo IV las fábricas de armas estaban afectas a una legión determinada y sometidas a los mandos militares; pero ^{Toda} en el Bajo Imperio se situaron en las grandes ciudades, a bastante distancia de los posibles campos de operaciones militares (75).

Otra novedad que se produjo, a partir del siglo IV, en la organización de las fábricas de armas, fue que en vez de depender de los jefes de las legiones pasaron a depender del Magister officiorum.

Los fullones eran aquellos que se dedicaban a limpiar los vestidos mediante una serie de operaciones que recibían el nombre de ars fullonica.

El colegio de los fullones era de la más remota antigüedad y del arte de los fullones se tiene noticia, a parte de las inscripciones y de los textos jurídicos, por no pocas fuentes literarias, como, por ejemplo, obras de Plinio el Viejo (76), Plauto (77), Vitrubio, (78) y otros.

Minerva era considerada como divinidad protectora de los fullones (79) que por razón de su profesión también rendían un cierto culto a las fuentes y así se explica que existan inscripciones que aluden a una dedicación a las ninfas, y que existiese en Roma un colegio de artesanos que practicaban el arte de los fullones y que tenía por nombre collegium fontanorum (80).

Los talleres de los fullones eran bastante costosos pues exigían abundante utillaje y un material que aún hoy, no es bien conocido.

A causa del mucho trabajo que recaía sobre los fullones, los establecimientos dedicados al ejercicio de esta profesión eran de grandes dimensiones y a veces estaban ricamente decorados. Se tiene noticia de que en un taller de Pompeya, había

pinturas y mosaicos y quedan vestigios de una amplia sala dedicada a recibir a los que llevaban las prendas para limpiar. En otro taller situado en Roma, en el Esquilino tenía estatuas y diferentes pabellones.

Los precios que se pagaban a los fullones por su trabajo son conocidos por el Edicto de Diocleciano, en el que se fijaban las cantidades que debían pagarse por bienes y servicios, precios que, aunque variaban según el género de que se tratase, el artículo a limpiar y su estado de conservación, parece que eran unos precios relativamente altos, lo que viene a confirmar que el arte de los fullones no era simple ni fácil y que se tenían en gran estima los trabajos desarrollados por estos artesanos.

Las inscripciones hablan de un colegio de fullones en Spoleto (81) del último siglo de la República y también parece ser de esta época el collegium aque de Roma (82).

De la época del Imperio son más abundantes las referencias y parece que unos prisioneros bárbaros pertenecientes a un tal Antonio habían organizado un colegio para trabajar como fullones.

Entre los privilegios de que disfrutaban los fullones puede mencionarse el conservado en un texto del Digesto (83) según el cuál los fullones estaban autorizados para poner a secar los vestidos en la vía pública.

Los fullones del Esquilino no habían pagado nunca impuestos

al Estado por el uso del Acueducto y del suelo público (84).

Por otra parte no era raro que los fullones obtuvieran el favor de hombres adinerados que querían corresponder a los servicios de estos operarios y así se tiene noticia de uno que facilitó el dinero que se necesitaba para construir el pavimento de un taller de fullones (85).

Los que trabajaban en los talleres imperiales de confección, en los que se hacían los vestidos para la Casa imperial y también los uniformes para el ejército recibían el nombre de gynaeciarii (86).

Los que trabajaban en la confección de vestidos de lino recibían el nombre de linteones o lintearii.

Aunque en estos talleres trabajaban hombres y mujeres, se consideraba el oficio poco viril (87).

Es indudable, sin embargo, que la denominación de estos profesionales alude al trabajo de las mujeres.

Las mujeres que se casaban con gynaeciarii se convertían en gynaeciariae (88).

Como era usual en las asociaciones del Bajo Imperio, no podían sustraerse a sus funciones, les estaba prohibido aceptar las proposiciones que los particulares pudieran hacerles para atraerlos a la industria privada, por ventajosas que fueran estas proposiciones y aquellos que les acogiesen no quedaban sin castigo.

La Notitia Dignitatum informa de que cada uno de los talleres tenía a su frente un procurator que dependía del Comes sacrarum largitionum. Esto puede decirse, al menos, de la mayoría de los talleres, ya que algunos no dependían, en última instancia, del Comes sacrarum largitionum sino del Comes rerum privatarum.

Se ha pensado por algunos autores que los que trabajaban en estos establecimientos industriales eran de condición servil, basándose principalmente en el empleo de la palabra mancipia con que se les designa en el Código Teodosiano (89) pero teniendo en cuenta que sus bienes estaban afectados al servicio que prestaban, puede concluirse que eran hombres libres.

Sin embargo es indudable que en estos colegios figuraban esclavos. Lo que sucedía, como puntualizó Wallón (90) es que, aunque en estas asociaciones figuren siervos no sólo como servidores sino como afiliados, la asociación, en cuanto asociación de artesanos, no podía estar constituida más que por hombres libres.

En cuanto a la materia prima necesaria para confeccionar los vestidos, con excepción de la seda que se adquiría a los bárbaros y la púrpura que procedía de los murileguli a que más adelante se hará la oportuna referencia, procedía de los particulares a quienes se obligaba a vender con arreglo a unos precios fijados por el gobernador de la provincia (91).

Los mineros recibían el nombre de metallarii.

Existían dos clases de minas: Minas privadas y minas públicas. Los metallarii eran los trabajadores de las minas públicas.

Los mineros no podían abandonar las minas del lugar dónde habían nacido y sus hijos también tenían que continuar tan dura profesión (92).

Había dos clases de mineros, los que lo eran por nacimiento y los que lo eran como consecuencia de una condena. Estos últimos llevaban unas marcas especiales en las manos y en las piernas y no se le hacían esas marcas en la cabeza, porque según se lee en una constitución de Constantino ello se debía al temor de mancillar la figura hecha a imagen de la celestial belleza (93). Las condenas a las minas eran perpetuas ordinariamente.

En ocasiones se empleaban soldados para trabajar en las minas. Así resulta de un pasaje de los Anales de Tácito (94) en el que se cuenta que Curcio Rufo obtuvo las insignias del triunfo por haber abierto una mina de plata. Con este motivo el historiador pone de relieve que a los legionarios les era muy desagradable el trabajo de achicar aguas, cabar la tierra y hacer debajo de ella lo que en campaña y al aire libre se hace con dificultad. Oprimidos los soldados por tan duros trabajos y enterados de que en otras provincias pasaba lo mismo, escribieron al Emperador secretamente.

Aunque los mineros eran llamados, en general, metallici o metallarii, a veces se distinguen especialidades de estos trabajadores.

En la ley relativa a las explotaciones mineras de Vipasca (95) se continen datos interesantes acerca del trabajo en las minas. Allí se menciona a unos circitores, especie de buhone-ros, que también ejercían el oficio de barberos. Estos circi-tores parece que eran muy necesarios para atender a los conde-nados a las minas, que probablemente no tendrían libertad para ir a las barberías.

En la misma ley se distingue entre scaurarii y flatores. Scaurarii serían los que se ocupaban de las escorias, los que aprovechaban las scauriae que resultaban de la fundición. Plinio el Viejo detalla las aplicaciones medicinales de las esco-rias en el libro treinta y cuatro de su Historia Natural (96). Flatores serían los fundidores.

A la vista de esta distinción parece evidente que el sig-nificado de scaurarius tenía que ser más amplio y comprender a los trabajadores que se ocupaban del mineral propiamente dicho.

Un texto conservado en el Digesto (97) informa de que las mujeres solían ser condenadas al servicio de los mineros, a per-petuidad o temporalmente y lo mismo en las salinas.

Cuándo se las condenaba a perpetuidad pasaban a ser esclava-s de la pena.

Cada explotación minera estaba bajo las órdenes de un pro-curator metallorum que se nombraba de entre los curiales de las ciudades vecinas (98).

Los metallarii quedaban incorporados a la explotación con sus bienes y familias (99).

Para el supuesto de que un minero o minera hubiese emigrado a otras tierras se disponía que serían conducidos sin demora a su lugar de origen, juntamente con su descendencia. Esto se estableció en una constitución del año 424 (100).

Los monetarii eran los obreros que trabajaban en las fábricas de moneda. Sus hijas no podían casarse con uno que fuese ajeno a la profesión.

El nombre genérico de estos artesanos era el ya indicado y algún otro, como officinatores monetae aurariae argentariae Caesaris. Pero existían también nombres específicos para designar a los artesanos especializados en las diferentes fases del proceso de fabricación de la moneda.

El flaturarius era el que fundía y preparaba la masa de metal de la que se iban a obtener las monedas.

El metal, puesto al rojo, era tomado por el supportor por medio de unas grandes pinzas y colorado entre las matrices.

Los malleatores batían el metal a golpe de martillo bajo la dirección del signator. Existían también los aequatores que eran los encargados de fijar por medio de una lima, el peso rigurosamente exacto de las monedas.

Los neummularii eran los encargados de comprobar la pureza de los metales que se utilizaban para acuñar las monedas y sola

mente después de la comprobación efectuada por estos artesanos, las monedas podían ser puestas en circulación.

Al implantarse el gobierno del Príncipe en colaboración con el Senado, se proyectó en la fabricación de la moneda el nuevo sistema político y así en el año 15 el Príncipe compartió con el Senado todo lo relativo a las acuñaciones. Al príncipe correspondió la acuñación de las monedas de oro y plata y al Senado la acuñación de las monedas de cobre (101).

Durante tres siglos la acuñación de monedas se llevó a cabo por libertos y esclavos del Príncipe.

El sistema monetario se inició en Roma con una moneda de bronce fundido, no acuñado, de una libra de peso, que primero equivalía a 293 gramos y luego aumentó a 327, de forma ovoidal y con cinco submúltiplos.

Hacia finales del siglo IV a. de C. y para facilitar las relaciones económicas con otros pueblos, se puso en circulación una serie de monedas de plata y bronce acuñadas, a la cual sigue en los siglos III y II, también antes de Cristo, una moneda de plata que recibió el nombre de victoriatus.

Del siglo III a. de C. es el denario, el quinario o medio denario y el sextercio del valor de un cuarto de denario.

También en ese mismo siglo el primitivo aes grave librale es sustituido por el aes sextantarius, de bronce acuñado y equivalente a un sexto de libra, que a su vez fue sustituido en el

año 217 por el AS del peso de una onza, al cuál sucede, en el año 89 a. de C., el AS del peso de media onza.

Las monedas de oro no tuvieron carácter regular durante la República, pues sólo se hicieron emisiones de carácter extraordinario y por breves períodos de tiempo.

En la época imperial los triumviri monetales, que habían tenido a su cargo la dirección de las labores de fabricación de la moneda, quedaron bajo el control de un funcionario del emperador.

A partir del tiempo de César, los esclavos que trabajaban en las fábricas de moneda eran esclavos imperiales que formaban una agrupación aparte, conocida con el nombre de familia monetalis o monetaria, que llegó a tener tal importancia, a considerarse tan imprescindible en la organización administrativa romana y llegaron a tal grado de desprecio hacia el poder imperial, que se permitieron grabar en las monedas tipos y leyendas en desacuerdo con la religión oficial del Estado (102).

Desde el siglo IV la fabricación de moneda quedó exclusivamente reservada al Príncipe y los que trabajaban en este sector ya no eran siervos, sino hombres libres que formaban una asociación de carácter hereditario.

Como argumentos en favor de la condición de hombre libre de los monetarii de la época del Bajo Imperio, pueden aducirse los siguientes:

1º) Los términos de collegia y corpora que se les aplican oficialmente en los textos legislativos demuestran su condición de libres (103).

2º) El hecho de que Juliano para completar la curia de Antioquia acudiese a monetarii, no sólo prueba que eran hombres libres, sino también que podían poseer riquezas que les permitiesen soportar las cargas económicas importantes que la condición de curial entrañaban.

3º) Si no hubieran sido hombres libres no hubieran podido aspirar al rango de perfectissimi, de egregii, de ducenarii etc. Prueba de que tuvieron estas aspiraciones la constituyen las disposiciones adoptadas por el emperador Constantino, en el sentido de frenar y poner coto a tales aspiraciones (104).

Al principio la moneda era fabricada sólo en Roma, pero del siglo IV ya se conoce la existencia de fábricas fuera de Roma, en Aquileya, Lyon, Arlés y otros lugares.

Importantísima profesión fue la de los murileguli, pescadores que capturaban los moluscos que servían para obtener el color púrpura muy utilizado en los ornamentos imperiales, por lo que la venta de la púrpura estaba prohibida y las penas para quienes no respetasen esta prohibición eran muy severas (105).

Los murileguli quedaban sujetos al colegio con sus mujeres y sus hijos y ni siquiera el refugiarse en una iglesia les servía para escapar a sus obligaciones (106).

Los que se casaban con las hijas de estos pescadores pasaban a formar parte de la asociación.

También, como en otras asociaciones profesionales del Bajo Imperio, los bienes de los asociados quedaban afectados al servicio que prestaban.

Los murileguli tenían que construir y mantener a sus expensas las flotillas de embarcaciones que necesitaban para la pesca, embarcaciones de las que tenían el uso exclusivo.

Estos pescadores tenían que entregar una cantidad fija de moluscos (canon conchiliorum) respondiendo de ella con su patrimonio (107).

Los adquirentes de los bienes de los murileguli estaban obligados a entrar en la asociación y también contraían la obligación de entregar al Estado la cantidad de moluscos que los vendedores de los bienes aún no hubiesen entregado.

Los murileguli a que se refieren los textos legislativos del Bajo Imperio, no eran solamente pescadores, sino que también trabajaban como artesanos en los talleres (baphia) en los que se teñían de púrpura las telas destinadas a confeccionar los vestidos imperiales.

Al frente de estos talleres estaban los procuratores baphiorum y éstos, a su vez, sometidos a la superior vigilancia de los comites largitionum.

No sólo en el Código Teodosiano, sino también en el Código

de Justiniano se encuentran numerosas disposiciones relativas a los mureleguli.

Una constitución del año 385 disponía que si alguno se hubiese atrevido a usurpar una barca de quienes se dedicaban a la pesca de los moluscos de que se extrae la púrpura, tendría que pagar dos libras de oro (108).

Otra constitución del año 333 establecía que los procuratores baphiorum responderían de los defectos en el teñido de púrpura (109).

Los emperadores Teodosio, Arcadio y Honorio, dispusieron que nadie teja o haga en su casa mantos o túnicas teñidos con púrpura (110) y los mismos emperadores prohibieron rigurosamente teñir las lanas con colores que imitasen el de la púrpura (111).

Los moluscos de los que se obtenía la púrpura eran de dos especies distintas: Murex y púrpura. Aunque en los textos legislativos no siempre se establece la debida separación entre las dos especies, en la Historia Natural de Plinio se encuentran claras distinciones acerca de los moluscos de que se está tratando, así como otros datos técnicos relativos a su captura, época más propicia para la pesca.

ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE

Los bastagarii eran los encargados de transportar las materias primas y los productos correspondientes a las manufacturas

imperiales. Asociación profesional que no se confunde con la de los saccarii, de la que se tratará más adelante, aunque tenga algunos puntos de contacto con ella.

Al frente de los bastagarii estaban los praepositi bastagarum. El Comes sacrarum largitionum ejercía la supervisión de estos transportes y el Comes rerum privatarum la del transporte del guardarropa, muebles y vajillas imperiales, que también era efectuado por los bastagarii.

También era misión de los bastagarii el transporte de las sumas o suministros que los decuriones y otros oficiales enviaban al susceptor de la provincia, para su ulterior envío al Tesoro imperial.

En el Código de Justiniano figura un título (112) dedicado, entre otras profesiones, a los bastagarii. En ese título se conserva una disposición de Graciano, Valentiniano y Teodosio (113) en la que se prohibía a los bastagarii desertar de su profesión, que se denominaba militia.

También en el Código Teodosiano (114) hay un título dedicado a los bastagarii, juntamente con otras profesiones, en el que figura una constitución del año 368 por la que se regula la provisión de las bestias precisas para que los bastagarii puedan realizar el transporte que en sus distintas modalidades les estaba confiado y que revestía gran importancia para el Tesoro y para la organización financiera del imperio.

Los caudicarii eran los encargados de transportar por el

río Tíber el grano desembarcado en el puerto de Ostia. El nombre de caudicarii provenía del tipo de embarcación utilizada en el transporte fluvial. También recibían el nombre de nautae Tiberini.

Los caudicarii existían desde antiguo, pero la asociación parece haber sido organizada por Aureliano, al mismo tiempo que se creaban organizaciones similares para el transporte por el Nilo (115).

Una constitución imperial (166) obligó a los patrones de estas naves a elegir entre ellos, cada cinco años, un encargado de prevenir los robos de los medidores de grano de los almacenes del puerto, así como los posibles fraudes de los marineros.

Estaba rigurosamente prohibido a los miembros de otras asociaciones profesionales pasarse a la de los caudicarii y viceversa (117).

El hecho de que existiese una asociación de caudicarii con el nombre de caudicarii infernates, que parece indicar los que navegan por el mar de abajo o mar Tirreno, frente a los que navegan por el mar superior o Adriático, ha llevado a pensar que, aparte de los caudicarii fluviales, hubo otros marítimos pero esta hipótesis no es segura (118).

La asociación más importante de transportistas era la de los navicularii, encargados del transporte marítimo.

Esta asociación obligatoria y hereditaria, como otras tantas del Bajo Imperio, se distinguió por los muchos privilegios con que fue favorecida.

El Emperador Constantino concedió a los navicularii la dignidad ecuestre, concesión confirmada más tarde por los Emperadores Juliano, Graciano y Teodosio (119).

Una constitución del año 357 fijó la pena de diez libras de oro para castigar a quienes intentasen de algún modo molestar a los navicularii (120).

Los navicularii estaban exentos de las cargas municipales, percibían un solidus por cada millar de medidas de trigo transportadas y tenían derecho a que el Estado les protegiese contra toda agresión en el curso de sus viajes.

Aunque una vez que se ingresaba en la asociación no se podía salir de ella, Honorio permitió liberarse por prescripción (121).

Además de las obligaciones propias de los navicularii, todas las embarcaciones que navegaban por el Tíber podían ser requisadas, en caso de necesidad, para el transporte de grano.

Hubo asociaciones especiales de navicularii por razón de las rutas que atendían. Así, existieron los navicularii africani, también llamados navicularii per Africam.

Dos constituciones del Código Teodosiano se refieren a los

que transportaban el trigo y el aceite de España, denominados por Constantino como navicularii Hispaniarum (122).

También organizó Constantino a los navicularii orientis u orientales navarchi, que constituían dos flotas, la flota de Asía o de Siria y la flota de los Cárpatos (123).

Era misión de los navicularii no sólo transportar los suministros desde las provincias a los puertos de Ostia y Constantinopla sino también lo que se recaudaba en concepto de impuestos (124).

La regularidad en la prestación de este servicio era de suma importancia, ya que los retrasos podían dar lugar a una situación de escasez en las grandes capitales, con la inevitable consecuencia de un malestar generalizado y de posibles disturbios, al no poder atender por si mismas las populosas urbes al abastecimiento normal de sus habitantes.

En el título quinto del libro decimotercero del Código Teodosiano se encuentran numerosas disposiciones relativas al régimen jurídico que se aplicaba al transporte marítimo.

Los transportes se hacían según un orden rigurosamente fijado a fin de distribuir adecuadamente la prestación del servicio entre todos los navicularii que figuraban en la relación dispuesta a tal efecto.

Era tal la puntualidad que se exigía en el transporte marítimo que no sólo se castigaba a los capitanes de las naves que hubieran demorado el regreso, sino también a las autoridades que

hubiesen permitido que con pretexto del invierno, las naves cargadas estuvieran detenidas en los puertos de su jurisdicción, a pesar de reinar viento favorable (125).

No era posible agregar carga privada a la carga pública y si alguien y si alguien quería forzar a los navicularii a admitir un cargamento privado era objeto de severas penas (126).

Los navicularii, por otra parte, tenían obligación de construir sus naves y de mantenerlas en buen estado de conservación.

En esta asociación se entraba por nacimiento, por herencia o por sucesión en los bienes de un navicularius, pero también existían otros procedimientos para engrosar las filas de los navicularii, pues en caso necesario podía ser completado el número de estos profesionales por el Prefecto del Pretorio, incluso con la recogida de hombres ociosos y vagabundos (127).

Esto daba lugar a que en la misma asociación hubiese personas de muy distintas clase social. De todos modos se procuraba que formasen parte de los navicularii hombres de solvencia económica, que pudieran atender a los gastos que el ejercicio de la profesión suponía.

A fin de evitar, en lo posible, que un navicularius por falta de medios económicos no pudiese atender a las obligaciones que le eran impuestas, se estableció que no podían enajenar sus bienes salvo que el adquirente estuviese dispuesto a reemplazarle en sus funciones. Igualmente estaba establecido que el legatario universal de un navicularius tendría que actuar como si fuese el heredero.

En la época clásica ya se esforzaron los emperadores por alentar la construcción de embarcaciones que sirviesen para el transporte de los suministros a Roma. Claudio prometió el derecho de ciudadanía a los latinos si contribuían al suministro y al transporte marítimo y prometió, con la misma finalidad, la exención de la ley Papia Poppaea a los ciudadanos y el jus trium liberorum a las mujeres (128).

Pero hasta el Bajo Imperio sólo había compañías libres de navegación que se constituían para trabajar en interés particular: Navicularii que podían traficar por su cuenta, por que los transportes públicos no exigían ni todo su tiempo ni todas sus naves. Sólomente así se explican algunos textos del Digesto, como aquél en que se alude a un rescripto de Marco Aurelio y Lucio Vero (129) según el cuál no gozarían de inmunidad aquellos navicularii que no sirvieran al suministro.

Los saccarii eran los cargadores del muelle. En Apuleyo (130) se alude al vigor que hacía falta para desempeñar este oficio y a lo poco que se ganaba en él.

Los saccarii no tenían el monopolio de su oficio y cualquiera podía utilizar a sus sirvientes para estas faenas, pero esta opción estaba prácticamente vedada ya que en caso de no utilizar los servicios de los saccarii colegiados, era preciso entregar el 20% del valor de las mercancías descargadas (131).

Era el Praefectus urbi a quién correspondía fijar los salarios de esos trabajadores.

Asociaciones de saccarii se encuentran en gran número de ciudades. En Roma se sabe que existían varias, entre ellas, la que recibía el nombre de saccarii salarii totius urbis et campisalinarum Romanorum que prestaba servicios de carga y descarga en los depósitos de la sal (132).

También se tiene noticia de los saccarii de Pompeya (133).

Que en Ostia existía asociaciones de saccarii se prueba por el comienzo de la constitución de los Emperadores Valentiniano y Valente, a que ya se ha hecho referencia, puesto que en ella se dice que el Prefecto de la ciudad se ocupará de que en dicho puerto las descargas se hagan por los saccarii o por quienes deseen ingresar en la asociación. Además de este dato se conserva una pintura descubierta en Ostia en la que aparecen saccarii descargando trigo en una gran barca dispuesta para remontar el Tíber.

Finalmente hay que observar que el término saccarii se empleaba también en otro sentido. Saccarii eran no sólo los cargadores, sino los fabricantes de sacos. La extensión de este nombre a los cargadores fue debida al empleo de sacos en el transporte como se aprecia en la pintura de Ostia a que se ha hecho referencia.

FUNCIONARIOS SUBALTERNOS

Los magistrados romanos a veces empleaban esclavos públicos, es decir, prisioneros de guerra que no habían sido vendi-

dos por el Estado a los particulares, para atender funciones subalternas de la administración pública, pero existían ciertos funcionarios de rango modesto y con atribuciones de inferior importancia, que tenían que ser hombres libres. Este era el caso de los apparitores en sus diversas clases, scribae, viatores, licttores, etc.

Una disposición de Octavio prohibió confiar las tareas propias de los licttores (134) a personas que fuesen de condición servil (134).

Estos subalternos de la administración eran elegidos para un año, pero podían perpetuarse en sus cargas. Su ingreso podía tener lugar mediante la sustitución de otro subalterno o bien comprando el cargo (135).

Entre otros muchos testimonios favorables a la existencia de hombres libres y ciudadanos en las funciones subalternas de la administración puede mencionarse un texto de Cicerón (136) quién al acusar del delito de concusión a dos escribas de Verres, alude a los hombres puros y respetables que se contaban entre los escribas.

El nombre de apparitor venía de la frase "apparere alicui" que significa asistir a alguien (137). Eran subalternos de condición libre, que recibían un sueldo del Estado o del municipio. Entre los apparitores pueden citarse varias clases:

Los accensi, especie de asistentes en el primitivo ejército romano, que luego se convirtieron en subalternos de los magistrados.

Los lictos, agentes que acompañaban a los magistrados, llevando el haz de varillas y la segur o hacha para ejercitar el castigo de los azotes o la decapitación. El nombre de lictor viene de colligare, ya que entre sus misiones tenían la de atar las manos del reo rebelde. La frase "lictor collegia manus" se lee en Tito Livio (138). Es la frase que pronunció uno de los duviros para que el lictor ate las manos de Publio Horacio, que acababa de dar muerte a su hermana, enfurecido por el llanto que ésta vertía ante la muerte de su novio, vencido por Horacio.

Los viatores que eran los mensajeros que convocaban a domicilio a los senadores para las reuniones del Senado o repartían las citaciones judiciales.

Mayor importancia tenían los scribae, especie de auxiliares de secretaría y contabilidad de muchos magistrados, a los que se exigía un cierto grado de preparación por lo que en modo alguno se confunden con los simples amanuenses o librarii.

Otros apparitores fueron los geruli o recaderos, los nomenclatores o encargados de anunciar las ventas, etc (139).

También se suelen incluir entre los apparitores los que tocando la flauta y la lira asistían a los magistrados en los sacrificios.

Se sabe que hubo asociaciones de scribae, lictos, viatores y praecones o pregoneros, divididos en tres decurias. Una decuria especial de apparitores era la que representaba los anti-

guos comicios curiados.

De todos modos es preciso reconocer que en las fuentes epigráficas no hay una mención expresa de los viatores en tres decurias, pero puede considerarse suficiente argumento en su favor la alusión a una decuria viatoria consularis que se contiene en algunas inscripciones (140).

Desde mucho antes del Bajo Imperio las asociaciones de apparitores, con excepción de los accensi, que normalmente eran libertos del magistrado al cuál asistían, tuvieron un reconocimiento como entidades que podían tener esclavos, libertos y recibir sucesiones.

Esto resulta de varios textos conservados en el Digesto (141) en los que se alude a decurias junto a municipios y colegios. En estos textos se habla de decurias, sin especificar de qué decurias se trata, pero decuriales viene empleado en las inscripciones (142) y en el lenguaje de los juristas (143) como sinónimo de apparitores.

Una de las tres decurias de licttores, viatores y pracones era puesta al servicio de los emperadores y de los cónsules.

Las decurias al servicio de los magistrados superiores, incluidos los Ediles curules, recibían el nombre de decuriae maiores y las que estaban al servicio de los magistrados inferiores como quaestores o vigintiviri, recibían el nombre de decuriae minores.

La asociación de funcionarios subalternos además de de-
curia también era llamada ordo, pero no collegium al menos,
tratándose de subalternos que no participaban en las ceremo-
nias religiosas.

Los apparitores recibían un salarium, estaban exentos de
la tutela y del servicio militar (144).

Recibían el nombre de caesariani los empleados subalternos
de los administradores de los dominios del Príncipe, llamados
rationales y que a su vez dependían del Comes rerum privatarum,
siendo su número desconocido en la parte oriental del Imperio y
el de diez en la parte occidental (145).

Estos empleados subalternos desarrollaban actividades en
el orden administrativo y financiero.

No podían abandonar su empleo para obtener un título o una
dignidad, hasta cumplir el tiempo establecido y después de haber
rendido cuentas de su gestión (146).

En un texto del Código Teodosiano se previenen los daños que
podían causar en los bienes la actuación de estos subalternos,
cuyos posibles fraudes se tipifican expresamente y se penali-
zan (147).

MILITARES

Los cohortales eran los afectados a la milicia de los gober-

nadores (148) que no podían abandonar su servicio antes de haberlo desempeñado durante 25 años.

Según una constitución, conservada en el Código de Justiniano, del Emperador Constancio y correspondiente al año 349, si algún cohortal hubiese fallecido sin testamento y sin tener a alguien que pueda sucederle, su sucesión no pertenecía al Fisco sino a los demás cohortales de la misma provincia.

Esta constitución está inserta en un título en que no solo se contemplan las herencias de los cohortales, sino también las de los decuriones, navicularii, fabricenses y militares del ejército romano (149).

Los hijos de los cohortales seguían la condición de sus padres.

La prescripción de cuarenta años eliminaba la sujeción de los cohortales al servicio (150). No ocurría lo mismo con los curiales ya que en otra constitución del Emperador Anastasio se deja bien claro que no se permitía oponer la prescripción de cuarenta años a los llamados a la condición de curiales quienes siempre serían compelidos a someterse a su condición. Por tanto tratándose de curiales el emperador Anastasio no derogó las constituciones de sus predecesores en las cuales establecía, sin lugar a dudas, que los curiales y sus hijos deberían ser restituidos a sus patrias respectivas, desechadas las prescripciones de tiempo (151).

El término corpus se aplicó a los cohortales, lo mismo que a

los burgarii y a los miembros de otros colegios designando así una clase de hombres adscritos al servicio público y sujetos a su condición por un vínculo hereditario e indisoluble.

Respecto de los colegios de militares del ejército romano, se hace preciso ante todo distinguir entre la tropa y los mandos. Parece que a los soldados les estaba prohibido constituir asociaciones por razones de disciplina.

En el texto tomado del libro tercero de las Instituciones de Marciano, de tan gran interés para la investigación de los Collegia tenuiorum (152) se dice que en varias disposiciones imperiales fue establecido que los militares no podían constituir asociaciones en los campamentos, dándose instrucciones en tal sentido a los Gobernadores de provincias.

Esta prohibición sólo afectaba a los soldados rasos, pues se conoce la existencia de colegios de suboficiales y especialistas del ejército.

La prohibición de los colegios de soldados evidentemente obedeció a razones de disciplina, pero también se ha hecho observar que algunas de las finalidades que se atendían por los colegios profesionales, ya estaban atendidas en el caso de los soldados. Así, el futuro, mientras vivían y luego el enterramiento de los licenciados de la milicia, estaba asegurado por parte del Estado, que no sólo abonaba una pensión sino que tenía establecido un centro de asistencia, que se nutría con rentaciones efectuadas sobre los regalos que el emperador o los

altos jefes militares hacían a los soldados, aparte de los fon
dos constituidos con las cantidades entregadas por los legiona
rios para tener una sepultura digna, en caso de morir en el
servicio activo (153).

En la ciudad de Numidia, Lambaesis, se han encontrado en-
tre las ruinas del campo ocupado por la III Legión Augusta huel
llas de los lugares de reunión de los colegios de suboficiales
y especialistas, así como los estatutos de su organización.

Estos colegios se organizaron en época de Adriano y sobre
todo de Septimio Severo, después del cuál se extendieron por to
do el Imperio romano.

Como colegios de especialistas pueden citarse los colegios
de exploradores que recibían la denominación de speculatores,
beneficiarii (154), armeros, que más tarde constituyeron cole-
gios independientes, portaestandartes o signiferi, músicos, etc.

Se sabe de algunas subvenciones pagadas por los colegios de
militares a sus asociados, gracias a los datos conservados en
inscripciones. Así, se sabe que se pagaban doscientos denarios
a aquellos cornicines que por pasar de una legión a otra debían
efectuar un viaje por mar (155). Se abonaban seis mil sestercios
a los que se licenciaban forzosamente, no a los expulsados del
ejército (156).

ARGENTARII

Los argentarii o banqueros desempeñaban una actividad muy estimada por los romanos y que se concretaba especialmente en llevar a cabo: cambios de dinero, hacer préstamos y recibir depósitos (157).

En un principio, sin embargo, se limitaban a cambiar moneda. Más tarde, se concederían a los argentarii algunas tiendas en la parte meridional del Forum Magnum, que tomarían el nombre de Tabernae argentariae.

La actividad bancaria, propiamente dicha, comenzó cuando empezaron a recibir de los particulares dinero en depósito por el que pagaban intereses y cuando comenzaron a conceder préstamos a quienes ofrecían suficientes garantías.

Esta actividad se desarrollaba en el Foro, junto a la estatua de Apolo, pero el emplazamiento definitivo fue en la parte oeste y de estas tiendas de los argentarii, tomó el nombre la carretera que por la pendiente del Capitolio, se dirigía al campo de Marte, el clivus argentarius.

En la Basílica argentaria, construida en el Foro de César, los banqueros, cambistas y hombres de negocios se comunicaban información comercial sobre sus clientes, manejando, cuando era preciso, la piedra de contraste para el oro o la tabla que facilitaba los cálculos.

Los banqueros formaban parte del orden ecuestre, la burgue-

sía enriquecida, ya que los pertenecientes al orden senatorial tenían prohibido dedicarse a las transacciones mercantiles y a las contratas públicas y tenían que invertir sus capitales en las explotaciones agrarias.

En tiempo de la República no había una distinción muy clara entre los argentarii y los publicari, de que se tratará más adelante (158).

Banqueros famosos fueron, entre otros, M. Licinio Craso que ayudó económicamente al dictador Sila.

A Licinio Craso llevó a deber Julio César cuatrocientos mil sesteracios, Pomponio Atico colega de Craso, los banqueros de Pompeyo.

Los argentarii estaban sometidos a la supervisión del Praefectus urbi en Roma y de los magistrados superiores en las provincias y tenían obligación de llevar una serie de libros para el debido registro de las operaciones que efectuaban. Pueden citarse los siguientes: Adversaria, un libro en el que se hacían constar los apuntes de las operaciones diarias, que luego debían de pasarse al codex accepti et expensi, en el que figuraban las cantidades recibidas y las cantidades entregadas y que tanta importancia tuvo en el desarrollo de los contratos que se perfeccionaban litteris y el calendarium donde se hacían constar las fechas de los vencimientos.

Dado el carácter público de la actividad bancaria, en cual-

quier momento podían ser inspeccionados los libros e investigada la marcha de los negocios.

Una interesante representación de la actividad bancaria de la Roma imperial se encuentra en una escultura de principios del siglo IV, en la cuál dos banqueros, uno con el codex en la mano y portando el otro un saquito con monedas, se vuelven hacia un joven, sin duda un dependiente suyo, que llega con una cantidad de dinero.

También se aplicó el nombre de argentarii a los que comerciaban con objetos de plata o los fabricaban. Sin embargo, para referirse a éstos últimos es frecuente emplear la expresión faber argentarius (159) y refiriéndose más concretamente al objeto fabricado, se decía argentarius vascularius (160). La expresión aurarius argentarius, servía para designar al que trabajaba el oro y la plata.

PUBLICANI

Para Kniep (162) publicanus era únicamente el que arrendaba la cobranza de los impuestos, quedando por tanto fuera de esta denominación todas aquellas personas que habían efectuado contratos con el Estado para la realización de obras públicas, suministros de material bélico, explotaciones mineras, etc.

Hay un texto en el Digesto (163) en el que se contiene una ^qindica^ción de lo que debe entenderse por publicano: "Publicani

autem sunt qui publico fruuntur (nam inde nomen habent) sive fisco vectigal pendant vel tributum consequantur; etc omnes qui quod a fisco conducunt recte appellantur publicani".

Acerca de la interpretación que deba darse a este texto, tomado del libro cincuenta y cinco de los comentarios de Ulpiano al Edicto, mucho se ha discutido.

Mommsen en un principio sostuvo la interpretación de que Ulpiano no sólo consideraba publicanos a aquellos que, por haber contratado la cobranza de los impuestos eran deudores al Fisco del vectigal, sino también a aquellos que recibían dinero del Estado para la construcción y el mantenimiento de obras públicas. Publicanos serían pues todos aquellos hombres de negocios que por haber acudido a las contrataciones anunciadas por el Estado se encontraban, en relación con él, en la posición de arrendatarios.

Más tarde Mommsen (164) corrigió su propia interpretación, afirmando que por vectigal se debe entender el dinero debido al Estado como consecuencia del aprovechamiento de distintos recursos naturales y por tributum el obtenido de la cobranza del impuesto (165).

Existen otros dos textos que pueden servir para fijar el concepto de publicanus.

Un texto procede del libro treinta y ocho de los Comentarios de Ulpiano al Edicto (166).

En este texto se dice que se llaman publicanos los que tienen arrendados los vectigales publicos.

El otro texto está tomado del libro decimotercero de los Comentarios de Gayo al Edicto provincial (167).

Gayo escribe que se llaman publicanos los que tienen en arriendo salinas y yacimientos de greda o de metales, añadiendo que también se aplica el edicto relativo a los publicanos cuándo alguien ha tomado en un municipio el arriendo del vectigal.

Si se estima que el segundo texto completa el primero y se lee uno a continuación del otro, aparece claro que son publicanos todos aquellos que contratan la cobranza del vectigal y que a ellos son asimilados los que reciben una concesión para el aprovechamiento de salinas o para la extracción de greda y de metales y finalmente que no son publicanos, pero que se les aplica el edicto, aquellos que recaudan los impuestos en un municipio, en una comunidad distinta de Roma.

A esta interpretación se han opuesto diferentes objeciones.

En primer lugar, que el texto de Ulpiano se refiere al Edicto del Pretor urbano, mientras que el texto de Gayo se está refiriendo al Edicto provincial.

Esta primera objeción no es muy grave, en realidad, porque para que lo fuese habría que probar con exactitud la relación en

tre el Edicto Provincial y el Edicto del Pretor urbano.

Si el Edicto Provincial no tenía otra finalidad primaria que la extensión a las provincias de la protección edictal de Roma, como sostuvo Buckland (168); si, cómo, mucho más recientemente, ha afirmado Remo Martini (169) no hubo dos comentarios uno al Edicto Provincial y otro al Edicto del Pretor urbano, sino un sólo comentario al Edicto del Pretor urbano, revisado en provincias para su adecuación, en cierta medida, a la realidad provincial o si el Comentario de Gayo tenía dos partes, una dedicada a comentar el Edicto del Pretor urbano y otra dedicada a comentar el Edicto de los provinciales, como pretendió Kniep (170).

Otra objeción, más consistente, es la de que Gayo y Ulpiano están refiriéndose a épocas distintas y, en el tiempo que media entre la obra de Gayo y la de Ulpiano, la historia de las contratas públicas, con referencia a la explotación de minas y canteras, había sufrido una evolución profunda por lo que los dos juristas están examinando realidades muy diferentes (171).

Sin necesidad de analizar otros textos que en realidad no aportan ninguna aclaración (172) pudiera concluirse que aunque para los compiladores sólomente fuesen publicanos los que han contratado con el Estado la cobranza de los impuestos, los pasajes que aparecen en el Corpus Juris dejan entrever una realidad mucho más amplia o lo que es más verosímil que en un primer momento el nombre publicanus designase únicamente a aquél a quién

se concedía la percepción del impuesto y luego se ampliara la esfera de actividades de los grupos capitalistas (173).

Si de las fuentes jurídicas se pasa a las fuentes extra-jurídicas, también en ellas aparece el uso del término publicani referido a los contratistas de obras públicas (174).

Por todo ello parece necesaria una definición amplia de publicani o, mejor aún, precisar los diversos significados de esta denominación. Es lo que acertadamente hace Arias Bonet al distinguir dos acepciones, una restringida, según la cuál publicanus es aquél que toma en arriendo la cobranza de un impuesto, comprometiéndose a pagar al Estado una cantidad determinada y otra amplia, de acuerdo con la cuál son publicani todos aquellos a quienes se adjudica por el Estado o por un municipio el acopio de suministros, la realización de obras públicas y la explotación de minas, salinas y otras propiedades públicas (175).

Una de las múltiples cuestiones relacionadas con las societates publicanorum es la de la procedencia social de sus componentes.

Las limitaciones impuestas a las actividades mercantiles de los pertenecientes a la clase senatorial (176) produjeron un doble efecto.

Por una parte dieron lugar al desarrollo de los latifundios, con todas las consecuencias que ello produjo en la consideración social de los esclavos, que de ser los inmediatos colaboradores

en el trabajo de la pequeña hacienda romana, pasaron a ser trabajadores del campo, perdidos en la inmensidad de las grandes fincas, alejados de la residencia de sus dueños y desvinculados del afecto y la estimación de sus propietarios.

Por otra parte ocasionaron que la mayoría de los miembros del orden ecuestre, se dedicasen a los negocios y a las finanzas.

Hombres de gran posición económica pertenecientes a las centurias de caballeros o a la primera clase del censo, serían los que formaron las primeras asociaciones de publicanos.

Estos grandes hombres de negocios no pueden ser confundidos en modo alguno con los negotiatores y mercatores.

Los negotiatores eran hombres que se dedicaban a los negocios en pequeña o mediana escala y los mercatores, simples comerciantes.

De los negotiatores se discute si abundaban o no entre ellos los ciudadanos romanos. Lo cierto es que hubo collegia de negotiatos dirigidos por magistri, que tenían denominaciones tomadas del nombre en Griego de determinadas divinidades, como Hermaistai, Apolloniastai, Poseidoniastai.

Otra importante cuestión es la del momento preciso en el que la clase social de los hombres de negocios importantes, alcanza en Roma un poder que le permite influir notoriamente en los ingresos futuros y conocer de antemano su importe; pero, por otro

lado, aquellos hombres de negocios a gran escala, que se hacían cargo de la cobranza de los impuestos actuaban movidos por el interés de unas ganancias y esas ganancias las obtenían regateando al Estado el importe de lo que habían de pagar y ejerciendo una fuerte presión sobre los contribuyentes.

Aunque el modelo de las sociedades de publicanos, como instrumento de fiscalidad se encuentre en Estados helenísticos, no cabe duda que las sociedades de publicanos romanas fueron más fuertes y poderosas.

Las campañas bélicas del siglo III a. de C. exigieron sin duda grandes suministros para las fuerzas armadas, pero lo que vino a potenciar la presión fiscal fue la situación creada por el nuevo ámbito provincial que se iniciaba.

L. Homo, al ocuparse del comienzo del imperialismo romano, hizo notar que el imperialismo cartaginés fue de naturaleza esencialmente las decisiones de los hombres que ocupan el poder, poder que tradicionalmente había pertenecido a la nobilitas.

Según la teoría Frank (177) tal influencia no habría existido antes de mediados del siglo II a. de C., Tesis acogida mucho después por Badian (178).

Autores hay que sitúan la aparición y desarrollo de esa clase en la época en que Roma se proyecta fuera de la península italiana, esto es, en la segunda mitad del siglo III a. de C.

Nicolet (179) ha hecho notar que el arrendamiento de gastos

e ingresos se practicó en Roma desde el siglo III a. de C., al menos, y ello realmente no constituía una novedad, pues se venía haciendo en las Ciudades-Estado griegas y en las monarquías helenísticas.

Era un sistema que ofrecía a la vez ventajas e inconvenientes, pues, por una parte, el Estado no tenía que organizar un costoso y complicado sistema de recaudación para llevar a cabo la cobranza de los impuestos directamente y por si mismo.

También podía disponer por adelantado de los futuros ingresos y conocer de antemano su importe, pero por otro lado, como aquellos hombres de negocios actuaban movidos por el interés de unas ganancias, esas ganancias las obtenían regateando al Estado lo que tenían que pagar y ejerciendo una fuerte presión solo los contribuyentes. Las campañas bélicas del siglo III a. de C. exigieron grandes sumas de dinero, pero lo que vino a potenciar la presión fiscal fue la situación creada por el nuevo ámbito provincial que se iniciaba. L. Homo al ocuparse del comienzo del imperialismo romano hizo notar que este imperialismo y el cartaginés fueron de naturaleza distinta: El cartaginés fue el imperialismo de un pueblo de mercaderes, el romano el de un pueblo de soldados (180).

El punto de vista económico aparece en Cartago como causa, en Roma como consecuencia.

Planteado en estos términos el inicio del imperialismo romano también se llega a la conclusión de que la segunda guerra púnica por las múltiples y muy importantes adjudicaciones de toda especie para servicio del ejército, tuvo como consecuencia

la creación de una clase de capitalistas cuya importancia aumentaría durante los siguientes cincuenta años y que aparecerá completamente formada en la época de los gracos.

De Martino (181), aún reconociendo que es lógico pensar que después del ingreso de los plebeyos en la caballería y como consecuencia de la aparición de los caballeros equis suis, equo privato, que no recibían del Estado el dinero para la adquisición del caballo, los consores comenzaron a exigir un censo más alto para los militares de caballería que el exigido para los de infantería de la primera clase y aceptando también que una amplia clase de importantes hombres de negocios se vino formando en virtud de las hondas transformaciones de carácter económico y social que acompañaron a la segunda guerra púnica y que esos particulares emprendieron especulaciones financieras relacionadas con la marcha de la guerra, entiende que no se puede identificar a estos hombres de negocios con el orden ecuestre, en el sentido de que no todos formaban parte de él, ni todos los equites se dedicaban al comercio y a las especulaciones financieras, sino que muchos de ellos, tanto a Roma, como en los municipios, seguían dedicados a la tradicional actividad de la explotación agrícola (182).

Finalmente, no faltan autores que creen que un grupo social compuesto de importantes hombres de negocios, financieros, contratistas de impuestos y de grandes obras públicas, ya existían antes de las guerras púnicas y no solamente existían y se afianzaban, sino que incluso ejercían una fuerte influencia sobre la clase dirigente romana, dándole un matiz imperialista (183).

El más antiguo testimonio que se posee acerca de una contrata importante concedida a los publicani, se remonta al año 215 a. de C.

Tito Livio nos transmite la noticia (184): Después de señalar la imposibilidad en que estaban los romanos de intensificar la presión fiscal y la conclusión a que habían llegado de que sólo el crédito podría sostener la República, relata cuál fue el sentido de la comunicación del Pretor Fulvio al pueblo. Comprometió a los ciudadanos que habían aumentado su caudal con el manejo de los fondos públicos para que prestasen su dinero al estado durante algún tiempo y suministrasen al ejército de España todo lo que necesitaba, a condición de que serían los primeros en cobrar, tan pronto como hubiese fondos en el tesoro. El pretor fijó el día en que sería adjudicado el suministro de ropas y víveres para el ejército de España y también de todo aquello que necesitasen las tripulaciones de la flota.

Cuándo llegó el día anunciado, continúa el historiador latino, se presentaron tres sociedades compuestas por diecinueve ciudadanos, las cuales se encargarían de los suministros con dos condiciones: Que quedarían exentos del servicio militar mientras durase aquél servicio público y que el Estado debería garantizarles, contra el enemigo y las tempestades, todo lo que ellos embarcasen.

Concedidas estas dos condiciones se encargaron de los suministros y este servicio se llevó a cabo con el dinero de los particulares.

En la época de la República, parece que en las sociedades de publicanos, al lado de los socios ordinarios que contribuían con aportaciones de capital y comprometiéndose directamente en la gestión social había los adfines que no eran socios, pero aportaban capitales, si bien no es muy completa la información que se tiene sobre estos últimos.

En esta época el manceps era el que contrataba con el Estado, la sociedad no tenía aún personalidad jurídica. No figuraba en las relaciones con el Estado.

Con el tiempo y a fin de evitar abusos de los publicanos se hizo necesario ejercer un control mayor sobre las societas, tomarla más en cuenta por el Estado.

Esto determinó que al comienzo de la época clásica el manceps no contrataba con el Estado en nombre propio sino en nombre de los socios (185).

Las sociedades de publicanos no son mencionadas, en contraste con el detalle y la atención que merecen otras asociaciones, en el Código Teodosiano, ni en el de Justiniano, por su falta de encaje en un sistema de actuación estatal más directa, pero si se contemplan en los textos del Digesto. Esta circunstancia puede ser explicada por el deseo de mantener unos principios teóricos de posible aplicación práctica en alguna ocasión (186).

La cuestión de si las societates publicanorum tuvieron o no personalidad jurídica es una cuestión compleja.

Arias Bonet después de un minucioso estudio de esta clase de sociedades llega a la siguiente conclusión: "Si resulta anacrónico hablar de una personalidad jurídica de las societates publicanorum, no parece, en cambio, que haya razón suficiente para rechazar el que éstas tuviesen sencillamente res communes,

arcam communem y que actuasen por medio de un actor. Los romanos no pasaron de ellos" (187).

Efectivamente, sin necesidad de aplicar ciertas construcciones jurídicas, la societas publicanorum y la sociedad de banqueros constituyeron pronto excepciones al principio de irrelevancia externa del contrato de sociedad, debido a intereses económicos y sociales que fueron capaces de provocar especiales configuraciones.

El derecho romano clásico partió de una noción unitaria de sociedad, pero no dudó en reconocer principios especiales en atención a los objetivos que los distintos tipos de sociedad se proponían.

Lo mismo que se ha afirmado en otros campos del Derecho, puede decirse que en la experiencia jurídica romana no se conoció la sociedad, sino las sociedades. Era necesario un tratamiento especial de aquellas sociedades en las que se desarrollaba una cierta forma de capitalismo compatible con las condiciones históricas generales de la antigüedad (188).

Lo que no parece admisible es la teoría de Cohn de que la ley permitía a los publicanos formar con autorización del Senado y del Emperador colegios profesionales distintos de sus societates (189).

Esta teoría fue acogida, aunque con diferentes argumentos por Lauret (190) pero carece de fundamento en las fuentes.

Se ha utilizado en apoyo de las teorías que creen en la existencia de colegios de publicanos el dato de que parece haber habido un corpus omnium Mancipum, pero teniendo en cuenta que ese colegio elevó una estatua a un antiguo Praefectus urbi, en unión de otros colegios que servían al abastecimiento de Roma, se ha pensado por Waltzing (191) que pudiera tratarse de panaderos que llevaban el nombre de Mancipes.

Esta tesis no carece de fundamento dada la extensa aplicación del término Mancipes (192).

N O T A S

- (1) C. Th., XV, 7.
- (2) C. Th., VII, 14.
- (3) C. Th., XII, 15.
- (4) C. Th., XIV, 5, 1.
- (5) Cfr. D. Serrigny, Droit public et administratif romain, París 1872, p. 364 y ss.
- (6) Primero como arrendatarios y luego explotando esos almacenes a título gratuito.
- (7) C., 4, 61, 11.
- (8) Las relaciones de los mancipes thermarum con las salinas han sido explicadas de muy diversos modos. Cfr. Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles, Roma 1968, II, p. 426, n. 3. Sobre el monopolio de la sal en Roma, vid. M.R. Cagnat, Etude historique sur les impôts indirects chez les romains, Roma 1966, p. 237 y ss.
- (9) C.I.L., XIV, 172.
- (10) C.I.L., XIV, 409.
- (11) C. Th., XIV, 15, 1.
- (12) C. Th., XIV, 4, 9.
- (13) D., 27, 1, 26.
- (14) D., 50, 5, 10.
- (15) C.I.L., IV, 826.
- (16) C.I.L., II, 5929.
- (17) D., 14, 2, 4, 1.
- (18) Piscatores propolae.
- (19) Sobre la predilección de los romanos por el pescado. Cfr. Marquardt, La vie privée des romains, II (trad. franc) París 1893, p.p. 56-57. No pueden confundirse los piscatores, propiamente dichos, hombres libres que ejercían el oficio de pescar, con los esclavos pertenecientes a la familia rústica, que estaban al cuidado de los estanques y a los que se refiere Varron (III, 17, 6).
- (20) Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles chez les romains, II, Roma 1968, p. 110, n. 6.

- (21) L. Preller, *Rom. und der Tiber*, Leipzig, 1848, p. 150.
- (22) 11, 15.
- (23) C. Th., IX, 40, 3, 5, 8 y 9; C. Th., XIV, 3, 22.
- (24) C. Th., XIV, 3, 5.
- (25) C. Th., XIV, 3, 7.
- (26) C. Th., XIV, 3, 8 y C. Th., XIV, 9 y 10.
- (27) C. Th., XIV, 4, 3, 4.
- (28) Nov. 39.
- (29) XXII, 26.
- (30) VIII, 180.
- (31) Suetonio, Domiciano IX.
- (32) C. Th., XIV, 41, 1.
- (33) C.I.L., VI, 1770.
- (34) C. Th., XIV, 4, 10.
- (35) Frag. Vat., 236.
- (36) C., 11, 16, 1.
- (37) C., 11, 16, 2.
- (38) C. Th., XIV, 4, 4.
- (39) Plinio cuenta el caso de una mujer a la que dió muerte su marido por beber vino de un tonel y Rómulo absolvió al marido. También dice, el mismo autor, que Rómulo hacía libaciones con leche, nunca con vino. Vid. N.H., XIV, 87.
- (40) En un relieve conservado en el museo Torlonia se ve una nave mercante de la que se están descargando ánforas de vino.
- (41) En un texto del Digesto se alude a una taberna: D., 33, 7, 7.
- (42) Lampridio, Al. Sev., XXXIII, 2.
- (43) Symaco habla de un colegio de caupones, probablemente vendedores de vino que estaban ligados a su profesión. Cfr. Waltzing, *Etude historique sur les corporations professionnelles*, II, Roma 1968, p. 100.
- (44) Varia, VII, 17.

- (45) Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles, II. p. 116. Una constitución del año 344 prohíbe a los curiales refugiarse entre los calcarienses (C. Th., XII, 1, 1, 37).
- (46) C. Th., XIV, 6, 1.
- (47) Catón, De re rústica, LIX.
- (48) Cfr. Rabanis, Sur les Dendrophores, Burdeos 1841. El uso de toldos hechos con pelo de cabra para proteger los edificios del viento y de la lluvia, aparece reflejado en D., 33, 7, 12, 17.
- (49) César, La Guerra de las Galias, II, 9 y II, 44.
- (50) D., 33, 7, 12, 18.
- (51) Claudio XXV.
- (52) G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Hildesheim 1966, p. 404. Cfr. Ulp. Reg., III, 5.
- (53) C. Th., XII, 1, 162.
- (54) C. Th., XII, 1, 62.
- (55) C., 11, 9, 4.
- (56) C. Th., XIV, 8, 2.
- (57) C.I.L., VI, 978.
- (58) Rabanis, Sur les Dendrophores, Burdeos 1841, p. 58 y ss.
- (59) C.I.L., V, 2071.
- (60) Marquardt, Le culte chez les romains (trad. franc.) Paris 1890, II, p.p. 71 y 100.
- (61) C.I.L., IX, 5439.
- (62) C.I.L., XI, 6362 y XI, 6378.
- (63) XXXV, 14.
- (64) C. Th., XIV, 5, 1.
- (65) Como generalmente sucedía en las asociaciones profesionales, seguramente estaría dividido el colegio en centurias y decurias, pero ninguna mención se encuentra de este detalle en las fuentes epigráficas.
- (66) C.I.L., VIII, 9401; X, 3699, etc.
- (67) S. Isidoro de Sevilla, Orígenes XIX, 6.

- (68) D., 27, 1, 17, 2 y C., 10, 65.
- (69) Existe un texto tomado del libro veintiocho de los Comentarios de Ulpiano al Edicto (D., 13, 6, 5, 7) en el que se hacen varias alusiones a esclavos que desempeñaban oficios relacionados con la construcción. Allí se habla de servus tector = albañil y servus lapidarius = cantero.
- (70) C. Th., X, 22, 4.
- (71) C., 10, 9, 6 y 10, 9, 7, pr.
- (72) C., 10, 9, 7, 1.
- (73) C., 11, 9, 1.
- (74) Relación de altos cargos civiles y militares, de la parte oriental y occidental del Imperio que parece ser de finales del siglo IV o comienzos del V.
- (75) Solían estar instaladas en regiones dónde era fácil obtener el metal y la madera necesarios para la confección de las armas.
- (76) Naturalis Historia, VII, 196.
- (77) Asinaria, V, 2, 55.
- (78) VI, pr. 7.
- (79) Ovidio, Fast., III, 821.
- (80) También parece que eran fullones los cultores Urae fontis.
- (81) C.I.L., XI, 4771.
- (82) C.I.L., VI, 10.298.
- (83) D., 43, 10, 1, 4.
- (84) C.I.L., VI, 266.
- (85) E. Ruggiero, Dizionario Epigrafico di Antichità romana, Roma 1962, v. fullones (in fine).
- (86) Si bien en la época clásica se suministraban gratuitamente los uniformes a los soldados sin graduación, en el Bajo Imperio parece que únicamente se facilitaban a los soldados sin graduación los uniformes confeccionados en estos talleres. Cfr. C. Th., VII, 6, 5.
- (87) C. Th., X, 20, 16.
- (88) C., Th., X, 20, 3.
- (89) Así R. Cagnat en Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg - Saglio, v. Gynaecium.

- (90) Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, III, Aalen 1974, p. 137.
- (91) C. Th., XI, 1, 14.
- (92) C., 11, 6, 7.
- (93) C., Th., IX, 40, 2.
- (94) XI, 20.
- (95) Cfr. A. d'Ors, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid 1953, p. 71 y ss.
- (96) XXIV, 105 y 175.
- (97) D., 48, 19, 8, 8.
- (98) C., 11, 6, 4.
- (99) C., Th., X, 19, 15.
- (100) C., 11, 6, 7.
- (101) En época de la República la fabricación de la moneda correspondía al Senado, salvo el derecho concedido a los jefes militares de acuñar moneda fuera de Roma y de poner en las piezas acuñadas su nombre. Cfr. P. Willems, Le Droit public romain, Lovaina 1880, p. 495 y ss.
- (102) Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg - Saglio, v. Moneta.
- (103) C. Th., X, 20, 16.
- (104) C. Th., X, 20, 1.
- (105) C. Th., X, 20, 18.
- (106) C. Th., X, 20, 3.
- (107) C. Th., X, 20, 14, 16.
- (108) C., 11, 7, 9.
- (109) C., 11, 7, 2.
- (110) C., 11, 8, 4.
- (111) C., 11, 8, 3.
- (112) C., 11, 7.
- (113) C., 11, 7, 8. Cfr.; C. Th., VIII, 4, 11.
- (114) C. Th., X, 20, 4.

- (137) Servio ad Aen., XII, 850.
- (138) I, 26.
- (139) Lex Cornelia de XX quaestoribus, I, 33.
- (140) C.I.L., XIV, 3, 7, 3 y 2.045.
- (141) D., 29, 2, 25, 1 y D., 37, 1, 3, 4.
- (142) C.I.L., VI, 777.
- (143) Frag. Vat., 142.
- (144) T. Mommsen, Le Droit public romain, I, (trad. franc.) París 1892, p. 392, n. 3.
- (145) Cargo bien distinto de otros racionales, como el rationalis vinorum que en Roma supervisaba el arca vinorum. Cfr. C., 1, 5, 7.
- (146) C. Th., X, 7, 1.
- (147) C. Th., X, 8.
- (148) C. Th., VIII, 8.
- (149) C., 6, 62, 3. Ahora bien, como los cohortales no tenían personalidad jurídica, la herencia tenía que ser repartida entre ellos. Cfr. Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles, Roma 1968, II, p. 457.
- (150) C., 7, 39, 4.
- (151) C., 7, 39, 5.
- (152) D., 47, 22, 1, pr.
- (153) Cada cohorte de la legión tenía una caja de ahorros (follis) que estaba bajo la vigilancia del signifer, en la que se depositaba la mitad de los donativos o gratificaciones recibidas en circunstancias excepcionales. Además, en cada legión, existía una caja destinada a pagar los funerales de cada soldado. Cfr. D., 50, 7, 6. Cfr. Marquardt, De l'organisation militaire chez les romains, París 1891, p. 309.
- (154) Soldados seleccionados por sus jefes, a los que se atribuían diferentes destinos, como, por ejemplo, ejecución de penas, policía militar, etc. vid. Marquardt, ob. cit., p. 291, n. 4.
- (155) C.I.L., VIII, 2557.
- (156) C.I.L., VIII, 2554.
- (157) Este genero de actividades pasó a Roma procedente de Grecia, dónde los negocios bancarios habían adquirido notable auge.

- (158) Los banqueros o argentarii ofrecían sus servicios a las nuevas provincias del Imperio, haciéndoles préstamos cuantiosos para poder efectuar el pago de los impuestos. También para la construcción de calles, templos, termas o acueductos, se acudía al dinero que podían facilitar los argentarii.
- (159) D., 34, 2, 39, pr.
- (160) D., 44, 7, 61.
- (161) Suetonio, Vespasiano, I.
- (162) Societas publicanorum, Jena 1896, p. 1 y ss.
- (163) D., 39, 4, 1, 1.
- (164) M.R. Cimma, Ricerche sulle società di publicani, Milán 1981, p. 43 y ss.
- (165) Sobre el significado de tributum, cfr. Marquardt, De l'organisation financière chez les romains, París 1888, p. 207 y ss.
- (166) D., 39, 4, 12, 3.
- (167) D., 39, 4, 13, pr-1.
- (168) Cfr. la monografía de este autor sobre el Edicto provincial aparecida en la Revue historique de Droit français et étranger, París 1934 p. 81 y ss.
- (169) Ricerche in tema di Editto provinciale, Milán 1969, p. 106 y ss.
- (170) Das Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommentare, Gena 1910, p.p. 149-314.
- (171) Cimma, Ricerche sulle società di publicani, Milán 1981, p. 451.
- (172) Es el caso de los textos D., 50, 16, 15 y 16.
- (173) J. A. Arias Bonet en Iura, XXXII (1981).
- (174) Tito Livio XXXIX, 44 y Val. Max., V, 6, 8.
- (175) Anuario de Historia del Derecho Español, XIX (1948-1949) p. 219.
- (176) Limitaciones procedentes unas veces de las leyes, como en el caso del comercio marítimo y otras derivadas de rígidas normas consuetudinarias. Cfr. De Martino, Storia económica di Roma, I, Florencia 1980, p. 135.
- (177) Classical Philology, XXVIII (1933) p. 1 y ss.
- (178) Publicans and Sinners, Oxford 1972, p. 48 y ss.
- (179) Roma y la conquista del mundo mediterráneo (trad. esp.) Barcelona 1982, p. 187 y ss.
Cfr. del mismo autor L'ordre equestre a l'époque republicaine, París 1966, p. 318 y ss.

- (180) La Italia primitiva y los comienzos del imperialismo romano (trad. esp.) Barcelona 1926, p.p. 328-329.
- (181) Storia della costituzione romana, II, Nápoles 1973, p. 304 y ss.
- (182) Nicolet, L'ordre equestre a l'epoque republicaine, Paris 1966, p. 285 y ss.
- (183) Casavola, Gruppi politici romani nel III secolo a. de C., Roma 1966, p. 71 y ss.
- (184) XIII, 48-49.
- (185) Las fuentes epigráficas muestran que las sociedades de publicanos alcanzaron la primera mitad del siglo III.
- (186) Vid. J.A. Arias Bonet en Jura XXXII (1981).
- (187) Anuario de Historia del Derecho Español, XIX, (1948-1949) p. 218 y ss.
- (188) Cfr. F. Serrao en Studi in Onore di Edoardo Volterra, V, Milán 1971, p. 764 y ss.
- (189) Cohn, Zum römischen Vereinsrecht, Berlín 1873, p.p. 155-185.
- (190) De la personnalité des sociétés, París 1890, p.p. 36-49.
- (191) Etude historique sur les corporations professionnelles, II, Roma 1968, p. 227.
- (192) Plinio, N.H. X, 43, 60.

CONCLUSIONES

C O N C L U S I O N E S

Después de la exposición que precede, se formulan las siguientes conclusiones:

- A) La aparición de los primitivos colegios en Roma, debe relacionarse con la población etrusca. Los etruscos sentirían la necesidad de agruparse ante un ambiente gentilicio que les era hostil.

Ello explicaría la inclusión de los órfebres en la lista de los antiguos colegios, a pesar de tratarse de una actividad de poco relieve en el ambiente pobre y sencillo del viejo La cio y que, en cambio, no se aluda para nada a un colegio de trabajadores del campo, el trabajo más apreciado de los antiguos latinos.

- B) Parece verosímil la existencia de un antiquísimo colegio de trabajadores del cobre.

Niebuhr la negó basándose en que en tiempos de Numa no existía la moneda sin embargo, cuando Plinio el Viejo habla en su Historia Natural de estos trabajadores, situándolos en tiempo de Numa no se refiere a los fabricantes de moneda sino a los que trabajaban el metal, porque los denomina aerarii y no conflatores, signatores o monetarii.

- C) No deben identificarse las centurias de trabajadores del ejército serviano con colegios de artesanos. Sólo formarían parte

de esas centurias algunos artesanos seleccionados por sus condiciones físicas. De no ser así, no se podría explicar el texto de Tito Livio (VIII, 20) en el que se dice que en la guerra contra los Galos, fueron reclutados los artesanos, gente poco apta para la guerra.

- D) El texto de las XII Tablas, referido por Gayo, en el que se trata del primitivo régimen asociativo, no revela la concesión por vez primera de la libertad para asociarse, ni la supresión de una libertad preexistente, sino la prohibición de que ciertas medidas administrativas pudiesen impedir a los colegiados adoptar los acuerdos que crean convenientes.
- E) La enigmática relación entre los supuestos colegios compitalicios y los colegios de artesanos parece ser la siguiente: Los trabajadores, ya organizados y asociados desde época remota tendrían una acusada intervención en las fiestas compitalicias. Con el tiempo, estas asociaciones fueron haciéndose cargo de las ceremonias del culto y de la organización de dichas fiestas, hasta llegar a ser los magistri collegiorum, los que las institucionalizaron.
- F) El Senadoconsulto de las Bacanales revela indudablemente la inexistencia de un anterior régimen jurídico de control de la actividad asociativa.
- G) El Senadoconsulto del año 64 a. de C., aunque no se aplicó

sólo a los colegios de artesanos, si estuvo dirigido principalmente contra éstos, a la sazón desprestigiados, como resulta no sólo de textos de Cicerón, apasionado, polemista y parcial, sino de Salustio.

- H) La Ley Licinia no sólo castigó la utilización por los candidatos de las sodalitates de electores, sino la misma incorporación a estas sodalitates y la renuncia a la libertad de voto que suponía. Lo que revela que el crimen sodaliciorum había adquirido una independencia formal respecto del delito de ámbitus y, a su vez, explica la actuación de Cicerón defendiendo a Plancio.
- I) El hecho de que en la inscripción relativa al colegio de los symphoniaci se hable de la autorización del Senado, según la Ley Julia y con intervención del Príncipe, no revela que el Príncipe debiera someter, en todo caso, al Senado la petición del colegio, sino sólo que en aquél caso así se hizo. Al ser la ley Julia completada e incluso modificada por una serie de senadoconsultos y constituciones que desconecemos, es imposible fijar con exactitud cuál fue la tramitación establecida.
- J) Acerca de la relación entre las disposiciones de César y Augusto sobre las asociaciones, se considera muy verosímil la hipótesis de que César se limitó a prohibir colegios y la aparición de otros nuevos, mientras que Augusto, por una ley y no

por un simple acto administrativo, reguló los requisitos para la fundación de nuevos colegios.

También se rechaza la idea de la tolerancia de los colegios ilícitos sólo por defecto de forma.

K) El Senadoconsulto que permitió de un modo general los Collegia Tenuiorum, no tenía el carácter de una mera declaración de la falta de peligrosidad de estos colegios, sino que se trata más bien de una creación jurídica por la vía de la autorización. Lo que ocurría era que se consideraba suficiente la prueba de la falta de peligrosidad de estas asociaciones para que fuesen autorizadas de un modo general.

L) A la personificación de las asociaciones se llegó a través de una gradual evolución, iniciada en la época clásica y que se culmina en la época de Justiniano.

Esta evolución está marcada por una serie de intervenciones estatales que van atribuyendo capacidades específicas: Para recibir legados, para manumitir y para heredar a los propios libertos, así como representación procesal. Mientras que faltan datos fiables acerca de la promoción de la capacidad de las asociaciones en materia de derechos reales y obligaciones, por lo que hay que aceptar la existencia de una práctica jurídica en estos campos de actuación, que sólo con el tiempo se incorporará al ordenamiento jurídico.

Tampoco parece que deba fundarse una anticipación de la personalidad jurídica de las asociaciones en la época clásica,

en base a una valoración del término (Corpus), ya que en ese tiempo, tal término a veces se utilizaba para indicar una mera colectividad.

LL) Dentro del régimen de vinculación, propio de los colegios del Bajo Imperio, se aprecia la siguiente evolución: Al principio se podía evitar la carga de la dedicación profesional renunciando a los bienes, pero después del siglo IV se forzó a recibir los bienes con las cargas, al menos tratándose de hijos o, en su defecto, de herederos legítimos. Si un colegio donaba sus bienes para quedar exento de las obligaciones profesionales, según la normativa del siglo IV, los bienes quedaban en poder del adquirente pero el donante no podía abandonar la asociación. 45 años después se dispuso que la enajenación hecha a favor de un extraño que se niegue a entrar en la asociación sería nula. Cinco años más tarde se declaran inalienables los bienes del colegiado.

M) Acerca del tema de la difusión de los colegios obligatorios y su coexistencia con los colegios libres se considera, dada la evolución política que se registra en el mundo romano, parece difícil la existencia en el Bajo Imperio de asociaciones profesionales que no desempeñasen trabajos de utilidad pública y por tanto exentos tanto del control que se derivaba de su propia organización como del que resultaba de la vigilancia de órganos superiores.

Igualmente puede decirse que la excesiva valoración de los

textos conservados en el Código Teodosiano, sin dedicar la debida atención a otras fuentes puede conducir a error por referirse los textos del Teodosiano sólo a colegios de la metrópoli normalmente.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA GENERAL

ALBERTARIO, E.- Studi di diritto romano, I, Milán 1933.

ALBERTI, C.- Le Corporazioni d'arti e mestiere e la libertà del commercio negli antichi economisti italiani, Milán 1888.

ALLARD, P.- Les esclaves chretiens, I. París 1876.

ARANGIO-RUIZ, V.- Storia del diritto romano, Nápoles 1972.

ARANGIO-RUIZ, V.- La genti e le città, Mesina 1914.

ARIAS BONET, J.A.- Societas publicanorum (Anuario de Historia del Derecho Español XIX, 1948-1949).

ARIAS BONET, J.A.- En Lura, XXXII (1981).

/I

ARIAS RAMOS, J. y ARIAS BONET, J.A.- Derecho romano, II vols., Madrid 1984.

BABLED, H.- De la cura annonae chez les romains. París 1893.

BADIAN, E.- Publicans and Sinners, Oxford 1972.

BANDINI, V.- Appunti sulle Corporazioni romane. Milán 1937.

BARBAGALLO, C.- Capitale e Lavoro, Milán 1925.

BECK, A.- Römisches Recht bei tertullian and Cyprian Munich
1930.

BELIN, J.- Delaunay Progrès des corporations dans l'Empire ro-
main. Memoires a la Sorbonne (1867).

BELOCK, G.- Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Krie-
ge, Berlin 1926.

BENOIT, A.- Du jus sepulcri a Rome, Nancy 1890.

BERGER, A.- Contribution to the terminology concerning collegia.
Epigráfica 9 (1947).

BESNIER, M.- Eglises chretiennes et colleges funeraires. Melan-
ges Albert Dufourcq, Paris 1932.

BETTI, E.- La restaurazione Sullana, Studi sulle scienze giuri-
diche e sociali IV, Pavia 1915.

BINDER, I.- Die plebs. Leipzig 1909.

BINDER, I.- Das Problem der juristischen Personlichkeit. Leipzig
1907.

BLOCH, I.L.- Der Arbeiterstand bei den Palästinern Griechen und Römern, Viena 1882.

BLUEMNER, H.- Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern. Leipzig 1874-87.

BOGAERT, R.- Les origines antiques de la banque de dépôt. Leiden 1966.

BOGGIANO, A.- L'organizzazione sindacale e la rappresentanza di classe. Turin 1923.

BOISSIER, G.- La religion romaine d'Auguste aux Antonins. Paris 1881.

BONFANTE, P.- Storia del diritto romano. Roma 1934.

BONFANTE, P.- Corso di diritto romano. Roma 1925-36.

BOTTON, M.- Des collèges d'artisans en droit romain. Paris 1882.

BOUCHARD, L.- Etudes sur les finances de l'Empire romain dans les derniers temps de son existence. Paris 1871.

BUCKLAND, W.W.- The Roman Law of Slavery Cambridge, 1970.

BURDICK, W.L.- The principles of Roman Law and their relation to moderns Law. Rochester 1938.

BURY, J.- Constitution of the Later Empire Cambridge 1910.

CALDERINI, A.- Le associazioni professionali in Roma antica.
Milán 1933.

CALINESCO, D.- Les corporations d'artisans en droit romain.
Paris 1890.

CLERICI, L.- Economia e finanza dei Romain, I, Bologna 1943.

CIMMA, M.R.- Recherche sulle società di publicani. Milán 1981.

COSTA, E.- Cicerone giureconsulto. Roma 1964.

COHN, M.- Zum römischem Vereinsrecht. Berlin 1873.

COLEMAN-NORTON, P.R.- The Twelve Tables. Princeton 1950.

COLI, U.- Collegia e sodalitates. Bologna 1913.

CHOISY, M.- L'art de bâtir chez les Romains. Paris 1873.

DAREMBERG-SAGLIO.- Dictionnaire des antiquites grecques et romaines, V vols. Paris 1879-1981.

DAVIES, O.- Roman Mines in Europa. Oxford 1935.

DE MARTINO, F.- Storia della costituzione romana. Nápoles 1958-65.

DE ROBERTIS, F.M.- Autonomia statutaria e personificazione giuridica nel regime associativo romano. Etudes Macqueron, 1970.

DE ROBERTIS, F.M.- Il corpus naviculariorum nella stratificazione sociale del Basso Impero. Rivista del diritto della navigazione, III (1937).

DE ROBERTIS, F.M.- Il fenomeno associativo nel mondo romano. Nápoles 1955.

DE ROBERTIS, F.M.- Il diritto associativo romano. Bari 1938.

DE ROBERTIS, F.M.- Storia delle Corporazioni, II vols. Bari.

DE ROSSI, G.B.- Il Collegi funeraticii familiari e privati e loro denominazioni. Roma 1877.

DE ROSSI, G.B.- La Roma sotterranea cristiana. Roma 1877.

DE ROSSI, G.B.- Le Horrea sotto l'Aventino e la statio annonae urbis Romae. Annali dell'Istituto di corrispondenza Archeologica. 1885.

DE RUGGIERO, E.- Dizionario epigrafico di antichità romane.
1880-1953.

DE SIMONE.- Actor sive syndicus. Synteleia Arangio-Ruiz.

DE VISSCHER, F.- La notion du "Corpus" et le regime des associations privees a Rome. Etudes de Droit Romain Public et Privé. Milán 1966.

DE LASSUS, CH.- De la personnalité civile des sociétés et des associations en droit romain. Caen 1892.

DEZOBRY, CH.- Rome au siècle d'Auguste, I, Paris 1847.

DRIoux, J.- Etude économique et juridique sur les associations.
Paris 1884.

DRUMANN, W.- Die Arbeiter und communisten in Griechenland und Rom.
Königsberg 1860.

DUBOYS.- Le travail et les associations ouvrières à Rome. Paris
1866.

DUFF, P.W.- Personality in Roman Private Law Cambridge 1938.

DUREAU DE LA MALLE.- Economie politique des Romains. Paris 1840.

DUSEIGNEUR, M.- Des corporations a Rome. Lyon 1886.

ELIACHEVITCH, B.- La personnalité juridique en droit privé Romain. Paris, 1942.

ENGELHARDT, E.- La tribu des beteliers de Strasbourg et les collèges de nautes gallo-romains. Paris 1887.

FADDA, C.- Diritto delle persone e della famiglia. Nápoles 1910.

FADDA, C.- Concetti fondamentali del diritto ereditario romano. Milán 1900-1902.

FASCIATO, M.- Les associations professionnelles romaines du I au III siècle, d'après les inscriptions d'Ostie. Melanges d'Archeologie et d'Histoire de l'Ecole Française de Rome. Paris 1949.

FERRINI, C.- Teoría generale dei legali e fedecommissi. Milán 1889.

FOUCART, P.- De collegiis scenicorum artificum apud Graecos. Paris 1873.

FOURNIER, P.- Des Collèges industriels dans l'Empire romain. Paris 1878.

FOURNIER, P.- Des collèges industriels dans l'Empire romain.
Paris 1878.

FRANK, T.- An Economic History of Rome. Londres 1927.

FUENTESECA, P.- Derecho privado romano. Madrid 1978.

GAILLARD.- Les banquiers atheniens et romains. Paris 1875.

GARCIA GARRIDO, M.- Derecho privado romano, II vols. Madrid
1982.

GAUDEMET, J.- Institutions de l'antiquité. Paris 1967.

GAUDENZI, A.- Sui collegi degli artigiani in Roma Archivio giu-
ridico XXXII (1884).

GERARD, A.- Etude sur les corporations ouvrieres a Rome. Montbe-
liard 1884.

GIDE, CH.- Du droit d'associations en matiere religieuse. Pa-
ris 1872.

GIERKE, D.- Das deutsche Genossenschaftsrecht Die Straats und
Korporationslehre des Alterthums Berlin 1881.

GRACCO RUGGINI.- Collegium e corpus Atti Firenze 1974.

GRADENWITZ, O.- Heidelberger Inde zum Theodosianus. Berlin
1925.

GUARINO, A.- Storia del Diritto romano. Nápoles 1975.

HALKIN, L.- Les colleges des veterans. Revue de l'instr. publ.
1895-96. Bélgica.

HILL, H.- The Roman Middle class in the Republican Period.
Oxford 1952.

HUMBERT, G.- La condition des ouvriers libres chez les Romains.
Recueil de l'Academie de legislation de Toulouse XVII (1868).

IGLESIAS-SANTO, J.- Derecho Romano. Instituciones de Derecho pri
vado. Barcelona 1983.

IGLESIAS-SANTOS, J.- El espíritu del Derecho romano. Madrid,
1980.

JOLY, L.- Les collèges d'artisans en droit romain. Caen 1893.

KARLOWA, O.- Römische Rechtsgeschichte, II vols., Leipzig 1885-
92.

KAYSER.- Die Strafgesetzgebungen des Römer gegen Vereine. Ber-
lin 1873.

KRELLER.- Zwei Gaiusstellen zur Geschichte der juristischen Person. Atti Verona, I, 1953.

LA FORTUNA, G.- Appunti sui termini corpus e universitas. Roma 1937.

LA PIANA.- L'immigrazione a Roma nei primi secoli del'Imperio. Ricerche religiose II-IV 1926-28.

LABLAT, P.- Etude sur les collèges d'artisans. Toulouse 1893.

LACROIX, L.- L'organisation du travail dans l'Empire romain. Revue de cours litteraires (7-V-1870).

LANGE, L.- Römische Alterthümer III vols. Berlín 1876-79.

LARCHER, M.- Des cólleges de artisans chez les romains. París, 1880.

LEVI, A.M.- La costituzione romana dai Gracchi a G. Cesare. Florencia 1928.

LIEBENAM, W.- Zur Geschichte und organisation des römischen Vereinswesens. Leipzig 1890.

LO BIANCO, F.G.- Storia dei collegi artigianidell' Bolonia 1934.

LOANE, H.J.- Industry and commerce of the city of Rome. Baltimore 1938.

LOMBARDI, G.- Concetti fondamentali del diritto pubblico romano 1942.

LOUIS, P.- Le travail dans le monde romain. Paris 1912.

LYKOWSKI, V.- Die collegia tenuiorum des Römer. Paris 1912.

LUBTOW, V.- Bemerkungen zum Problem der juristischen Person.
L'Europa e il diritto romano. Milán 1954.

MACQUERON, J.- Le travail des hommes libres dans l'antiquité romaine. Aix en Provence 1964.

MADVIG, J.M.- Verfassung und Verwaltung des römischen staates,
II vols., Leipzig 1881-82.

MAHAIM, I.- Etude sur l'association professionnelle. Lieja 1891.

MARQUARDT, J.- De l'organisation financiere chez les Romains
(trad. franc.). Paris 1888.

MARQUARDT, J.- Organisation de l'Empire romain (trad. franc.)
II, vols, Paris 1889-92.

MARQUARDT, J.- Le culte chez les romains (trad. franc.), II vols.
Paris 1889.

MARQUARDT, J.- La vie privée de Romains (trad. franc.), II, vols.
Paris 1892.

MARTIN SAINT-LEON, E.- Historia de las Corporaciones de oficio.
Buenos Aires 1947.

MARUCCHI, O.- Elements d'Archeologie chrétienne, I. Roma 1905.

MASSON, P.- Les corporations a Rome. Paris 1888.

MASSONEAU, E.- Le crime de magie. Paris 1933.

MOXEY, M.- Occupation of the lower classes in Roman society.
Chicago 1930.

MAUE, H.C.- Der Praefectus fabrum. Halle 1887.

MAUE, H.C.- Die Vereine der Fabri, Centonarii und Dendrophori
im röm, Reich Francfort 1886.

MESSINA VITRANO, F.- Sulla responsabilità dei publicani Pabrmo
1909.

MEUNIER, R.- GIFFARD, A.- Sociologie et droit romain. Paris 1930.

MOMMSEN, T.- De collegiis et sodaliciis Romanorum. Kiel 1834.

MOMMSEN, T.- Juristische Schriften, III vols., Berlin 1905-7.

MONTI, G.M.- Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medio evo. Bari 1934.

NICOLE, J.- Le livre du Préfect ou l'Edit de Leon le Sage sur les corporations de Constantinople. Ginebra 1893.

NICOLET, C.- L'ordre equestre a l'epoque republicaine, II vols., Paris 1966-74.

NIEBUHR.- Romische Geschichte, Berlin 1820-33.

NISSEN, H.- Pompeianische Studien, Leipzig 1877.

NORDEN, F.- Apuleius von Madaura und das römische Privatrecht. Leipzig 1912.

OLIVERRONA, K.- Corpus und collegium en D., 3, 4, 1. Laura V (1954).

ORESTANO, R.- Il problema delle persone juridiche in diritto romano. Turin 1968.

ORESTANO, R.- Il problema delle fondazioni in diritto romano. Turin 1959.

ORLANDO, V.E.- Delle fratellanza artigiane in Italia. Floren-
cia 1884.

PALLOTTINO.- La civilisation etrusque, Paris 1949.

PAULY-WINOWA.- Realensyklopädie der Klassischen Altertums wi-
ssenschaft. Stuttgart 1894 y ss.

PERSON, A.W.- Staat und Manufaktur in römischen Reiche. Lund
1933.

PIGEONNEAU, H.- De conventione urbanae annonae et de publicis
naviculariorum corporibus apud Romanos. Saint-Cloud, 1876.

PIGEONNEAU, H.- L'annonae romaine et les corps de naviculaires
particulierment in Afrique. Revue de l'Afrique française,
IV. 1886.

PLATNER, E.- De collegiis opificum disputationes. Leipzig 1809.

PÖHLMANN, R.- Geschichte der sozialen Frage und des Sozialis-
mus in der antiken Welt. Munich 1925.

POLAND.- Geschicht des griechischen Vereinswesen. Leipzig 1919.

PRELLER, L.- Rom und der Tiber. Leipzig 1848.

PULCIANO, C.E.- Il diritto privato nelle epistole di Plinio il
Giovane. Turin 1913.

RABANIS, I.- Recherches sur les dendrophores et sur les corpo-
rations romaines en general. Burdeos 1841.

RADIN, M.- Legislation of Greecks and Romans on corporation.
Columbia 1910.

REYGASSE, I.- Histoire des Associations leur regime public, leur
personnalité civile en droit romain et français Toulouse
1890.

ROBERTI, M.- Le associazioni funerarie cristiane e la proprietà
ecclesiastica nei primi secoli. Studi dedicati alla memo-
ria di P.F. Zanzucchi. Milán 1927.

ROBY, H.J.- Essay on the law in Cicero's private orations. Cam-
bridge 1902.

ROSTOUTZEFF, M.- Historia social y económica del Imperio romano, V
II vols., (Traducción española). Madrid 1937.

ROBION, F.- Les Institutions de l'ancienne Rome, III vols, Pa-
ris 1884-88.

ROTONDI, G.- Leges publicae populi romani. Milán 1912.

ROULEZ, J.- Recherches sur les associations politiques chez les Romains. Gante 1839.

ROULEZ, J.- Moeurs électorales a Rome. Gante 1858.

SALEILLES, R.- De la personnalité juridique. Paris 1922.

SALEILLES, R.- L'organisation juridique des premiers communautés chrétiennes. Melanges P.F. Girard. Paris 1912.

SALVIOLI, G.- Capitalismo antico. Bari 1923.

SAN NICOLO, M.- Aegyptisches Vereinswesen zur Zeit Ptolemäer und Römer Munich 1913.

SANTERO SANTURINO, J.M.- Asociaciones populares en Hispania Romana. Sevilla 1978.

SARTORI, F.- Il diritto di associazione nell'età soloniana ed una notizia di Gaio, Iura IX (1958).

SCIALOYA, V.- Diritto ereditario romano. Roma 1933.

SCRAMUZZA, V.M.- The Emperor Claudius. Oxford 1940.

SCHERILLO, G.- Il diritto pubblico romano in Livio. Milán 1943.

SCHLOSSMANN, S.- Persona und Prosopon 1905.

SCHNORR v. CAROLSFELD, L.- Geschichte des Juristischen Person.
Munich, 1933.

SCHOELL, R.- De communibus et collegiis Graecorum. Leipzig 1879.

SCHULZ, F.- Principles of Roman Law. Oxford 1936.

SERRIGNY, D.- Droit public et administratif romain, Paris 1862.

SOLAZZI.- Il lavoro libero nel mondo romano. Macerata 1906.

STELLA MARANCA, F.- Orazio e la legislazione romana. Milán 1936.

STAMLER, O.- Des colleges d'artisans romains. Paris 1887.

SUSTIHNE, G.- Les collegios tenuiorum. Paris 1894.

TAUBENSHLAG, R.- Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletians.
Cracovia 1923.

TORRI, A.P.- Le corporazioni romane. Roma 1941.

TROUETTE, P.- Les collèges d'artisans á Rome Montpellier 1892.

VAN BERCHEM, D.- Les distributions de blé et d'argent a la ple-
be romaine sous l'Empire. Ginebra 1939.

VAUTHIER, M.- Etudes sur les personnes morales dans le droit romain et dans le droit français. Bruselas 1887.

VISCONTI.- Il collegium pistorum nelle fonti giuridiche romane e medievali. Rendiconti R. Istituto Lombardo, XIV (1931).

WALLON, H.A.- Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, III vols, Paris 1879.

WALTZING, J.P.- Etude historique sur les corporations professionnelles, IV vols., Roma 1968.

WEZEL, E.- De opificio opificibusque apud veteres romanos. Berlin 1881.

WILLEMS, P.- Le droit public romain. Lovaina 1883.

WILLEMS, P.- Le Sénat de la République romain, II vols., Lovaina 1883-1885.

ZELLER, E.- Eine Arbeitereins bellung in Rome. Heidelberg 1865.

ZUMPT, A.W.- Das Criminalrecht der röm. Republik. Berlin 1869.